



Archivo Chile
Historia Político Social - Movimiento Popular

**EL SOCIALISMO
Y LOS TIEMPOS
DE LA HISTORIA**

DIÁLOGOS EXIGENTES

**GONZALO D. MARTNER
(CONVERSACIONES CON ALFREDO JOIGNANT)**

PRENSA latino americana

**CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez
ARCHIVO CHILE
www.archivochile.com**

Esmeralda N° 6DA TREINTA AÑOS DESPUÉS

Izquierda y progresismo

Hace tres décadas

La memoria que construye futuro

Un itinerario político

CAPITULO II

EL TIEMPO DEL NUEVO SOCIALISMO

La lucha por un Estado Social en una nueva época

Del capitalismo a la sociedad justa: las bases del proyecto socialista moderno

CAPITULO III

LA CONCERTACION DEL FUTURO

Las razones de la Concertación

Unidad y diversidad

Autocomplacientes y autoflagelantes

CAPITULO IV

UN NUEVO IMPULSO TRANSFORMADOR:HACIA UNA REPUBLICA DE DEMOCRACIA SOCIAL

Impactos de la globalización

Reimaginar la República

¿Conquistar el centro o estar en el centro de la lucha social y política?

Este libro es fruto de conversaciones iniciadas a fines del año 2002 y desarrolladas en el curso del año 2003, en sucesivas sesiones, transcritas por Allyson Silva, a quien agradecemos su colaboración desinteresada y acuciosa, y luego revisadas por los autores. Nació fruto de la necesidad que mutuamente constatamos de ampliar la reflexión sobre la situación de la Concertación, del socialismo y de la izquierda más allá de la contingencia en la que cada uno de los interlocutores se desenvuelve y más acá de la actividad académica y sus rigores. Buscan estas páginas ser una incitación al debate afectivo y recorren una amplia gama de temas con ese fin, tomando preocupaciones, observaciones e ideas de muchos, pero bajo nuestra propia responsabilidad en su formulación. Lo dedicamos a nuestros padres, de los que heredamos nuestra pertenencia y compromiso con la izquierda y el socialismo, y a nuestras esposas e hijos por su comprensión y apoyo.

CAPITULO 1

HISTORIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: LA IZQUIERDA TREINTA AÑOS DESPUÉS

La verdadera democracia proviene de numerosas batallas humanas individuales, sutiles, libradas durante decenios e incluso durante siglos, batallas que terminan por crear tradiciones. Las únicas defensas de la Democracia son, a fin de cuentas, las tradiciones democráticas. Cuando comienza a ignorarse sus valores, se juega con una estructura noble y delicada. No hay nada más bello que la democracia. Pero no se puede jugar con ella».

Norman Mailer

Es fácil percibir que los miembros ricos de la comunidad sienten una fuerte aversión hacia las instituciones democráticas de su país. El pueblo es al mismo tiempo objeto de su desprecio y de sus temores

Alexis de Tocqueville

Izquierda y progresismo

A. JOIGNANT: Vivimos tiempos que, para algunos, autorizan la indefinición como condición sino deseable, al menos permanente, y para otros un cierto mutismo sobre las convicciones a continuación de la disolución más o menos irreversible de identidades políticas básicas. Así, la indefinición es lo que permite hacer y pensar la política sin la necesidad de hacerse cargo de sus consecuencias (es el predominio de lo light), y el silencio sobre las convicciones es lo que vuelve posible una generalizada falta de autenticidad política. Estos dos aspectos de la política contemporánea, tanto en Chile como en otras latitudes, no sólo impactan en el político profesional y en los significados asociados a su práctica, sino también en los modos intelectuales de inmersión en la política que es la aproximación con la cual más me identifico. En tal sentido, no me preocupa en lo más mínimo definirme como libre-pensador que rescata y retraduce en clave de izquierda racional autores liberales, comunitaristas, republicanos o marxistas, pero también lecturas disciplinarias Provenientes de la sociología, la historia y la ciencia política, y ciertamente de la propia filosofía. En síntesis, una suerte de izquierda ilustrada que no oculta su elitismo, pero que tampoco elude la tarea de pensar las grandes y pequeñas luchas contemporáneas constitutivas de causas que no son exactamente las mismas de antaño. Una izquierda ilustrada y racional —para retomar la expresión de Hobsbawm(1) - que toma en serio el peso de la historia, las complejidades intelectuales para comprender un presente que dista mucho de ser exclusivamente capitalista, las posibilidades y los límites de la capacidad de gobernar por la vía de las reformas y las inercias de las instituciones. Una definición tal vez demasiado compleja, pero que sospecho le hace sentido a un político culto como Gonzalo Martner: ¿un político «progresista»

o un hombre de «izquierda»?

G. MARTNER: Me defino como una persona de izquierda, que participa en política en esa condición. Para mí ser de izquierda es abrazar la voluntad de transformar progresiva y radicalmente la sociedad que hemos heredado para hacerla más justa, más libre, más igualitaria y más fraternal. Ser de izquierda es acoger con amplitud las ideas y las convicciones que inspiran esa transformación, es ser preciso y persistente en los programas que conducen a ella y es ser irreductible en los valores que la sustentan. Ser de izquierda es creer en la razón y en el progreso de la condición humana, sin desconocer que el género humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, lo que requiere vivir y actuar con los valores —traducidos en derechos y obligaciones— que crean las condiciones de la mayor autorrealización y bienestar posible de los seres humanos y que aminoran los sufrimientos que se originan en el modo de funcionamiento de la sociedad y en la resignación a una vida hecha de obligaciones impuestas y de renunciadas.

Si se define al sujeto humano como un ser vivo capaz de decir «yo existo y tengo mi propio mundo», entonces cada uno de nosotros alberga un principio de exclusión propio de la vida (nadie puede decir «yo» en mi lugar). Al mismo tiempo, todos respondemos a un principio de inclusión, que nos impulsa a ser acogidos y reconocidos en una relación con los demás, de pertenencia a un «nosotros» (familia, amigos, compañeros, ciudadanos de una nación y del mundo) como necesidad vital de tener y mantener lazos de afecto y solidaridad. El ser humano se caracteriza por este doble principio, por una suerte de doble programa: uno que empuja al egocentrismo, a sacrificar a los otros por uno mismo, y el otro que empuja al amor, al altruismo, a la amistad, a respetar al otro. En la sociedad de hoy, muchos factores tienden a favorecer el «programa egocéntrico», con todo lo que supone de afán exasperado de lucro, de consumo, de éxito. Sin embargo, es el «programa fraternal y solidario» el que requiere ser expandido, pues entre otras cosas es el que mejor permite desarrollar las múltiples potencialidades humanas(2). Por lo demás, el individuo aislado nunca es verdaderamente libre. Solo puede llegar a serlo en la interacción humana con otros. Lo será más ampliamente aún cultivando relaciones de fraternidad, sintiéndose realizado con la felicidad del otro y estando interesado en el éxito del otro.

Ser de izquierda en el siglo 21 es optar por el valor de la igualdad, es decir por una sociedad de iguales en dignidad, en derechos y en oportunidades, y por el valor de la libertad, es decir por el respeto de la diferencia. Ser de izquierda es abrazar las luchas sociales y cívicas desde la perspectiva de esos valores para, en el plano político, representar los intereses solidarios del mundo del trabajo y de la cultura, con el fin de transformar radicalmente, con espíritu fraternal y sin prejuicios elitistas, a una sociedad mercantilizada que impulsa a cada cual a no interesarse por el bienestar de los demás, y a confundir, como decía el poeta Antonio Machado, «valor y precio».

«Sin que nadie se dé todavía cuenta, la Fraternidad es ya hoy la fuerza principal que arrastra a la vanguardia del mundo (...). Se anuncia desde ya en la demandada de servicios que apuntan justamente a compensar la soledad valorizando la relación con el otro y más precisamente los servicios de hospitalidad: turismo, restauración, arte de recibir, todo lo que estimula y satisface la curiosidad, invita a la mezcla, enseña a conocer, a dar y a acoger, preserva y promueve el artesanado, los espectáculos vivos, las redes, todo lo que nace del deseo de gozar del placer del otro. Se anuncia igualmente en las situaciones, cada vez más frecuentes en las economías modernas, en que el uno necesita que el otro tenga éxito (...). Por ejemplo, en los sectores en donde las empresas se dan cuenta que tienen interés en el éxito de otra, en las redes de telecomunicación en que cada uno encuentra mejores razones de conectarse mientras encuentre más corresponsales. En la educación y la salud, en donde cada uno se da cuenta poco a poco que tiene interés en que todos los otros estén tan bien formados y en tan buena salud como uno mismo, al menos para no molestar ni ser una carga. En fin, en los sectores en donde el mercado demuestra que, cuando cada uno se interesa en su propia suerte, casi todo el mundo termina por perder (...). Se realiza en las sociedades del saber, en tanto cultiva la facultad de ponerse en el

lugar del otro, de comparar, de poner en relación. Pues la inteligencia no es nada si no existe nadie para apreciarla o compartirla. Así, la fraternidad es el reconocimiento de la importancia del otro para la realización de sus propias aspiraciones»(Jacques Attali, Fraternités. Une nouvelle utopie, 1999).

El valor ideal sobre la base del cual he diferenciado a la izquierda de la derecha es el de la igualdad. Lo que ha distinguido a la izquierda en todas sus formas en el curso de los dos últimos siglos, a la vez de modo «funcionalmente positivo» y de manera «funcionalmente negativa» es lo que me indino a llamar el «ethos» de la igualdad (que es también un «patitos»). Inspiró a la Revolución rusa como a la socialdemocracia europea. La historia del socialismo es en gran medida la historia de los ideales igualitarios, perseguida ya sea a través de la abolición completa de la propiedad privada -que era considerada por Rousseau como la causa principal «de la desigualdad entre los hombres»- ya sea a través de una gama de políticas públicas destinadas a promover la justicia social mediante diferentes formas de redistribución de los ingresos (...) El ethos de la igualdad que caracteriza a la izquierda encuentra confirmación en su contrario, la defensa fundamental del ethos -si se puede llamar así- de la desigualdad. Este es notoriamente propuesto por uno de los ensayistas más reaccionarios de nuestro tiempo, Fukuyama, para el cual el fin de la historia coincide con el triunfo del capitalismo americano en los años de Reagan y Bush. Su tesis no busca simplemente atacar el conjunto de medios empleados para acercarse al objetivo de igualdad, ataca este fin en sí mismo (...) Si entendemos por «izquierda» un compromiso histórico para luchar a favor de un mundo más equitativo y más vivible, la marcha es todavía larga- al menos si ampliamos nuestro horizonte más allá de nuestras fronteras nacionales, como debiéramos hacerlo en esta era de globalización. En lo que concierne al futuro de la izquierda, la humanidad no ha alcanzado en ningún caso el «fin de la historia». No está tal vez sino en su inicio. (Norberto Bobbio, La izquierda y la derecha, debate entre PerryAnderson y Norberto Bobbio, New Left Review, 1998).

Norberto Bobbio define ser de izquierda como el privilegio del valor de la igualdad, incluyendo la igualdad de la libertad, frente a otros valores(3) . La igualdad es el gran medio para el fin de construir una sociedad humanizada en la que todos sean libres, en palabras de Goran Therborn(4) . La izquierda autoritaria que puso el énfasis en la igualdad —sin conseguirla- dejó de lado trágicamente la libertad, con la consecuencia de que el ciclo dictatorial y burocrático abierto por el estalinismo en los años 1920 y terminado en medio del anquilosamiento con la caída del muro de Berlín en 1989, significó una fuerte regresión para las luchas libertarias y solidarias de la izquierda, ciclo que en buena hora ha terminado.

La izquierda democrática hace suyo el valor de la igual libertad. Desde la perspectiva socialista, la libertad —es decir la expresión de la diversidad, de la no uniformidad, de la autonomía, que es la gran promesa de la modernidad-debe poder ser ejercida en plenitud por todos y no sólo por una minoría privilegiada económicamente dominante. Establecida esa afirmación, «la revolución del siglo 21 consiste en darle valor a la diferencia», como dice Carlos Fuentes(5). A partir de los valores de la igualdad y la libertad y poniendo por delante el espíritu de fraternidad, el socialismo democrático es un proyecto de sociedad que persigue tres grandes objetivos.

El primer gran objetivo del socialismo democrático es humanizar la sociedad. Aspira el socialismo a que no exista la explotación y opresión de unos seres humanos por otros, y su secuela de sufrimientos humanos evitables. Aspira el socialismo a construir una sociedad justa, civilizada, y sin violencia que permita a cada cual autorealizarse y desarrollar fraternalmente sus proyectos de vida con autonomía, acceder a medios de vida dignos, a la cultura y al desarrollo del espíritu.

Compartir los valores del socialismo se traduce en luchar por consagrar en todo tiempo y lugar el respeto por la integridad física y moral de todos los seres humanos. Se traduce también en luchar democráticamente contra la concentración del poder económico y político que el capitalismo produce

y reproduce. Ser de izquierda es luchar con los medios de la democracia por transformar mediante derechos sociales efectivos la subordinación al capital de los que no tienen otra capacidad económica que la de vivir de su trabajo, asalariado o basado en el autoempleo, o que simplemente no tienen oportunidades de inserción económica y las más de las veces no tienen como subsistir dignamente, mientras un segmento de privilegiados que concentra la riqueza social vive en la opulencia apropiándose de lo que otros producen o crean, de los recursos que la naturaleza ha puesto a disposición de todos o de lo que las generaciones anteriores han creado y acumulado.

Ser socialista es luchar por la igualdad social entre los géneros y contra la discriminación de la mujer, contra la xenofobia, contra la discriminación étnica, contra la discriminación de que son objeto las minorías sexuales, discriminaciones producidas por el peso de los oscurantismos culturales y de los impulsos humanos proclives al autoritarismo y a la intolerancia que la sociedad inspirada por los valores socialistas debe rechazar radicalmente.

Ser socialista es también en el siglo 21 comprometerse con las futuras generaciones que ven amenazado su acceso al patrimonio ambiental de la humanidad por el mercantilismo capitalista que explota los recursos naturales con una lógica depredadora de corto plazo y que deteriora las condiciones de vida en todos los rincones del planeta.

El segundo objetivo del socialismo democrático es consecuencia del primero y consiste en, en el plano de las instituciones que rigen la vida colectiva, consagrar la democracia política extendiéndola a la democracia social. Se trata de avanzar desde los indispensables derechos civiles y políticos de los ciudadanos garantizados por un orden institucional democrático, hacia los derechos sociales, económicos y culturales de los trabajadores, de las minorías étnicas, de los niños y ancianos, de las mujeres, de los jóvenes, de los emprendedores. Como decía Jean Jaurés, «la democracia es el mínimo de socialismo, el socialismo es el máximo de democracia»(6) .

Para hacer posible esta extensión de derechos, nos proponemos organizar una economía con mercados, pero no de mercado. Los mercados deben ser gobernados por la democracia. Promovemos el reemplazo de la economía capitalista que domina el planeta -y que lo hace cada día más desigual y polarizado- por una nueva economía plural, beneficiándose de la capacidad de asignar recursos descentralizadamente que los mercados poseen, pero consagrando también otras lógicas económicas: la de los bienes y servicios públicos, la de la economía social y solidaria, la de la economía doméstica y de pequeña escala, la de la distribución de ingresos básicos para todos, que la renta tecnológica de naturaleza social hace posible y viable en la era de la economía digital. Esta nueva economía plural estará crecientemente sustentada en la difusión del conocimiento, que enriquece las singularidades y la creatividad personal, pero en el marco de redes que utilizan información por naturaleza socializable, redes que enlazan a los unos con los otros en situaciones de cooperación para el aprendizaje y la producción(7) . La nueva economía plural supone la coexistencia de formas diversas de trabajo en unidades de producción públicas, privadas y sociales, las que habrán de funcionar con normas de responsabilidad social. La producción de bienes privados estará inserta en mercados regulados social y ambientalmente por poderes públicos fuertes, que también intervendrán eficaz y solidariamente en la estructura distributiva de los ingresos para evitar las desigualdades injustas.

Para sostener materialmente a la sociedad igualitaria y justa por la que luchamos, el gobierno social y democrático de los mercados deberá también preservar los incentivos a la innovación y al esfuerzo productivo, pues no se trata de redistribuir la pobreza ni desorganizar la economía, sino de establecer derechos económicos, sociales y culturales que tengan una base material que los sustente y amplíe en el tiempo(8).

El tercer objetivo del socialismo democrático es dominar el futuro colectivo, pues rechazan los socialistas la idea de un orden natural o divino de la sociedad de carácter inmutable y frente al cual sólo cabe resignarse. Por eso los socialistas no somos liberales, no somos partidarios del «laissez faire, laissez passer» (dejar hacer, dejar pasar), en donde lo mejor sería dejar a cada cual perseguir su interés individual, lo que supuestamente garantizaría una autorregulación social armónica. Los socialistas ponemos por delante la voluntad colectiva de orientar y gobernar los destinos de una

sociedad crecientemente compleja y fragmentada. La sociedad moderna no sólo enfrenta los clásicos problemas de la desigualdad económica y social, sino riesgos colectivos crecientes en el terreno ambiental, urbano y demográfico, así como más gravemente la pérdida de sentido y la expansión de la droga y la criminalidad. También debe hacerse cargo del enorme cambio cultural que suscitan la mundialización de las comunicaciones, la aceleración de la globalización de las economías y la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y de las biotecnologías como motor del cambio tecnológico. Este último aspecto tiene fuertes consecuencias éticas y abre nuevas interrogantes sobre el modo de convivir en sociedad y sobre los límites a establecer en la intervención sobre los genes y los embriones y qué hacer con los productos genéticamente modificados, lo que no puede ser dejado sólo en manos de los científicos y menos de los poderes económicos privados.

Dominar el futuro colectivo, y sustraerlo de la lógica mercantil de corto plazo, es entonces cada día más necesario para que el progreso técnico permita lo mejor (el más amplio bienestar) y no contribuya a agravar lo peor (la explotación y dominación del hombre por el hombre, la deshumanización, la urbanización sin control, las diversas formas de violencia, la degradación ambiental).

¿Es posible alcanzar estas aspiraciones en plenitud? No lo sabemos, pero sí sabemos que plantearse ese horizonte permite mitigar las injusticias y desigualdades de acuerdo a las posibilidades que ofrece cada tiempo de la historia a la acción colectiva, en un proceso civilizatorio que se sustenta en la idea de que el género humano es capaz de mejorar sistemáticamente su modo vivir en sociedad. Lo que supone, a su vez, un exigente respeto por los deberes cívicos y personales que hacen posible una vida en común justa. Esa es una lucha larga, cuyo éxito se encadena generación tras generación y que es la gran utopía concreta por la que las personas de izquierda luchamos.

No somos entonces «el partido del orden», que defiende los privilegios de los dueños del poder y la riqueza a través del funcionamiento espontáneo de intercambios asimétricos, sino el «partido del movimiento», que se propone interpretar a los que viven de su trabajo, a los creadores, a los desvalidos, en sus luchas por transformar las estructuras de poder y dominación que los relegan a una condición subordinada. Somos también «el partido de la resistencia», que no se doblega frente a la opresión y la tiranía.

Al retomar y desarrollar junto a los movimientos obreros nacies el proyecto de la revolución francesa expresado en la trinidad «libertad, igualdad, fraternidad», y en nuestro caso en sus balbucientes expresiones en las luchas por la independencia y luego definitivamente en las primeras luchas sociales, el socialismo propuso una política de civilización encaminada a suprimir la explotación del hombre por el hombre y la arbitrariedad y crueldad de los poderosos. Su origen en Chile está en la «Sociedad de la Igualdad» fundada por Arcos y Bilbao en 1850, luego en la mancomunales y sociedades de resistencia, en los sindicatos y partidos de izquierda(9). Su proyecto en escala universal ha sido la solidarización de la sociedad, con éxitos parciales expresados por la vía estatal en los mal llamados socialismos reales y por la vía democrática y social en la conformación de los Estados de bienestar, pero que en el primer caso no pudo evitar el estancamiento y posterior derrumbe de la economía centralizada y burocrática y en el segundo no pudo contener en profundidad la des-solidarización de las relaciones sociales en la civilización urbana industrial. El socialismo se empeñó también en democratizar todo el tejido de la vida social, pero su versión «soviética» suprimió toda democracia y terminó perdiendo a la larga toda legitimidad. Su versión socialdemócrata, junto a grandes méritos, no ha podido contener suficientemente las regresiones de la participación democrática y del bienestar en las sociedades post-industriales.

El socialismo del siglo 21 se propone retomar con nuevos bríos la aspiración a más comunidad, fraternidad, justicia y libertad, que estuvo en la fuente del socialismo de los siglos 19 y 20, sin desconocer las dificultades que esa aspiración debe enfrentar en la actualidad: la dificultad antropológica —el malestar humano que suele acompañar la individuación en la civilización moderna—; la dificultad sociológica, que emana de la fragmentación de las identidades, del trabajo y de la vida urbana en las sociedades contemporáneas; la dificultad ecológica, provocada por la alteración de los ecosistemas por más de 6 mil millones de humanos que habitan la tierra y que en los próximos

decenios se estabilizará en unos diez mil millones; y la dificultad demográfica derivada del creciente peso relativo de las personas de edad avanzada y muy avanzada.

Hoy la aspiración es, si se quiere, menos ingenua, pero su amplitud, en palabras de Edgar Morin, incita más que nunca a impulsar con imaginación y espíritu práctico un proyecto histórico civilizatorio de largo aliento, que se confunde con la aventura colectiva de mejorar paso a paso el bienestar de las actuales y futuras generaciones y la convivencia entre los seres humanos a escala local, nacional y planetaria(10).

Pero no quiero darte una respuesta sólo analítica, porque para mí ser de izquierda es también un tema de identidad, de subjetividad. De niño a mi me impresionó profundamente el ver a otros niños sin zapatos en la calle o bajo los puentes del Mapocho que yo cruzaba cotidianamente (estamos hablando de los años sesenta), proveniente de una familia de profesionales en la que no faltó nada material importante, y me resultaba muy chocante el ver que otros niños de la misma edad estaban en las calles en estado de miseria. Esto no se tradujo para mí en una actitud meramente compasiva sino en involucrarse, como lo habían hecho generaciones de luchadores de izquierda, en el cambio social para terminar con las desigualdades.

Durante el período de adolescencia yo participé en diversos trabajos voluntarios. Recuerdo haber estado en el año 1972 en la Población Lo Hermida y que una noche llegó a donde estábamos reunidos con un grupo de pobladores una madre en estado de desesperación con un niño que se había quemado en un brasero en la precaria mediagua en que vivía. La acompañamos al hospital y el niño pudo recuperarse, pero constatar algunas dolorosas consecuencias humanas del hacinamiento me impactó. Recuerdo que en febrero del año 1973 estaba también, a los 15 años, con un grupo de amigos trabajando de obrero en la fábrica de Cristalerías Chile en Padre Hurtado y apareció una familia con un sacerdote que buscaba con urgencia un padrino para un niño recién nacido que iba a fallecer en cualquier momento por estar en estado de desnutrición. Se requería bautizar a ese niño, la familia necesitaba un padrino y por una razón completamente casual yo estaba allí y me pidieron serlo, a lo que accedí sin dudar haciendo abstracción de mi ateísmo. Me marcó ver a un niño de pocas semanas que simplemente no iba a poder vivir por su estado de desnutrición y por provenir de una familia de trabajadores pobres, del que fui padrino y de cuya familia nunca más supe.

Soy de izquierda, entonces, porque no estoy dispuesto a acomodarme a un orden social que hace posible el hacinamiento y la desnutrición, que permite que la miseria y la exclusión convivan en medio de una riqueza material que mejor distribuida tendría la posibilidad de evitarlas o aminorarlas sustancialmente. No me resulta humanamente tolerable que haya niños que mueran de hambre, o que haya familias condenadas de por vida a la miseria y la humillación, o que haya trabajadores que sean explotados, pudiendo impedirlo un orden social más justo, por el que vale la pena luchar con otros, muchos otros, desde los trabajadores organizados, los creadores que con su arte nos inspiran y nos interrogan y al hacerlo cambian el mundo, las mujeres que luchan por sus derechos, los jóvenes que quieren un mundo mejor, los ecologistas que creen que respetar la naturaleza es también respetar una mejor vida humana, hasta los vecinos que se organizan para mejorar sus condiciones vida, y los intelectuales que se comprometen con el rigor científico de su tarea pero también con los valores de una sociedad justa.

Soy de izquierda porque creo en el carácter libertario de las relaciones humanas, las que no considero deban sujetarse a tradiciones injustificadas y convencionalismos vacíos, con el límite de la máxima kantiana según la cual el ejercicio de la libertad propia sólo debe terminar donde empieza la de los demás, lo que supone cultivar el sentido del compromiso y del respeto mutuo.

Soy de izquierda porque creo que nadie tiene el derecho a someter y dominar a otros. Creo en la norma y en la ley, pero cuando son legítimas. Nunca le he reconocido a nadie el derecho de imponer sus criterios porque tiene la fuerza o la capacidad de ejercer coerción material o moral. Soy de izquierda porque no me gustan los privilegios ilegítimos y las diferencias que no nacen de la voluntad propia, de los talentos y del mérito, sino de la inserción subordinada en la estructura económica, social y cultural de quienes carecen de autonomía para ganar decentemente su vida, en el contexto

de lo que las condiciones materiales en cada tiempo de la historia permiten. Soy de izquierda porque en la sociedad de mercado la mayoría carece de libertad suficiente y porque el intercambio enriquecedor se sustituye por el afán de lucro como motivación unívoca e implacable y por el privilegio estrecho del interés propio que envilece la vida humana.

Soy de izquierda porque creo que la conducta necesaria y sabia frente a lo injusto es la rebeldía y el espíritu de resistencia. Lo demás viene por añadidura.

Por supuesto está el tipo de socialización que uno tuvo en la infancia y el contexto familiar en que se crió. La mía es una familia de profesionales de izquierda, mi padre fue desde el año 1958 en adelante uno de los asesores y amigos del Presidente Salvador Allende y ministro de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) durante los tres años de su gobierno. Esto naturalmente suscitaba mi interés y curiosidad de niño y luego de adolescente. Sin perjuicio de que en mi casa siempre prevaleció el respeto a las opiniones de los unos y los otros -yo fui educado en la tolerancia y el respeto de las diversas ideas- existía una identificación con el socialismo y un compromiso cercano con el líder de la izquierda chilena. De modo que en mi biografía se junta una mirada personal de rechazo frente al entorno injusto y a las desigualdades sociales prevalecientes en el país, y al mismo tiempo una cultura familiar de izquierda.

Ahora, ser progresista está muy bien. Se puede ser progresista de muchas maneras, como antinomia a ser conservador. El progresismo es un concepto por lo demás bastante amplio y bastante difuso. La idea de progreso se conecta con el fecundo cambio originado en la Ilustración europea, con la emergencia de la modernidad y del sujeto que se autonomiza de las reglas retrógradas propias del orden social tradicional, concebido como inamovible dado su supuesto origen divino. En buena hora la representación de la historia humana llegó a disociarse de los dioses y más tarde del naturalismo darwinista.

Esta autonomización humana, como proceso que ya no haya refugio en Dios para darle sentido a su estar en el mundo ni a una supuesta condición inmodificable del hombre emanada de la selección de las especies animales según la ley del más fuerte, debe interrogarse sobre lo que funda y orienta la vida del ser humano en sociedad. Y esa emergencia de la modernidad es la que, más particularmente, da origen a nuestra propia historia republicana y a nuestro progreso como Nación, más allá del «peso de la noche» oscurantista y autoritario de la minoría conservadora aristocrática y burguesa que ha pugnado por mantener, o en el mejor de los casos adaptar, sus mecanismos de dominación para mantener sus privilegios a lo largo de casi dos siglos de vida independiente.

En este plano, por supuesto, ser de izquierda es ser progresista en cuanto se postula que el orden social no deriva del carácter divino o natural de las cosas. Ser progresista es valorar los avances de la ciencia y el retroceso de la moral arbitraria y doble tradicional. Ser progresista es rechazar el «darwinismo social» y alejarse de la idea según la cual las diferencias injustas entre los seres humanos no serían de origen social sino de origen natural y que es poco lo que la sociedad puede hacer para atenuar o abatir esas diferencias.

Hay quienes sostienen que se suele ser de izquierda y conservador, en referencia a la filiación con las tradiciones históricas, y que por tanto más vale abandonar la identidad de izquierda por la de progresista. Sostener una identidad y reivindicar las luchas y tradiciones de la izquierda no tiene nada que ver con ser conservador. Los que así lo consideran suelen esconder procesos de reconversión de su propia identidad previa hacia el liberalismo y la vieja defensa smithiana de la mano invisible del mercado como el gran regulador social, reconversión que me parece respetable, eso es parte de la tolerancia, siempre que se reconozca lealmente como tal. En Chile hay autoproclamados progresistas que tienen la osadía de calificar de conservadores a los que somos de izquierda y pensamos que el mercado no solo no se regula a sí mismo sino que menos puede llevar a una convivencia social siquiera decente. Y que por tanto, sin perjuicio de que contribuye al bienestar una economía con mercados, se debe luchar contra la sociedad de mercado. Sostengo que no se puede ser progresista y postular como óptima la autorregulación de la vida social por el mercado. Eso es simplemente ser de derecha, de derecha liberal si además se comparte los ideales de la democracia y la tolerancia

cultural, o de derecha conservadora si se es partidario de la moral tradicional y del orden jerárquico y autoritario en la sociedad. Pero de derecha, no progresista.

Entonces, parafraseando a Jaurés, para mí el progresismo es el mínimo de ser de izquierda y el ser de izquierda es el máximo de progresismo.

A. JOIGNANT: La estructura de tu familia, si te entiendo bien, le proporciona un cierto grado de centralidad a un principio importante, el de la «tolerancia», cuyo alcance es mucho mayor al que le otorga el uso banal y vulgar por buena parte del mundo político y periodístico. Por lo que logro intuir, existía diversidad en tu familia, lo que transforma a la tolerancia en principio de reconocimiento de la diferencia (he allí su importancia), cualquiera sea ésta, pero también en eventual principio de aceptación. Es en ese sentido que la tolerancia es un principio plausible de acción política y de organización de la sociedad, en tu caso tempranamente asimilado en el espacio familiar, a diferencia de mi propio espacio originario. Es interesante comparar y contrastar espacios familiares de socialización política, respecto de lo cual existe mucha literatura científica de calidad en Estados Unidos y Francia. En mi caso, el espacio familiar era bastante reducido en número de miembros, a lo cual se sumaba una gran homogeneidad política: todos eran de izquierda, sino por militancia sí por convicción, con un trasfondo algo mitológico proporcionado por mi bisabuelo paterno francés quien, siendo muy joven, luchó en la Comuna de París de 1871, al cabo de lo cual fue encarcelado en Nueva Caledonia y -por lo que he logrado saber a través de investigaciones personales de archivos en tribunales militares franceses- liberado dos años después, decidiendo partir a Chile por motivos desconocidos. Se entiende entonces que la «tolerancia», en mi caso, sea probablemente un principio más aprendido que asimilado en el espacio familiar de socialización, como consecuencia de una estructura doméstica de socialización políticamente muy homogénea. Cuando tu mencionabas el valor de la tolerancia y la importancia de esa conducta en tu familia, ¿eso significa por ejemplo, que había contacto frecuente con gente de derecha en el espacio familiar?

G. MARTNER: Provengo de una familia de profesionales, científicos y artistas. Mi abuelo paterno fue Ministro de Hacienda de Arturo Alessandri en el año 1920, en la primera ruptura con el orden conservador del siglo XX, luego rector de la Universidad de Chile a fines de los años 1920 y a su vez exiliado por la dictadura de Ibañez, en un exilio muy distinto eso sí al de los años posteriores a 1973. Mi abuela materna nació en Argentina a raíz de las persecuciones antibalmacedistas. Entonces siempre hubo un entorno progresista, aunque también con personas del mundo conservador. Además, dos de mis tíos son del mundo militar y fueron oficiales del ejército y de la marina. Siempre hubo en mi entorno familiar diversidad y por lo tanto ocasión de practicar la tolerancia y el respeto a las distintas opiniones. En el ámbito escolar en que me eduqué uno estaba permanentemente expuesto a ideas diversas y a modos distintos de situarse en el mundo. Y esto se reforzó con el pluralismo propio de la Universidad de París en que hice toda mi formación superior, exilio de por medio. Por lo tanto, perteneciendo a una familia de izquierda, siempre he convivido con otras ideas, otras visiones, otras maneras de ver el mundo.

Hace tres décadas

A. JOIGNANT: ¿Cómo se pasa de la convicción a la cual hacías referencia al inicio de esta conversación a la adhesión a un tipo de acción política? Tú fuiste militante del MIR, en tus inicios, en tu trayectoria inicial. Ese ingreso al MIR, ¿se explica por convicción o por un cierto estado histórico del país del momento, por vinculaciones personales, por subjetividad pura o por una decisión netamente intelectual?

G. MARTNER: Estamos hablando de una época de mucha efervescencia política. En el año 1970, al momento del triunfo de Allende, yo con mis 13 años acompañé a mis padres a la celebración en las calles de ese evento decisivo en la historia de Chile, que fue muy emotiva y que por supuesto me marcó. Yo ya había en los meses previos acompañado a mi madre a un funeral masivo luego de hechos de represión que habían terminado con la muerte de dos jóvenes estudiantes secundarios socialistas en Puente Alto y recuerdo haber escuchado una grabación de Luciano Cruz, que se hacía presente a través de ese medio. Estos son hechos constitutivos de primeras impresiones sobre las

circunstancias políticas que vivía el país. Luego me sentí motivado a participar desde 1971 en trabajos voluntarios, donde tuve cercanía con gente de la Juventud Socialista de la época.

Ahora, a mi casa llegaban, porque eran compañeros de mi hermana mayor en la Universidad, estudiantes de economía que eran del MIR u otros grupos de extrema izquierda. Entonces teniendo 15 años me fui vinculando con ellos, estando en la enseñanza media. Me atrajo la idea de participar políticamente de manera más comprometida. Aunque en primera instancia más bien me acerqué a la Juventud Socialista, me pareció rápidamente mucho más atractivo involucrarme en una militancia en el MIR. Influyó la fuerte impresión que en mi generación tuvo la figura del Che Guevara y su compromiso e intransigencia revolucionaria. Una parte muy importante de la generación de jóvenes de izquierda a la que pertencí fue esencialmente una generación guevarista. De paso, claro, en la lógica adolescente por la cual cada uno pasa, ese fue un factor de afirmación e identificación propia frente al mundo adulto.

El fondo del tema era que para parte de esa generación no resultaba convincente la idea de transformaciones graduales desde las instituciones, la que se contraponía a la idea del cambio radical a través de actos heroicos, especialmente a través de un momento de crisis revolucionaria que generaría un cambio inmediato de la situación de injusticia social y transformaría en plazos breves la estructura social, económica y política en Chile, América Latina el mundo. Esa idea me resultaba a mí subjetivamente mucho más atractiva que la del socialismo gradual y reformista.

A. JOIGNANT: El «avanzar sin transar» por encima de la empanada y el vino tinto que definía al socialismo allendista...

G. MARTNER: Ahí permítame una apreciación sobre el tema de la coherencia política. El «avanzar sin transar», recordemos, fue la postura de la dirección del Partido Socialista de la época y a mí me parecía que si se trataba de hacer la revolución, no era lo más pertinente hacerlo desde la posición de partido de gobierno en un contexto de democracia que calificábamos de burguesa.

Otra cosa muy distinta es la evaluación que uno hace a la distancia, que en esencia en mi caso consiste en afirmar que los ideales del socialismo no se alcanzan tomando el poder estatal por la fuerza, con los altos sacrificios humanos que esto implica, si es que llega a realizarse, y con la inevitable secuela posterior de militarización y burocratización, que someten al pueblo a una dominación inaceptable por una minoría que actúa en su nombre, sino que se alcanzan mediante procesos largos de lucha política democrática y social capaces de producir un cambio estructural en la sociedad para hacerla igualitaria, libre y justa.

Pero ese es el relato de mi inserción inicial en la militancia política, la que transcurrió eminentemente desde lo subjetivo, desde la pasión adolescente, desde el punto de vista que se podía alterar el curso de la historia con la voluntad heroica, siguiendo el ejemplo del Che Guevara, en el contexto de la influencia de la revolución cubana que marcó a toda la generación de izquierda de los años 60. En Chile esa influencia estaba presente en parte del PS, del MAPU y de la IC, pero la encarnaban privilegiadamente estos jóvenes universitarios comprometidos con el destino de «la clase obrera y los pobres del campo y la ciudad», en el lenguaje de la época, y que alrededor de Miguel Enríquez conformaban el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Yo me involucré en esa perspectiva, y llegué a pertenecer en el año 1973 a la dirección de estudiantes secundarios del MIR.

Me tocó enfrentar el momento del golpe de Estado teniendo 16 años. Pocos días antes, en la noche del 2 de septiembre de 1973, me había salvado de una bomba de alto poder que fue puesta en el patio de la casa familiar para amedrentar a mi padre en su condición de ministro de Allende por gente de Patria y Libertad. Tuve la suerte de que casualmente me levanté del lugar en que estaba leyendo para dirigirme a otro lugar de la casa segundos antes de que estallara la bomba que había sido instalada a pocos metros de donde me encontraba. Esto fue un anticipo de lo que vendría.

El 11 de septiembre mismo, luego de dejar temprano en la mañana, no sin problemas, el liceo donde estudiaba, me junté con miembros de la estructura militante territorial a la que pertencía. Estuvimos primero en el Pedagógico de la Universidad de Chile, luego en el cordón industrial Macul y luego en la población Santa Julia. Éramos un grupo que disponía de unos armamentos caseros y que se

dispuso a resistir. Nos encontramos en un momento dado sin comunicación y aislados en las calles de la población Santa Julia sin saber mucho qué hacer y fuimos protegidos por familias de pobladores. Estuvimos luego tres días recorriendo lugares de la población, realizando acciones improvisadas de hostigamiento, impotentes frente a la noticia del bombardeo de La Moneda, de la muerte del Presidente Allende y de la instalación en el poder de la Junta Militar. Recuerdo, ya avanzada la noche del 11, la imagen de Carlos Ominami, que estaba ahí con nosotros y que volvía de tener una comunicación telefónica con Bautista Van Schouwen, entonces número dos del MIR, contándonos que la instrucción recibida por teléfono era «hagan barricadas de dispersión». Nos miramos el grupo de poco más de una decena de personas que estábamos reunidos con cierto desconcierto. Estábamos ya en toque de queda y cerca de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, donde hubo un enfrentamiento que no sabíamos bien en qué consistía, no sabíamos quienes estaban en qué posición y procuramos hacer acciones de distinto tipo. Hasta que al tercer día empezamos a dispersarnos frente a la evidencia de la ausencia de resistencia global y a la completa desproporción de medios con que nos enfrentábamos a fuerzas militares infinamente más poderosas que controlaban la situación. Fue un momento de derrumbe de la izquierda, pero de paso de hecatombe global de la sociedad chilena. Más tarde, en 1974, cuatro de los de ese grupo fueron apresados por la DINA y están desaparecidos y otros sufrieron prisión, tortura y exilio.

Ese fue un momento muy decisivo en mi vida, que desencadenó un proceso de reflexión respecto de esa primera etapa de inserción en la acción militante. Partí al exilio.

Los trágicos resultados del intento de resistencia que realizó el MIR en los primeros años de la dictadura, me hizo después mucho más crítico a la aproximación subjetiva de la acción política y más sensible a la apreciación de las situaciones específicas, de las relaciones de fuerzas y especialmente de no poner por delante el voluntarismo a la hora de las decisiones, así como a interrogarse acerca de los efectos de la acción política de minoría, que por consiguiente que fuera a la larga puede producir resultados muy distintos a los que se propone e incluso contrarios a los valores que la originan. Desde ese momento parte un proceso de evolución, que tomó más tiempo, que implicaba asumir dolorosamente los errores que, en este sentido, había cometido una generación y yo, aunque siendo menor de edad, con ella.

Ahora, yo hago la defensa de esa generación, porque fue una generación que en los años 70 puso su vida por delante sin atentar contra la vida de otros, que no tuvo una actitud meramente verbal o meramente declarativa de sus opciones, sino que practicó aquello que predicaba, con gravísimas consecuencias: en el fondo la masacre de la mayor parte de un grupo de jóvenes de convicciones radicales que emergió a la lucha social en los años 60. En mi ámbito cercano, de los miembros de la dirección de estudiantes secundarios del MIR a la que pertenecía hasta el golpe del 73, tres están desaparecidos (Sergio Riffo, que hacía de vínculo con la dirección, Luis Valenzuela y Mauricio Iorquera), los otros dos sufrieron encarcelamientos y torturas, mientras decenas de mis compañeros y compañeras cercanos (como Bárbara Uribe) están desaparecidos. Para los familiares de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos el dolor ha sido inmenso, para los que fuimos sus compañeros también, pero con el deber adicional —que es para mi un compromiso personal- de darle sentido y trascendencia a su sacrificio por una sociedad más justa y más humana.

A. JOIGNANT: Desde ese punto de vista, viviste en el error durante mucho tiempo...

G. MARTNER: Te contesto con Oscar Wilde: «la gente bien educada contradice a los demás, la gente sabia se contradice a sí misma». Yo soy una persona de pasiones y convicciones y no pretendo ser sabio, pero fui reflexionando sobre el sentido de la radicalidad política desde bastante joven y mantengo a mucha honra el espíritu de ponerse reflexivamente en cuestión a sí mismo, de revisar críticamente lo que uno hace y de ponerse en disposición de entender a los que piensan distinto de uno. Y también mantengo la radicalidad de las convicciones y los valores.

Te insisto: reivindico mi pertenencia a la que fue una generación que quiso terminar drásticamente y rápidamente con el injusto estado de cosas, como en su momento la Sociedad de la Igualdad en 1851 o la República Socialista de los doce días en 1932, que también quisieron «tomar el cielo por asalto»,

y que fue consecuente al actuar en función de lo que predicaba. El valor de esa generación en el MIR, en el Partido Socialista, en el MAPU y otras fuerzas de izquierda está ahí para ser reivindicada en su inspiración generosa y su heroísmo como componentes indelebles de nuestra memoria histórica. Creo que además, aunque cometió un error grave de perspectiva y pagó las consecuencias, esa generación tenía en sus propias características de inteligencia y valor las posibilidades de evolución posterior. Recordemos que Miguel Enríquez murió a los treinta años y que hay cientos de víctimas que eran aún más jóvenes. Pero la historia fue lo que fue y ahí está una parte de una generación masacrada y yo no me desligo de ella ni le doy la espalda. Y a los que entregaron su vida por lograr sueños compartidos yo no los olvido, sino que honro su memoria.

A. JOIGNANT: Cuando un grupo de reducidas dimensiones pero dotado de fuertes convicciones accede al poder político estatal, éste tiende casi ineluctablemente a forjar las condiciones de militarización de la sociedad, lo que no significa que la explicación se reduzca a las propiedades de dichos grupos. Allí están, me parece, ilustraciones históricas tan distintas como el «terror» de Robespierre, la estalinización de la revolución rusa y el nacimiento del totalitarismo, la maoización de la revolución China, y así sucesivamente. Pero ese mismo resultado es el que arriesga con producirse en aquellas circunstancias históricas en las que el principio de inmersión en la acción política se da en clave absolutamente subjetiva y pasional, al sustentarse en racionalidades ideológicas de tal intensidad que se pasan por alto las inercias de la realidad, el peso de la historia y las lógicas de las instituciones: la subjetividad pura en política es ciertamente subversiva (en el sentido de subversión del orden establecido), pero es también una promesa de contradicción con los valores que la orientan.

G. MARTNER: Estoy de acuerdo contigo, con el matiz de que la subjetividad en política, defender valores y convicciones, es también para la izquierda democrática un componente básico e irrenunciable de su identidad, aunque, claro está, no suficiente. Como te mencionaba, el voluntarismo y la subjetividad pura tienen en la acción política graves consecuencias.

A. JOIGNANT: Permíteme extenderme en la reflexión sobre la subjetividad política de los actores en aquel entonces, refiriéndome esta vez a la derecha chilena. Ciertamente también allí había subjetividad, tal vez pasión, en todos los casos pánico y miedo, mucho miedo. Recuerdo muy bien, en una agitada sesión de la Mesa de Diálogo a la que fui invitado a comentar una brillante reflexión escrita por Angel Flisfisch sobre el «contexto histórico» de las violaciones a los derechos humanos, cómo Lucía Santa Cruz (quien me excusará lo que no me parece ser una falta de elegancia el dar a conocer un episodio que, desde mi punto de vista, le proporciona interés a lo que allí ella dijo y, sobre todo, a la manera de cómo lo dijo) estallaba en lágrimas al momento de tomar la palabra al inicio de la sesión, recordando el miedo que la envolvía durante el gobierno de la Unidad Popular. Reconozco mi molestia y ofuscación que esas lágrimas me produjeron en el momento, sobre todo porque éstas acompañaban una explicación de violaciones ignominiosas basada en razones de pavor y miedo por parte de grupos socialmente poderosos. Pero también reconozco que en esa «explicación» de lo aberrante subyacen subjetividades que, como universitario e intelectual interesado por comprender y explicar, no puedo pasar por alto, independientemente de que sean subjetividades muy distintas a mi natural mundo cultural de pertenencia. Estas subjetividades, tanto de los diversos mundos de izquierda como de una derecha unificada por el miedo y el rechazo (sin duda al pobre, a la chusma...) formaban parte de las coordenadas de la situación y de la posterior tragedia.

G. MARTNER: Ahí está la distinción que se debe a Jorge Arrate: hay un abismo entre los errores políticos, por importantes que fueran y que contribuyeron a polarizar al país, y los horrores de los que destruyeron la democracia y exterminaron fríamente a una parte de los chilenos. Y sobre el contexto quiero resaltar dos hechos. El actual senador Jaime Gazmuri, en un libro de memorias recientemente publicado, menciona los diálogos que él mismo sostuvo y otras personas del partido que él dirigía en esa época, el Mapu Obrero Campesino, con el General Prats y específicamente un episodio en donde el General Prats constata que al interior de las Fuerzas Armadas se promueve un quiebre institucional a través de un golpe de Estado y, relata Jaime Gazmuri, el General Prats le advierte esa situación al Presidente Allende y le propone producir relevos en determinados mandos

del Ejército con el objeto de prevenir el quiebre institucional. Allende, según este relato, le habría preguntado al general Prats si acaso esta acción que iba a tener lugar en los comandos de algunos regimientos podía tener el peligro de eventuales enfrentamientos en el momento de producirse esos relevos de mando. La respuesta del General habría sido que sí, que ese riesgo existía, ante lo cual el Presidente Allende le habría dicho al General Prats que en ese caso no, no estaba de acuerdo con lo que se le proponía(11).

Creo que ese hecho es muy indicativo de cuan profundo estaba en el Presidente Allende arraigada la idea de que en esencia había que salvaguardar en todo tiempo y circunstancia, incluso las más difíciles, ante los peligros más inminentes, la lógica de las instituciones republicanas. Esto se expresó en definitiva en la voluntad del Presidente Allende de resolver la profunda crisis política a partir del llamado a un plebiscito, utilizando los mecanismos previstos en la Constitución de 1925 para resolver divergencias entre el ejecutivo y el legislativo en materia de reformas constitucionales (lo que se había producido con la llamada reforma Hamilton-Fuentealba sobre el área de propiedad social). Se sabe bien que ese plebiscito no pudo ser anunciado el martes 11 de septiembre de 1973, como estaba previsto, precisamente por el adelantamiento del golpe de Estado, lo cual está bastante documentado. Yo puedo agregar que mi padre, que permanecía muy cercano al Presidente Allende como ministro de ODEPLAN, estuvo en la noche del lunes 10 al martes 11 de septiembre de 1973 ayudando a preparar el discurso que iba a pronunciar al día siguiente el Presidente en la entonces Universidad Técnica del Estado.

También quiero relatar que al interior del MIR se produjeron discusiones en agosto de 1973 acerca de si acaso se debía esperar el desencadenamiento del golpe para luego reaccionar o si se debía tomar iniciativas previas utilizando el factor sorpresa para neutralizar a los golpistas. Según relatos de personas que participaron de ese debate y que me merecen confianza, Miguel Enríquez frente a esta propuesta fue muy claro en rechazarla, desde una lógica distinta a la del Presidente Allende, pero también desde la concepción según la cual, de producirse un enfrentamiento armado, no debía ser desencadenado por las fuerzas de izquierda, aunque estuviera de por medio un cálculo de eficacia. Esto es, creo, una cuestión completamente esencial en el balance histórico de la conducta de la izquierda chilena: no fuimos nosotros los que tomamos el poder por asalto, fue el golpismo militar – cuyo primer acto fue el de aplastar a los militares constitucionalistas- el que destruyó la democracia chilena, instigado por la derecha, el gran empresariado, el gobierno de EE.UU. (que a la distancia de 30 años por voz de Colin Powell no considera su intervención en Chile «como algo de lo que deba sentirse orgulloso») y una parte de la Democracia Cristiana.

No obstante, es totalmente cierto que desde la izquierda se había cultivado una retórica de amenaza al resto de la sociedad y ese fue un error inexcusable, comentando lo que tú relatas de Lucía Santa Cruz. Desde la aplicación de la reforma agraria y la multiplicación de las organizaciones populares urbanas y rurales a partir de los años sesenta, se instaló en los sectores dominantes tradicionales de la sociedad chilena el miedo como inspirador de una conducta irracional y violenta. Su máxima expresión fue la represión posterior al golpe de Estado, que no guardó ninguna relación con la capacidad material de acción militar que las diversas fuerzas de izquierda tenían a la altura de septiembre de 1973, que no cabe sino constatar que era mínima. Está establecido en el Informe Rettig que el pleno control de la situación por la Junta Militar se consumó en menos de 72 horas.

Lo que hubo fue un diseño de aniquilamiento global, de represión implacable que se prolongó por una década y media, de exterminio, que se tradujo como sabemos en tres mil muertes, incluyendo a más de mil desaparecidos. Uno puede tratar de entender al otro y tratar de pensar qué fue lo que se desencadenó subjetivamente y escuchar que se instaló el miedo como inspirador de una conducta, pero esa conducta fue la del horror y esta no tiene explicación civilizada ni menos justificación alguna. Así lo ha reconocido el mando actual del Ejército, a su manera. Ética e históricamente nunca ha sido ni será lo mismo el error que el horror.

A. JOIGNANT: Dentro de los errores inexcusables de la izquierda y contrastando esa conducta de Miguel Enríquez que tú narras, que finalmente apuntaba en la misma dirección, hacia la misma

posición de Allende pero con significados muy distintos, ¿cómo interpretar la retórica de Carlos Altamirano dos días antes del golpe, que desde mi punto de vista es el error en todas sus dimensiones y en toda su elocuencia? ¿He allí el paroxismo de la izquierda?

G. MARTNER: Yo tengo por la figura de Carlos Altamirano mucho respeto. Es completamente inusual en Chile que alguien asuma su responsabilidad política, retirándose, después del quiebre del Partido Socialista, relativamente joven de toda actividad pública contingente. Es una persona que asumió una responsabilidad política que en definitiva es colectiva, contribuyendo a que el socialismo chileno tomara más tarde otros derroteros, lo que no debe haber sido fácil para él pues se trata de una persona de convicciones y que no duda en manifestarlas con un estilo directo. En ese sentido uno no debe solo hacer un juicio a la persona, sino que a la dinámica en que esa persona actuó, una dinámica más amplia al interior de la sociedad chilena. En el momento final de más dramatismo, cuando debían pronunciarse unos y otros partidos de la izquierda frente a la postura del Presidente Allende de dar salida a la crisis política nacional a través de un plebiscito, plebiscito que convengamos el gobierno iba probablemente a perder, pero que podría potencialmente distender la situación para intentar evitar una salida violenta a la crisis y un retroceso histórico de proporciones como el que en definitiva ocurrió, el Partido Socialista no apoyó suficientemente al Presidente de sus filas y Carlos Altamirano a dos días del golpe pronunció un discurso de tono desafiante. El Partido Socialista y otros partidos de la coalición decidieron en principio no apoyar la opción plebiscitaria, lo que fue comunicado por Adonis Sepúlveda al Presidente Allende en los días previos al golpe. No obstante, en un reciente relato Carlos Altamirano menciona que él telefónicamente comunicó posteriormente al Presidente Allende que contara en definitiva con el apoyo del Partido Socialista.

Convengamos entonces que, al margen de las personas, el error de una parte de la izquierda fue el haber sido parte sólo con una convicción limitada de una convocatoria a los chilenos, a través de la figura del Presidente Allende, a realizar un proceso profundo y radical de cambio, pero en el marco de las instituciones democráticas, con la lógica de las instituciones democráticas, con el respeto de las gradualidades que las instituciones democráticas conllevan por definición, y luego no haber acompañado al Presidente Allende en esa promesa por la cual se transformó en Presidente de Chile. Este error se venía incubando en el socialismo al menos desde el tan aludido Congreso de Chillán de 1967 y sus tesis de que «la violencia revolucionaria es inevitable y legítima». Además, ese Congreso decidió restringir las alianzas socialistas. Pero estas tesis tuvieron mucho más de verbalismo radicalizado que de realidad, pues ese mismo Congreso eligió una dirección encabezada por el Senador Aniceto Rodríguez, de conocida moderación, la que no sólo no se consagró a organizar la lucha armada -salvo la actividad conspirativa de un pequeño grupo inspirado en el guevarismo, que después sin embargo optó por apoyar al Presidente Allende, incluyendo de modo destacado a la Juventud Socialista dirigida por Carlos Lorca- sino que encaminó con éxito la actividad partidaria a ganar la elección presidencial de 1970 con su líder histórico Salvador Allende a la cabeza de una alianza amplia.

Tenía yo diez años en 1967 y dieciséis años en 1973, no tenía rol alguno de decisión política y militaba en una organización que se escindió del socialismo, pero me siento co-responsable, porque uno no puede en esto lavarse las manos con las continuidades históricas, de ese error político y toda mi actuación desde fines de la década de los setenta ha consistido en contribuir a enmendar las consecuencias trágicas del callejón sin salida al que llegó la izquierda chilena en 1973 y reconstruir pacientemente nuevas perspectivas de futuro para la proyección de sus valores permanentes.

La memoria que construye futuro

A. JOIGNANT: Conuerdo: hacerse parte de una historia en todas sus dimensiones y complejidades, no supone haberla vivido y experimentado como actor, ni siquiera haberla apreciado como contemporáneo. Sin embargo, volvamos a las perplejidades y contradicciones de la Unidad Popular. Permíteme una cita anacrónica: un dirigente de la Revolución Francesa, Grenier, señaló en el año VII de la revolución lo siguiente: «Tuvimos que ser revolucionarios para fundar la revolución pero para conservarla hay que dejar de serio(12), lo cual me permite pensar por la vía de la analogía entre

procesos históricos evidentemente muy diferentes en ese doble registro que de manera tan excepcional se confundió a lo largo de la Unidad Popular. Se fue revolucionario sin serlo enteramente, y se intentó dejar de serlo sin lograrlo completamente. ¿Esto finalmente no es un juego de paradojas?

G. MARTNER: Permíteme por mi parte citar a otro de los grandes personajes de la Revolución Francesa, Saint Just : «El que hace revoluciones a medias no hace más que cavar su propia tumba». Esa era la percepción subjetiva que existía en quienes estábamos distantes del proyecto del Presidente Allende.

Ahora, en la perspectiva histórica, uno constata que las revoluciones se producen por un conjunto de situaciones complejas que no permiten a una determinada conducción política proclamar aquí se inició y hasta aquí llegó la revolución. En el Siglo XX, la revolución mexicana en el año 1910, la revolución rusa de 1917, la revolución china de 1949, la revolución boliviana del año 1952, la revolución Cubana del año 1959, la revolución nicaragüense del año 1979, tienen antecedentes y circunstancias propiamente políticos, por cierto, pero no olvidemos que todas ellas son finalmente revueltas populares, con fuerte impronta campesina, y son eminentemente una expresión de rebeldía social, no provocadas sino conducidas por una o varias organizaciones políticas. Una vez que la rebelión popular derrumba los regímenes existentes, esta suele aplacarse, aunque nada más sea por el paso del tiempo. Con la aspiración colectiva a la vuelta al orden que en algún momento emerge, se reinstitucionaliza el poder político y, de no mediar tradiciones democráticas fuertes, éste asume como hemos mencionado formas frecuentemente autoritarias, en algunos casos «devorando a sus propios hijos». Este fue literalmente el caso de la Revolución Rusa, con un Stalin que terminó asesinando a todos los dirigentes bolcheviques de 1917, que en un breve período lograron, más que la planificación conspirativa de la toma del Palacio de Invierno, conducir una gran revuelta social y especialmente la rebelión de un ejército derrotado. La revolución rusa entonces se explica no sólo por el talento de Lenin y Trotsky o por la capacidad conspirativa de los bolcheviques, sino por el estado de disgregación de la sociedad rusa en medio de la guerra con Alemania.

La izquierda chilena nació en la lucha social organizada, en las mancomunales del siglo 19 y en los sindicatos de inicios del siglo 20, en el seno de la clase obrera y de las capas medias emergentes. Su mensaje fue revolucionario, pero su práctica fue institucional, política y de masas, no insurreccional. La trayectoria de ese gran chileno que fue Luis Emilio Recabarren, incansable organizador obrero, nada tiene que ver con la de un conspirador, como después lo fue la de Clotario Blest y de Luis Figueroa en el movimiento obrero chileno. Incluso la trayectoria del PC en Chile sólo adquiere un carácter insurreccional hacia 1979, en medio de la dictadura, con el resultado de cosechar un gran fracaso. La única revolución política en que participaron fuerzas de la izquierda chilena fue la de los doce días conducida por Marmaduke Grove en 1932, denominándola no revolución socialista sino República Socialista y...sin partido político, el que se constituyó después, en 1933, no sin proclamar su carácter revolucionario para de inmediato participar en la siguiente elección presidencial con un notable resultado para Grove, que sólo pudo volver desde la relegación que se le había impuesto en Isla de Pascua el día mismo de la elección.

La relación entre práctica política real y su representación en el plano ideológico estuvo frecuentemente escindida, a pesar de los intentos de Eugenio González por consagrar el que «el socialismo chileno es revolucionario en sus fines, pero democrático en sus métodos», según la formulación que realizara en un célebre discurso en el Senado. La práctica de Salvador Allende y de toda la generación de dirigentes socialistas de su época era una práctica de organización social y de labor parlamentaria. Recordemos que todos los líderes históricos del socialismo fueron parlamentarios, en ocasión ministros, o líderes sindicales.

Cuando se produce la Revolución Cubana vuelve a agravarse la escisión mencionada. Yo soy personalmente crítico de esa influencia de la revolución cubana, especialmente porque muchos se pusieron a tratar de ubicar en Chile equivalentes de la Sierra Maestra y no supieron tomar la necesaria distancia crítica con un proceso que es atractivo, peculiar, de lucha desigual entre David v Goliath - en que uno está con David- pero que finalmente no debe tomarse como modelo para los procesos

políticos chilenos: admirar los avances sociales, culturales y científicos en medio de enormes dificultades no debe excluir constatar las carencias democráticas de esa revolución y su especificidad no trasladable a otras situaciones.

Por lo tanto, reitero, el error es no haber sido coherentes con la idea de un cambio profundo en el contexto de las instituciones democráticas, pues esa era y sigue siendo la vocación esencial de la izquierda chilena. Si se hubiera desencadenado una guerra civil en Chile, esta habría tenido un destino históricamente incierto, pero con una alta probabilidad de haber terminado en lo mismo en que terminó la guerra civil española, en el contexto de una implacable guerra fría, de un intervencionismo norteamericano desembozado y de una ausencia de apoyo real de la otra superpotencia, la Unión Soviética. En este sentido, una de las incongruencias más notorias de la argumentación de la derecha sobre la experiencia chilena es que los que supuestamente querían transformar a Chile en una «nueva Rusia» no contaron para nada, o muy poco, con el apoyo soviético.

A. JOIGNANT: Puedo entender perfectamente lo que significó el predominio de la voluntad por sobre la razón. Cuando uno rememora o reconstruye —por ejemplo por la vía de archivos de prensa o mediante conversaciones informales— situaciones límite antes del golpe, sólo puede concluirse en que eran absolutamente absurdas, cercanas al surrealismo, pero que dan cuenta de un contexto de época en donde la izquierda se fracciona o se fractura entre subjetividad pura y racionalidad mínima, lo que produce un resultado trágico.

G. MARTNER: El «avanzar sin transar» no era viable ni deseable. Fue un error que una parte de la izquierda buscara transferir a manos del Estado un sin número de empresas y de predios agrícolas mediante tomas inorgánicas, al margen de toda racionalidad económica y política. Fue un error no haber hecho lo necesario para evitar una polarización generalizada. Hay que recalcar que no era esa la convicción ni la política del Presidente Allende ni de buena parte de la izquierda. Este intentó orientar el proceso político hacia una distensión que permitiera preservar la democracia, consolidar los inmensos avances sociales logrados y proteger a los mandos de las FF. AA. constitucionalistas y profesionales. Ese era el camino que había que recorrer, al que no ayudó el desborde desde la izquierda, pero se impusieron los golpistas y su proyecto de radical contrarrevolución, que se venía fraguando desde los años 60.

Hasta el día de hoy la derecha sostiene, en una demostración más de su pequeñez y mala conciencia, que el de Allende fue el peor gobierno de la historia de Chile. Se cometieron muchos errores. Como todos los gobiernos, el de Allende tiene luces y sombras pero ¿fue un mal gobierno el que respetó todas las libertades civiles y políticas, en el que el parlamento y la justicia se mantuvieron independientes, en el que los derechos humanos fueron enteramente cautelados, en medio de una polarización creciente y de violenta oposición en todos los planos? ¿Mal gobierno el que nacionalizó el cobre, cuyos recursos hasta hoy financian la política social? ¿Mal gobierno el que culminó la reforma agraria e hizo posible que el latifundio no fuera ya un obstáculo para el desarrollo de nuestra agricultura? ¿Mal gobierno el que entregó a cada niño un medio litro de leche, política que se ha desarrollado hasta hoy en beneficio de las nuevas generaciones que no enfrentan ya el drama de la desnutrición? ¿Mal gobierno el que pese a enfrentar el peor ataque imaginable de un imperio norteamericano que ordenó «hacer chillar a la economía», cortó todo crédito y estimuló una revuelta generalizada de amplios sectores económicos, junto a una oposición que votaba leyes sin financiamiento y estimulaba demandas económicas incrementando el déficit público y la inflación, fue sin embargo capaz de incrementar el nivel de vida de los más pobres y mantener un alto nivel de empleo? El contraste es enorme con las brutales recesiones de 1975 y 1982 causadas por los que critican a la Unidad Popular desde la derecha y cuya gestión después de nada menos que 17 años de dictadura dejó 5 millones de pobres y la más desigual distribución de los ingresos que conociera el país.

Es mezquino reducir el legado del gobierno del Presidente Allende a las consecuencias de las enormes dificultades que encontró en su camino o a su trágico final. No es por la derrota en 1814 que celebramos la constitución de nuestra primera Junta de Gobierno del Chile independiente de 1810,

ni recordamos a O'higgins por su amargo exilio hasta el fin de sus días, sino por su condición de Padre de la Patria. Ni tampoco Balmaceda ha pasado a la historia por el trágico resultado en vidas y destrucción que dejó la guerra civil de 1891 sino por su legado visionario en la construcción del estado e industrialización del Chile del siglo pasado.

No es por sus derrotas momentáneas que se recuerdan en el mundo los grandes intentos de transformación de la humanidad, que siembran una semilla que más tarde florece.

No debemos olvidar que al frente hubo la entera negación de la posibilidad de encausar por vía democrática este proceso que se había desencadenado. Lo que hubo fue, por parte de la derecha y de las clases históricamente dominantes que expresaban los intereses del latifundio y del empresariado industrial rentista cobijado en el proteccionismo, la voluntad de producir una eliminación física de cualquier proyecto de cambio social en Chile que disminuyera sus privilegios. Por lo tanto, las reflexiones autocríticas sobre la izquierda son muy importantes, pero nunca se debe confundir su conducta con la voluntad exterminadora de la derecha política, empresarial y militar, con honrosas excepciones, porque no tiene otro nombre programar fríamente el aplastamiento de una parte de los chilenos para dar una salida violenta a una crisis que era social y política y poner en práctica un programa refundacional de la sociedad chilena a partir de un baño de sangre. Te insisto en que este jamás podrá legítimamente justificarse y no me cabe duda que será categóricamente repudiado por las futuras generaciones como una vergüenza trágica en la historia nacional.

Yo tengo la profunda convicción de que el golpe de Estado de 1973 no fue un hecho inevitable fruto de una espiral de violencia. Quienes afirman lo contrario son precisamente los que lo promovieron y lo realizaron y de ese modo tratan de excusar su responsabilidad histórica. Está plenamente documentado que la derecha chilena y el gobierno de Estados Unidos hicieron todo lo posible para impedir que asumiera su cargo el Presidente Allende, procurando que el Congreso Pleno no ratificara en 1970 la mayoría relativa obtenida limpiamente en las urnas por Salvador Allende y estimulando que grupos conspirativos actuaran con violencia, incluyendo el intento de secuestro con resultado de muerte del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, para interrumpir la normalidad institucional, todo lo cual ocurrió antes de que la Unidad Popular asumiera siquiera el gobierno. Esos mismos actores promovieron una oposición multifacética que incluyó el uso abundante de actos violentos, la que apuntaba a un único objetivo: derrocar por la fuerza al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. Así quedó en evidencia al prestarle pleno apoyo al golpe de Estado de 1973 y al régimen de dictadura militar que se instaló por casi 17 años en Chile.

Nuestra percepción de que la derecha y el gobierno de Estados Unidos harían todo lo posible por interrumpir la democracia y el proceso de cambios sociales, adquirida con especial fuerza desde los años sesenta y validada a la postre por los hechos históricos, nos llevó a considerar erróneamente que un enfrentamiento armado sería inevitable y que debíamos asumirlo, lo que se tradujo en preparar grupos paramilitares de poca significación frente al poder de las FF. AA.

La lucha contra los enemigos de la democracia debía hacerse con los medios de la democracia, parafraseando a Lincoln, es decir construyendo mayorías sociales y electorales progresivas y no especulando con defensas armadas, por legítimas que fueran, pues eso no hizo más que ahondar la polarización y la imposibilidad de ampliar la base de sustentación de un proceso de cambios que tenía en EE.UU. un poderoso y declarado enemigo, superpotencia que consideraba, con la dupla Nixon-Kissinger a la cabeza, al proceso allendista como un «peligroso precedente» que podría extenderse a Francia e Italia y constituirse en una «segunda Cuba» al otro extremo del continente. A su vez, la Democracia Cristiana desarrolló una oposición severa al gobierno de la Unidad Popular, se alió con la derecha y su directiva de 1973 se formó la convicción de que «el gobierno de Allende, movido sobre todo por el afán de conquistar de cualquier modo la totalidad del poder, había agotado en el peor fracaso la llamada vía chilena al socialismo y se preparaba para consumir un auto golpe de fuerza que habría sido terriblemente despiadado y sangriento, para instaurar una dictadura comunista», según un documento del Consejo Nacional del 27 de septiembre de 1973. No obstante, el ex Presidente Aylwin ha concluido en su libro de 1998, que reproduce el documento que menciono, que «aunque

las irresponsables amenazas públicas de algunos líderes izquierdistas, sus simpatías con el régimen cubano, la existencia de brigadas populares armadas y la cercanía de algunos jefes militares al gobierno de entonces daban pábulo a esa opinión, los hechos demostraron que ese temor carecía de todo fundamento(13). Si las conductas y mutuas percepciones de amenaza de las fuerzas democráticas hubieran sido otras, se pudo haber evitado su profunda división, contenido la acción de los promotores del golpe de Estado y con ello encaminado al país a un proceso de alternancia democrática, por avanzada que estuviera la polarización política. El golpe no era inevitable. Nunca los peores desenlaces son inevitables, son obra de seres humanos capaces de incidir sobre su destino.

Y mucho menos era inevitable la terrible represión posterior. Durante la dictadura militar de 1973-1990, según los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se produjeron 1 983 muertes en manos de agentes del Estado y otras 1 102 personas fueron objeto de detención y posterior desaparición por los organismos estatales de represión. Otras 1 500 denuncias no pudieron ser aclaradas y permanece además una incógnita sobre la magnitud de casos de asesinatos que no han sido denunciados y que de modo verosímil se agregan a las 4 680 situaciones mencionadas. Decenas de miles de chilenos fueron apresados y torturados y muchos más sufrieron un largo exilio. Del orden de 500 militantes socialistas perdieron su vida en este terrible episodio de la historia nacional.

Treinta años después, no puede ser sino chocante para el Partido Socialista que la responsabilidad de semejante situación le sea atribuida, como ocurre de modo intolerable por los defensores del golpe de Estado y de la dictadura militar, representados en la actualidad por la UDI. Atribuir a las víctimas la responsabilidad de los crímenes cometidos por sus victimarios constituye una distorsión perversa éticamente inaceptable. Fue la dictadura militar apoyada por la derecha la que se propuso «extirpar el cáncer marxista» y realizó un operativo frío, planificado y persistente de identificación, detención y exterminio mediante torturas atroces, asesinatos y desaparición de cuerpos de dirigentes y militantes de los partidos de izquierda.

A los que consideran que los crímenes cometidos eran necesarios para imponer un modelo liberal de mercado, cabe señalarles que son muchos los ejemplos de reformas de mercado realizadas en democracia y muchos los ejemplos de «reestablecimiento del orden» en el marco del derecho. Los propios hechos de la guerra tienen su regulación en el derecho humanitario, el que excluye expresamente la tortura y asesinato de prisioneros. Los que defienden o morigeran los crímenes cometidos en Chile tendrán que cargar históricamente con su cobardía moral y su distorsión ética. Por lo demás, los países no pueden proyectar de manera apropiada su presente hacia el futuro si carecen de interpretaciones serenas sobre su pasado. Un pasado ignorado o mal asumido colectivamente, especialmente cuando se trata de episodios históricos traumáticos y dolorosos, tiene efectos paralizantes cuando prolonga desconfianzas profundas en la sociedad y no permite establecer bases éticas comunes para la vida colectiva. Construir una sana memoria histórica, que permita una adecuada transmisión del pasado a las nuevas generaciones, no es sólo tarea de historiadores sino de la sociedad en su conjunto, y en su seno también de los actores políticos. Una sana memoria histórica no supone no admitir la diversidad de interpretaciones, sino valorar dicha diversidad como necesaria, pero estableciendo distinciones éticas fundamentales.

Es nuestro deber como sociedad legar a las nuevas generaciones que los chilenos de esta generación fuimos capaces de asumir la realidad de estos hechos, condenarlos y establecer las responsabilidades que caben mediante el método civilizado de conocer la verdad judicialmente y ejercer justicia mediante los procedimientos del Estado de derecho. Legar la impunidad frente a acciones tan atroces e injustificadas sería una irresponsabilidad histórica frente al futuro de Chile. Hemos dado los socialistas pruebas hasta la saciedad de que no nos anima un espíritu de revancha ni de venganza, sino de justicia y de responsabilidad ante la historia. Este es el fundamento de la postura del Partido Socialista de considerar inamnistiables e imprescriptibles estos crímenes, que no son sólo contra sus víctimas sino contra la humanidad. Esta postura procura no sólo el ejercicio de la justicia frente a las heridas individuales y colectivas infligidas por el régimen militar, sino también dejar consagradas en la sociedad

chilena las bases para que nunca más hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

Uno de los lugares comunes que algunos sostienen en el debate político actual es aquel según el cual «no hay que mirar al pasado sino hacia el futuro».

Esta afirmación es sumamente peligrosa para la construcción del futuro. Por ahí equivocamos totalmente el camino para lograr un «nunca más» dictadura ni violación de los derechos humanos. Ningún ser humano carece de origen, historia e identidad. Las experiencias permanecen en la memoria consciente o se anclan en el inconsciente y se manifiestan de las más diversas maneras, aunque esas experiencias sean muy antiguas en la vida de los individuos o incluso de quienes los concibieron. Las señas de identidad, «lo que se es», siempre se vincula al «de dónde y de qué historia se viene». En consecuencia, el presente siempre está marcado por el pasado. Más aún, una inadecuada relación con el pasado, y en especial su negación, pueden envenenar sistemáticamente el presente. Desde Freud sabemos que el bienestar individual es mayor mientras menos permanezcan en la subjetividad elementos de la experiencia no pensados, no procesados y no dichos, especialmente si son traumáticos, sin lo cual perdura el retorno patológico de lo reprimido y el sufrimiento humano que conlleva.

El bienestar colectivo, a su vez, es proporcional al grado de paz existente en la convivencia social. Su contrario, la violencia, se alimenta entre otras múltiples cosas de la ausencia de ley, es decir de normas de conducta a las que todos deban atenerse y cuya cautela ha de practicarse con altos grados de imparcialidad, particularmente en la penalización de su infracción. Ello supone desde luego desterrar toda forma de «justicia con mano propia» y supone también la existencia de órganos independientes encargados de juzgar el incumplimiento de la ley y sancionar el agravio inferido. Que ello sea un ideal difícil de alcanzar, y que la historia esté plagada de violencias en que impera la ley del más fuerte, no es sino un argumento adicional para proponerse sistemáticamente hacer avanzar normas civilizatorias que regulen las conductas individuales y colectivas.

Cuando se ejerce violencia extrema y cruel desde el Estado y no se sanciona a sus autores, precisamente porque disponen de la capacidad coercitiva del Estado, o la hacen extensiva a la norma en nombre de no volver sobre el pasado, se consagra la idea de que el Estado y sus órganos son injustos e ilegítimos y por tanto no tiene sentido practicar la ciudadanía o, peor aún, que es válido ejercer violencia en tanto no se sanciona a aquel que tuvo el monopolio de su uso y lo utilizó persistentemente violando los derechos elementales de los seres humanos. En este ámbito, el pasado que se pretende expulsar por la puerta tiende una y otra vez a volver por la ventana, y muchas veces de la peor manera.

Los avances de la humanidad, te reitero, han apuntado justamente a establecer universalmente el carácter imprescriptible e inamnistiable de los delitos que atentan contra la dignidad humana. Esta norma civilizatoria no es un mero moralismo: está destinada a evitar que el pasado enturbie irremediablemente el presente e impida construir el futuro con los grados de confianza en la vida colectiva que siempre son necesarios para abordar el desarrollo de una sociedad. Los actos reconciliatorios entre personas, las expresiones de perdón unilateral o mutuo, pertenecen a la esfera de la moral individual. La sanción judicial y sus condiciones de ejercicio pertenecen a la esfera normativa pública. Ambas obedecen a lógicas y necesidades distintas. Un ejemplo: luego de ser objeto de un atentado el Papa Juan Pablo Segundo perdonó personalmente a su agresor. Ese hecho no incidió en que el agresor haya sido juzgado y sancionado por el Estado italiano y permaneciera en prisión en cumplimiento de una pena, en resguardo de la convivencia social. La esfera colectiva debe sancionar los actos violentos aunque hayan sido personalmente perdonados por los afectados (y ciertamente si no es el caso, pues de otro modo pierde toda legitimidad la condena de la venganza). El «realismo» que defiende la conducta de esquivar la sanción de las violencias inflingidas, no hacerse cargo de ellas y generar la apariencia de su ausencia, es un grave error desde el punto de vista de su propia lógica: es generador a plazos breves, medianos o largos de conflictos y violencias por pérdida de legitimidad del orden colectivo. No abordar con distinciones éticas básicas los acontecimientos dolorosos ocurridos en el pasado de una sociedad genera la incertidumbre sobre su eventual repetición futura. Razonar y actuar de ese modo es introducir en una sociedad la semilla de la destrucción permanente de su convivencia, aunque en apariencia se presente como método restaurador de ella.

Toda sociedad abierta supone admitir y procesar incertidumbres, pero nada es más desestabilizador y paralizante que la incertidumbre sobre la eventual repetición de actos de violencia. La ética (las distinciones entre lo «correcto» y lo «incorrecto») y la política democrática (que incluye con prioridad crear marcos estables de respeto de derechos y garantías basados en esas distinciones) no deben estar reñidas: quien sostenga lo contrario estará dañando los fundamentos permanentes de la convivencia cívica.

A. JOIGNANT: Me pregunto: ¿cómo se transita desde la radicalidad a la renovación? Hago la pregunta porque ese paso, ese tránsito muchas veces no fue bien entendido, en la medida en que es un tránsito bastante más complejo de lo que se piensa ya que supone condiciones políticas, psicológicas y biográficas de posibilidad que no siempre se dan. Ami mismo me costó mucho entenderlo en gente que fue extremadamente radicalizada y que en algunos casos terminaron en posiciones de franca negación del pasado individual y colectivo, de lo que se hizo y no se hizo, ocultando lo que se creyó y omitiendo lo que uno fue. Para algunos se trató de una transición desde horizontes históricos máximos hacia nortes políticos mínimos; para otros de reacomodos parciales o de ajustes locales. Pero creo que en todos los casos se trató de legítimos, o a lo menos entendibles esfuerzos de sobrevivencia en un mundo muy distinto, lo cual equivalía a un trabajo de reparación ejercido sobre sí mismo, que lleva a que cada uno se ubique en la «izquierda» reinventando sus significados, o simplemente cancelando el eje derecha-izquierda. ¿Cómo se desarrolla este proceso en tu caso? Tú participaste en los debates de Chantilly en Francia, formaste parte de la renovación del socialismo chileno, fuiste muy cercano a Jorge Arrate y hoy formas parte del grupo de la Nueva Izquierda del Partido Socialista que lidera Camilo Escalona: ¿cómo se explica todo ese itinerario?

G. MARTNER: Con elementos de continuidad y de ruptura. Primero con una continuidad básica: optar por una acción política transformadora, cuyo horizonte es el provocar cambios profundos en la estructura socio-económica, en la estructura política y en la cultura del país para construir una sociedad libre y justa en la que convivan seres humanos iguales en dignidad, derechos y oportunidades. Ese ha sido siempre y sigue siendo el eje de mis convicciones de hombre de izquierda. La ruptura principal después del golpe fue ya nunca dejar de combinar la voluntad con la racionalidad. Tempranamente me impresionó, leyendo a Gramsci en Francia, una cita que en algunos de sus artículos este hacía de una máxima de Romain Rolland, el escritor francés de principios de siglo: «actuar con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad».

Actuar con racionalidad es hacerlo desde el reconocimiento del mundo tal como es, desde los límites presentes en la realidad, que entre otras cosas hacen complejos los procesos de transformación y que para hacerse consistentes deben dejar de lado el mito del «gran día» que todo lo cambia, aunque estos procesos incluyan momentos que pueden llevar a quiebres de tendencia en la vida política y social de mayor o menor intensidad. Pero eso no debe implicar rendirse frente a la indignidad, la injusticia y la arbitrariedad y dejar de luchar por su superación radical. No tiene ningún sentido pertenecer a una fuerza de izquierda y abandonar la voluntad de cambio de las estructuras de dominación que las producen y reproducen. La política democrática de izquierda es para mí siempre lucha, una lucha colectiva consistente y persistente.

En ese contexto mi evolución, mi trayectoria, consistió en sostener primero al interior del MIR, lo que me significó la exclusión, que esta idea de derrotar a la dictadura por la vía militar era una idea absurda: yo argumentaba con otros que no había en el continente latinoamericano un ejército mejor estructurado, con mayor peso material que el chileno y que, en consecuencia, lo que había que hacer era profundizar la resistencia a su dictadura en el terreno en el que éramos fuertes, la sociedad y su capacidad de organizarse, hasta generar situaciones de desobediencia civil masiva, y no en el de construir aparatos militares que pudieran competir con quienes eran extremadamente fuertes en el terreno de las armas. Eso era sólo prolongar un sacrificio inútil de muy alto costo humano, pues significaba someter a un conjunto de personas de carne y hueso a la exigencia de confrontar al aparato represivo de la dictadura de Pinochet, con una bajísima posibilidad de éxito, con la muy probable consecuencia de la tortura y el aniquilamiento. Yo jamás me sentí en condición de poder

solicitarle a nadie que entregase su vida en una acción política cuya racionalidad era tan mínima. Desgraciadamente fueron decenas los que ingresaron clandestinamente a Chile a luchar junto a los que permanecieron en el país en las peores condiciones y murieron con honor en ese intento, a los que recuerdo siempre con respeto y aprecio y ante cuya memoria me inclino, y muchos otros los que sufrieron tortura y cárcel y que merecen nuestro reconocimiento por su heroísmo.

Estas consideraciones implicaron, además, tomar una distancia ética de ese tipo de acción política y estimuló una reflexión más de fondo, no sólo a propósito de cómo se actúa frente a una situación tan grave como la dictadura en Chile, sino que también la percepción creciente de que cuando se producen las revoluciones sociales, éstas tienen momentos épicos muy fuertes, pero que cuando se hacen sobre la base de pequeños grupos que actúan en nombre de una clase social o de una configuración de sectores sociales, dependiendo de las circunstancias de las distintas revoluciones, lo más probable, y así lo demostró

la experiencia histórica del siglo XX, es que tomar el poder por la fuerza en nombre de ciertos ideales se transforma con frecuencia en el predominio en el Estado de ese pequeño grupo de hombres —porque dicho sea de paso las revoluciones sociales clásicas nunca fueron dirigidas por mujeres- y en la apropiación entera del poder por sus más implacables miembros. Con la consecuencia de instaurar dictaduras con total ausencia de pluralismo y de libertad en la sociedad y el sistema político. Por lo tanto, para mí empezó a quedar claro en aquella época que se trataba no sólo de un tema de eficacia y de viabilidad de la acción política sino que también de prefiguración en caso de éxito de ese tipo de acción, llamémosle militarista, que en todo caso yo veía de nula probabilidad, de una sociedad no democrática y libertaria y en consecuencia ajena finalmente a los propios valores y objetivos que se perseguía. Allí estaba, para ilustrar en el extremo este punto, la experiencia que se desplegaba ante nuestros ojos de la toma del poder por los Khmers Rojos en Camboya y el posterior genocidio sangriento que practicaron.

A. JOIGNANT: ¿En qué año fue eso?

G. MARTNER: En el año 1976. A la par de avanzar en mis estudios de economía, yo había sido electo como parte de la llamada «Dirección de París» de los miembros exiliados del MIR, hasta que fuimos destituidos por los representantes de la dirección interior por «socialdemócratas» y otros epítetos menos amables. Tenía yo entonces 19 años.

Las razones descritas me llevaron, junto al hecho de vivir en una sociedad europea democrática y evolucionada marcada por el libre flujo de las ideas, a involucrarme en el proceso de la renovación de la izquierda y a acercarme, con muchos otros amigos, al proceso llamado de Convergencia Socialista.

Este proceso implicó para la izquierda chilena una división profunda, precisamente porque estos temas no podían, en medio de la derrota y la dispersión, sino debatirse en profundidad. Esta era especialmente la situación que vivía el Partido Socialista. La responsabilidad que el Partido Socialista tuvo en los acontecimientos de los años '60 y luego en el Gobierno de la Unidad Popular hicieron que este debate fuera intenso en su seno e implicó también una fractura y división que duró entre 1979 y 1989.

Por cierto la tradición comunista me resultó siempre ajena. Me pareció siempre que el estalinismo nacido de la Revolución Rusa no había sido sino una trágica experiencia de involución de los ideales socialistas y que en Chile su expresión, el Partido Comunista, no era a su vez más que la expresión de una idea de sociedad que siempre con mis compañeros repudiamos. No nos cabía en la cabeza que la acción política de la izquierda chilena se subordinara a los intereses de un Estado como el Soviético, de carácter autoritario, represivo y dogmático. La nuestra fue por sobre todo una generación libertaria en el plano cultural y en el plano de las ideas que poco tenía en común con los comunistas, aunque siempre he respetado y admirado el trabajo de organización obrera que desplegó por décadas el Partido Comunista de Chile.

En ese contexto, el proceso de la renovación fue un proceso que se planteó, entre otras cosas: a ver, bueno ¿en qué estamos desde el punto de vista de la eficacia de la acción política y desde el punto de

vista de la coherencia entre fines y medios? No podía ya pensarse que podría usarse cualquier medio para los fines que se perseguían. Entonces lo interesante resultó ser precisamente el descubrir que esta era un debate muy antiguo en el Partido Socialista.

Ya Allende nos había dado una lección imperecedera a los jóvenes con su ejemplo de consecuencia al resistir con las armas el golpe y quitarse la vida antes que someterse a los mandos militares que lo habían traicionado destruyendo con violencia inusitada la democracia chilena. Y sólo nos cabía con humildad revalorizar esta figura trascendente de la historia nacional y de la izquierda chilena como alguien que tuvo razón en un tiempo adverso de guerra fría y de rigidez ideológica, que no logró ser acompañado por fuerzas políticas que sólidamente compartieran su idea de transformación profunda de la sociedad en el marco de las instituciones democráticas y con pleno respeto de las libertades. Debo decir que ya el 11 de septiembre de 1973, reunidas las direcciones del PC, el PS y del MIR en una industria santiaguina y ante la petición comunicada por radio a la dirección socialista, según me han relatado testigos directos de esos hechos, de en un momento dado dirigirse a La Moneda a ayudar a defender al Presidente Allende, encontró inmediata respuesta positiva de los socialistas que allí se encontraban y de Miguel Enríquez y los dirigentes del MIR, que de ese modo se manifestaban, después de casi una década de bifurcación de los caminos, dispuestos a sellar su suerte con la del Presidente, lo que no fue el caso de otros partidos. Avanzar a La Moneda no fue posible para las pocas decenas de dirigentes y militantes socialistas y miristas que disponían allí de alguna capacidad de actuar con armas, dado el cerco militar que sufrieron y posterior serie de enfrentamientos que hicieron imposible acercarse al centro de la ciudad. Este gesto, de haberse concretado, hubiera implicado la inmolación de las direcciones del PS y el MIR, compartiendo el destino del Presidente Allende.

Las formas de vida en que el socialismo se vaya realizando dependerán, por cierto, de las circunstancias nacionales, pero ellas sólo serán auténticas y, por lo tanto, verdaderamente progresivas si están animadas por lo esencial de su espíritu: la dignificación del hombre.

Ningún método de violencia estatal, menos aún la violencia erigida en sistema, es compatible con la índole del socialismo. Puede realizarse por la violencia una cerrada planificación económica que, acortando etapas, haga pasar a un país, en breve plazo, del feudalismo agrario al industrialismo exacerbado, pero ello se hará a costa de una inevitable deformación moral de las nuevas generaciones en el ámbito inhumano del Estado totalitario. El socialismo es revolucionario por sus objetivos, que implican un cambio radical en la estructura de la sociedad capitalista, pero no puede ser dictatorial por sus métodos, desde el momento en que procura el respeto a valores de vida que exigen el régimen de libertad.

De ahí que no nos parezca posible separar el socialismo de la democracia. Más aún: sólo utilizando los medios de la democracia puede el socialismo alcanzar sus fines sin que ellos se vean desnaturalizados. No se trata, por cierto, de la democracia estáticamente concebida, en pugna con el proceso histórico, sino de una democracia viva, que se vaya modificando orgánicamente, de acuerdo con las mudables circunstancias de la existencia colectiva. La democracia puramente formal, de alcances civiles y políticos, tiene que llegar a ser una democracia real, de contenido económico y social, pero sin que su contenido histórico y moral, que es, por sobre todo, la preservación de los derechos humanos, experimente menoscabo alguno en provecho del poder del Estado o del progreso de la economía. (Eugenio González, Discurso en el Senado, 14 de mayo de 1957).

Había entonces que concluir en la mirada larga que lo que, en su momento, fue una rebelión juvenil en contra de la política tradicional, rebelión que tuvo sus causas y sus méritos (inserta en particular en el proceso de organización y movilización social en el ámbito obrero, campesino, poblacional y estudiantil de los años sesenta, que fue extendiendo la base de acción de la izquierda más allá de sus espacios tradicionales), fue inconducente para producir las transformaciones que queríamos y que

había que retomar el rumbo rescatando las orientaciones de Eugenio González y la práctica política y el ejemplo de Salvador Allende, renovando nuestras ideas y programas en el contexto de un mundo que cambiaba aceleradamente y de una tarea política inmensa que se nos ponía por delante para derrotar a la dictadura, reconstruir la democracia en Chile y reimpulsar a la izquierda por nuevos caminos.

Una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista (...) democrático, pluralista y libertario (...). Para nosotros, representantes de las fuerzas populares, las libertades políticas son una conquista del pueblo en el penoso camino por su emancipación. Son parte de lo que hay de positivo en el período histórico que dejamos atrás. Y, por lo tanto, deben permanecer. De ahí también nuestro respeto por la libertad de conciencia y de todos los credos (...)

Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener las libertades políticas (...) Las haremos reales, tangibles y concretas, ejercitables en la medida en que conquistemos la libertad económica(...) Nuestro camino es instaurar las libertades sociales mediante el ejercicio de las libertades políticas, lo que requiere como base establecer la igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado porque reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige secuencias intermedias. Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige años. Los indispensables para penetrar en la conciencia de las masas. Para organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes y ajustarlas a las otras. Imaginar que se pueden saltar las etapas intermedias es utópico. No es posible destruir una estructura social y económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de reemplazo. Si no se reconoce esta exigencia natural del cambio histórico, la realidad se encargará de recordarla (...)

El camino que mi gobierno se ha trazado es consciente de estos hechos. Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites. (Salvador Allende, Mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971).

A. JOIGNANT: Es interesante este proceso de transición biográfica y renovación política tan poco lineal, lo cual da cuenta de las complejidades del proceso y de los costos involucrados: muy difícil debe haber sido pasar del MIR a la ausencia de militancia a continuación de una expulsión, después a la renovación del socialismo vía «Encuentro de Chantilly» y, finalmente, a la «Nueva Izquierda» socialista...

G. MARTNER: Fui uno más, pero entusiasta, en ese proceso. Logré volver a vivir a Chile a fines de 1980, una vez que aparecí en una de las listas que a cuenta gotas iba permitiendo el retorno al país de algunos de los exiliados, para empujar esa perspectiva. Como lo hemos conversado, el punto de partida era que debía trabajarse una línea de derrota política de la dictadura a través de un proceso de desobediencia civil generalizada y de alianzas partidarias amplias y no una línea de acciones militares sin viabilidad en las condiciones de la dictadura chilena y que en caso de éxito prefiguraría un autoritarismo contrario a nuestros propósitos democratizadores. Además, se trataba de definir sin equívocos que la democracia sería el espacio y límite de nuestra acción política futura, en un contexto de plena autonomía de la sociedad civil y con, además, una ruptura clara con cualquier alineación con los llamados «socialismos reales».

Se produce, primero, la reflexión de intelectuales de la izquierda que pudieron permanecer en el país, como Enzo Faletto, Manuel Antonio Garretón, Tomás Moulián, luego la conformación de la Convergencia Socialista, que contaba con la activa participación de Ricardo Lagos que ya perfilaba su liderazgo, y más tarde los eventos de Ariccia, en Italia, que organiza Raúl Ampuero en 1979 y

1980, en el que se llama a abrir esta reflexión muy a fondo, y de Chantilly en las afueras de París a inicios de los años ochenta. En esto influye por cierto las dificultades en las que nos encontrábamos en Chile y también el debate de la izquierda europea de la época. Estamos hablando de la etapa del eurocomunismo, especialmente de los procesos del Partido Comunista italiano, de la Unión de la Izquierda en Francia y del rol que jugaba el modelo de la social democracia nórdica, que mantenía con el liderazgo de Olaf Palme en Suecia un gran prestigio, así como los que encarnaban Willy Brandt y Bruno Kreisky en las socialdemocracias alemana y austríaca.

Ante el terrible impacto de la derrota de la izquierda en 1973, cabía entonces al socialismo chileno autónomamente llevar a cabo una identificación a fondo de qué se había hecho mal y a la larga una revisión de los fundamentos de su proyecto de sociedad. Ese proceso, en medio de dificultades y tragedias, llevó a fuertes tensiones. ¿Cuáles fueron los tópicos del proceso de renovación?(14)

En primer lugar, la relación entre socialismo y democracia. En su fundación en 1933 el PS declaró su escepticismo frente a la posibilidad de llevar a cabo su proyecto de cambio social en el marco democrático y parlamentario, aunque su práctica política se desarrollara desde el inicio en ese marco, con la exitosa candidatura presidencial, desde la relegación, de Marmaduke Grove.

En 1947, su programa enunció una fuerte crítica al estalinismo y a la ausencia de libertades en la URSS. Visionariamente, el entonces senador Eugenio González proclamó que los fines igualitarios y libertarios del socialismo no podían realizarse, sin desnaturalizarlos, por medios que no fueran los democráticos. No obstante, en los años cincuenta y siguientes la tesis de la República Democrática de Trabajadores mantuvo una cierta distancia con la democracia parlamentaria, aunque no era contradictoria con ella. El impacto de la revolución cubana extendió luego en el socialismo la idea de que la lucha armada frente a la resistencia de los poderosos era inevitable para llevar a cabo su proyecto, lo que se consagra en el famoso congreso de Chillán de 1967, aunque, como te señalé, en la práctica elige para dirigirla a un insigne parlamentario moderado y al año siguiente proclama a Salvador Allende como candidato a presidente de una coalición amplia.

Establecer uno o más centros donde podamos cerrar la brecha entre la elaboración intelectual y la praxis, entre la búsqueda teórica y las exigencias de la acción, ha pasado a ser una exigencia prioritaria. En seis años el país ha sufrido una mutación profunda. Las fuerzas que aspiran a protagonizar el futuro de Chile lo lograrán únicamente si son capaces de comprender esos cambios en toda su hondura.

La izquierda socialista está en óptimas condiciones para lograrlo. Aún con graves carencias teóricas, demostró en el pasado una aguda receptividad para interpretar y guiar los impulsos históricos de las masas populares y dispuso siempre de la independencia necesaria para juzgar con cabeza propia el complejo proceso de emancipación de los pueblos, rehusando someterse a modelos sagrados o a cálculos hegemónicos. Hoy tiene la oportunidad de romper de nuevo la inercia si opera con unidad y con audacia, porque son muchos y muy grandes los errores que se deben corregir y vivimos un tiempo en que los viejos mitos -paz, libertad, internacionalismo, liberación, autogobierno- adquieren vigencia concreta y, en su contenido real, no pasarán a ser palabras muertas incapaces de movilizar las inagotables esperanzas de los hombres. (Raúl Ampuero, Informe a la segunda reunión de Ariccia, enero de 1980.)

Lo primero que cabía al socialismo en su proceso de rescate y renovación era afirmar con claridad sus definiciones y reconocer la pertinencia del enfoque de González y Allende. El socialismo chileno reunificado y ampliado consagró formalmente desde 1989 que la democracia es el espacio y el límite en que se desenvuelve su acción política y que su proyecto de cambio es progresivo y está sujeto a la obtención de las mayorías populares y ciudadanas suficientes.

En segundo lugar, la inspiración ideológica. El PS fue desde sus orígenes un partido de izquierda no dogmático y fuertemente confrontado con la ortodoxia comunista. Se declaró en 1933 inspirado por el marxismo, pero «enriquecido y rectificado por el constante devenir social», y en su seno nunca

prevaleció un modo doctrinario de hacer política. En 1965 se declaró, sin deliberación mayor, «marxista-leninista», en medio de la radicalización política de la época. El proceso de renovación debía dar cuenta de esa regresión y de hecho la unificación de 1989 consagró el pluralismo de las inspiraciones ideológicas del socialismo chileno, que incluye este marxismo enriquecido y rectificado, pero que también incluye al cristianismo popular y al racionalismo laico y a todas las expresiones de las ciencias sociales modernas que permiten interpretar racionalmente el mundo tal como es para mejor transformarlo.

En tercer lugar, la visión económica. El PS siempre fue un partido anticapitalista, pero no un defensor de la estatización de la economía, y esto bastante antes, por ejemplo, que el programa de Bad-Godesberg de la socialdemocracia alemana. El programa de 1947, bajo la inspiración y la pluma de Eugenio González, contiene vehementes críticas a la planificación central de tipo soviético y oponía a la estatización una socialización autogestionaria, en sintonía con la crítica contemporánea desde la izquierda al esquema de planificación central y propiedad estatal generalizada(15).

Ampuero fue en este sentido un admirador de la autogestión yugoslava. Sin embargo, en los años 1960 y 1970 volvió por sus fueros la identificación del socialismo con la estatización generalizada de la producción.

La renovación del socialismo supuso reactualizar progresivamente su visión económica, optando por sustentar su proyecto igualitario en una economía plural con una estructura de propiedad mixta (pública, social y privada) , con soportes de mercado en la asignación descentralizada de recursos pero con regulaciones públicas fuertes para gobernarlos social y ecológicamente en beneficio del interés general y de las futuras generaciones. La idea de estatizar todos los medios de producción fue reemplazada por la de construir un sistema económico con capacidad de garantizar a todos ingresos básicos para una vida digna a través de la distribución de la renta tecnológica que pertenece a todos, junto a derechos laborales consagrados y eficaces en las empresas, una amplia protección frente a los riesgos sociales, una fuerte redistribución de las capacidades de inserción social y sólidos servicios públicos proveedores de bienes colectivos, todo lo cual con orden en las cuentas fiscales y externas e inflación controlada. Se entendía que debían existir las empresas y servicios públicos que fueran necesarias al desarrollo y a la cohesión social, y promover también a la economía social y cooperativa y a la pequeña y mediana empresa, desarrollando una política antimonopólica de cautela de la competencia, con promoción de la innovación y la eficiencia productiva. Se debía consagrar políticas redistributivas para ampliar el consumo popular y el mercado interno, pero al mismo tiempo reconocer que esa no era una base suficiente para sostener el dinamismo económico y se debía buscar una inserción externa activa para aumentar el crecimiento mediante el acceso a los mercados más significativos del mundo, con privilegio estratégico de la integración latinoamericana.

La intervención estatal no debería convertir al Estado en empresario ni generar burocracia ni tiranía. No hay que estatizar la economía sino socializarla, es decir, humanizarla. Es bien sabido que cuando el Estado se hace cargo de determinados servicios se comporta frente a los trabajadores como un empresario cualquiera, y los trabajadores, a su vez, se mantienen frente al Estado en virtual actitud de lucha, como si se tratara de un empresario particular. De ahí que se produzcan los mismos conflictos sociales en las empresas privadas y en las empresas «nacionalizadas», es decir estatizadas. Huelgan los ejemplos. La administración directa de empresas por parte del Estado a través de la burocracia tramitadora y lenta por esencia, es una forma casi siempre dispendiosa y, generalmente, ineficaz de capitalismo público.

El socialismo es otra cosa. No aspira el socialismo a reforzar el poder político del Estado con el manejo del poder económico. No pretende el socialismo que sea el Estado quien planifique, regule y dirija los complejos procesos de la producción y distribución de bienes y servicios. No se propone el socialismo levantar sobre las ruinas de las empresas privadas a un especie de gran empresario que sería el Estado burocrático y policiaL Por el contrario, quiere el socialismo que los propios

trabajadores y técnicos, a través de sus organizaciones, planifiquen, regulen y dirijan, directa y democráticamente, los procesos económicos en beneficio de ellos mismos, de su seguridad, de la sociedad real y viviente. Para el socialismo es tan imperativa la defensa de los intereses y los valores humanos frente a las tendencias absorbentes del totalitarismo estatal como frente al poder económico del capitalismo monopolista. (Eugenio González, Discurso en el Senado, 20 de octubre de 1953.)

Se trataba de replantearse, con una nueva visión adaptada a una sociedad cada vez más compleja, el propósito de superar el capitalismo en tanto sistema que se sustenta en la acumulación ilimitada de capital en pocas manos, concentra monopólicamente el poder económico, multiplica las asimetrías de información y la ineficiencia en la asignación de recursos, que es contradictorio con la existencia de derechos sociales y económicos al margen del mercado y con la ampliación de la base productiva del emprendimiento de pequeña escala.

Si además el capitalismo crecientemente mundializado promueve mantener en la impotencia a los Estados-Nación y al poder político representativo de las aspiraciones de los ciudadanos a disponer de derechos, y que relega la democracia a ritos electorales sin importancia, influidos decisivamente por el poder económico del gran capital, entonces la alternativa democrática y socialista había de mantener su plena vigencia. Y así con diversos otros temas (sindicalismo, género, medio ambiente, poder local), y que han oxigenado la propuesta socialista a la sociedad chilena.

Se entendió la renovación socialista como un proceso siempre abierto, siempre dinámico, en el que un espíritu no dogmático y crítico alimentara la reafirmación del proyecto igualitario y libertario que, desde Arcos, Bilbao, Recabarren, Grove, Schnake y Matte dio origen al socialismo chileno y del que los socialistas de hoy, con orgullo, nos sentimos los activos herederos. Nos consideramos legítimos portadores de la modernidad que siempre hemos encarnado y adversarios tenaces de todas las derechas.

Si se retrotrayera la historia, pienso yo que habría que hacer de nuevo el proceso de rescate y renovación de la izquierda y el socialismo chilenos. La lógica en la cual se desenvolvía nuestra izquierda en aquella época estaba agotada. Especialmente, debía rechazarse toda reafirmación ortodoxa y pro-soviética, que por entonces apoyó la invasión soviética a Afganistán y más tarde apoyó el golpe de Jarúzelsky en Polonia. En consecuencia, la matriz ortodoxa siguió su curso y el resto de la izquierda abrió un gran debate y naturalmente entonces yo me sentí muy cómodo en ese debate.

Para muchos de nosotros, y para mí en lo personal, volver al tronco del cual se produjo el desprendimiento guevarista en los años 1960 era el paso natural a dar y suponía reintegrarse en cuerpo y alma al socialismo chileno, en el que tenía sentido involucrarse para llevar adelante la necesaria renovación de la izquierda en sus ideas y en sus prácticas políticas y desde allí intervenir en la modificación de la difícil situación que vivía el país. En 1981 me integré al Grupo de la Convergencia Socialista, que reunía a un cierto número de intelectuales, entre ellos Ricardo Lagos, y en 1985 al Partido Socialista que dirigía Carlos Briones, y más tarde conduciría Ricardo Núñez y luego Jorge Arrate.

Ese proceso quedó saldado en mi fuero interno en la noche del 5 de octubre de 1988, en un breve momento de introspección cuando ya se hizo evidente, después de horas de incertidumbre, que habíamos logrado derrotar en el plebiscito a la dictadura de Pinochet, 15 años después de los trágicos hechos de 1973, con una movilización democrática masiva de fuertes contenidos épicos. Yo había intervenido activamente en el proceso antidictatorial desde que pude volver al país a fines del año 1980 (en este contexto participé de las protestas que encarnaban el esfuerzo de desobediencia civil, en las movilizaciones y barricadas, así como en el debate público que poco a poco recuperaba espacios) y que condujo a la conformación de alianzas amplias y a la derrota política de la dictadura en un contexto de generalizada movilización social. Formé parte desde 1985 de la dirección de uno de los sectores en que se encontraba dividido el Partido Socialista. Me tocó en la etapa final la

específica responsabilidad de organizar el recuento paralelo de los votos en el plebiscito organizado por el Comando del NO, lo que logramos con un amplio control democrático en el que participaron miles de personas con una alta eficacia que hizo imposible desconocer el resultado. Esa fue una alegría profundamente reparadora, como lo fue en diciembre de 1989 la reunificación del Partido Socialista, en la que también participé activamente.

Pero, por otro lado, para la mayoría de nosotros el paso no consistía en abandonar dogmatismos para pasar a pragmatismos, y del pragmatismo a una conducta de renuncia frente a los roles transformadores de la acción política de izquierda. No se trataba de pasar a una conducta meramente adaptativa para ocupar espacios de poder. Ni pasar del maximalismo al minimalismo. Y cuando ese proceso de la renovación empezó a derivar para algunos en una especie de abandono de la vocación de cambio de la sociedad, entonces para mí eso fue una frontera que no estuve ni estoy dispuesto a traspasar. Renovar a la izquierda, establecer que la democracia es el espacio y límite de nuestra acción, reconocer que la transición a la democracia y establecer en Chile un Estado fuerte capaz de gobernar el mercado y ganar derechos sociales y ambientales extendidos iba a ser mucho más complejo y largo que nuestra aspiración inicial, no implicaba en absoluto abandonar la vocación de transformación radical de nuestra sociedad. Por lo tanto, superada como fue en el socialismo chileno la antinomia ortodoxia-renovación, con los unos a un lado del muro de Berlín y los otros al otro, caído por lo demás en buena hora el propio muro de Berlín, entonces tenía todo el sentido del mundo afirmar que la renovación era un proceso en el marco de la izquierda y no fuera de ella. La vocación transformadora igualitaria es lo que define la condición de ser de izquierda y por lo tanto para mí, en un momento dado, a mediados de los años noventa, se me hizo inevitable alejarme de quienes en materia de derechos humanos, rol del Estado en la economía, profundización de la democracia y vocación de cambio de las estructuras de poder, habían pasado de una cierta raya hacia el mundo liso y llano de la adaptación acrítica a lo existente. Eso se expresó en mayo de 1998 en el debate abierto por el documento «Renovar la Concertación», que reivindicaba un minimalismo sin verdadera vocación de cambio, documento promovido por gente como Brunner, Cortés Terzi, Enrique Correa, Viera-Gallo y otros.

Yo simplemente nunca estuve en eso. Entonces, he mantenido mis convicciones y punto. Me sentí incómodo perteneciendo a un sector del partido que no delimitaba en un momento dado suficientemente sus posiciones al respecto, aunque esto ha cambiado con el tiempo, y decidí integrarme en julio de 1998(16), dos meses después del documento llamado «autocomplaciente» que te mencioné y que me provocó un fuerte rechazo por su perspectiva liberal y de resignación política, a la corriente de la Nueva Izquierda socialista para seguir sosteniendo con energía la necesidad de mantener al socialismo con una clara identidad de izquierda, moderna y vinculada a los trabajadores, a los creadores y al mundo popular, con espíritu unitario y abierto, con la aspiración de reanimar el debate sobre el futuro del socialismo y contribuir a una acción política eficaz.

Notas

- (1) Eric Hobsbawm, Política para una izquierda racional, Barcelona, Crítica, 1993.
- (2) Edgar Morin, «Quatre axes de réformes pour l'humanité», en Philippe Merlant, René Passet y Jacques Robín, Sortir de l'économisme. Une alternative au capitalisme néolibéral, Les Editions de l'Atelier, Paris, 2003.
- (3) Norberto Bobbio, Izquierdas y Derechas, Taurus, Madrid, 1989.
- (4) Goran Thernborn, «La dinámica del capitalismo y el sentido del proyecto socialista hoy y mañana», en Wolfgang Merkel (ed.), Entre la modernidad y el postmaterialismo. La socialdemocracia europea a finales del siglo XX., Alianza Editorial, Madrid, 1994.
- (5) Carlos Fuentes, En esto creo, Seix Barral, Barcelona, 2002.
- (6) Citado por Henri Weber, Le bel avenir de la gauche, Seuil, Paris, 2003. Ver también Henri Weber, La izquierda explicada a mis hijas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
- (7) Jaques Robin y Jean Zin, « Au seuil de l'ère informationnelle », en Philippe Merlant, René Passet

y Jacques Robin, *Sortir de l'économisme. Une alternative au capitalisme néolibéral*, Les Editions de l'Atelier, Paris, 2003.

(8)Estos temas están tratados en Gonzalo D. Martner, *Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado. Para una Historia crítica de la visión económica de la izquierda y un tratamiento innovador de los desafíos actuales* ver Geoffrey M. Hodgson, *Economics and Utopia. Why the learning economy is not the end of history*, Routledge, Londres, 1999. Ver también sobre las políticas para el pleno empleo como soporte del bienestar, Jean Pisany-Ferry, *Sur le chemin du plein emploi*, Conseil d'Analyse Économique, Paris, 2000

(9)Ver Jorge Arrate y Eduardo Rojas, *Memoria de la izquierda chilena, Tomo 1 (1850-1970)*, Javier Vergara Editor, Santiago, 2003.

(10)Edgar Morin, *Pour une politique de civilisation*, Arléa, Paris, 2002

(11)Jaime Gazmuri, *El sol y la bruma*, Ediciones Beta, Santiago, 1999.

(12)J.Grenier, *Opinion sur la question de savoir si l'on doit supprimer de la formule du serment civique les mots de haine à l'anarchie*, citado en Mona Ozouf, *La fete révolutionnaire 1789-1799*, París, Folio, p.473

(13)Patricio Aylwin, *El reencuentro de los demócratas. Del Golpe al triunfo del No*, Ediciones B, Santiago, 1998.

(14) Ver en la materia el texto de Jorge Arrate, *La fuerza democrática de la idea socialista*, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1985, y la compilación extensa de las elaboraciones de diversos autores que se encuentra en *Socialismo: 10 años de renovación. 1979-1989. Tomos I y II*, Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1991.

(15)De la amplia literatura en la materia puede destacarse Alec Nove, *La economía del socialismo factible, Siglo XXt*, Madrid, 1987; Bernard Chavance, *L'économie soviétique*, Le Sycomore, Paris, 1988; Adam Przeworski, *Democracia y mercado*, Cambridge University Press, 1995. La lección en este plano que deja este ciclo histórico ha sido sintetizada pertinentemente por Charles Bettelheim, uno de los economistas que por décadas siguió de cerca la temática de la planificación central, cuando concluye hacia 1985 que «un plan que pretende reglamentarlo todo y preverlo todo fracasa en su objetivo. En una economía compleja y conflictiva, no se puede planificar en detalle. Dado que sigue siendo deseable obtener sino un manejo al menos una cierta orientación del desarrollo económico, el plan debe tener una amplitud que sea manejable y que por tanto deje subsistir apoyos, en particular deje funcionar el sistema de precios. La inmensa mayoría de los precios no puede ser fijada centralmente, sin lo cual se llega a una deriva completa de las decisiones económicas», en Charles Bettelheim y Bernard Chavance, «La planification soviétique», *Alternatives Économiques*, 1985.

(16)Escribí entonces, en julio de 1998, que «el dilema renovación-ortodoxia está superado por los hechos y por la historia. Insistir en él me parece un error político serio, y no veo emerger en la megatendencia otro eje articulador que no sea la reiteración, a veces obsesiva, de esta fuente de identidad. Antes bien, observo la emergencia de dos nuevos ejes diferenciadores que me parece reflejan mejor la real situación del debate interno del PS: a) los que se adaptan sin mayores traumas a la idea de una democracia gobernada por el mercado vs los que propugnan una democracia capaz de gobernar al mercado como perspectiva irrenunciable, y b) los que perpetúan una lógica contestataria en la sociedad y el partido vs los que la articulan con las necesarias exigencias del gobierno partidario y del gobierno de las instituciones democráticas. Creo más honesto reconformar las corrientes internas en función de estos dilemas actuales y no de los dilemas antiguos».

CAPÍTULO II

EL TIEMPO DEL NUEVO SOCIALISMO

«Una doctrina como el socialismo, que aspira a orientar a las generaciones jóvenes y a determinar las bases de u reconstrucción social, necesita acaso más que cualquiera otra interpretar el sentido de la época, los valores permanentes que en ella operan y los que le son específicos, para ajustar a él, con plena conciencia, la perspectiva de una política.

Eugenio González Rojas

«En la izquierda estamos en la búsqueda de un modelo nuevo para una sociedad igualitaria, después del frac definitivo de lo que se ha llamado el comunismo, y después de la victoria evidente del capitalismo en escala internacional

Es sin embargo erróneo, a mi juicio, designar esta búsqueda como aquella de una «tercera vía» o de una «cuarta vía Las estrategias que conocemos son de número finito y ninguna de ellas ha sido agotada. Y además, debiera tal decir, es una inferencia popular pero falsa que el fracaso del comunismo implica el agotamiento de toda perspectiva igualitaria. Eso está lejos de ser cierto.»

John Roemer

La lucha por un Estado Social en una nueva época

A. JOIGNANT: Transitemos hacia una discusión más política que biográfica Sobre la historia reciente de la izquierda chilena se emiten muchos juicios, a menudo muy contradictorios entre sí. Es así como algunos sostienen que la renovación de socialismo se agotó, mientras que otros afirman que en realidad la renovación nunca existió, y otros más abogan de acuerdo con una lógica de velocidades de un vehículo por un «segundo impulso» renovador. Me parece evidente que juicios tan dispares denotan, objetivamente, un estancamiento de la izquierda chilena democrática continuación de un agotamiento de la controversia de ideas y proyectos.

G. MARTNER: El rescate de las grandes tradiciones democráticas d socialismo se hizo y la renovación de la izquierda y del socialismo chileno también en el sentido antes indicado de poner en sintonía las ideas de izquierda con el mundo de fines del siglo XX. Son procesos que están ahí, están adquiridos, son soportes de acción política actual. Fueron enteramente necesarios, pero no fueron suficientes p volver a transformar al socialismo en alternativa política, pues se requirió también una acción política eficaz. Esta se desarrolló primero para terminar con la dictad

proceso en el que le cupo al PS un papel de primer orden, luego para construir una coalición amplia que diera soporte a la recuperación democrática y finalmente liderar esa coalición y llevarlo a la presidencia. En el año 2000 se consagraron los resultados de un largo esfuerzo, que fue simbolizado con la llegada del socialista Ricardo Lagos a La Moneda 27 años después de la inmolación del Presidente Allende y simultáneamente el procesamiento de Pinochet por los tribunales en Chile, que, aunque no culminó por haber sido declarado el ex dictador en estado de demencia, ha dejado claramente establecida su responsabilidad en los crímenes cometidos bajo su régimen, mientras otros juicios siguen abiertos estableciendo lenta pero sistemáticamente la verdad de lo ocurrido y avanzando en la justicia y la reparación.

En esta perspectiva larga fue ampliamente positiva y exitosa la acción política del nuevo socialismo –nuevo porque reunificó partidos diversos, incluso los que tuvieron su origen en escisiones de la DC, nuevo porque incorporó corrientes filosóficas distintas a las de sus orígenes, nuevo porque reactualizó su plataforma programática y nuevo porque emergieron liderazgos distintos de los tradicionales-encarnado por el Partido Socialista reunificado en 1989. Algo pasa que a veces sólo se

ponen por delante las insuficiencias y no se valora en todo su significado lo hecho. Yo creo que el activo adquirido por el socialismo chileno es sustancial y en este plano convengamos que eso se ve en la contingencia actual: después de haber estado destruido y dividido, el Partido Socialista es hoy un partido muy relevante de la política chilena, y se propone seguir protagonizando su futuro. Lo que no es poca cosa después de la magnitud de la derrota que sufrió, con la pérdida inmensa que significó el sacrificio de la vida de cientos de sus militantes. Pudo, entonces, reconstituirse como actor político central manteniendo el norte de su vocación transformadora en el contexto de las instituciones democráticas.

Sin embargo, el Partido Socialista no ha podido, o no ha sabido, transformarse en una fuerza electoralmente más gravitante, aunque sí lo es si se considera su articulación con el espacio político que ocupa junto al Partido Por la Democracia, que en su origen fue formado por iniciativa del PS dirigido por Núñez, y junto al Partido Radical, con quien comparte una tradición histórica, espacio que representa cerca de un 30% del electorado.

El que la Concertación sea gobierno y que el bloque de izquierda democrática se haya transformado en mayoría en su seno, no han impedido a lo largo de más de una década que la derecha política, económica y cultural conserve un poder excesivo y en muchos sentidos ilegítimo. Ese es un pendiente de magnitud que obliga a redoblar los esfuerzos.

Trece años después de la recuperación democrática, no parece haber ya vuelta atrás ni peligros serios de regresión autoritaria, cuya legitimidad es poco menos que nula, pero al mismo tiempo emergen fuertes signos de incomodidad frente al sistema político. Los jóvenes que van llegando a la edad de la ciudadanía mayoritariamente no se están inscribiendo en los registros electorales (1,8 millones de ellos no son hoy ciudadanos, a contrastar con un padrón de 8 millones) y pocos se interesan en participar directamente en los asuntos públicos. Más aún, la acción política es crecientemente vista con sospecha y distancia, a la vez que el prestigio de una institución símbolo de la democracia como el parlamento ha decaído notoriamente. Los votos nulos alcanzan proporciones significativas.

En el análisis de esta situación cabe distinguir asuntos que son propios de la situación nacional y otros de carácter más universal.

Salta a la vista lo que podemos denominar la instalación en Chile de una suerte de falta de credibilidad democrática. En efecto, sigue dilatándose inexplicablemente en el país la transición a un régimen plenamente democrático en el que rijan en toda su extensión la soberanía popular («Todo el poder reside en el pueblo, y en consecuencia emana de él» reza la Constitución norteamericana, primera entre las de carácter democrático). El país continúa viviendo un complejo proceso marcado por la persistencia de los ya famosos «enclaves autoritarios» en las instituciones que otorgan una gran influencia a los no menos renombrados «poderes fácticos» en el ámbito militar, económico y cultural que es impropia de las democracias. Se contradicen así de manera radical objetivos básicos de la transición que han contado con un amplio y reiterado apoyo mayoritario de los ciudadanos.

El hecho que desde 1990 tres gobiernos hayan sido elegidos para realizar un programa de cambios y que muchos de ellos sean paralizados por el mecanismo de los senadores designados, han terminado por profundizar un escepticismo de segmentos significativos del país, y particularmente de los jóvenes, frente a las capacidades de la acción política para encauzar las aspiraciones de la sociedad. Más grave aún, el funcionamiento del Estado de derecho democrático, la administración de justicia y la gestión de los órganos públicos sufren episódicamente fuertes traspies y en el último tiempo han emergido situaciones específicas de corrupción. Estos elementos también contribuyen a la sensación de estancamiento político de nuestra opción.

Ha contribuido al enrarecimiento del clima político el que los partidos de oposición no se decidan a actuar bajo las reglas del juego democrático y prefieran invalidar institucionalmente la capacidad del gobierno de llevar a cabo aspectos importantes de su programa. La oposición se debate entre estar dispuesta a perder una y otra vez las elecciones en tanto pueda mantener su poder de veto sobre las opciones ciudadanas mayoritarias y, por otro lado, una férrea voluntad de poder que, para ser exitosa,

la obligará a viabilizar las reformas de saneamiento democrático. La lógica del veto se hace cada día más insostenible y la oposición se expone a que permanentemente se le haga responsable de los bloqueos a las iniciativas de gobierno, sin que éste se vea por lo demás obligado a hacerse cargo de sus propias insuficiencias o del eventual irrealismo de sus propuestas.

La ineficacia del principio de mayoría que hoy prevalece contribuye al distanciamiento de los ciudadanos respecto del sistema político y no permite a la oposición cumplir su rol. Este no consiste en no dejar a la mayoría llevar a la práctica sus proyectos, sino en optar, ofreciendo sus propias alternativas, a dejar de ser minoría en los eventos electorales periódicos a través de la búsqueda de la adhesión ciudadana a dichas alternativas. Cuando una oposición renuncia a su función y mantiene un poder de veto al margen de la soberanía popular, se deteriora el sistema democrático. En una democracia digna de ese nombre los electores votan por quienes le presentan un programa para juzgar luego su realización y optar por su continuidad o cambio, haciendo efectiva o no la alternancia en el poder.

Asimismo, la dinámica comunicacional «de mercado» ha estimulado el desprestigio de la función pública en democracia. El planteamiento de propuestas seriamente elaboradas por los actores políticos, pero que carezcan de espectacularidad, apenas son recogidas. Por el contrario, todo conflicto intra o interpartidario es resaltado, cuando no creado artificialmente, para llenar páginas de diarios o minutos de noticieros audiovisuales. Subyace, consciente o inconscientemente, la visión según la cual «los políticos» son factor de desorden, de conflicto, movidos por la ambición personal. La denuncia de los actos de corrupción se degradan por la confusión sistemática en un mismo plano de faltas a la moralidad pública con desórdenes administrativos, que deben ser igualmente sancionados. La deslegitimación de la democracia es un objetivo cotidiano de partidos como la UDI, que logra, por nuestras propias debilidades, obtener una fuerte resonancia.

La persistencia de formas institucionales no democráticas, así como la distorsión comunicacional hacia el género del espectáculo de la acción política, son problemas no resueltos de nuestra sociedad que irán encontrando solución en el tiempo en la medida en que su «energía democrática» sea recompuesta paso a paso.

Pero mencionaba que los sistemas democráticos enfrentan también desafíos universales, cuyos síntomas suelen ser, en palabras de Jorge Semprún, «el aumento de la abstención, que toca frecuentemente a las capas activas, urbanas, de la sociedad; el rechazo de la política y la desconsideración de los hombres públicos; la degradación de las relaciones entre el Estado y la sociedad; la extensión de los comportamientos clientelísticos o corporativos; la difusión de la corrupción y de la idea de que ésta es inevitable»(17).

La globalización de los mercados y el predominio cultural de la televisión son dos de los fenómenos modernos que seguirán incidiendo inevitablemente en el funcionamiento democrático.

Es un hecho que las economías de mercado interrelacionadas no pueden evitar las «crisis», «ciclos» o «reconversiones». Estas economías viven y se nutren de ellas: su método para crear dinamismo es brutalmente selectivo, injusto, destructor, sobrepasando con creces las capacidades de acción de corto plazo de los Estados democráticos más débiles, como el nuestro. Pero ese dinamismo crea también nuevas formas y oportunidades de acción igualitaria en cada tiempo de la historia. El sistema democrático -mejor que ningún otro- provee mecanismos y legitimidades capaces de provocar el cambio social mediante luchas transformadoras nutridas de tesón, persistencia y consistencia. Los escépticos de las capacidades de acción política y social en democracia y de los procesos continuos de cambio social se remiten a una visión mesiánica y catastrofista, que juzga todo avance parcial como insuficiente, visión que desemboca sistemáticamente en la impotencia política, que, a su vez, refuerza su propio escepticismo.

Nos enfrentamos también al paso del homo sapiens al homo videns, en la expresión de Giovanni Sartori, es decir la sustitución del hombre conocedor por el hombre vidente, que conoce lo que ve sin el saber: un ser humano cuya vida no está entrelazada por conceptos sino por imágenes y, por tanto, sólo por emociones»(18). El simple ver no ilustra en absoluto sobre cómo enmarcar problemas,

adecuarlos, afrontarlos y resolverlos, y más bien confunde respecto de los problemas falsos y los verdaderos. Como la democracia es una apertura de confianza hacia el homo sapiens, suficientemente capaz de crear y gestionar la vida en común, su debilitamiento pone en peligro la democracia. ¿Sabrá resistir la democracia a la invasión mediática? Creo que se debe desde el socialismo seguir siendo, aunque lúcidos sobre las dificultades del funcionamiento democrático, optimistas sobre su futuro. Al fin y al cabo la democracia es una de las más características y prolongadas creaciones de la voluntad humana por sobre cualquier resignación fatalista.

A. JOIGNANT: Una condición previa de posibilidad para este agotamiento del debate intelectual fue el definitivo fracaso de la opción revolucionaria como modalidad política de articulación de cambios a gran escala, con lo cual la clásica polémica entre reformismo y revolución perdió completo sentido. Es imprescindible convencerse que el socialismo pasa por la vía de las reformas, lo cual no significa que haya un solo tipo de reformismo. Si algún sentido tiene el socialismo, éste se inscribe en el moderno debate reformista sobre el que finalmente sabemos muy poco en Chile. En efecto, es un grosero error pensar que existe una sola vía posible para reformar el capitalismo contemporáneo (cuya naturaleza y dinámica también se han transformado), puesto que existen en términos muy gruesos a lo menos dos vertientes. La primera es la socialdemocracia en su vertiente más clásica, en torno a la cual tú y yo nos formamos en el contexto del exilio, y que es una vertiente en la que el Estado cumple un papel transformador y regulador muy protagónico. Pero también existe otra vertiente que es muy novedosa en el espacio socialista, encarnada en Inglaterra por Tony Blair bajo el llamativo calificativo no exento de un dejo de soberbia de «Tercera Vía», que es una retraducción liberal de lo que son las causas clásicas del socialismo del siglo XX. La pregunta es la siguiente: frente a esa dicotomía, ¿en qué lugar se posiciona el socialismo chileno? La respuesta no es fácil, habida cuenta que a mi parecer –más allá de la emoción y el flujo romántico de sentimientos que evoca la revolución y su iconografía en el imaginario del socialismo chileno-, este último no se encuentra en condiciones de situarse y justificarse en el presente en esta controversia entre revolución y reformismo. En tal sentido, el Partido Socialista de Chile no ha hecho aún un recorrido que va a tener que hacerlo igual, guste o no.

G. MARTNER: Nuestro proyecto de transformación debe efectivamente entenderse como un proceso continuo de reformas radicales, sin un punto de llegada preciso sino concebido con una larga acumulación en el tiempo de cambios sociales cuantitativos y cualitativos. En este sentido, nuestra tarea sigue siendo revolucionaria en los fines, pues se propone superar el capitalismo y construir una sociedad libre y justa, con los métodos y gradualidades de la democracia.

La tarea hoy día ya no es sólo el rescate de las mejores tradiciones del socialismo, la actualización de su pensamiento y desplegar una acción política contingente exitosa, sino que pasar a una nueva etapa que le permita al socialismo afirmar con claridad que su proyecto democrático e igualitario es la mejor alternativa presente y de futuro frente a la derecha regresiva y autoritaria. La primera tarea que viene es ganar a la derecha la batalla de las ideas, pues no nos olvidemos que las ideas de tipo neoliberal se han expandido, y a partir de ahí seguir haciendo retroceder el enorme poder que conserva la derecha en Chile.

Para tener éxito, y el del Partido Socialista ha sido importante pero insuficiente en su capacidad de lograr la adhesión popular requerida para seguir avanzando, se necesita de tres condiciones: un proyecto claro, un liderazgo que en la próxima etapa debe ser múltiple y de equipo y una gran transformación partidaria con un nuevo estilo capaz de poner al Partido Socialista en situación de interpretar en profundidad las aspiraciones de cambio de la sociedad.

Una acción limitada a lo contingente sin un proyecto de futuro le hace perder al socialismo su condición de ser un partido que nunca pierde el norte para producir una transformación radical y continua de la sociedad. Por lo tanto, el socialismo debe enriquecer su proyecto y abrirse a la sociedad para estar en el centro de las luchas sociales y políticas populares y ser la más clara y coherente alternativa de izquierda democrática a la derecha.

En Chile no se dirime día a día diferencias de «estilo» o de voluntad de hacer cosas entre los dos

bloques políticos, como se escucha desde la derecha, que sistemáticamente esconde su programa real. Tampoco se dirime como se «administra el modelo», como se escucha desde la izquierda extraparlamentaria. Están en juego cosas de otra índole.

Para la derecha chilena, porque se acomoda a los intereses que representa, la sociedad deseable es aquella en que el ideal humano debiera limitarse al individualismo, a la libertad de mercado y a mantener una democracia formal, en este último caso no por convicción sino porque para allá corren los tiempos de la historia, y de cualquier manera con una democracia «protegida» de las supuestas pasiones irresponsables de las mayorías.

Ya decía Anatole France en el siglo pasado que esta libertad es la libertad de dormir bajo los puentes para los que carecen de recursos. En su variante más oscura, la opción de derecha incluye la cínica actitud de que la suspensión de las libertades y la represión política, y en el mejor de los casos tolerar la existencia de democracias vigiladas, se justifica si está al servicio de la preservación de la supuesta racionalidad económica de mercado y de la libertad de emprender, que no hace más que esconder la defensa de sus privilegios.

La derecha todos los días trabaja para mantener un Estado mínimo, en nombre de la creación de riqueza que en algún momento se supone debiera hacer recaer sobre los trabajadores algunos de sus frutos. La derecha trabaja para que las legislaciones regulatorias sean débiles y permitir así que se mantengan y extiendan los mecanismos de dominación sobre los más débiles, además de someter a las generaciones futuras al empobrecimiento de su entorno natural por el privilegio del lucro de corto plazo por sobre la preservación del medio ambiente. Y el programa real de la derecha es disminuir el Estado (y por tanto los programas sociales), privatizar todas las empresas públicas (Codelco incluido), desregular los mercados (terminar con el salario mínimo, diluir la legislación laboral protectora y no permitir una regulación adecuada de las conductas monopólicas y de las empresas que proveen los servicios básicos) y restringir la tolerancia cultural y democrática.

Las democracias deben potenciar la prosperidad económica colectiva. Pero deben limitar el poder económico concentrado en unas pocas manos. Si no lo hacen, éste termina inevitablemente dominando al poder político de manera más o menos encubierta, más o menos desembozada. Sus intereses no son los de la mayoría ni de los de las generaciones futuras. O la democracia gobierna al mercado o el mercado gobierna a la democracia. Ese es el dilema en el que se desenvuelve Chile día a día. Luchar contra la derecha es seguir reivindicando la práctica política democrática como el único espacio legítimo para dirimir las opciones de sociedad y procesar los conflictos de interés, sin intervención del poder de las armas y del poder del dinero, sustentando el sistema político en la soberanía popular y en reglas del juego civilizadas.

Nuestro proyecto igualitario y libertario se traduce programáticamente en la construcción de un Estado Social de Derecho como condición inicial necesaria para la transformación de la sociedad en los próximos años. Esta construcción en diversos aspectos, ya está en curso desde 1990 y en ella se ha empeñado especialmente la presidencia de Ricardo Lagos. Si se observa lo que ha sido en estos tres años la agenda del Presidente Lagos, convendremos en que ha combinado el aspecto social, el económico, el institucional y el cultural en la dirección señalada. En especial, la agenda de reformas sociales del primer trienio de Lagos ha incluido establecer por primera vez en Chile el seguro de desempleo y mejorar la legislación laboral, reforzando el rol de los sindicatos (aunque no en toda la medida a la que aspirábamos); iniciar una gran reforma de la salud, cuya primera etapa será garantizar el acceso a la atención en los principales problemas de salud; reforzar la reforma de la educación ampliando la cobertura preescolar, el aprendizaje en la educación básica, la retención de los jóvenes en dificultades en la educación media y las ayudas estudiantiles y la acreditación en la educación superior y, por supuesto, reforzar la lucha contra la pobreza con el ambicioso programa Chile Solidario y con el programa Chile Barrio para terminar con los campamentos.

Se trata de lograr el éxito de la gestión del Presidente Lagos para proyectar la consolidación democrática y de las libertades y avanzar a la disminución sistemática de las desigualdades. Esto requiere de este Estado Social de Derecho fuerte y responsable(19), con servicios públicos

revalorizados en su orientación hacia las necesidades de los ciudadanos, de aumento de la eficacia, es decir de la priorización y programación de su actividad, y de la eficiencia, es decir de incrementar su capacidad para hacer más con lo que se tiene, con mecanismos generalizados de evaluación del desempeño y de rendición transparente de cuentas a los ciudadanos sobre su gestión.

El Estado Social de Derecho que prevalezca en Chile fruto de sucesivas reformas debe tener la característica de:

- ser el garante de la democracia y las libertades, de la soberanía nacional, del imperio de la ley, de la seguridad de las familias y de la no discriminación arbitraria, a través de la autoridad gubernamental y sus órganos de la defensa y de la seguridad interior, así como de los poderes judicial y legislativo, en interacción con la sociedad civil;
 - organizar solidariamente la cobertura de los riesgos sociales mayores (enfermedad, accidentes, cesantía, catástrofes);
 - hacerse cargo de proveer en amplia escala los bienes públicos de consumo colectivo que hagan posible tener una mejor calidad de vida, seguridad y acceso a la cultura en nuestras ciudades y en los espacios rurales;
 - transferir ingresos y capacidades de inserción social a los carentes de recursos, para asegurar una existencia digna a todos y cada uno de los ciudadanos;
 - fortalecer los derechos sindicales, la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en la empresa, incluso en su propiedad a través de fondos colectivos;
 - intervenir sobre el futuro para generar una sustancial igualdad de oportunidades y de resultados a través de la protección de la infancia, la educación, la promoción de la salud, el fomento de las actividades productivas y de la innovación y la preservación del medio ambiente para las nuevas generaciones;
 - hacerse cargo solidariamente de las generaciones pasivas, cuya significación en la sociedad se incrementa dada la evolución demográfica, a través de la reorganización de los regímenes de previsión.
- El compromiso con estas tareas es el que debe determinar el tamaño y rol del Estado y no abstracciones ideológicas.

Un Estado fuerte bien diseñado no es incompatible con la eficiencia y con empresas privadas autónomas, sujetas en nuestra perspectiva a una fuerte regulación de la relación salarial y con normas de restricción de las externalidades negativas de la producción sobre el uso del territorio y la polución del ambiente, operando en mercados regulados, elementos estos necesarios para preservar el dinamismo económico. En esta línea nosotros afirmamos que no sólo el socialismo moderno se preocupa de la protección social y de la redistribución sino también del desarrollo sustentable de las fuerzas productivas(20). Sin un Estado social, regulador y promotor del crecimiento, no es posible plantearse seriamente un desarrollo equitativo, sustentable y socialmente igualitario. Consolidada la democracia, estamos hoy en las etapas iniciales de la tarea de transformación social que nos convoca: queda todavía mucho por hacer. Esa es nuestra convocatoria mirando al futuro.

Del capitalismo a la sociedad justa: las bases del proyecto socialista moderno

AJOIGNANT: El Partido Socialista va a tener que «socialdemocratizarse» de una vez por todas, no sólo en su práctica efectiva sino también en su retórica y lenguaje con el cual piensa el mundo, porque no existen otras alternativas viables en el espacio del socialismo contemporáneo: el resto es poesía, nostalgia o vulgar ignorancia.

G.MARTNER: No estoy de acuerdo. La socialdemocracia tuvo la característica de emerger en Europa centrada en la protección social y la redistribución, sobre la base de un compromiso social fuerte entre los actores de la economía. Su origen primero se dio en la Alemania bismarckiana de fines del siglo 19, con los primeros esbozos de la seguridad social y luego se consagró en un contexto democrático en Suecia a principios del siglo 20, cuando el sindicalismo establece un compromiso con el empresariado en la situación de emergencia de post-guerra, a partir de la conquista de la mayoría electoral por el partido de la clase obrera, así como también en Noruega. Luego de la crisis del año 1929 y de la segunda guerra mundial estas modalidades de articulación social se expanden a

las economías industrializadas, a partir de la consolidación de una sociedad salarial de tipo «fordista», en que se combinan virtuosamente las condiciones de producción y de consumo: los salarios de los obreros de Ford debían permitir comprar los autos producidos por Ford.

En diversos países europeos se genera una relación de compromiso social que permite en alguna medida la centralización de la discusión sobre la repartición del excedente económico en base a procesos económicos relativamente regulares y a una regulación macroeconómica intervencionista de inspiración keynesiana. La socialdemocracia europea y el New Deal norteamericano se estructuran y tienen condiciones de existencia en sociedades de relación salarial muy extendida. Poco tiene que ver esa evolución con la experimentada en América Latina, ya sea en el siglo XX con sus procesos de sustitución de importaciones y de ampliación de mercados internos o en la etapa actual de fuerte impacto de la globalización económica y de emergencia de una orientación exportadora. El porcentaje de obreros es reducido y las nuestras han sido economías de «heterogeneidad estructural», en palabras de Aníbal Pinto, con gran peso del mundo campesino y de las relaciones de producción específicas del ámbito agrario y rural, así como de la informalidad urbana y del autoempleo.

En nuestra sociedad nunca ha existido, creo yo, la base material para que funcione una socialdemocracia clásica. Se trata francamente de un contexto muy distinto, donde conceptualmente me cuesta mucho situarme como si estuviéramos en la etapa fordista de las sociedades salariales industrializadas.

Con mayor razón aún si esa etapa fordista ha concluido a partir de los años 1980 en los países centrales, dando lugar a la emergencia de sociedades post-industriales.

Por lo tanto, debo decirte que el proyecto socialista en Chile creo que cometería un grave error si se identificara con la socialdemocracia clásica (que ha tenido en todo caso grandes y notables resultados económicos y sociales, contrariamente a lo que sostienen los neoliberales) por las razones de no pertinencia señaladas.

También sería un error identificarse con el modernismo socialdemócrata a la Blair, que busca reformar los sistemas de bienestar y los mercados de trabajo en un sentido más liberal frente a los desafíos de competitividad que plantea la economía globalizada. Ahí uno puede tener una opinión, y yo la tengo, respecto a lo que esas definiciones implican en el mundo desarrollado, pero lisa y llanamente poco tienen que ver con nuestras realidades, en donde el tema no es como hacer funcionar mejor el Estado de Bienestar, sino como construir las bases para sistemas de protección social y de igualdad de oportunidades dignos de ese nombre, en una condición de marginalidad económica frente a los grandes actores de la globalización.

Insisto que esta reflexión no excluye valorar la experiencia histórica socialdemócrata, contrariamente a lo que se evidencia en la reciente polémica local entre Brunner y Moulián, que comparten una común distancia ideologizada hacia la socialdemocracia: el uno desde el liberalismo puro y duro promotor del Estado mínimo y el mercado máximo y el otro desde el juicio ortodoxo de la socialdemocracia como cooptación de la clase obrera por el capitalismo(21) .

¿Qué es lo pertinente para Chile? Desarrollar en nuestras particulares condiciones una visión de izquierda que construya una democracia crecientemente participativa, que reafirme que hay un rol decisivo para los poderes públicos en la vida económica para organizar la cohesión de la vida colectiva y para la autoorganización de la sociedad civil, introduciendo cada vez más fuertes mecanismos de distribución socializada de ingresos al margen del mercado en condiciones de una economía desigual, heterogénea e inestable.

Si se trabaja sólo en la articulación social a través de la relación contractual capital-trabajo asalariado, se dejaría fuera de modo muy sustancial a lo que podríamos llamar los mundos de la exclusión económica, social y cultural, que es uno de los desafíos principales de nuestra sociedad, y por tanto del socialismo chileno y de su proyecto de lucha contra las desigualdades, las discriminaciones y la intolerancia. La nuestra es una plataforma -el Estado Social de Derecho- de integración de lo no articulado a través de la conquista de nuevos derechos económicos, sociales, culturales y políticos que abra un amplio campo de intervención e influencia al movimiento sindical y a los diversos

movimientos populares y que fortalezca el ejercicio de los derechos por todos los ciudadanos.

A. JOIGNANT: Mi postura es algo diferente a la tuya respecto de lo que es la socialdemocracia tanto en su versión clásica como revisada (conocida como «Tercera Vía»), así como en lo que concierne su congruencia (o incongruencia) con países periféricos como Chile (aún cuando el significado actual de lo «periférico» no es el mismo que el de hace tres décadas). Es cierto que las condiciones materiales de una región a otra, por ejemplo entre Europa y América Latina, son muy distintas, y esas diferencias inciden en los distintos grados y modos de recepción y aceptación política y social de la socialdemocracia. Pero también es cierto, conviene no olvidarlo, que la propia socialdemocracia europea clásica experimentó profundas transformaciones como consecuencia de la alteración de ciertas variables económicas «pesadas» en un sentido no muy distinto al nuestro. En efecto, la socialdemocracia clásica sólo tiene completo sentido en condiciones de pleno empleo, lo cual —al igual que en América Latina— es hoy irreproducible. Pero también es irreproducible, tanto en Europa como en América Latina, la fuerte articulación entre un Estado Benefactor musculoso, un sindicalismo poderoso y expresiones partidarias potentes, a imagen y semejanza de lo que alguna vez fue el SPD alemán. Es demasiado conocida la crisis fiscal del welfare state, así como la crisis misional del sindicalismo reivindicativo clásico, en tanto pilares esenciales de la socialdemocracia cuya trizadura se aprecia desde hace décadas. Es así como la potencia de estos dos pilares (Estado y sindicato) ya no se observa en Alemania(22) . Como tampoco se aprecia esa estrecha y singular vinculación entre sindicato y partido en Inglaterra, al punto que es precisamente la ruptura de la imbricación entre el Labour y los sindicatos lo que explica y origina el liderazgo renovador de Blair. Para qué hablar de la situación chilena, caracterizada por un Estado débil, un sindicalismo escuálido y partidos famélicos desde el punto de vista programático. Pero me parece importante destacar una coordenada adicional del problema cuyo impacto ha sido tremendo en la metamorfosis de la socialdemocracia contemporánea: me refiero al lugar y al significado del trabajo en sociedades diferenciadas, cuyas transformaciones vuelven problemática la noción de sociedad asalariada. Exceptuando el caso de algunos autores que afirman un tanto livianamente que estaríamos asistiendo a un cambio civilizacional marcado por la desaparición del trabajo(23), existen otros autores — fundamentalmente sociólogos- que prefieren destacar las mutaciones del trabajo y sus consecuencias sociales a escala individual y colectiva, a continuación de transformaciones profundas aún en curso del propio capitalismo y de cómo éste se reinventa(24). En tal sentido, los trabajos de Pierre Bourdieu(25), y sobre todo de Robert Castel(26), son importantes intelectual y políticamente, en la medida en que sociedades «capitalistas» desarrolladas o periféricas no sólo son generadoras de desempleo masivo y duradero (lo cual basta para erigir en principio de acción política la idea socialista de «protección social»), sino también de exclusión extendida que toma la forma de la invalidación social crecientemente permanente, engendrando así poblaciones de supernumerarios, lo cual equivale a decir que existen personas que literalmente sobran. En tales condiciones, la socialdemocracia ya no sólo tiene que ver con protecciones, sino también con políticas de integración destinadas a grupos sociales enteros, los cuales constituyen un verdadero «proletariado de nuevo tipo», en tanto se trata de una población que no dispone de los recursos cognitivos y culturales, además de condiciones económicas y sociales, para integrarse a sociedades competitivas que generan desintegración y desigualdad: las sociedades modernas pueden ofrecer al mismo tiempo el rostro afrodisíaco del placer asociado a la posesión de bienes y objetos, pero también el lado oscuro y rudo de la frustración y de la exclusión.

GMARTNER: Conuerdo contigo en que las sociedades centrales, globalización mediante, empiezan a parecerse más que antes, guardando todas las proporciones, a nuestras realidades latinoamericanas. Tienen rasgos más parecidos precisamente por la precarización del trabajo, la condición asalariada más difusa y ya no estructurada en grandes unidades productivas y en procesos regulares, un acortamiento de los ciclos de los productos, la fragmentación del trabajo y la reaparición de fenómenos de exclusión dura, que habían disminuido sustancialmente en el siglo XX, especialmente en la posguerra, junto al renovado fenómeno de masiva inmigración ilegal.

Por lo tanto, aparecen en el debate problemáticas más cercanas, aunque para los efectos de lo que estamos debatiendo aquí permanece la diferencia sideral entre los Estados de Bienestar de las grandes economías post-industriales y su existencia precaria en las economías periféricas de América Latina. Me remito, primero, a autores como Pierre Ronsanvallon, un especialista de los Estados de Bienestar, que sostiene que la viabilidad de su reproducción sin modificaciones en el tiempo es difícil, debido a lo que él llama la disminución del espacio para la sociedad aseguradora. Emerge en las sociedades post-industriales el desafío de establecer una relación más directa y transparente entre Estado y sociedad a propósito de los derechos sociales de los ciudadanos en el nuevo contexto, que se traduce en un debate en Europa sobre la constitución de mecanismos de ingreso social (como el Ingreso Mínimo de Inserción francés, distribuido a un millón de personas y financiado con un impuesto a las grandes fortunas), en complemento de las grandes negociaciones colectivas y de los procesos centralizados de articulación de los ingresos salariales con la competitividad productiva, y en nuevas propuestas para enfrentar los fenómenos de exclusión».

Por su parte, Ulrich Beck postula que la respuesta a la incapacidad del capitalismo moderno de producir pleno empleo debe tener como respuesta la creación de un espacio para el trabajo ciudadanamente constituido, al margen de las empresas con fines de lucro. Se sigue aquí la línea de reflexión de André Gorz, que hace ya tiempo venía trabajando la temática de lo que Rifkin ha denominado el «fin del trabajo», que mencionas en tu pregunta, en el sentido que las izquierdas no deben centrar sólo su atención en la producción y el «trabajo heterónomo», sino que mucho más en generar socialmente espacios para el uso autónomo del tiempo propio más allá de la empresa, pasando de la aspiración al pleno empleo a la aspiración de «plena actividad».

Esta es una hipótesis que está en discusión, en el sentido de si acaso el capitalismo moderno va a generar o no la exclusión permanente del acceso al empleo mercantil de una parte cada vez más significativa de la fuerza de trabajo. En el período del ciclo económico alto que se vivió en la década de los noventa en Estados Unidos, la tasa de desempleo bajó sustancialmente, con una corriente de generación de empleos de servicios de carácter precario (los «empleos basura»), pero empleos al fin, mientras en Europa el desempleo ha sido mayor, con interesantes excepciones.

A. JOIGNANT: No todos los «empleos basura» son equivalentes entre sí de un país a otro: los nuestros son incomparablemente más precarios que en Europa...

G. MARTNER: La diferencia es que ancestralmente una parte sustancial del empleo ha sido precario en Chile. Ahí está, sin ir más lejos, el trabajo de temporada, que abarca a cerca del 10% de la fuerza de trabajo, y el autoempleo en actividades informales, que abarca todavía más, mientras el trabajo asalariado contractual se desenvuelve con escaso respeto a una legislación laboral que es a su vez débil, mientras el empleo público normado estatutariamente es sustancialmente menor al de las sociedades post-industriales.

Pero no dejemos de lado tu juicio sobre la «crisis fiscal» del Estado de Bienestar. Hace 30 años atrás el Estado de Bienestar no quebró en Europa, como algunos afirman. Para entendernos bien respecto de qué estamos hablando, precisemos que el Estado de Bienestar incluye los seguros públicos de vejez-invalidez, enfermedad, desempleo transitorio y subsidios a las familias y a las personas necesitadas, lo que suma hoy del orden de 30% del PIB en algunos países europeos como Alemania (recordemos que por su parte en EE.UU. y Japón el total del gasto público es de esa magnitud). Un volumen de gastos de esta importancia tiene un impacto económico enorme, especialmente cuando la coyuntura del empleo se deteriora. Una crisis financiera del sistema de seguridad social emergió efectivamente después de 1974 en Europa, pues los gastos sociales, en particular los de salud, siguieron creciendo a los ritmos anteriores de 7-8% al año, mientras los ingresos se ajustaron al crecimiento de 1-3% al año que se instauró desde la crisis de 1974 y que cerró el ciclo de oro del capitalismo occidental de post-guerra. Esta brecha se financió con un incremento de los aportes obligatorios (los que pasaron a representar entre 1965 y 1990 de un 4.9% a un 9.3% del PIB en los países de la OCDE(28)). De quiebra, para que hablemos claro, nada. Si un mayor peso económico del Estado de Bienestar y de sus necesidades de financiamiento, imponiendo nuevos desafíos a la

política pública.

El Estado de Bienestar europeo no fue desmontado ni siquiera en la Inglaterra de la Thatcher (el sistema de salud sigue siendo allí de los más estatales que existen en la tierra) sino objeto de adaptaciones diversas(29). Más aún, en los años 1980 los socialistas gobernaron en Francia y España después de mucho tiempo, y en ambos casos reformaron el Estado de Bienestar «al alza», es decir con un aumento del peso del Estado y de los gastos sociales en el PIB (estos pasaron entre 1980 y 1990 de 25% a 28% en Francia y de 18% a 21% en España). Esto también ocurrió en otros países con gobiernos y coaliciones de diversos signos. La recuperación de las tasas de crecimiento en Europa a fines de los 90 tuvo lugar por razones distintas a un inexistente desmontaje del Estado de Bienestar, que sufrió importantes adaptaciones, y se explica en especial por una buena combinación de la política monetaria y fiscal.

En todo caso, la evidencia no demuestra que los Estados de bienestar atenten contra el crecimiento. El PIB crece de modo relativamente similar en los países desarrollados con alto gasto público y en los con menor gasto. Y el bienestar es mayor, especialmente por la disposición de un mayor volumen de bienes públicos y de transferencias de seguridad social a los más pobres. Especial mención merecen los Estados de Bienestar nórdicos, con impuestos a la renta y a las utilidades especialmente elevados —usualmente considerados penalizadores del crecimiento- y que financian un alto gasto público y d seguridad social. Este gasto asegura una menor desigualdad sin perjudicar el crecimiento.

El estudio más reciente que conozco en materia de tributos y gastos e las economías industrializadas revela que las con mayor crecimiento son la que tienen tributos menos desincentivadores y más gastos públicos qu contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y capital humano(30), y no los de Estados de menor peso en la economía. Es un tema de estructura más que de nivel. Incluso la aplicación de tributos desincentivadores alto impuesto a la renta y al patrimonio) no se traduce según las cifras de este ,estudio en un impacto en crecimiento relevante.

Desempeño Económico de los Estados de Bienestar

	PIB /Habitante	Gasto Gobierno/PIB	Impuesto a la renta y las utilidades/PIB	Seguridad Social/PIB	Crecimiento PIB/Habitante	Desempleo
	2001	2001	2001	2000 1975-	2000	2000
Estados de Bienestar Nórdicos						
Suecia	25,600	52	22	18	1.4	5.9
Dinamarca	29,900	51	29	17	1.6	4.6
Finlandia	25,900	44	19	16	2.0	9.8
Noruega	31,100	41	21	16	2.6	3.5
Promedio	28,125	47	23	17	1.9	6.0
Otros Estados de Bienestar						
Austria	27,800	50	14	19	2	3,6
Francia	25,100	49	12	18	1,7	9,9
Bélgica	26,900	47	18	15	1,9	11,0
Italia	26,100	46	15	17	2,1	11,5
Alemania	26,500	46	10	19	1,9	8,1
Países Bajos	28,600	42	11	12	1,8	3,3
Canadá	28,800	38	17	12	1,5	6,8
Reino Unido	25,400	38	15	13	2	5,5
Promedio	26,900	45	14	16	1,9	7,5
Estados de bienestar liberales						
Japón	26,500	37	9	10	2,7	4,7
Nueva Zelandia	20,700	37	20	16	0,8	6
Suiza	31,000	34	13	12	1	2,6
Australia	26,600	33	18	9	1,9	6,2
EE.UU.	36,500	31	15	13	2	4
Irlanda	31,400	30	13	8	4	4,3
Promedio	28,783	33	15	11	2,1	4,6
Chile	9,417	25	4	8	4,1	8,0

Fuentes:A partir de OCDE in Figures, 2003, e Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD, 2002. Para Chile, Dirección de Presupuestos, PNUD y CEPAL.

	Relación ingresos 20% más rico -20% más pobre 1992-97	Desempeño Social de los Estados de Bienestar			
		% bajo el 50% del ingreso medio 1987-98	Tasa de matrícula 1999	Gasto Público en educación/PIB 1999	Gasto Público En salud/PIB 1999
Estados de Bienestar Nórdicos					
Suecia	3,6	6,6	101	8,3	6,6
Dinamarca	3,6	9,2	106	8,1	6,9
Finlandia	3,6	5,1	103	7,5	5,2
Noruega	3,7	6,9	97	7,7	7,0
Promedio	3,6	7,0	102	7,9	6,4
Otros Estados de Bienestar					
Austria	5,5	10,6	90	5,4	5,9
Francia	5,6	8	94	6,0	7,3
Belgica	4,5	8,2	109	3,1	6,3
Italia	4,2	14,2	84	4,9	5,6
Alemania	4,7	7,5	94	4,8	7,9
Países Bajos	5,5	8,1	102	5,1	6,0
Canadá	5,2	12,8	97	6,9	6,6
Reino Unido	7,1	13,4	106	5,3	5,8
Promedio	5,3	10,4	97,0	5,2	6,4
Estados de bienestar liberales					
Japón	3,4	11,8	82	3,6	5,7
Nueva Zelandia	99	7,3	6,3		
Suiza	5,8	9,3	84	5,4	7,6
Australia	7,0	14,3	116	5,5	6,0
EE.UU.	9,0	16,9	95	5,4	5,7
Irlanda	6,4	11,1	91	6,0	5,2
Promedio	6,3	12,7	95	5,5	6,1
Chile	18,6		78	3,6	2,7

Fuente: A partir de OCDE in Figures, 2003, y PNUD, 2002. Para Chile, Dirección de Presupuestos, PNUD y CEPAL.

Las economías mixtas socialdemócratas se defienden entonces bastante bien desde el lado que se las mire. Una clasificación de los Estados de Bienestar que he realizado para mis alumnos en la Universidad -distinguiendo los nórdicos, los otros europeos con alto gasto público y los liberales, con gasto público más bajo- indica que los de tipo nórdico y europeo tienen un muy alto gasto público, un desempeño económico en los últimos 25 años que es similar a los demás desarrollados, con una tasa de desempleo comparable, mayor gasto público en educación, más altas transferencias de seguridad social y diferencias de ingresos sustancialmente menores que aquellos países de capitalismo liberal. Los Estados de bienestar nórdicos -de sello socialdemócrata clásico- se distinguen de los otros Estados de bienestar europeos y de los de tipo liberal por el mayor peso de la tributación directa, con una muy alta incidencia de los impuestos a la renta de las personas y a las utilidades de las empresas en su estructura tributaria, y las menores desigualdades de ingreso que exhiben, sin que se encuentre evidencia alguna de un desempeño económico menos dinámico.

Un reciente estudio sobre las causas históricas de la divergencia de crecimiento tan significativa en el largo plazo entre América del Norte y del Sur, cuyos puntos de partida al momento de independizarse de los respectivos imperios no eran a priori muy diferentes, concluye que «aunque se han propuesto muchas explicaciones, las diferencias sustanciales en los grados de desigualdad de riqueza, capital humano y poder político, que tuvieron como raíz inicial las dotaciones de factores de las respectivas colonias pero que persistieron en el tiempo, parecen ser altamente relevantes» para explicar el mejor comportamiento económico de América del Norte, mucho más que características geográficas, climáticas o culturales(31). Por su parte, los países del sudeste asiáticos lograron alcanzar un alto nivel de desarrollo económico en los 30 años que siguieron a su despegue a inicios de los años 60, con variadas intervenciones del Estado que acompañaron ese proceso y una buena distribución del ingreso. La distribución regresiva del ingreso no ayuda al crecimiento, sino que lo desfavorece,

aunque la derecha insista en su teoría del chorreo, su defensa del Estado mínimo y su justificación de las desigualdades.

La comparación internacional, a su vez, demuestra que no existe un modelo único ganador en la mantención de bajas tasas de desempleo y de un alto crecimiento y bienestar. En materia de nivel de tributos y gasto público, subrayemos que Suecia, con un gasto público superior al 50% del PIB, el más alto del mundo, y muy amplias transferencias de seguridad social financiadas con una tasa marginal de impuesto a la renta de 53%, es no sólo una de las economías más ricas del mundo en términos de PIB por habitante (25.600 dólares al año), sino que creció en los últimos años más que el promedio de los países industrializados y que muchos países de gobiernos más pequeños que cobran menos impuestos. Por un lado la ideología liberal, por el otro los hechos.

Diversas mediciones revelan también que las variables institucionales (protecciones laborales, salario mínimo, centralización de negociaciones) no tienen el rol esencial que les atribuye la derecha respecto al nivel de desempleo(32).

Los estudios recientes revelan que la regulación estatal que protege el empleo tiene poco impacto en el nivel de desempleo, aunque sí incide en una menor velocidad de rotación de la mano de obra y una mayor duración promedio del desempleo. La disminución de las prestaciones de los seguros de desempleo tiene un impacto débil sobre el nivel de desempleo. La experiencia muestra que sistemas generosos incluso han podido cohabitar con niveles de desempleo débiles, particularmente en Europa del Norte. Los resultados empíricos tampoco establecen una relación directa entre sindicalización y desempleo. Los sindicatos juegan en cambio un rol nivelador en materia de dispersión de salarios. En cuanto al salario mínimo, la evidencia tampoco arroja conclusiones definitivas y en diversos casos altos salarios mínimos conviven con bajas tasas de desempleo. En suma, si bien las regulaciones estatales pueden jugar un rol en la explicación del nivel y evolución del desempleo, éste parece tan débil que no llega verdaderamente a explicar las diferencias entre países ni las razones de éxito de algunos. Nuevamente, por una lado la ideología liberal, por el otro los hechos.

En materia de desempleo son en definitiva los shocks macroeconómicos y el reparto social del trabajo lo que explica su evolución. Las instituciones juegan un papel en el tipo de reacción de las economías a los shocks, en vez de explicar un determinado nivel de desempleo, lo que es una buena noticia para las instituciones. Después de todo estas últimas mejoran el bienestar y son además el reflejo de un contrato social que es fruto de la democracia.

Mi línea argumental es, como observarás, una que mantiene la afirmación de que las diferencias estructurales de Chile y América Latina con las grandes economías post-industriales no hacen posible trasladar el modelo socialdemócrata, pero que a su vez este tiene grandes méritos y nos entrega enseñanzas útiles, especialmente frente a las visiones neoliberales que tanta audiencia han conseguido en Chile. La oposición, y a veces algunos concertacionistas que logran gran eco en los medios de derecha, insiste en que nuestra economía se encuentra frenada por un problema de expectativas vinculadas a las legislaciones que el Presidente Lagos ha enviado al Parlamento: la lucha contra la evasión tributaria, el seguro de desempleo y la ampliación de la negociación colectiva, la reforma de la salud y el programa Chile Solidario. Se sostiene que cobrar los impuestos, incrementarlos para financiar la reforma de salud y encarecer la contratación (de modo moderado en el caso del seguro de desempleo y como posibilidad virtual si se fortalecen los sindicatos) serían factores de detención de muchas decisiones de inversión y de incertidumbre.

Este es un discurso repetitivo, que sólo se adapta a las coyunturas pero que no cambia con ellas. La receta es siempre la misma: liberalizar mercados, vender activos estatales y bajar el gasto público, ajena a toda circunstancia de tiempo y lugar. Esta visión, contrastada con los hechos, hace emerger la distancia, por no decir el abismo, que separa la certeza de las afirmaciones y la fragilidad de la base empírica que las funda, tanto en el caso de Chile como de otras experiencias en el mundo.

En Chile entre 1950 y 1970 el PIB por habitante creció al 1,9% anual (de acuerdo a la CEPAL), cifra igual a la de la dictadura entre 1974 y 1989 (el 70-73 es harina de otro costal, pues la economía se desequilibró en un contexto de conflicto social y político agudo). Luego en democracia estas cifras

se más que duplicaron con cambios importantes en el llamado «modelo», incluyendo un aumento del gasto público de 21,5% del PIB en 1990 a 25,4% en 2001, incrementos de impuestos y cambios, aunque insuficientes, en la legislación laboral favorable al trabajador.

La década de los 90 fue la de mayor crecimiento en su historia contemporánea: entre 1990 y 1998, hasta la crisis asiática, el crecimiento fue superior a un 7% al año. Los impuestos no sólo no bajaron sino que subieron y crecieron más que la producción, pasando de un 14,4% a un 17,8% del PIB. El peso del impuesto a la renta, el más impugnado por la derecha, aumentó su proporción de un 2,6% en 1990 a un 4,3% del PIB en 1998. A la vez, se duplicó el costo del despido, aumentándose el tope de pago de indemnizaciones, y se incrementó sustancialmente el salario mínimo y los salarios medios, sin que ello impidiera la creación de cerca de un millón de empleos. Por un lado la ideología liberal, por el otro los hechos. Desde 1999 la economía ha sufrido fuertes embates externos y la recuperación de las altas tasas de crecimiento y del empleo ha sido difícil, pero ya la economía se encuentra en 2003 creando empleos a un ritmo de más de 150 mil al año.

Tiene por tanto razón el Presidente Lagos cuando sostiene que el cumplimiento de las normas tributarias, una mayor protección a los cesantes y un mayor equilibrio en las relaciones laborales no atentan contra el crecimiento. Al revés, el cumplimiento de la ley y una mayor cohesión social serán un factor de disminución de las incertidumbres y de incremento de la confianza, con consecuencias positivas para el crecimiento. Aunque los dogmáticos liberales digan lo contrario.

Ahora bien, este proceso está inmerso en una economía inestable y una sociedad fragmentada. La nuestra es una economía mucho más inestable que las economías centrales, tanto en sus ciclos de crecimiento (que han llegado a superar el 10%, cifra que no se ve en absoluto en Estados Unidos, Europa ni en Japón) como en sus ciclos de crisis, con recesiones más profundas que las que se producen en las grandes economías post-industriales. Somos una economía inestable que agrava los riesgos sociales que son propios de todas las sociedades modernas. Por lo tanto se requiere de políticas públicas mucho más fuertes y anticíclicas e inevitablemente más articuladas con la promoción del ahorro, la inversión y el crecimiento, como base material indispensable para las políticas igualitarias, que el de los sistemas de protección clásicos construidos en el siglo 20, cuyo nervio era la puesta en concordancia de condiciones regulares en los flujos de producción y de consumo.

En conclusión, el socialismo democrático chileno, para bien y para mal, opera en una realidad diversa a la de las grandes sociedades capitalistas salariales y tiene que seguir articulando paso a paso su proyecto propio y autónomo. Este proyecto de Estado social específicamente chileno y latinoamericano, debe ser construido creativamente por la actual generación de socialistas y progresistas, que ya están manos a la obra en Chile, desde hace poco en Brasil y Argentina y dentro de poco en Uruguay. En nuestro caso la transformación de lo existente, con políticas públicas igualitarias alternativas al neoliberalismo y su funcionamiento espontáneo de los mercados que agrava las desigualdades, debe entonces construirse sobre bases materiales más fragmentadas e inestables que las prevalecientes en las sociedades post-industriales, aunque siempre con mucho que aprender del mundo europeo, norteamericano, anglosajón y del Asia.

A. JOIGNANT: Abordemos a Tony Blair, líder del laborismo británico, quien se encuentra en el centro de la polémica socialista europea con su controvertida «Tercera Vía», la que en mi opinión — y no obstante el interés que despiertan algunas ideas— se encuentra en el origen de una ilusión política no muy distinta a la ilusión óptica: la sensación de éxito electoral duradero a continuación de una renovación programática que se encontraría dentro de los límites culturales del socialismo. Es esa sospecha que recae sobre la «tercera vía» lo que explica las dudas y resquemores del socialismo europeo continental, especialmente en Francia, España y Alemania, que lleva a preguntarse qué hay de socialismo en la «tercera vía». Hace algunos años atrás, en un foro en la Universidad de Chile que me tocó moderar entre varios representantes de las principales tendencias del socialismo chileno (Germán Correa, Gonzalo Martner, Carlos Ominami) y que coincidía con el despegue de Blair, recordé una temprana y feroz afirmación del líder del laborismo: el principal problema político contemporáneo no es la diferencia entre izquierda y derecha, sino entre lo erróneo y lo correcto, lo

cual constituye una expresión política desenfadada de las tesis más sutiles elaboradas por Anthony Giddens(33), las que se caracterizan por retraducir de modo original algunos aspectos del programa de investigación científica en programa político, con todas las deformaciones que dicha retraducción supone(34). ¿Tiene sentido una distinción como la que acabo de señalar, que a mi gusto disimula una voluntad tecnocrática de tratamiento del infortunio social fuera de toda consideración política?

G. MARTNER: No conozco esa aseveración de Blair, pero ya nos referimos a las diferencias en los valores fundantes de izquierdas y derechas. Esto de lo erróneo y lo incorrecto, bueno, siempre será mejor hacer lo correcto, pero ¿en función de qué parámetros? Los dilemas de la política global contemporánea no son sólo sobre eficacia mayor o menor, sino sobre lo que Góran Therborn llama los tres parámetros decisivos «en el espacio social de la política moderna»: las relaciones que anudan los Estados, los mercados y las conformaciones sociales. A estos parámetros se agrega la dinámica de la «geopolítica global», es decir el poder militar y diplomático entre Estados(35) Hacer abstracción de la lucha de intereses en juego, y procurar situarse frente a ellos en nombre de una gestión tecnocrática de las cosas, no me parece un método moderno ni «correcto» de aproximación a los dilemas de la vida colectiva contemporánea.

Incluso en lo económico se mantiene un debate académico y político muy extenso, a lo que me he referido ampliamente en mi texto sobre el rol del Estado en la economía(36). Una somera lectura del libro de Stiglitz sobre la globalización(37), reciente premio Nobel de economía, permite hacerse una idea de la magnitud de esos debates, que superan con amplitud una problemática tecnocrática sobre lo «erróneo y lo incorrecto», sobre hacer bien o mal las cosas. Ahora, respecto a los intereses colectivos que uno defiende, los del mundo del trabajo y de la cultura en lucha contra la sociedad de mercado, está muy bien representarlos con eficacia.

En todo caso, desde la izquierda no se piensa lo mismo que desde la derecha en materia de políticas económicas y de políticas públicas. Por ejemplo, desde la izquierda se sostiene que la política fiscal tiene un rol activo que jugar en la estabilización económica. En Chile la política del superávit estructural se inspira precisamente en ese rol específico de la política fiscal, mientras la derecha chilena es contraria a la idea de un rol anticíclico para la política fiscal. Esto tiene antecedentes en la teoría económica y especialmente en la teoría de las expectativas racionales, que le atribuye al mercado reacciones perfectamente anticipatorias que anulan a la política fiscal y en consecuencia hay allí un debate que permanece. Hay una visión que es de derecha en materia macroeconómica, pero más importante que eso es que en el corazón de la política fiscal está como se financian los gastos públicos y a qué se dedican esos gastos públicos, y ahí manifiestamente hay una distinción clara entre las visiones de izquierda y las de derecha. La izquierda sigue considerando el rol de los servicios públicos como esencial para la cohesión de la sociedad y en la derecha está la postura de la disminución sistemática de los servicios públicos sociales, que entiende como lastres para la economía que generarían supuestamente dependencias indebidas. En la derecha, a su vez, permanece la crítica a los derechos laborales y a la regulación ambiental (38).

La lógica mercantil que defiende la derecha consiste en limitar al máximo las inversiones colectivas con rentabilidad a largo plazo, y que benefician al conjunto de la sociedad, y privilegiar en cambio las actividades directa e inmediatamente intercambiables. Estas inversiones sólo pueden ser asumidas por los poderes públicos, jerarquizándolas de acuerdo a la importancia para la cohesión y productividad de la sociedad de cada una de ellas.

Entonces, la antinomia izquierda-derecha no sólo se remite a los valores fundantes de la vida social sino también a la articulación en el tiempo de sus condiciones de existencia.

Debo comentarte que, a mi juicio, Anthony Giddens, como intelectual inspirador de Blair, es un autor mucho más complejo e interesante en su formulación y bastante más a la izquierda de lo que se le atribuye en nuestros precarios espacios nacionales de debate. Una lectura mínimamente atenta a los libros de Giddens lo pondría en el debate nacional bien a la izquierda de nuestros blairistas nacionales, que sólo destacan sus posturas llamémoslas «amigables con el mercado». Por ejemplo, la afirmación de Giddens de que la temática de la izquierda no es sólo la igualdad de oportunidades

sino que también la igualdad de resultados, puesto que la sola igualdad de oportunidades a la larga selecciona y polariza a los más fuertes y a los más débiles y reproduce desigualdad en el largo plazo, no es nunca comentada. Y señala Giddens que la izquierda no puede despreocuparse de la igualdad de resultados, no puede apostar sólo a la igualdad de oportunidades. Esa es una idea fuerte y poderosa que en Chile merece ser puesta en debate.

A. JOIGNANT: Permíteme volver sobre Giddens, de quien tengo profundo respeto intelectual junto a no pocas sospechas políticas, especialmente sobre el lugar y la función que le incumbe a los derechos en las sociedades contemporáneas. Contrariando nuestros hábitos políticos y nuestros reflejos intelectuales y morales, Giddens ha producido una obra política importante que relativiza los derechos (en distintos ámbitos y espacios: salud, vivienda, educación son los más solicitados), frente a deberes que fueron olvidados por el socialismo. Es sobre todo en materia de salud en donde esta relativización ha generado fuerte controversia, puesto que si bien los individuos poseen derecho a la atención de salud, también enfrentan deberes en el uso responsable de los sistemas públicos, lo cual es un eco político a la crisis fiscal del Estado Benefactor, el que se habría instituido casi exclusivamente según la lógica de derechos. Esta no es una controversia política como cualquier otra, ya que involucra dimensiones éticas evidentes. Pero se trata de una controversia que ha logrado penetrar en universos nacionales aparentemente tan impermeables como el francés, en donde la seguridad social es un patrimonio y una conquista experimentada como tal, pero cuya crisis de financiamiento ha abierto un debate sobre el incivismo de los ciudadanos franceses en el uso del sistema. Es inútil insistir que esta controversia sobre los derechos y deberes termina produciendo un enorme efecto perverso: la pérdida de centralidad precisamente...de los derechos, lo cual también debe ser tomado en consideración por las izquierdas, las que han fundado sus luchas por derechos universales, haciendo caso omiso de los deberes, pero también de ese nuevo ámbito de derechos particulares en virtud de reivindicaciones destinadas a generar reconocimiento de diferencias (sexuales, de género, de lengua...).

G. MARTNER: Coincido contigo. Pero no soslayemos que hay en Giddens un aspecto estimulante y desafiante intelectualmente, mientras hace las afirmaciones que mencioné sobre igualdad de oportunidades junto a igualdad de resultados y sobre la prevalencia del principio de justicia social en la esfera política, económica y en la sociedad civil. Giddens ha logrado una gran audiencia al abordar muchos de los verdaderos problemas contemporáneos, pero al mismo tiempo con importantes contradicciones. La apertura al centro político la entiende junto a políticas radicales, lo que tiene mucho de contradicción en los términos, aunque en realidad subyace el viejo modelo de partido «atrápalo todo», cuyo rendimiento electoral puede ser tan exitoso en algunas circunstancias como los callejones sin salida a los que lleva (como ha ocurrido con algunos gobiernos socialistas y socialdemócratas en Europa), especialmente en la pérdida de representación política del mundo del trabajo y su consecuencia, la ineficacia electoral a largo plazo y la confusión sobre el sentido de la acción socialista democrática.

La tercera vía:

- 1. Acepta la lógica de después de 1989 - que aunque la izquierda y la derecha todavía cuentan mucho en la política contemporánea, hay muchas cuestiones y problemas que esta contraposición ya no ayuda a iluminar-. La atención que la tercera vía presta al centro político nace de este hecho. Este énfasis es totalmente compatible con la afirmación de que la política de la tercera vía ha de implicar políticas radicales.*
- 2. Sostiene que las tres áreas claves del poder -el gobierno, la economía, y las comunidades de la sociedad civil- han de ser constreñidas en interés de la solidaridad social y la justicia social (...).*
- 3. Propone fabricar un nuevo contrato social, basado en el teorema «ningún derecho sin responsabilidad». Las personas que se benefician de bienes sociales deberían disfrutarlos responsablemente, y dar algo a cambio a la comunidad social en sentido amplio (...).*
- 4. En la esfera económica pretende desarrollar una amplia política de oferta, que busque reconciliar*

los mecanismos de crecimiento económico con la reforma estructural del Estado de bienestar. En la nueva economía de la información, el capital humano -y social- es parte central del éxito económico (...) El principio «donde sea posible, invierta en capital humano» se aplica igualmente al Estado de bienestar -que necesita reconstruirse como un «Estado social inversor».

5. Busca fomentar una sociedad diversificada basada en principios igualitarios. La diversidad social no es compatible con un igualitarismo de resultados rígidamente definido. La política de la tercera vía quiere, en su lugar, maximizar la igualdad de oportunidades. No obstante, ha de conservar la preocupación por limitar también las desigualdades de resultados. La razón principal es que la igualdad de oportunidades puede generar desigualdades de riqueza y renta -que impiden oportunidades, después, para las siguientes generaciones (...).

6. Se toma la globalización en serio (...) La intensificación de la globalización -que, en cualquier caso, va mucho más allá del mercado global- ofrece muchos beneficios, cuya maximización debe ser la meta de la política de la tercera vía. (Anthony Giddens, La Tercera Vía y sus críticos, Taurus, 2001).

Su postura más criticable es, creo, la del «ningún derecho sin responsabilidad». Los derechos son para ejercerlos con libertad, como ha puntualizado Ralf Dahrendorf en este debate sobre la tercera vía. Hay algo moralista y autoritario en ese enfoque contractualista duro. Los derechos civiles y políticos y los derechos sociales tienen su esfera propia de aplicación, su propio objeto. Las responsabilidades cívicas (el respeto a las normas sociales y la no tolerancia con el fraude y el abuso) son a su vez cruciales para la cohesión social, pero son específicas a su propia esfera. Confundir las cosas ha llevado a algunos a plantear visiones tan autoritarias e injustas como suspender derechos sociales a las familias que tengan hijos que delinquen, por ejemplo. Esa es una extensión abusiva del principio de responsabilidad, de suyo muy importante.

Por su parte, la idea de que el Estado de Bienestar debe ser ante todo inversor suele en términos prácticos más bien orientarse a la restricción de su ámbito de aplicación. Piénsese solamente que su principal eje, los sistemas de pensiones, tienen que ver con personas a las que se trata de asegurar ingresos en la vejez precisamente sin contraparte una vez que jubilan, y que son en todo el mundo cada vez más numerosas y viven más tiempo. O que otro de sus ejes, la protección de la infancia, se orienta precisamente a dar garantías a quienes por definición no son legalmente responsables y merecen el apoyo incondicional de la sociedad hasta que puedan discernir sobre sus opciones en la vida, sin perjuicio del establecimiento de sistemas especiales para los menores infractores de la ley centrados en su rehabilitación.

Y sobre la globalización, su postura no es siempre suficientemente vigilante con sus aspectos profundamente desestabilizadores: está muy bien extenderla más allá de lo económico y maximizar sus aspectos positivos, pero es precisamente su aspecto liberal en la esfera económica y el unilateralismo norteamericano en materia política lo que hace a la globalización tal como se despliega hoy más disruptiva que nunca de las sociedades nacionales y de la paz mundial. Basta con aludir a los tremendos impactos desestabilizadores de los mercados financieros globales desregulados. Y claro, la postura de su socio Blair en la crisis de Iraq no ha sido precisamente reforzadora del derecho internacional y de la solución pacífica de las crisis, como lo planteó con claridad el renunciado ministro laborista británico y Presidente del Partido Socialista Europeo Robin Cook.

No se trata, desde la tradición socialista que tiene en el internacionalismo, que no excluye la autonomía nacional, uno de sus fundamentos originarios más contundentes, de pasarse al también vago campo de la antiglobalización per se, pero esto requiere de una visión más compleja que la nueva beatitud globalizadora y su contraparte antiglobalizadora. Yo creo en el enfoque co-globalizador, que funda una nueva ciudadanía mundial, sobre lo que seguramente conversaremos más adelante.

A. JOIGNANT: La controversia entre «igualdad de oportunidades» e «igualdad de resultados» es una controversia importante en filosofía política, en la que confluyen naturalmente corrientes de pensamiento como el liberalismo en todas sus variantes (definitivamente no es lo mismo Rawls que

Dworkin), el comunitarismo norteamericano (que mucho tiene que enseñar al socialismo), el republicanismo, el socialismo socialdemócrata, y ciertamente el propio marxismo (desde el marxismo clásico hasta el «marxismo analítico»). Convengamos que una controversia de este tipo apunta a los fines de la política y a las disputas sobre la vida buena, y concordemos que la «igualdad de resultados» es una postura minoritaria y dominada en la medida en que un proyecto político igualitario de estas características (lo que despectivamente suele llamarse «igualitarismo») acarrearía consigo riesgos de «mismidad», culturas masivas e indistintas, es decir indiferenciación a gran escala y situaciones de injusticia. Indiferenciación e injusticia al no recibir reconocimiento el mérito individual y por tanto la diferencia singular, en tanto el mérito (cualquiera sea su fundamento) constituye por definición una violación a la situación de igualdad, puesto que su materialidad y la recompensa que se asocia a él se originan en acciones socialmente excepcionales o descollantes porque únicas, irrepetibles porque derivadas de un individuo único. Es una disputa realmente interesante en la que hay profundas diferencias incluso en el propio campo socialista: señalemos el caso de Walzer, quien rechaza abiertamente la igualdad de resultados —una vez satisfechas condiciones iniciales universales-, y con buenos argumentos, dados los riesgos de tiranía involucrados a continuación del predominio de determinadas esferas sociales sobre otras(39).

G. MARTNER: Creo que el fundamento del proyecto socialista moderno es el ejercicio de la igual libertad y de la igualdad en dignidad, derechos y oportunidades, lo que implica la expansión de los derechos políticos, sociales y culturales, sin descuidar las condiciones materiales que hacen posible la aplicación de esos derechos. Esto supone ir más allá de la igualdad de oportunidades hacia algún grado de igualdad de resultados en esferas específicas. Lo que supone que nos detengamos en la noción de qué es, en definitiva, una sociedad justa.

Convengamos con John Rawls, el filósofo político liberal-igualitario que falleció recientemente, que las exigencias de una sociedad justa parten con la identificación de bienes primarios de carácter social (los de carácter natural son en su concepto la salud y los talentos) que reparte en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a las diversas posiciones sociales y las «bases sociales del respeto de sí mismo»(40) . Una sociedad justa es una sociedad cuyas instituciones reparten los bienes primarios sociales de manera equitativa entre sus miembros, tomando en cuenta que estos difieren en términos de bienes primarios naturales. Esta distribución equitativa debe, según Rawls, hacerse según tres principios: el de igual libertad (toda persona tiene un derecho igual al conjunto más extendido de libertades fundamentales iguales que sea compatible con un conjunto similar de libertades para todos), el de diferencia (que afirma que las eventuales desigualdades sociales y económicas que emergen en el marco de las instituciones que garantizan la igual libertad se justifican sólo si permiten mejorar la situación de los miembros menos aventajados de la sociedad) y el de igualdad equitativa de las oportunidades (vinculadas a funciones y posiciones a las cuales todos tienen el mismo acceso, a talentos dados). Si los talentos innatos de dos personas son los mismos, las instituciones deben asegurar a uno y otro las mismas posibilidades de acceso a las posiciones sociales que escojan, en particular a través de una limitación de las desigualdades de riqueza, una prohibición del sexismo, del racismo y del nepotismo, y sobre todo una enseñanza eficaz, obligatoria y gratuita. Esta es una buena base para concebir una sociedad justa e igualitaria, con la agregación de la igualdad de resultados específicos en algunas áreas(41)

Walzer, por su parte, avanza en este sentido y defiende una concepción de igualdad compleja, que supone, de modo más exigente que Rawls, que se preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de esas esferas. Así, según Walzer, el peso igual de cada ciudadano en el proceso de decisión política, el derecho igual de cada trabajador a participar en las decisiones de su empresa, el acceso al éxito escolar según el solo criterio del mérito o el acceso a las atenciones de salud en función sólo de las necesidades, son diversos criterios irreductibles el uno al otro. Su campo de aplicación debe estar protegido contra las desigualdades de poder de compra. La justicia, según Walzer, consiste tanto en inmunizar las otras esferas contra los frecuente desbordes de lo económico como asegurar una distribución

equitativa de los bienes económicos.

Convengamos entonces que la completa igualdad de resultados debe ser aplicable al dominio de la igual libertad y que debe serlo sólo parcialmente en materia de resultados económicos: el aserto de cada cual según su capacidad a cada uno según su necesidad enunciado por Marx en su Crítica al Programa de L otha supone «alcanzar el reino de la libertad», es decir alcanzar una situación en que ya no existe la escasez de recursos disponibles. La regla de que todos reciban según lo que necesitan supone alcanzar una capacidad productiva igual o superior a las necesidades y además resolver inextricables problemas prácticos para determinar las necesidades individuales, lo que plantea fuertes problemas de incentivos y de asignación justa de los recursos disponibles: los comportamientos oportunistas sin castigo retributivo llevan inevitablemente a una disminución del dinamismo productivo en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Parece más pertinente plantear la perspectiva de lo que Marx llamaba «la fase 1 del comunismo», es decir la regla de cada cual según su capacidad 1 cada uno según su trabajo, corregido por la acción igualitaria de distribución de bienes y servicios específicos a toda la población y / o a parte de ella, con los mecanismos de aseguramiento de riesgos sociales con mantención de ingresos y distribución de ingresos básicos garantizados que apuntan al a cada cual según su necesidad pero circunscrito a estos aspectos fundamentales.

En este sentido es también pertinente traer a colación la postura del economista hindú Amartya Sen (42), para quien el enfoque rawlsiano de la justicia parece focalizarse indebidamente en los bienes primarios sociales y no considerar suficientemente la capacidad muy desigual de transformar esos bienes en funcionamientos (nutrición adecuada, salud, movilidad), para lo que propone actuar sobre el conjunto de capacidades que hacen posibles dichos funcionamientos. Esto no implica igualar todas las capacidades. Sen sostiene que la justicia requiere al menos que todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamentales, según modalidades y medios que pueden variar considerablemente de un contexto sociocultural a otro, y que incluye la capacidad de participar en la vida colectiva, fundando un enfoque basado en atacar la pobreza —entendida como ausencia de capacidades más que de ingresos- no sólo absoluta sino también relativa.

La enseñanza de estos criterios de justicia que fundamentan una visión igualitaria moderna no es por cierto saber si son literalmente aplicables en la sociedad real, sino saber si las indicaciones que nos transmiten son coherentes y éticamente apropiadas para guiarnos a la hora de evaluar determinadas reivindicaciones de intereses específicos y decidir qué parte de los recursos de la sociedad es justo que ésta, a través del sistema político, consagre a la redistribución de los ingresos generados y qué transformaciones de la estructura de funcionamiento económico y social son necesarias para superar la explotación y la desigualdad.

En buena medida la reforma a la salud que está llevando a cabo el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos está inspirada en la idea del igualitarismo específico, con igualdad de resultados en el acceso a la atención de aquellas enfermedades o problemas de salud que representan el mayor daño a la calidad de vida y a las expectativas de vida de las personas, junto a las acciones de salud preventivas, reclamables socialmente como un derecho. El programa Chile Solidario contra la extrema pobreza que está en construcción se orienta, por su parte, a trabajar la igualación de capacidades para tender un puente entre la marginación social y la vida colectiva y establecer mínimos sociales de sustentación de una vida digna para todos, sin exclusión.

En el caso de la educación la igualdad de resultados es imposible, pero si es un campo de aplicación para la idea de la igualdad de oportunidades, en este caso avanzar hacia la igualdad en la oportunidad de acceder a la educación en todos sus niveles a talento similar, y con además modalidades de discriminación positiva para los más desfavorecidos en su contexto social y cultural. La reforma educativa ha concentrado sus esfuerzos por mejorar la condición de los dispositivos escolares más retrasados, con más insumos para las escuelas que operan en entornos más desfavorecidos (libros, soportes informáticos, cuadernos, medios para una jornada escolar completa -la diferencia en número de horas al año entre las escuelas de educación pagada y la educación pública hacía evidente la necesidad de producir una nueva] infraestructura que soportara una jornada escolar ampliada-), los

quel representan un fuerte esfuerzo financiero para la sociedad chilena enterament justificado y que debe seguir expandiéndose.

G. MARTNER: Yo creo que con nuestras propias tradiciones teóric y la apertura al debate moderno de construcción de criterios para estructurar una sociedad igualitaria y justa es posible fundar un proyecto socialista para siglo 21, un programa de política pública y de transformación social radie

A. JOIGNANT: Pero permanece la pregunta: ¿a qué alude finalmenti la igualdad? ¿A una retórica, una imposibilidad práctica, un programa político que involucra un gran esfuerzo de varias generaciones para avanzar a ese fin, y que está en pleno desarrollo.

La concepción socialista decimonónica tenía un agente subjetivo: las nuevas relaciones de producción post-capitalistas serían puestas en práctica por el trabajador colectivo generado por la propia industria moderna, es decir la clase obrera que prefiguraba los principios de la sociedad futura. A su vez, la institución lave de tal sociedad sería la planificación concertada de los productores libremente asociados, sin intercambios de mercado, que compartirían en común a través de la abolición de la propiedad privada sus medios fundamentales de existencia, distribuyendo los bienes producidos según la capacidad de cada cual en función de las necesidades de cada uno, en una sociedad sin clases y sin Estado.

El primer aspecto (la generalización de la relación salarial y la expansión de la clase obrera hasta el punto de hacerse mayoritaria) nunca se confirmó en las sociedades periféricas, mientras en los países capitalistas centrales la tendencia al crecimiento de complejos de producción de capital fijo cada vez más grandes e ntegrados, que generara una gestión crecientemente centralizada, más o menos ;e verificó desde la revolución industrial hasta los «30 años gloriosos» del capitalismo posterior a la segunda guerra mundial. Desde entonces, sin embargo, as nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones fraccionan los procesos productivos, la clase obrera fabril disminuye en número, aumenta sustancialmente la actividad de suministro de servicios sociales y de servicios de apoyo a la producción, mientras los asalariados logran también en parte acumular capital a través del ahorro familiar, o al menos acumular «capital humano» transmisible a sus hijos. Los proletarios que sólo tenían sus cadenas que perder son ahora asalariados que en muchos casos no son mecánicamente reemplazables por el capital y tienen incidencia en los destinos de la empresa, especialmente cuando tienen funciones de creación y concepción de productos, o de gestión basada en el conocimiento y la información, y en determinadas circunstancias capacidad de obtener incrementos sistemáticos de su nivel de vida y de su capacidad de ahorro. Por su parte, los seres humanos ocupados en trabajos asalariados de ejecución, precarios, mal pagados, junto al autoempleo de subsistencia, aspiran a la integración y no logran constituirse en actores sociales colectivos como los que suponía Marx llevarían inevitablemente a la sustitución del capitalismo(43)

El segundo aspecto, la planificación central, se hizo cada vez menos posible de abordar frente a las complejidades de coordinación de precios y cantidades en economías con progreso técnico acelerado, con dificultades insuperables para reunir centralizadamente la información pertinente sobre la multiplicación y diversificación generalizada de la producción de bienes y servicios y la dispersión espacial, muchas veces a escala mundial, de sus respectivos procesos de producción(44).

Permíteme, en este sentido, realizar unas distinciones sobre la reformulación del pensamiento socialista en materia de roles del Estado y el mercado, pues convengamos que la problemática no es ya la de la supresión del mercado y la abolición del Estado, sino la de una nueva articulación de la democracia, los mercados y la sociedad civil en escala local, nacional y mundial, para fundar racionalmente la esperanza de crear un sistema social que sea un auténtico avance respecto del capitalismo.

Desde luego debe rechazarse la sociedad de mercado que promueve el neoliberalismo, aquella donde predomina la acumulación ilimitada de capital y en que el afán de lucro se instala en todos los ámbitos de la vida colectiva. Lo que no supone condenar genéricamente los mercados, pues rechazar todo intercambio basado en precios es casi tan extravagante en una sociedad compleja como estar en contra de las conversaciones entre las personas (aunque ciertas conversaciones, como ha observado Sen, sean claramente infames y causen problemas a terceros, o a los propios interlocutores).

Introduzcamos para esta reflexión el enfoque de Fernand Braudel sobre ‘los tres pisos» que a su juicio articulan la esfera económica. Para Braudel, el primer piso es el conjunto de prácticas que constituyen la base socio-cultural de la producción, frecuentemente en el marco de una economía informal y no mercantil, con presencia de donaciones y contradonaciones recíprocas; un segundo piso lo conforma la estructura de intercambios de mercado con múltiples oferentes y demandantes en situación competitiva; y el tercer piso lo constituye aquel en que predomina el capital financiero y productivo concentrado, y que Braudel identifica con el capitalismo propiamente tal. La transformación socialista moderna se orienta a reemplazar el predominio del tercer piso de Braudel por una economía plural, gobernada por la democracia y orientada a satisfacer las necesidades humanas. Se trata de reemplazar mediante sucesivas transformaciones el capitalismo como expresión concentrada del impulso ilimitado de acumulación, que produce y reproduce la concentración de la riqueza y del poder y la multiplicación de inaceptables e ilegítimas desigualdades.

Asumamos que los seres humanos están abiertos a favorecer la cooperación desinteresada o de mutuo interés, especialmente en la esfera propia del primer piso, en donde los lazos familiares y comunitarios son más fuertes(45) .

Existen entonces en nuestras sociedades contemporáneas, para la autorrealización y el desarrollo de proyectos autónomos de vida, espacios para la economía social, de carácter cooperativo y sin fines de lucro, o para aquella economía que, teniendo fines de lucro, se organiza sobre la base de redes familiares y sociales. Este primer piso será siempre el soporte de la creación de empleo y del repliegue de sobrevivencia en situaciones de penuria económica.

También asumamos que los seres humanos suelen minimizar su esfuerzo y maximizar los resultados de ese esfuerzo. No cabe, por tanto, ser contrarios a los intercambios que viabilizan esa maximización en el segundo piso de Braudel, en donde la coordinación entre múltiples oferentes y demandantes puede hacerse útilmente a través del sistema descentralizado de precios en mercados competitivos intervenidos social y ecológicamente. Es, en esta perspectiva, necesaria una regulación por los poderes públicos democráticos para, con procedimientos modernos de redefinición de los derechos de propiedad privada (a no confundir con la propiedad de bienes personales), establecer responsabilidades sociales de la empresa con sus trabajadores y respecto del medio ambiente y del espacio en que funciona, lo que en definitiva transforma en beneficio de la colectividad y de las futuras generaciones su carácter capitalista y los males sociales que le son consustanciales(46) .

Somos promotores de las regulaciones para que los mercados competitivos y social y ecológicamente gobernados no sean ya un vehículo de concentración del poder económico y político, pues la maximización de utilidades librada a su suerte, propia de toda estrategia empresarial racional, conduce a la búsqueda sistemática de rentas (llamadas «intramarginales» en la microeconomía convencional) y no ya de utilidades legítimas, sobre la base de rehuir la competencia y de desarrollar situaciones de monopolio o de competencia monopolística. El enfoque socialista se orienta a impedir las prácticas monopólicas y a promover las capacidades de la producción en pequeña escala, lo que supone intervenciones públicas para derribar las asimetrías de información y sustituir los mercados incompletos en los sistemas financieros, que se constituyen en instrumentos privilegiados de la dinámica de concentración capitalista(47) .

Es en el plano político, ante todo, que adquiere plena significación la distinción, para mí fuera de duda, entre el capitalismo en sus diversas formas y la «economía de mercado». El gran empuje capitalista del siglo pasado ha sin duda sido descrito incluso por Marx, incluso por Lenin, como eminentemente, sanamente competitivo. (...) En la cumbre están los monopolios, debajo la competencia reservada a las pequeñas y mediocres empresas. (...) Hay un margen inferior, más o menos grueso, de la economía —llámenla como quieran, pero existe y está hecha de unidades independientes. Entonces no digan tan rápido que el capitalismo es el conjunto de lo social, que envuelve a nuestras sociedades enteras (...).

En fin, hay que agregar que el sector competitivo no incluye, por su parte, todo lo que el capitalismo

de las alturas ha dejado de lado, o incluso abandonado. Hay hoy día aún, como en el siglo 18, un amplio primer piso que, al decir de economistas, representa hasta 30% y 40% de las actividades en los países industrializados del mundo actual. Este volumen, al margen de los mercados y de los controles del Estado, recientemente estimado y que sorprende por su amplitud, es la suma del fraude, del trueque de bienes y servicios, del «trabajo negro», de la actividad de los hogares, esta economía de la casa que, para Santo Tomás de Aquino, era la economía pura y que subsiste hasta nuestros días. La «tripartición», la economía de pisos cuya importancia antigua he reconocido, sigue siendo un modelo, una guía de observación para el tiempo presente.

Y son las grandes empresas del sector privado las que han recibido y reciben los créditos y la ayuda prioritaria del Estado, mientras los bancos disminuyen, bajo orden, su crédito a las empresas menores- lo que se traduce en condenarlas a vegetar y a desaparecer. No hay política más peligrosa que esa. Es repetir, bajo otra forma, el error fundamental de los países socialistas. No decía acaso Lenin: «La pequeña producción mercantil da cada día, a cada instante, nacimiento al capitalismo y a la burguesía de manera espontánea... Ahí donde subsiste la pequeña explotación y la libertad de los intercambios, el capitalismo aparece». Se le atribuye incluso la expresión : «el capitalismo empieza en el mercado del pueblo». Conclusión: para desembarazarse del capitalismo hay que extirpar, hasta sus raíces, la producción individual y la libertad de intercambio. Estas observaciones de Lenin ¿no son acaso un homenaje a la enorme potencia creadora del mercado, de la zona inferior de los intercambios, del artesanado, e incluso en mi opinión, del arreglín? Una potencia creadora que, para la economía, es no solo una riqueza de base, sino también una posición de repliegue durante los períodos de crisis, las guerras, las panas serias de la economía que exigen cambios estructurales(...).

Finalmente, admitir sin reticencia la distinción entre economía de mercado y capitalismo ¿no debería evitamos el todo o nada que nos proponen inmutablemente los hombres políticos, como si fuera imposible conservar la economía de mercado sin dejar toda libertad a los monopolios, o de desembarazarnos de esos monopolios sin «nacionalizar» todo? (Fernand Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV^e XVIII^e é siècle*, 1979).

También se orienta a proteger y promover la innovación para que esta sea viable en todo el tejido productivo y no se centralice en la gran empresa, en circunstancias en que el conocimiento tiene el carácter de bien público de apropiación colectiva y que la esencia de una economía próspera es la difusión del conocimiento y del progreso técnico, siendo su rentabilidad social el doble de su rentabilidad privada(48) .

En este sentido, cabe subrayar el potencial transformador que abren las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el terreno económico. El trabajo, el capital y la propiedad se redefinen con la entrada en la era digital y de las redes. El paso a una sociedad en que el conocimiento y el saber se constituyen en fuentes privilegiadas de riqueza tiene consecuencias en cascada: el «trabajador» se transforma en poseedor de su instrumento de producción —su cerebro y sus habilidades- que puede hacer funcionar en los horarios que mejor le acomodan, en el lugar que le acomoda y con modos de remuneración que no son sólo monetarios sino también de reconocimiento por una comunidad y de contribución a un proceso de uso de la inteligencia colectiva. El «trabajador» en esta situación no sólo puede renegociar el marco de su inserción en el trabajo productivo, sino que se encuentra en posición de «poseedor de capital», en un contexto en que la actividad de creación digital, en su sentido amplio, se desenvuelve con necesidades de capital material – máquinas y herramientas- de cada vez menor costo. Se avizora así la emergencia progresiva de un tejido productivo con gran dinamismo económico y a la vez con mayor capacidad de impedir la disolución de la convivencia colectiva y de los espacios familiares y comunitarios.

La lucha del socialismo se traduce en: a) cultivar la economía social y cooperativa; b) favorecer la actividad de servicios y empresas públicas proveedores de la vasta gama de bienes de consumo colectivo (especialmente de seguridad y de equipamientos urbanos, recreativos y culturales), o con fuertes externalidades, (como la educación, la salud, la protección social) o la extracción de recursos naturales estratégicos; c) establecer que la actividad de empresas privadas con fines de lucro esté

limitada por principios de responsabilidad social e insertas en mercados eficientes y no monopólicos, acompañada de mecanismos de distribución equitativa del poder, las capacidades y los ingresos. Se trata de desplazar el centro de gravedad de la actividad económica desde el capital físico concentrado hacia el «capital humano» desconcentrado, actividad basada en relaciones económicas alternativas a la subordinación de la condición asalariada propia del capitalismo.

El proyecto socialista moderno requiere para avanzar a la mencionada distribución equitativa del poder, de las capacidades y de los ingresos, especialmente en las economías primario-exportadoras, de la socialización de las rentas de los recursos naturales que pertenecen a la sociedad en su conjunto y no es legítimo ni racional que sean apropiadas privadamente. Requiere también que, en todas partes, sean socializados los recursos generados por ese bien colectivo que es el avance tecnológico y del conocimiento, cuya apropiación privada tampoco tiene fundamento racional. Estos recursos colectivos deben ser distribuidos a la sociedad por el poder democrático.

En primer lugar, deben ser distribuidos a las nuevas generaciones a través de una educación de calidad de acceso universal y gratuito como recurso que la sociedad pone a disposición de los jóvenes para su inserción en la vida en igualdad de oportunidades. Asimismo, debe ser distribuido bajo la forma de un aporte capitalizado desde el nacimiento para la inserción inicial de los jóvenes en la vida económica activa. Esto ya existe, por ejemplo, en Inglaterra y Suecia.

En segundo lugar, deben ser distribuidos a toda la población, en parte como recursos de subsistencia digna no condicionales («dése a todos los ciudadanos un ingreso modesto, aunque incondicional, y déjenlo completarlo a voluntad con ingresos provenientes de otras fuentes») concentrados en los más pobres primero y más tarde universalmente, en lo que se conoce como la idea del ingreso mínimo garantizado(49), y en parte como créditos y / o subsidios de readaptación y reinserción frente a la velocidad del cambio tecnológico y de las condiciones productivas, en un proceso continuo de educación a lo largo de toda la vida.

Hemos comprobado la relación que existe entre la reducción del tiempo de trabajo, para la cual fue concebida la máquina, y la instauración de un ingreso equivalente al mínimo de subsistencia. Pese a su denominación (de ingreso «tecnológico»), no está vinculado al capital técnico, sino a la propia organización del proceso de producción, es decir a la inversión intelectual y a la información. Depende pues de este patrimonio universal cuyos frutos, que no son imputables a uno u otro factor productivo, deben distribuirse en realidad entre el conjunto de la colectividad (...). Finalmente queda el factor tiempo, con el que el sistema se aliaría para quedar progresivamente instaurado. Porque si el dividendo universal representa el ideal que hay que alcanzar, puede no ser un acierto empezar la casa por el tejado G.). Esta progresividad a lo largo del tiempo, que tanto contribuye a la viabilidad del sistema, relativiza el interés concreto, inmediato del debate —fundamental, por el contrario, en el plano de los principios- que versa sobre el carácter universal o no universal de la renta mínima garantizada. Estamos hablando, insisto, de distribuir y no de redistribuir. Despunta el momento en que, en una sociedad donde la robótica llevará a cabo el trabajo, la renta universal se habrá convertido en la fuente principal de ingresos que cada cual podrá completar con otros ingresos procedentes de una actividad de libre acceso. El contrato de trabajo con una duración determinada, justamente denostado en el contexto de precariedad actual, se convertiría entonces en la modalidad normal que permita a cada parte —empleador o empleado- establecer temporalmente unos lazos profesionales. (René Passet, *La ilusión neoliberal*).

Los dispositivos de igualación inicial de oportunidades y de provisión de ingresos básicos garantizados deben complementarse con políticas de garantía del derecho al trabajo, mediante la creación de un acceso a la capacitación para la inserción en el empleo y, cuando esto sea insuficiente para asegurar esa inserción en el empleo, de un acceso a «empleos cívicos» de interés comunitario para los desempleados de larga duración que la demanda de trabajo deja fuera de la actividad económica(50). Como se constata, el socialismo moderno debe a mi juicio transformarse en el movimiento que, desde la sociedad civil y su capacidad de darle forma a un Estado democrático fuerte, legítimo y eficaz, pueda controlar a la esfera económica y dotarla de capacidades emancipadoras, orientándola

hacia fines situados más allá de ella: la autorrealización y el desarrollo de los proyectos de vida de cada cual.

Adam Smith y Friedrich Von Hayek subrayan que nadie conoce mejor las aspiraciones de cada individuo que ellos mismos. El error de los autores liberales no reside tanto en constatar esa evidencia sino en fijarse sólo en este nivel de realidad, reduciendo la sociedad entera a esta dimensión. El ser humano es también un ser social, que encuentra en la acción colectiva una racionalidad pertinente para alcanzar sus propias aspiraciones individuales. Los socialistas luchamos por expandir la motivación de incremento de la calidad de vida en su dimensión de respeto y valorización del medioambiente y en su dimensión de incremento de los espacios de convivencia humana (el compartir con otros la vida más allá de lo utilitario y funcional, el vivir por vivir más allá del trabajo para la subsistencia, donde lo prosaico deje espacio a lo poético, en palabras de Edgar Morin). Luchamos contra la globalización cultural empobrecedora y mercantilizada y a favor de la motivación de enraizamiento en la cultura propia con espíritu de apertura a los otros humanos(51)

Al individualismo y al afán de lucro oponemos el espíritu de fraternidad en las relaciones humanas — sentirse realizado con la felicidad del otro-, en donde se valore y respete la diversidad.

El socialismo es la modernidad en vías de construcción —pero esa construcción de la modernidad estará siempre en evolución- en la cual, para hacer efectiva la libertad y la igualdad, la esfera regida por la racionalidad económica debe ponerse al servicio de favorecer la expansión de las otras esferas de actividad que no tienen necesidad ni fin económico, en las que la autonomía de la vida individual se despliega como fin en sí misma. No se trata de condenar sistemáticamente la búsqueda por las empresas de la máxima eficacia para obtener utilidades —que es su fin último- sino de sujetarlas a reglas y límites, incluyendo que no se transformen en rentistas monopólicos que alteran en provecho propio el funcionamiento de un sistema de precios descentralizado, como no ha cesado de hacerlo la lucha sindical, los movimientos ecológicos, los defensores del consumidor, las representaciones de la sociedad local, y, desde luego, el poder democrático representativo, y de ponerla al servicio del desarrollo autónomo y solidario de los individuos y de la sociedad.

El socialismo es entonces la consagración del poder de la sociedad para definir democráticamente las prioridades y los fines, así como las reglas y los límites en los cuales puede desplegarse la racionalidad económica, representando al mundo del trabajo en su vasta gama de expresiones y al mundo de la cultura y de los creadores y emprendedores.

Esta utopía concreta mantiene los objetivos históricos del socialismo que emergió a principios del siglo 19, es decir los objetivos de humanizar la sociedad, dominar el futuro colectivo y construir una democracia social, pero busca alcanzarlos a través de medios acordes con la realidad nacional y mundial del siglo 21.

Notas capítulo II

(17) Entrevista en Le Monde, agosto 1986.

(18)Giovanni Sartori, El Homo Videns, Taurus, Madrid, 1997.

(19)Para una visión sobre el origen de esta noción ver Wolfgang Abentroh, Ernst Forsthoff y Karl Doehring, El Estado Social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986. Sobre el rol de los Estados de Bienestar en el siglo 20 y su desempeño económico y social, ver Evelyne Huber y John D. Stephens, Development and crisis of the welfare state. Parties and policies in global markets, The University of Chicago Press, Chicago, 2001.

(20) Sobre la dimensión productiva y no sólo redistributiva del socialismo, ver Dominique Strauss-Kahn, La flamme et la cendre, Grasset, Paris, 2002.

(21)José J. Brunner y Tomás Moulián, Brunner vs Moulidn. Izquierda y capitalismo en 14 rounds, Editorial El Mostrador, Santiago, 2002.

(22)Resulta interesante contrastar a este respecto el clásico estudio de Michels a comienzos del siglo XX con lo que es el SPD hoy en día: Roberto Michels, Les partis politiques, París, Flammarion, 1952.

rion, 1971.

(23) Esa es la tesis de Jeremy Rifkin, *La fin du travail*, París, La Découverte, 1996, contra la cual D. Schnapper replica on razón enfatizando el carácter «ridículo» de la aserción, puesto que además de no verificarse en la realidad, tampoco se hace cargo del hecho que «el ciudadano moderno adquiere su dignidad trabajando», lo cual plantea una interrogante referida a las consecuencias psicológicas y sociales de una ilusoria extinción del trabajo: Dominique Schnapper, *Contre la fin du travail*, París, Textuel, 1997, p.14.

(24) Al respecto, conviene tener presente el extraordinario libro de Luc Boltanski y Eve Chiapello, *Le nouvel esprit du capitalisme*, París, Gallimard, 1999, el cual fue recientemente traducido al español por Akal.

(25) Pierre Bourdieu, *Les structures sociales de l'économie*, París, Seuil, 2000.

(26) Robert Castel, *Les métamorphoses de la question sociale*, París, Fayard, 1995.

(27) En palabras de Ronsanvallon, «es necesario replantear el contrato salarial. ¿Porqué? Porque éste ha sido concebido y pensado desde hace un siglo para organizar la producción de los trabajadores reunidos en empresas cada vez más grandes, que sólo podían ser representados por organizaciones colectivas: los sindicatos. Es el derecho más que el contrato social de la empresa el que puede y debe hoy día ser el vector del progreso social para reducir las desigualdades de situaciones materiales o de estatus. Es necesario pensar en términos del derecho) del hombre a trabajar. Es desde el exterior de la empresa y no al interior de ella que se juega la homogeneización: del mundo trabajador. Se trata ahora de organizar el estatuto y la protección de trabajadores flexibles, móviles y dispersos en un número creciente de pequeñas unidades, al contrario de los antiguos trabajadores, estables agrupados en empresas cuya dimensión económica no dejaba de crecer. Es necesario replantear el Estado. ¡providencia. Ante todo porque el Estado-providencia en los años 1970 y 1980 ha acarreado en todas pa dificultades de financiamiento. Pero sobre todo porque los principios organizadores de la solidaridad colectiv se encuentran hoy día en crisis (...). Esta identificación del Estado-providencia con una especie de sociedad aseguradora, está llegando de esta manera a su fin. Asistimos hoy día a una separación progresiva de dos

(28) Véase Martin Hirsch, *Les enjeux de la protection sociale*, Montchrestien, Paris, 1994.

(29) Ver Jean-Pierre Dumont, *Les Systèmes de protection sociale en Europe*, Economica, Paris, 1998.

(30) Richard Kneller, Michael Bleaney y Norman Gemmel, *Journal of Public Economics* 74, 1999.

(31) Hokoloff y Engerman, *Journal of Economic Perspectives*, verano de 2000

(32) Según un reciente informe del Consejo de Asesores del ex Primer Ministro de Francia (que condujo, dicho sea de paso, una de las gestiones económicas más exitosas de los países desarrollados y al mismo tiempo redujo a 35 horas la semana laboral): «Los caminos hacia el pleno empleo aparecen como múltiples y algunos son mucho más solidarios que otros. En los países muy centralizados, los choques pueden no afectar el empleo si las negociaciones imponen una moderación salarial. Es lo que podría llamarse la 'flexibilidad solidaria' o negociada. En los países en que, al contrario, las negociaciones son muy descentralizadas, la adaptación es secuencial: empieza por una fuerte reactividad del empleo seguida de una flexibilidad 'externa' de los salarios de los que terminan cesantes. Es lo que podría llamarse la flexibilidad individualista. Ciertas adaptaciones necesarias, como por ejemplo la moderación salarial, tienen más posibilidades de ser comprendidas y aceptadas si son objeto de discusiones centralizadas entre los interlocutores sociales. Dejadas al mercado, su costo en términos de empleo es generalmente muy elevado», en Jean Paul Fitoussi, Olivier Passet y René Fressynet *Rapport du Comité D'Analyse Economique*, www.premier-ministre.gov.fr.

(33) Anthony Giddens, *Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales*, Madrid, Cátedra, 1996; *La tercera vía*, Madrid, Taurus, 1999; «*Brave New World: the New Context of Politics*» (p.224-239) y «*The Labour Party and British Politics*» (p.240-271), en Anthony Giddens, *In Defense of Sociology. Essays, interpretations and Rejoinders*, Londres, Polity Press, 1996.

(34) Alfredo Joignant, «Agent, structure et cognition. Questions de recherche á partir de la sociologie de Pierre Bourdieu et Anthony Giddens», *Cahiers internationaux de Sociologie*, vol. CVIII,

2000, p.187-196.

(35)Giran Therborn, «Los nuevos parámetros de la política global», *New Left Review*, n» 10, 2001.

(36) Gonzalo Martner F., *Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado*, op.cit.. ,

(37)Joseph Stiglitz, *Globalisation and its discontents*, 2002.

(38)Basta mencionar a Gary Becker, el padre de la «economía generalizada» según la cual toda lógica social debe entenderse reducida a la racionalidad económica: «el derecho al trabajo y la protección del medio ambiente se han convertido en excesivos para la mayoría de los países desarrollados. El librecambio va a reprimir algunos de estos excesos obligando a cada uno a seguir siendo competitivo», citado por René Passet, *La ilusión neoliberal*, Debate, Madrid, 2001.

(39)Michael Walzer, *Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad*, Buenos Aires, Fondo de Cultura onómica, 1993

(40)John Rawls, *Teoría de la justicia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979 (primera edición en inglés: 1971)

(41)Una discusión amplia de estos aspectos se encuentra en Philippe Van Parijs, *Ethique économique et sociale*, La Découverte, Paris, 2000.

(42)Véase *Desarrollo y Libertad*, Taurus, 2002

(43)En este sentido vale la pena citar a Schweickart: «El marxismo pretende ser una teoría científica, una teoría basada en la percepción acional del mundo real y empírico. Pero es además una filosofía de la esperanza (...). Marx y la mayoría de los marxistas siempre han creído que ésta era una esperanza racional. El carácter científico del marxismo y su esperanza pueden entrar en contradicción dialéctica de vez en cuando, pero no en contradicción permanente. Pero ¿y si Marx estaba equivocado? (...) Para que tenga éxito, una auténtica revolución socialista (es decir, la que constituye un auténtico avance respecto del capitalismo) requiere tanto unas condiciones objetivas como subjetivas. Deben darse los recursos humanos y materiales que permitan una forma de vida superior más humana, y debe haber un agente suficientemente motivado para poner fin al orden existente. Esto es marxismo elemental. Pero (...) estas condiciones no se dan a la vez en estos momentos, ni se darán en un futuro previsible, ni tal vez nunca. Las necesarias condiciones objetivas se dan actualmente en el mundo capitalista avanzado, pero falta el agente, porque los trabajadores tienen ahora mucho más que perder que sus cadenas. Las condiciones subjetivas se dan en el Tercer Mundo, pero allí faltan los recursos para crear una sociedad verdaderamente socialista. Si esto es realmente así, entonces hay que elegir entre el Marx científico y el Marx utópico; pero esta forma de escindir a Marx hace que el marxismo deje de ser marxismo», en David Schweickart, *Más allá del capitalismo*, Editorial Sal Térrea, Santander, 1997. Una ideología cerrada y petrificada genera inevitablemente cegueras para interpretar el mundo real y no es pertinente, para inspirar su transformación. No olvidemos que frente a algunos de sus seguidores, el propio Marx afirmaba sin tapujos que «el único que yo sé es que no soy marxista». El PS chileno desde sus orígenes se inspiró en la filosofía de la esperanza contenida en la obra de Marx, pero como se ha recalado, «enriquecida y rectificada por el constante devenir social» y por tanto alejándose de todo dogmatismo, incorporando sistemática y abiertamente los múltiples aportes de las ciencias sociales modernas para interpretar racionalmente el mundo existente y sus posibilidades históricas de transformación, y desde 1989 incorporó pluralmente las diversas «filosofías de la esperanza» críticas del capitalismo.

(44)En palabras de Perry Anderson, «la planificación centralizada realizó proezas notables en condiciones asedio o de guerra, tanto en las sociedades comunistas como en las capitalistas. Pero en tiempos de paz, sistema administrativo en los países comunistas se demostró totalmente incapaz de controlar el problema de coordinación de los agentes en economías cada vez más complejas, y engendró niveles de derroche e irracionalidad que superan con creces los de las economías de mercado en el mismo período, para manifestar finalmente síntoma de crac potencial», en Perry Anderson, «El capitalismo después del comunismo», *¿Hay alternativa capitalismo?* Congreso Marx Internacional, K&ai Ediciones, Buenos Aires, 1996.

(45)En palabras de Polanyi: «En los hechos, el hombre nunca fue tan egoísta como lo requería la

teoría (...). En ano fue exhortado por economistas y moralistas utilitarios a descontar en los negocios todos los otros motivos listintos que los ‘materiales’. Investigado más de cerca, fue encontrado actuando con motivos notoriamente mixtos’, sin excluir aquellos del deber consigo mismo y con otros — y tal vez, secretamente, incluso disfrutando .li'l trabajo en su propio mérito», Karl Polanyi, *La grande transformation. Aux origines potitiques et économiques de entre temps*, París, Gallimard, 1983 (primera edición en inglés: 1944)

(46)Sobre las empresas socialmente responsables, Geoffrey M. Hodgson, en su ya citado *Economics and Utopia. Why the learning economy is not the end of history*, señala que en una sociedad abierta y basada en la información la firma no tiene que competir simplemente por utilidades sino por nuestra confianza. Para obtenerla, debe abandonar la maximización de utilidades, e incluso la satisfacción del accionista, como los objetivos únicos de la ,rganización. Su misión explícita debe residir en otros aspectos: calidad del producto, satisfacción del consumidor, prácticas de negocios éticas, políticas ambientalmente amigables, por ejemplo».

(47)Sobre estos aspectos véase Joseph Stiglitz, *Wither Socialism?*, MIT Press, Cambridge Mass, 1995.

(48)Dominique Guellec, *Economie de l'innovation*, La Découverte, Paris, 1999.

(49)Philippe Van Parijs, «Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?», en Eduardo Matarazzo Suplicy, *Renda de cidadanía*, Cortez Editora, San Pablo, 2002, texto en el que además se describe el funcionamiento del sistema de ingreso ciudadano en Alaska, financiado por las regalías de acceso a los recursos naturales que dicho estado cobra. Sobre los fundamentos analíticos de las políticas redistributivas modernas y la propuesta de ingreso básico, Anthony B. Atkinson, *Public economics in action. The basic income/Flat tax proposal*, Oxford University Press, Oxford, 1997.

(50) Sobre los empleos cívicos, ver Ulrich Beck, *Un nuevo mundo feliz*, Paidós, 2000. Sobre las empresas socialmente responsables, Geoffrey M. Hodgson, en su ya citado *Economics and Utopia. Why the learning economy is not the end of history*, señala que en una sociedad abierta y basada en la información «la firma no tiene que competir simplemente por utilidades sino por nuestra confianza. Para obtenerla, debe abandonar la maximización de utilidades, e incluso la satisfacción del accionista, como los objetivos únicos de la organización. Su misión explícita debe residir en otros aspectos: calidad del producto, satisfacción del consumidor, prácticas de negocios éticas, políticas ambientalmente amigables, por ejemplo».

(51)Edgar Morin, *Pour une politique de civilisation*, Arléa, Paris, 2002.

CAPÍTULO III

LA CONCERTACIÓN DEL FUTURO

«No nos falta comunicación, al contrario, tenemos demasiada. Lo que nos falta es creación. Nos falta resistencia al presente».

Gilles Deleuze y Felix Guattari

«Nada se decide con definiciones arbitrarias, mejor preguntémonos simplemente: ¿cuándo encontramos lo que ordinariamente denominamos comportamiento fraternal? Seguramente al estar realizando una tarea común, un trabajo o un juego en equipo, en el que se está de acuerdo en lo que se necesita hacer y se hace de tal manera que cada uno de los participantes tiene algo con qué contribuir.»

Bernard Crick

Las razones de la Concertación

A. JOIGNANT: En un libro como este, es inevitable no dialogar sobre la Concertación y el tiempo histórico que ésta representa, tomando distancia de la coyuntura política inmediata. El año 2002 fue el año en que vivimos en peligro, a continuación del estallido de pequeños y medianos escándalos y de la emergencia del juez (de primera instancia) como actor. Transcurridos varios meses del inicio del denominado caso «coimas» y agotado aquel otro affaire muy distinto conocido como el de los «sobresueldos», ¿qué diagnóstico podemos hacer de los problemas políticos por los que atraviesa la Concertación, situándola en perspectiva histórica con el fin de entender y asimilar de modo sereno y racional las coordenadas del presente?

G.MARTNER: La Concertación nace en 1988 de un pacto de las fuerzas antidictatoriales para organizar la derrota política de la dictadura en el plebiscito de octubre de ese año, con excepción de la extrema izquierda y del Partido Comunista que había girado a una estrategia tardía de lucha armada. Fue precedida de una secuencia compleja a lo largo de la década de 1980, una vez que se desencadenan las protestas populares y comienzan a abrirse espacios para la acción política abierta en el país. La Alianza Democrática fue el primer paso, reuniendo a demócrata cristianos, radicales, liberales y una parte de los socialistas en 1983. Esa era una configuración que se tornó insuficiente para enfrentar el plebiscito de 1988, donde Pinochet pretendía legitimarse por ocho años más, en un mecanismo que se había fijado en 1980 y que le resultó a la postre incómodo y peligroso. Se produce el retiro de los socialistas dirigidos por Ricardo Núñez de la Alianza Democrática, proceso en el que personalmente me jugué a fondo para obtener una articulación del conjunto del socialismo, que ya se encaminaba en todos sus componentes principales a tomar ese escenario como válido para terminar con la dictadura y desencadenar una transición a la democracia mediante caminos políticos sustentados en la movilización social y electoral.

Una vez que se tomó ese camino fue posible constituir la Concertación. Importante fue la decisión del sector socialista que dirigía Clodomiro Almeyda de adherir a esa estrategia política, que implicaba una ruptura de su alianza con el Partido Comunista, embarcado a contrapelo de la historia y de sus propias tradiciones en un proceso de lucha armada inconducente, no sin debate y dolores que fueron propios de unos y otros partidos. También en el partido de centro, la Democracia Cristiana, se produjeron controversias. Es conocido que ahí hubo, junto a quienes adscribieron a esta idea de una alianza amplia -que abarcara desde la Democracia Cristiana hasta al Partido Socialista- otros que se opusieron a ella porque eran partidarios de la llamada Coalición Chica sin el Partido Socialista, o sólo con una parte de este.

A. JOIGNANT: ¿Esa posición contraria a una alianza con el Partido Socialista se refería al almeydismo solamente, o abarcaba también a una parte del sector liderado por Ricardo Núñez?

G. MARTNER: Con la menor apertura posible a la izquierda. Había en la DC quienes querían asociarse hacia la izquierda con fuerzas socialistas que no resultaran gravitantes. La clave fue el acuerdo entre la Democracia Cristiana, con el liderazgo de Patricio Aylwin, y las distintas expresiones socialistas junto al Partido Radical, que también se encontraba con divisiones importantes, así como el PPD, ya inscrito como partido instrumental. Fueron procesos intensos, difíciles, que culminaron en febrero del año 1988, ya muy encima del plebiscito. Al constituirse este nuevo conglomerado (con 16 partidos), este se comprometió a actuar en conjunto en los meses que seguían para enfrentar el plebiscito del 5 de octubre del año 1988.

A partir de ahí se fue consolidando una alianza muy sólida, no de esas alianzas que son circunstanciales sino que son fruto de largos procesos de reflexión y balance político, los que emanan de la crisis del año 73, de la etapa inmediatamente posterior y de cómo cada partido se fue situando en la contingencia de los años 1980. Luego de contradicciones diversas en los partidos, cuando se toma la decisión de unirse la coalición adquiere rápidamente una proyección de largo alcance.

Eso permitió enfrentar con una opción política sólida a la dictadura y al mismo tiempo, y con gran solución de continuidad, sin mayores traumas, constituir inmediatamente luego del triunfo en el plebiscito una fórmula de gobierno democrático para Chile, lo que adquirió trascendencia histórica, enviando a partir del cual se produjo la reunificación del socialismo chileno sobre nuevas bases en diciembre de 1989, después de 10 años de división.

También ha sido excepcional que se haya prolongado esta coalición. Esta es la coalición más larga de la historia de Chile. Convengamos que la derecha siempre ha tenido partidos diversos, especialmente liberales y conservadores, que en los años 60 se unificaron en el Partido Nacional. Pero posteriormente emergió la UDI al lado de Renovación Nacional, que era el continuador del Partido Nacional. No obstante, pertenecen a una misma cultura política, mientras la Concertación reúne a varios universos políticos y culturales que nunca en la historia de Chile se habían coaligado.

El primer momento fue de unificación de la lucha política contra la dictadura, el segundo momento fue establecer una capacidad de gobierno y el tercer momento fue dotarse de mecanismos democráticos, las primarias, para dirimir el liderazgo al interior de la coalición: ya no es el acuerdo de partidos, de sus directivas, sino que apelar a los ciudadanos lo que establece el liderazgo, innovando fuertemente, en parte en 1993 y plenamente en 1999, en las tradiciones políticas chilenas. Nunca antes se había escogido un candidato a Presidente de la República en elecciones primarias abiertas a todos los ciudadanos. De este modo, la coalición logró sobrevivir a un hecho significativo: que se trasladara desde el gran partido de centro el liderazgo hacia la izquierda democrática, encabezada por Ricardo Lagos.

El cuadro actual es uno que debe ponerse en esa perspectiva. Se debe entender que resulta complejo para el partido de centro, la Democracia Cristiana, que de algo más de 30 puntos haya disminuido a algo menos de 2 puntos porcentuales de caudal electoral en todo este proceso y que haya perdido entre tanto el liderazgo presidencial.

Además, se observa una penetración de la derecha en parte del electorado más conservador de la DC y una mantención y consolidación del electorado de centro-izquierda. Obviamente, eso le genera un desafío a la coalición y especialmente al Partido Demócrata Cristiano, pero también convengamos que al ala izquierda de la coalición (PPD, PS y PRSD) también se le genera el desafío de la eventual emergencia de liderazgos que miran desde su izquierda a su propio electorado. Hasta aquí, nada muy nuevo bajo el sol desde que Max Neef y Pizarro en 1993 y Gladys Marín en 1999 no han logrado hacer fructificar ese esfuerzo, pero se mantiene una tensión a propósito de la estructuración eventual de una alternativa a la Concertación desde la izquierda extraparlamentaria, lo que siempre es en todo caso un desafío saludable para la izquierda concertacionista.

Esos son los hechos nuevos que hacen que la coalición sufra un desafío político más allá de lo circunstancial o del comportamiento de uno u otro líder partidario. Este es un componente impor-

tante, que en política puede ser decisivo en determinado momento, pero digamos que la proyección de la coalición hacia el futuro -porque una fuerza política no puede vivir de sus éxitos pasados- se basa en reconducir sus compromisos periódicamente.

No obstante, estamos en la mitad de un gobierno, el de Ricardo Lagos, que no es perfecto pero que es un gobierno sólido, fuerte, que ha ido desarrollando consistentemente su agenda y que logró mantener una muy alta adhesión en medio de dificultades económicas importantes y de la emergencia de denuncias de corrupción e irregularidades de gestión que provocaron un desánimo generalizado en un momento dado.

Pero ahí está el arte de la acción política: tomando esta situación de ortalezas y debilidades, nos corresponde transformar este cuadro difícil en un cuadro que haga posible un nuevo futuro común para la coalición. A mi no me cabe duda que nadie tiene el derecho de poner en cuestión a la coalición, pues para ello deben haber razones muy poderosas y francamente no las hay, especialmente porque es la única opción que permite derrotar a la derecha, que ha logrado ser competitiva electoralmente como alternativa de poder gubernamental.

El gobierno de Patricio Aylwin tuvo por misión la recuperación de las libertades, democratizar el poder local, reinsertar a Chile en el mundo y darle impulso a las políticas sociales con la reforma tributaria, probando que se podía mantener la estabilidad y el crecimiento económico en democracia. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle concentró sus esfuerzos en el crecimiento, la infraestructura, la reforma de la educación y de la justicia. La misión del gobierno de Ricardo Lagos ha sido la plena normalización democrática, permitiendo avances en los juicios a los criminales de la dictadura y la subordinación de las FF.AA. al poder civil; avanzar en la protección social de los trabajadores y los desposeídos y concluir la inserción en el mercado mundial mediante acuerdos internacionales para impulsar el crecimiento y el empleo.

Estas acciones de los gobiernos en los que hemos participado han cambiado en profundidad a Chile en la última década, como lo demuestran las cifras del censo. Hoy un 70% de los chilenos tiene vivienda propia y la gran mayoría accede a los servicios básicos en buenas condiciones y ese es un avance histórico irrefutable. Se vive en un clima de libertad, en donde las diversas instituciones cumplen sus roles, incluyendo los casos de irregularidades y episodios de corrupción que nos han conmovido en los últimos meses, mientras avanza el proceso de hacer verdad y justicia en las violaciones de derechos humanos. Hemos avanzado, y hay que congratularnos de ello, pues es fruto en gran medida del esfuerzo tenaz de los socialistas.

Al mismo tiempo, estamos lejos de haber alcanzado nuestros objetivos. Ello no debe desanimarnos sino hacernos redoblar los esfuerzos. El tipo de funcionamiento económico sigue sin capacidad de redistribuir los ingresos. Por mucho tiempo viene permaneciendo alto el desempleo. La inestabilidad mundial que nos afecta no ha podido aún ser enfrentada con un sistema de compensación social sólido, aunque está en vías de fortalecimiento. La seguridad económica de los más desposeídos y de muy amplios sectores de la población es aún insuficiente y es posible obtener mucho más, con más amplias y mejores políticas públicas. Queda pendiente que las instituciones se, democratizen plenamente, que la pluralidad cultural se despliegue en todas sus formas, que el medio ambiente sea suficientemente protegido, que la vida en los barrios disponga de más bienes y servicios colectivos, que las discriminaciones de género y étnicas disminuyan en profundidad. En suma falta mucho para lograr la sociedad democrática, participativa, igualitaria libertaria con la que soñamos. Para ello debemos lograr el éxito del gobierno luchar para que la derecha retroceda en el poder municipal en el 2004 e impedir que tome el poder político gubernamental el 2005. De lograrlo, agregaría control del gobierno al del poder económico y mediático, generando gigantesco retroceso para nuestro proyecto político.

Avanzar en la tarea de democratización y descentralización participativa, hacer retroceder el desempleo, mejorar la seguridad urbana, dar un gran salto en el acceso garantizado a la salud, seguir mejorando la educación preescolar, básica y media, terminar con la discriminación económica en el acceso a la educación superior, establecer un sólido sistema de apoyo monetario y de reinserción

para las familias más pobres, incrementar su acceso a la vivienda, reformar solidariamente el sistema de pensiones, fortalecer el seguro de desempleo y los derechos sindicales y laborales, aumentar la infraestructura cultural, recreativa y deportiva en los barrios, consolidar la reforma a la justicia, regular las prácticas monopólicas y los servicios básicos para ponerlo a disposición de todos con tarifas equitativas, fortalecer la ética, eficacia y profesionalismo de los servicios públicos, defender los principios del multilateralismo y del derecho internacional, junto a la aplicación de una política fiscal que atenúa las fluctuaciones del crecimiento, son los elementos centrales que creemos consagrarán el éxito del gobierno del Presidente Lagos.

A. JOIGNANT: Entre los analistas políticos y los actores más sensibles a las variaciones de las correlaciones de fuerzas electorales, circula la idea — casi de sentido común— según la cual es el electorado de centro el que se encuentra en disputa, sin hacerse la pregunta elemental sobre las características del centro político. En todos los casos, predomina un afán y un proyecto de colonización del centro político, cuyos colonizadores serían la UDI, RN y la DC, dando por sentado que el «centro» existe por sí sólo, lo cual significa más o menos que es un «lugar» en el espacio político que cabe ocupar casi a la manera del uso del cuerpo en relación a un espacio físico. En realidad, se olvida que el ejercicio de «ocupación» de una, o de algunas regiones del eje espacial derecha-izquierda supone todo un trabajo político de puesta en forma de esas regiones, y en este caso del «centro», el cual no existe por sí sólo. Las regiones y posiciones sobre el eje sólo existen nominal y formalmente, adquiriendo grados variables de realidad en tanto los actores políticos, pero también los comentaristas y analistas del mundo político, las «encarnan», representan y simbolizan, y en cuanto los electores las habitan, lo cual abre toda una línea de reflexión sobre los usos (incluidos los abusos) del eje derecha-izquierda, el cual se ha vuelto en la política contemporánea mucho menos exigente. Es precisamente esa falta de sensibilidad ante los variados usos del eje y el desconocimiento de la sociología del electorado chileno (cabría hablar de electorados, en plural) que explica que existan percepciones sesgadas, estrategias políticas erradas y juicios electorales que carecen de corroboración empírica en la realidad por parte de un partido tan importante como la Democracia Cristiana, al insistir sin mediar demostración alguna en que el PPD habría penetrado su electorado (como si éste fuese «natural» y existiese invariablemente a lo largo del tiempo), en circunstancias que el análisis electoral de nivel agregado sugiere la ocurrencia de una erosión regular de la votación del partido de la flecha roja (primero en la forma de votos nulos y blancos en las parlamentarias de 1997, y en seguida mediante una fuga de votantes hacia la derecha, y particularmente hacia la UDI). No obstante, Adolfo Zaldívar ha seguido insistiendo en que es el PPD el que ha desplegado una estrategia de ocupación del centro, lo cual implicaría prácticamente una amenaza a la existencia de la Democracia Cristiana. ¿Cómo interpretar un discurso y una estrategia que me parecen completamente infundados, pero que inciden en la posibilidad (o imposibilidad) de reproducción de la Concertación(1)?

G.MARTNER: Esta coalición funciona con compromisos de acción común, especialmente el compromiso de gobernar juntos y, a su vez, mantener en el parlamento el apoyo a los gobiernos que se eligen juntos. Hay competencia entre los partidos, como también hay competencia al interior de los partidos, esa es la esencia de la democracia y, en consecuencia, para mí el hecho de que algún partido se complique con que otro partido le quiera competir, ya sea el espacio del centro o cualquier otro espacio, me parece que no tiene mucho sentido. A algunos partidos de la coalición les va mejor que a otros, dependiendo de las circunstancias, y en consecuencia unos y otros partidos de la coalición tienen que asumir los resultados del juego democrático, salvaguardando los compromisos esenciales: gobernar juntos, ofrecerle al país un menú de opciones dentro del marco común junto a un programa que a todos nos comprometa. Este tema de la percepción mecánica y esquemática de la conquista del centro debe considerar que en unas y otras encuestas la ubicación en la escala izquierda-centro-derecha sigue siendo relevante pero que alrededor de la mitad de los electores no se siente identificado con esa escala. Es evidente que hay un electorado que adhiere a personas, en este caso, candidatos a alcalde, a diputado, a senador, a presidente, y que tiene un voto ecléctico, que vota por candidatos de distintos partidos según el tipo de elección de que se trate.

Eso es algo que hay que asumir como tal y por lo tanto la supuesta posibilidad de especializar a unos y otros partidos en unos y otros electorados no es simplemente realista. La idea de que hay un partido que está destinado a monopolizar el centro no parece tener mucho sentido, parecen más importantes los temas y los estilos, tanto de los candidatos como de los partidos, para retener el voto «duro» de cada cual y ampliar su influencia al voto «blando».

Obviamente que ayudaría mucho un cambio en el sistema electoral, espacialmente un sistema electoral proporcional que, además de incorporar como corresponde a la representación parlamentaria a las minorías significativas, haría mucho más fácil la vida de la coalición en el sentido de que la percepción de que se puede ganar mucho o perder mucho cada vez que hay una elección obviamente que se vería disminuida. Pero como esto es evidente para la derecha, esta ha sido tenaz hasta ahora en no querer producir un cambio en el sistema electoral, aunque se le presente el mismo problema. Ahora, si cada partido declara rota la coalición o tiende a fraccionarla fuertemente para ver como le va en la elección siguiente y se piensa que eso puede tener algún sentido ... en verdad que es una equivocación. Lo que hay que asumir como Concertación es la unidad para gobernar y una oferta diversificada a los electores para que ellos diriman.

A. JOIGNANT: Pero en todos los casos predomina la sensación según la cual la Concertación se encontraría en «crisis». ¿Pero de qué exactamente estamos hablando cuando apelamos al calificativo de «crisis»? ¿Es una crisis propiamente coyuntural, lo cual induce a esperar pacientemente que desaparezcan los elementos perturbadores del presente? ¿O es una crisis naturalmente asociada a la usura provocada por una historia más bien larga de una coalición exitosa, tan exitosa que su propia misión originaria se habría extinguido por haberse cumplido la derrota de Pinochet y la transición lograda a la democracia? ¿O es una crisis que se explica por afanes presidenciales inevitablemente personales, en desmedro de los proyectos colectivos? ¿No participa también de esta «crisis» un tipo de vinculación más vertical que horizontal entre el Presidente de la República y los partidos de su coalición, mermando las lógicas de complicidad y cooperación política?

G. MARTNER: Más allá de las turbulencias, la Concertación mantiene entre otras cosas su vigencia porque sus tareas fundacionales no han concluido. Desde luego, porque parte importante de su gran objetivo de establecer instituciones plenamente democráticas y, a su vez, lograr grados sustanciales de cohesión social en Chile, no se ha logrado plenamente y esa misión permanece. En el segundo aspecto, el de la cohesión social, el desafío permanecerá creo yo por un largo tiempo. Lo que ocurre es que debe producirse una clarificación respecto a la necesidad de mantener la coalición justamente para impedir que la derecha gobierne y provoque un grave retroceso social y cultural, y mantenerla de un modo en que cada partido compita democráticamente por los votos de los ciudadanos. Ahora, si en la Democracia Cristiana se generó la percepción de que mantenerse en la coalición le significa una contracción política, eso es un asunto a tomar en cuenta. Si en socialistas, pepedés y radicales se instalara la percepción de que su futuro es de pérdida de influencia, habría también reacciones de búsqueda de nuevos caminos de expansión de su presencia electoral. En una coalición hay una tensión permanente a propósito de quien resulta ser socio menor o socio mayor. Eso es lo que hay que admitir, eso sí superando la idea de que se es socio mayor o socio menor por secretaría. Eso lo determinan los ciudadanos, en un contexto de competencia democrática donde se valida la capacidad de unos y otros de convencer o no a los electores. Esa es la discusión en la que está hoy la Concertación y mi punto de vista es optimista sobre esto. Creo que a la larga se ‘ van a imponer las reglas del juego democrático. El que no lo entienda así va a ser penalizado

A. JOIGNANT: Al tenor de las controversias hoy históricas que han tenido lugar al interior de la Concertación, especialmente en el marco de la, mal llamada disputa entre «autoflagelantes» y «autocomplacientes», y a continuación de la ácida polémica suscitada por la publicación del documento ‘ «La hora de la verdad» junto a Carlos Ominami(2) en el año 2000, tengo la convicción que en el fondo lo que algunos han tratado de hacer es rechazar la idea de que finalmente la Concertación se transformó en los hechos en una clásica coalición de centro-izquierda. Por razones que aún no comprend totalmente, Eugenio Tironi y José Joaquín Brunner (para citar sólo a do

expresiones características de este «grand refus») insisten en cancelar sin más la pertinencia del eje derecha-izquierda con el fin de pensar la génesis transformación de la Concertación, y se resisten a aceptar lo que me parece elemental a la luz de lo que han sido algunas de las principales coaliciones de centro-izquierda europeas en los tiempos recientes, especialmente en Italia (Olivo) y Francia (la Izquierda Plural), independientemente de los fracasos electorales involucrados: la transformación de alianzas electorales en coaliciones complejas en donde coexisten culturas e identidades muy distintas en el marco común de un programa de reformas de progreso, cuyo alcance y profundidad dependerán de las hegemonías implicadas y de las correlaciones de fuerza propias de coyunturas políticas relativamente largas como han sido los sexenios presidenciales en Chile después de Aylwin. Ciertamente, cabría hacer toda una reflexión sobre el fracaso de estas coaliciones complejas, pero en todos los casos los gobiernos de coalición europeos (la mayor parte del tiempo, cabe señalarlo, en el marco de regímenes parlamentarios, lo cual debería incitar a abrir una polémica culta y desapasionada sobre las formas del régimen político en Chile) se fundan en culturas e identidades que se reconocen simultáneamente en la diferencia y se piensan como parte de causas comunes, y no sólo en transversalidades que terminan siendo ingenuas al hacer caso omiso de lo que cada cual legítimamente es, sin olvidar el apego pragmático a la racionalidad del sistema electoral cuyos incentivos en Chile hacen que los distintos socios permanezcan juntos. Esta opción por coaliciones identitarias l', en ese sentido, auténticas, puede ser retroalimentada y repensada de modo aún más ambicioso a la luz de los esquemas multiculturales que organizan una sociedad como la norteamericana, con el fin de echar luces sobre los partidos y las coaliciones —identitarias- que éstos forman por la vía de la analogía. En tal sentido, un ejercicio político preliminar debiese consistir en reflexionar serenamente sobre las diferencias que prevalecen al interior de la Concertación, más allá del proyecto y de las misiones originarias, con el fin de que éstas se expliciten y, casi a la manera de un notario, se autentiquen para en seguida reconstituir un sentido común al interior de la coalición.

G. MARTNER: Las diferencias tienen que ver en primer lugar con culturas e historias políticas distintas. Sin perjuicio de que en su discurso de despedida del Senado en 1958 Eugenio González ya entonces afirmaba la necesidad de unificar a las fuerzas que él llamó de «avanzada social», no es menos cierto que estas fuerzas fueron siempre competitivas y tal vez lo más expresivo de eso fueron las elecciones del año 1958, con las candidaturas presidenciales de Luis Bossay, Eduardo Frei Montalva, y de Salvador Allende, que expresaron la identidad política respectiva del Partido Radical, del Partido Demócrata Cristiano y del entonces FRAP. Las elecciones de 1964 y 1970 se tradujeron también en candidaturas presidenciales diferentes de las fuerzas de «avanzada social». Aunque en las candidaturas de Allende y de Tomic en 1970 existía bastante sintonía programática, hubo también confrontación electoral. Posteriormente, junto a los acuerdos que se constituyeron en las llamadas garantías constitucionales en 1970, que permitieron la elección del Presidente Allende en el Congreso Pleno con el apoyo de la DC, la confrontación fue muy fuerte en el periodo de la Unidad Popular. Entonces hay culturas políticas distintas, historias distintas que están ahí. Los propósitos comunes, sin embargo, también se construyeron con la misma fuerza y realidad en la lucha contra la dictadura y en los acuerdos para darle gobierno a Chile una vez que se recuperó la democracia.

Pero las diferencias de culturas políticas persisten. Quiero mencionar una primera, a propósito de lo que se denomina en Chile, a mi juicio impropriamente, la agenda valórica (impropriamente porque los valores no sólo tienen que ver con la moral sexual y la regulación de las rupturas familiares), llamémosle en algunos asuntos culturales de gran importancia. El socialismo chileno, el radicalismo y el PPD, tienen una agenda cultural distinta que la del Partido Demócrata Cristiano, y especialmente en lo relativo a los temas del divorcio, el aborto terapéutico y la laicidad, aunque en buena hora con transversalidades en el tema del divorcio, pues la Democracia Cristiana ha declarado que ese es un tema de conciencia y en su seno existen posturas distintas, como también en el propio Partido Socialista se expresa la sensibilidad de la Iglesia Católica. Pero convengamos que es una expresión que se respeta entre nosotros, pero que es muy minoritaria.

En la cuestión del aborto, hay posiciones más polarizadas. Aunque no se ha discutido en profundidad

el tema, el Partido Socialista, el Partido Radical y el P.P.D. han manifestado su cercanía con la idea de autorizar legalmente el aborto terapéutico y eso constituye una diferencia de opiniones con la DC.

En los temas de la educación, el bloque de izquierda democrática tiene una mayor preferencia por una educación laica, pública, constitutiva de una idea de construcción de Nación, mientras en la Democracia Cristiana hay una mayor insistencia en la llamada libertad de enseñanza, con presencia fuerte de la educación privada de tipo católico.

No es que en el Partido Socialista haya un rechazo a que exista la educación religiosa, pero circunscrita y con predominio de la educación pública y laica. Ese es otro campo de diferencia, que sin embargo no se ha constituido hasta acá en posturas contingentes polarizadas que impidan construir una agenda común de reforma a la educación.

Luego, me atrevo a decir que si las diferencias de tipo cultural son más importantes, en lo económico-social no están tan estructuradas partidariamente, con excepción del PS.

En la Democracia Cristiana hay personas que son partidarias de una fuerte intervención del Estado, como hay personas que son totalmente contrarias a ella y eso se ha manifestado a propósito de las empresas públicas, por ejemplo en la discusión sobre la privatización de las empresas sanitarias, en donde en el caso del ex presidente Frei Ruiz-Tagle hay una opción por privatizar las empresas sanitarias y en el caso del PS y de sectores DC una idea de mantenerlas en el sector público o en último caso concesionar los derechos de explotación para este servicio tan importante. De hecho el Presidente Lagos tomó la decisión, como se sabe, de suspender la privatizaciones y de sustituirlas por el concesionamiento de este tipo de servicios públicos. Pero convengamos que también hay en el mundo PPD y socialista algunas expresiones muy minoritarias que son más bien partidarias de una intervención mínima del Estado y de una opción por el liberalismo económico.

Hay múltiples temas en lo económico y social, no sólo a propósito de las empresas públicas, sino también respecto al tamaño del Estado, en donde hay una preferencia mayoritaria por la satisfacción de necesidades colectivas a través de un mayor gasto público en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, en pensiones, en transferencias a los más desposeídos y vulnerables, y otros que están más cerca de las posiciones de la derecha en la materia, lo que también constituye una diferencia, pero como digo no sería justo pensar que esto se acota partidariamente. Yo diría sí que el Partido Socialista es bastante homogéneo desde el punto de vista de reivindicar un rol más fuerte para el Estado en el desarrollo.

En Chile tenemos una carga tributaria del orden del 17% del producto, la que es baja en relación con países comparables de desarrollo comparable, como lo ha subrayado el Ministro de hacienda, Nicolás Eyzaguirre. En el Partido Socialista hay una opinión generalizada en el sentido de pensar que mientras más se incrementa el tamaño de nuestra economía mayor necesidad existe de fortalecer los servicios públicos y extender la provisión de bienes públicos por el Estado.

Una pequeña referencia: a fines del siglo XIX, en el contexto de la Escuela Económica Alemana, se estableció lo que se conoce como la ley de Wagner. Mientras más se desarrollan los países, tiende a aumentar el gasto público a una tasa superior al crecimiento económico, primero a propósito de las infraestructuras, luego de la educación y luego de la cobertura de mínimos sociales y de los riesgos sociales en salud, pensiones y desempleo, en lo que constituye el Estado de Bienestar. Esta es por lo demás la historia económica del siglo XX, no sólo en Europa donde fue clara y nítida la expansión del Estado de Bienestar, especialmente después de la post-guerra, sino que también en Estados Unidos, especialmente a partir de la respuesta rooseveltiana a la crisis de los años 30 con la conformación de un Estado de Bienestar de menor volumen proporcionalmente a la economía que en Europa, pero ciertamente con un volumen más amplio que en Chile.

Entonces, hay una diferenciación a propósito de este tema al interior de la coalición. El Partido Socialista es claramente partidario de construir un estado social más amplio y en el resto de la coalición hay opiniones mucho más diversas, incluyendo la magnitud de las políticas macroeconómicas anticíclicas, y esto ha dado lugar a que haya un debate necesario al interior del conglomerado.

Agreguemos también que hay diferencias en política internacional. Hay una tendencia, especialmente del Partido Socialista, a darle mucho mayor valor, mucho mayor proyección estratégica, a una articulación con los países latinoamericanos y especialmente una articulación con el MERCOSUR, que se constituya como base de la inserción política de Chile en el mundo. Todos compartimos la necesidad de inserción en los mercados mundiales mediante acuerdos con Europa, con América del Norte y con el espacio del Asia-Pacífico, pero una parte de la coalición tiene una preferencia mucho más clara por la articulación con Estados Unidos sin mirar a América Latina y del Sur. Ahora la historia se ha venido desenvolviendo de un modo en que esta discusión no ha sido polarizadora, porque a partir de la década perdida de los años 80, y de la regresión económica en los años 90 en muchos países de América Latina, con una fuerte agravación de la crisis en Argentina, en algún sentido en Brasil y desde luego en el mundo andino, han hecho que la perspectiva de la opción latinoamericana preferente ha tendido a perder espacio por la fuerza de los hechos, aunque la llegada al poder de Lula y Kirchner y la probable victoria de Tabaré Vasquez permite darle un nuevo impulso progresista a esta perspectiva.

Pero no escondo que hay opciones estratégicas que son distintas y que se expresaron también en la crisis de Iraq, en donde la postura independiente respecto a EE.UU. tuvo partidarios entusiastas y otros que no lo fueron tanto.

Yo resumiría en esos aspectos las diferencias: unas muy importantes en el ámbito cultural, otras muy importantes en lo económico-social e internacional, pero que son más transversales. Sin perjuicio de que hay, como te señalé, una diferenciación propiamente política, en el sentido de que unas y otras fuerzas buscan el liderazgo de esta coalición que representa a la mitad del país. Reitero que eso constituye una legítima disputa política democrática respecto a quien es dentro de la coalición el que tiene mayor apoyo de los ciudadanos. Esa es una disputa propiamente política que a) existe; b) es legítima y c) es indispensable para la propia vigencia de la coalición y para la buena salud del sistema democrático. No debe ser un factor de irritación ni de dispersión.

UNIDAD Y DIVERSIDAD

A. JOIGNANT: Permíteme precisar este asunto de las diferencias y cómo éstas se organizan al interior de una coalición como lo es la Concertación. Si uno razona primero que nada a partir y sobre las culturas involucradas en todas estas diferencias y se va más allá de lo que cada partido es, sólo se puede concluir en un fascinante arcoiris de culturas, identidades y orígenes al interior de la coalición. Recién lo señalabas a propósito de la génesis del Partido Socialista, en donde coexisten marxistas de los más variados tonos, socialdemócratas y una fracción liberal muy minoritaria (casi reducida a Enrique Correa y a mi buen amigo Oscar Guillermo Garretón). Reconozcamos además que buena parte de la «base» socialista reivindica el marxismo (curiosamente oficializado como «crítico» hace poco tiempo por el PS) casi a secas, sin mediar justificación política e intelectual alguna, lo que equivale a decir que el marxismo tiende en este caso a ser rescatado por una comprensible necesidad de preservación de la identidad política más elemental a través del uso de un cierto tipo de retórica. Y para qué hablar de la Democracia Cristiana, un fascinante partido en donde también coexisten distintas sensibilidades y culturas, desde una muy minoritaria (aunque influyente) fracción liberal (Alejandro Foxley, Edgardo Boeninger y buena parte de los economistas democratacristianos, con la excepción notable de Ricardo Ffrench-Davis), hasta sectores comunitaristas cuya expresión más interesante es aquel grupo que se vincula al debate filosófico norteamericano (Sergio Micco y Eduardo Saffirio), pasando por aquella ancha franja socialcristiana que para los efectos de comparación con los socialistas sería la equivalencia funcional de los marxistas, en la medida en que encarnan culturas originarias y masivas, con toda la heterogeneidad que ello implica. Y algo no muy distinto ocurre, aunque con menos nitidez, en el radicalismo, en la medida en que se encuentran enfrentados a dos crisis locales: por una parte la sucesión del líder histórico que era Anselmo Sule y, por la otra, la búsqueda de una salida política a la crisis interna provocada por el escándalo de las «coimas». Pero en todos los casos, resulta evidente constatar la presencia al interior del PRSD de un amplio segmento socialdemócrata, tal vez en un estado muy intuitivo y menos nítido, pero que debiese servir de base

de sustentación para la construcción de sus propias estrategias políticas. Muy distinto y problemático parece ser el caso del PPD. En primer lugar, porque hay en él una definición explícita de acuerdo con la cual se trataría de un partido sin ideología ni doctrina, carente de historia larga, lo cual lo sitúa expresamente fuera de todo marco cultural e identitario. En efecto, el PPD es literalmente un partido de inmigrantes, sin otro componente histórico que la inmediatez del presente, en donde predomina una relación activa con el futuro a partir de una vinculación pasiva, crítica y frustrada con el pasado, sea éste individual o colectivo. En tal sentido, puede entenderse la retórica pepedeísta del partido «sin fronteras», no muy lejano al «catch all party», capaz de encarar temas livianos o pesados de coyuntura sin tener que asumir las inercias del pasado, y sin experimentar la necesidad de explicitar y justificar el lugar político-cultural desde el cual se habla. Y es precisamente este último aspecto el que plantea un fuerte problema, dificultando las relaciones de coalición y cooperación con tres partidos históricos como el PS, el PRSD y la DC. En efecto, es legítimo plantearse la pregunta del espacio valórico y cultural desde el cual un partido como el PPD se posiciona en el mundo social y político. ¿Qué sensibilidades se encuentran involucradas? ¿Se trata de un partido liberal o verde? Y si es así, ¿por qué adscribir a la Internacional Socialista? ¿O se trata de un partido socialdemócrata que se resiste a decirse y reconocerse como tal? Sin pretender hacer un juicio hiriente o belicoso, los partidos que reivindican abiertamente una historia, identidades y culturas políticas son organizaciones que se pueden mutuamente reconocer, desde la diferencia natural hasta la convergencia políticamente construída. Por lo mismo, reconociendo todo el derecho al PPD en lo que se refiere a sus definiciones políticas, es importante tomar nota de la asimetría de condiciones políticas e históricas entre los partidos de la Concertación desde el punto de vista de lo que cada cual es o pretende ser, porque definitivamente no es lo mismo reivindicar culturas, identidades e historias más o menos largas, y hacer tabula rasa del pasado con el fin de encarar «sin prejuicios» el presente o el futuro.

G. MARTNER: Jorge Heine en un artículo graficaba la situación que tú evocas señalando que el PPD había tenido primero un presidente liberal, me refiero a la etapa post Lagos, con Jorge Schaulsohn, luego un presidente socialdemócrata, con Sergio Bitar, y luego un presidente verde, con Guido Girardi. La ciencia política reconoce a este tipo de partidos que buscan electorados muy diversos como «partidos atrápalo todo».

Ahí hay una novedad en el campo político chileno que desde los códigos de los partidos históricos genera una cierta distancia. Pero en democracia es legítimo que así sea.

Una coalición amplia que tiene en la definición democrática su base esencial de funcionamiento y al mismo tiempo busca combinar el crecimiento económico con la cohesión social, puede recoger amplias y diversas expresiones políticas, y eso está muy bien. Ahora, ¿cómo una coalición puede contener estas diversidades sin demasiados factores de crisis? En eso estamos, y el tiempo dirá.

¿Como se hace, por su parte, al interior de un partido mantener la conglomeración de diversidades a partir de una definición a-ideológica y de intervención mediática dispersa como fundamento de la acción política? ¿Cuan coherente puede ser una acción política con ese presupuesto? Me parece que está por probarse y, mientras tanto, el PPD es un partido que cada tanto enfrenta crisis por esta razón, con momentos de mucho éxito y momentos de grandes cuestionamientos.

A. JOIGNANT: ¿La Democracia Cristiana también?

G. MARTNER: También, pero la Democracia Cristiana tiene una historia que hace que la discusión se remita a un cuerpo identitario de origen. Hay unos ciertos parámetros a partir de los cuales convive una diversidad de opiniones. Ahora para uno es difícil, e imprudente, opinar sobre un partido distinto al que uno pertenece. Yo creo que lo que cabe es más bien respetar las opciones de cada cual y sólo reclamar la coherencia política unitaria que uno procura tener en su propia acción. Ello supone en las disyuntivas centrales poner el interés común por sobre el interés particular -en este caso el de la coalición como sustento de la reconstrucción democrática y progresista del país y de la preservación de la capacidad de mantener en minoría a la derecha-y segundo, no caer en la deslealtad política. Parte de las tensiones que se han vivido tienen que ver con conductas de este tipo. Pero yo soy optimista respecto de la capacidad de los unos y los otros de poner por delante el interés común

en beneficio del progreso democrático, social y cultural de Chile.

A. JOIGNANT: A propósito de las características del PPD a las que aludes, y sin haber leído la columna de Heine, no puedo dejar de decir que la clasificación que este distinguido cientista político hace, particularmente cuando define a G. Girardi como un presidente verde no me hace ningún sentido, entre otros motivos porque los propios partidos verdes (por ejemplo en Europa, y especialmente en Alemania, tal como se desprende de los trabajos de Kitschelt en los noventa) poseen ideologías, doctrinas y sistemas culturales que los llevan incluso a escindirse, lo cual definitivamente no se aprecia en el PPD. Se puede incluso sostener que esta autoapelación de partido «moderno», tan característica del PPD, me produce un dejo de molestia y una natural desconfianza e incredulidad, puesto que todo objeto político o social que se dice «moderno», «emergente», o simplemente «neo» muchas veces disimula tras sus prácticas mediáticas profundas continuidades políticas con el pasado y, por tanto, con la historia. Sinceramente, no logro entender cómo es posible siquiera imaginar políticas o discursos sobre lo social sin la intermediación de elementos de cultura y pedazos de sistemas ideológicos (los cuales pueden incluso dar lugar a hibridaciones eventualmente muy interesantes), como si fuese posible hablar o hacer política desde el vacío o la nada intelectual: no reconocerlo equivale un poco a pensar que la relación entre un partido y los «problemas» de la sociedad no sería muy distinta a la manera de cómo un individuo común y corriente se relaciona con la materia bruta, vale decir a través de una relación de exterioridad totalmente desocializada y desculturizada. Ocurre que uno siempre enfrenta los «problemas» y la «realidad» desde cierto punto de vista (siempre he encontrado muy sugerente el precepto de De Saussure en lingüística cuando éste afirma que es el punto de vista el que crea el objeto, y no al revés), el cual a su vez se constituye como tal en contextos políticos, sociales y culturales muy diversos, pero que le permiten sostener intelectualmente una posición (por muy mediocre que ésta pueda ser apelando a algún elemento que se encuentra depositado en lo que Berger y Luckmann llaman los «stocks culturales de la sociedad»). Me parece que aquí reside una parte de los malestares al interior de las élites socialista democratacristianas y radicales en relación al PPD, y que participan de las dificultades de la Concertación.

Pero dirijamos ahora la mirada hacia la Democracia Cristiana. Hace algún tiempo atrás, Patricio Aylwin abogó, en el marco del lanzamiento de un libro editado por un centro de estudios ligado al radicalismo, por la necesidad de sincerar las relaciones al interior de la coalición, en la medida en que buena parte de los problemas de la Concertación se originan en percepciones mutuas de los aliados a menudo muy sesgadas. Comentando la desafortunada frase de Adolfo Zaldívar según la cual la Concertación se habría terminado, Aylwin, sin compartir esas palabras, sí reconoce que éstas tienen el mérito de explicitar una parte de los malestares de los democratacristianos. Es así como, según Aylwin, los democratacristianos se sienten amenazados por los actores aliados, concretamente por el mundo PPD, PS y PRSD, en la medida en que sobre todo a la hora de enfrentar juntos las elecciones, la Democracia Cristiana no estaría recibiendo el mismo trato que en un período anterior de la historia de la alianza, el cual coincidía con una DC erigida en partido mayoritario y hegemónico. Al escucharlo, me pareció un juicio importante, no obstante discrepar con él, puesto que bien se sabe que la política también opera sobre la base de percepciones, y no necesariamente a partir de juicios fríos y racionales. ¿Cómo corregir percepciones sesgadas en el marco de un ciclo de crisis de la Concertación de intensidad variable según las coyunturas? ¿Cómo cultivar la diferencia sin poner en cuestión el conjunto llamado Concertación, y sin producir señales de amenaza para la existencia de uno o algunos socios?

G. MARTNER: Primero, la adhesión ciudadana a uno u otro partido, por mucho que trabajemos en coalición, es lo que es. El porqué unos u otros partidos logran crecer en el tiempo y porqué otros partidos declinan, tiene que ver con la capacidad de responder a los desafíos que la sociedad va planteando en cada tiempo histórico a las fuerzas políticas. Las elecciones en Chile son frecuentes, la posibilidad de contactarse con los electores por lo tanto son sistemáticas y, en consecuencia, cabe asumir la actitud democrática de entender que si uno tiene menos adhesión por parte de los electores

no es culpa de los electores sino que es culpa de uno, como fuerza política, al no tener un mensaje atractivo o no saber transmitirlo suficientemente. También en el contexto de una coalición que se define a sí misma como una que procura establemente en el tiempo ser una alternativa de gobierno, es evidente que tiene que haber un cuidado de una y otra fuerza política por las otras fuerzas políticas que forman parte de la coalición. Si en un momento dado el partido que sigue siendo el partido más importante de la coalición, en este caso el Partido Demócrata Cristiano, ha visto disminuido su electorado desde la derecha, entonces parece del todo lógico que las otras fuerzas políticas tengan lealmente el cuidado de permitirle, sin romper la naturaleza de la coalición, a ese partido tener su mensaje, su discurso, su búsqueda de impactar en el electorado que transita desde el centro a la derecha y viceversa. Al mismo tiempo, si desde la izquierda extra-parlamentaria se producen fenómenos de migración de su electorado hacia las fuerzas de izquierda de la concertación, eso no tiene que ser un factor de preocupación del partido de centro. Esas serían las dos reglas que me atrevo a enunciar en este sentido: uno, el respeto por las adhesiones ciudadanas tal como éstas se producen; dos, la cautela de unos partidos con otros respecto a su capacidad de preservar sus electorados naturales para hacer viable el carácter mayoritario de la coalición y hacerla capaz de reproducirse en el tiempo sin erosiones desde la derecha y sin erosiones desde la extrema-izquierda, en el contexto que te mencioné de que una parte muy significativa del electorado se determina más eclécticamente o simplemente no participa.

A. JOIGNANT: Todo indica que la coalición no va a resolver de manera definitiva sus diferencias de fondo en el corto plazo, de no mediar un trabajo refundacional que lleve a identificar y consensuar nuevas misiones y un renovado horizonte histórico. Al respecto, el ex Presidente Aylwin tuvo el mérito de proponer hace algunos meses una interesante idea, según la cual lo que cabría realizar es una «convención de rectificación programática». Curiosamente, fue una idea públicamente expresada por un ex Presidente de la República, pero que ha tenido hasta ahora cero impacto político. Como si la idea jamás hubiese sido formulada, en circunstancias que esta «convención», o como quiera que se le llame, debiese ser más que un evento espectacular la conclusión de un proceso previo, metodológicamente conducido y encauzado, masivamente participativo y abierto hacia las organizaciones de la sociedad civil y los intelectuales que la habitan, con el fin de producir efectos políticos de envergadura al interior de una coalición que, definitivamente, ya no será la misma que antes, no obstante la hipotética permanencia del nombre y, con y seguridad, de los mismos socios. En tal sentido, el proceso en el cual estoy pensando se asemeja más a lo que en Francia se conocen como «estados generales», los cuales provienen de la tradición revolucionaria francesa y que, son procesos relativamente prolongados de deliberación en espacios locales, regionales, sociales, profesionales, etc(3), cuya finalidad es la construcción racional, participativa y organizada de acuerdos sólidos, de legitimidad indiscutible porque en el origen se encuentra la voluntad ilustrada de todos.

G. MARTNER: Cuando una coalición como la Concertación pierde su basamento en ideas y propuestas, se transforma en un mero acuerdo electoral entre partidos que le hace perder el atractivo que ha tenido frente a los ciudadanos. Enfrentamos más ampliamente el miedo al otro, con un extendido temor a la delincuencia más allá de los indicadores objetivos; el miedo a la indefensión económica dada la insuficiencia de los sistemas de protección social y el miedo al futuro por la carencia de un sentido de pertenencia a un proyecto común de país, una pérdida de sentido, que entre otras cosas se traduce en la extensión de la droga y en una debilidad del capital social expresado en carencia de confianza, de sentido de reciprocidad y en un individualismo negativo que se refugia en el entorno inmediato, como lo ha subrayado Norbert Lechner(4). Realizar un nuevo y amplio debate programático es una excelente idea en tanto y cuanto permita la expresión desde la base de los actores sociales y políticos. Seguramente habrá ahí una dimensión de balance de más de una década de gestión gubernamental y de expresión de malestares y frustraciones diversas, pero creo que es indispensable asumir que la coalición debe volver a sus adherentes, a sus militantes, a la sociedad en su conjunto, para discutir en profundidad los temas que tiene entre manos en el presente y en la proyección hacia el futuro. No se trata necesariamente de discutir a fondo un proyecto de país

de largo plazo, porque eso puede ser más propio de cada partido, pero sí un conjunto de acciones para los últimos dos años del Presidente Lagos y para el período presidencial siguiente.

No olvidemos eso sí que los partidos actúan en la contingencia y están constreñidos por el calendario electoral. Tendremos en el 2004 elecciones de alcaldes y concejales. En consecuencia, la coalición tendrá, junto al debate programático que aludías, que hacer el ejercicio de determinar sus mejores candidatos comuna por comuna. Ese va hacer un gran ejercicio de la esfera propiamente político-partidaria y no me cabe duda que va a llegar a puerto. Al mismo tiempo, deberá expresarse, junto con la unidad de la coalición en candidaturas comunes a alcaldes, la diversidad de la identidad y las propuestas de cada partido a nivel de los concejales.

La etapa siguiente, muy posiblemente a partir de una recuperación significativa de alcaldías que en la última elección cayeron en manos de la derecha (en algunas la derecha logrará avances, pero globalmente es muy posible que se genere un vuelco hacia gestiones locales encabezadas por concertacionistas en octubre del año 2004) se va a gatillar la dinámica, el clima, la subjetividad para enfrentar de manera muy positiva la puesta en minoría de la derecha en la próxima elección presidencial. Lavín es un candidato que tiene fortalezas pero también múltiples debilidades. Yo soy un gran convencido de que vamos a derrotar a la derecha y que Lavín no será presidente de Chile.

Para tener una secuencia coherente en el tiempo, nosotros como socialistas creemos que el mecanismo de resolución de las opciones que legítimamente cada partido tiene para poner a hombre y mujeres suyos a disposición de la Concertación para la candidatura presidencial única, debe resolverse democráticamente -en el marco del debate programático que mencionábamos- como se hizo en la definición de 1999 hicimos con una primaria democrática, abierta a todos y cada uno de los ciudadanos del país.

Nosotros somos firmes defensores de que la coalición dirima la legítima presentación por cada uno de sus partidos de liderazgos presidenciales y sus respectivos énfasis programáticos de cara a los ciudadanos. Lo que no es posible es que un grupo de dirigentes, por representativos que sean, sustituyan una decisión, la presidencial, que cabe tomarla a los ciudadanos. Eso los socialistas lo rechazamos de plano.

A. JOIGNANT: Es evidente que desde una perspectiva estrictamente electoral, el meollo de esta discusión es si la Concertación se encuentra en condiciones de reproducción para un cuarto gobierno, y si podrá llegar unida a la próxima contienda presidencial. Es así como a este respecto algunos hablan (hablamos) de la necesidad de refundar a la coalición, incluyendo su nombre y sello público, mientras que otros más recientemente han optado por la vía' corta y eufemística de la «renovación», de la «corrección» de estilos o de 1

«rectificación» de contenidos. De avanzar hacia rectificaciones que no será otra cosa que meros eufemismos para nombrar un problema real de grande dimensiones, la Concertación requiere abandonar buena parte de sus misionerías originarias y dotarse de horizontes históricos mínimos, lo cual no presupone ningún cambio políticamente dramático, salvo el reconocer que el contexto histórico que le dio origen dejó de existir. Pero mucho más complejo, ambicioso y apasionante es la empresa refundacional de la coalición, que en ningún caso implica flagelarse reconociendo errores y registrando fracasos, sino por el contrario asumir logros y conquistas de tal magnitud que obligan a transformaciones coalicionales más radicales. Esta última alternativa no puede lograrse en un milagroso evento catártico de un fin de semana. Como lo señalaba anteriormente; debiese ser el fruto de un proceso político más bien largo, sobre el cual debiese erigirse el futuro candidato presidencial a continuación de una primaria plenamente abierta y competitiva, quien tendrá la misión de materializar un programa de nuevas reformas de cara al Bicentenario de Chile. En tal sentido, mi propuesta es mucho más completa y ambiciosa, y probablemente por lo mismo más irrealista. Por lo tanto, ¿estamos exactamente hablando de lo mismo cuando evocamos la figura corta de la «renovación» o de la «rectificación» programática, que cuando hacemos referencia a una idea política más larga llamada «refundación»?

G. MARTNER: Estamos hablando del destino del país. Estamos hablando de que abrirle las puertas

a la derecha por falta de entendimiento entre los partidos de la Concertación es abrir la puerta a la regresión social, a la intolerancia cultural, a un tipo de gobierno autoritario y defensor de las minorías privilegiadas, disruptivo del progreso democrático, social y cultural que una nación moderna debe cautelar. Eso es lo está en juego.

Yo no creo que haya que enredarse en la retórica. La Concertación es un pacto a plazos fijos entre cuatro partidos políticos que se renueva en el tiempo. Esos cuatro partidos políticos son libres de reconducir ese pacto o no hacerlo, por cierto en nuevas condiciones y construyendo una nueva esperanza de progreso, y, por lo tanto, me da lo mismo como le llamemos a la primera opción; de lo que se trata, por lo menos desde el punto de vista socialista, es de reconducir el pacto de la Concertación para darle gobierno progresista a Chile en sus desafíos de inicios del siglo 21, en el ámbito local primero, en el ámbito parlamentario y gubernamental después. La postura mía es reconducir el pacto dado el conjunto de tareas que debe seguir realizando en Chile: la profundización democrática, la ampliación de los funcionamientos socialmente justos y la promoción de las libertades de los ciudadanos.

Se trata desde el punto de vista político partidario, más adelante abundaremos sobre los aspectos programáticos, que la coalición tenga candidatos únicos a alcaldes y candidatos diversos a concejales que van a trabajar una vez que son electos con ese alcalde en función de un programa de desarrollo de la comuna construido participativamente; que la coalición tenga un candidato presidencial único y que tenga una lista parlamentaria única. Ese es el pacto político, además del programático, de la coalición, donde los partidos tenemos el deber de cumplir con nuestras responsabilidades. Ese es el pacto que está en discusión: como todo pacto, tiene momentos de tensión y momentos de resolución positiva. Si hay una resolución negativa, cada cual asumirá sus responsabilidades. El Partido Socialista, en todo caso, muy consistentemente, está por reconducir este pacto con esas características.

Al mismo tiempo, existe una relación particular y especial del Partido Socialista con el PPD y el Partido Radical, dada su común adscripción a una visión progresista laica y de izquierda democrática. Entre estas fuerzas creo que tiene todo el sentido del mundo plantearse tener un pre-candidato presidencial único, candidatos a parlamentarios comunes, precandidatos a alcaldes comunes y candidatos a concejales que expresen la diversidad. Esos son los componentes políticos que con entera transparencia frente a los ciudadanos la coalición tiene el deber de producir y, una vez producidos, generar el conjunto de acciones eficaces, consistentes y persistentes para asegurar el éxito del gobierno del Presidente Lagos y derrotar una vez más a la derecha. Están todos estos elementos perfectamente en condiciones de ser cumplidos. No observo que la palabra clave en esto, que es la palabra camino propio, esté siendo adoptada por ninguna de las fuerzas políticas de la coalición, y ciertamente no por el Partido Socialista. Y no observo que nadie deje, aprendiendo de nuestros errores, muchos de ellos profundos, de estar comprometido con un aumento de la calidad de la acción política y de la calidad de la representación de las aspiraciones de los ciudadanos. Está sólo en nuestras manos tener éxito o fracasar.

Autocomplacientes y autoflagelantes

A. JOIGNANT: En una entrevista publicada hace algunos meses por el semanario «Siete+7», José Joaquín Brunner afirmaba —en mi opinión con mucha miopía y con un dejo de desesperación— que lo que se encuentra en juego para la Concertación es dirimir definitivamente un viejo, y a estas alturas añejo conflicto al interior de la coalición: la mal llamada controversia en «autoflagelantes» y «autocomplacientes». En esa entrevista, Brunner señala de modo demasiado elemental e históricamente a destiempo si se consider las controversias recientes que se han dado al interior de la Concertación, que lo que la coalición debe hacer es reconocer sus logros, y optar por un camino «moderno» al cual él asocia un significado liberal-progresista (que, por ser legítimo, no agota el abanico de opciones disponibles). Es más, además de tener la completa convicción de que ese es un tipo de controversia totalmente superada (si es que alguna vez fue pertinente), optar por una estrategia política exclusivamente liberal equivale a atentar contra la propia sociología de la Concertación, en la medida en que los «liberales» (circunscribiendo el alcance de este término a una cierta concepción del

tratamiento económico del infortunio social por la vía de intervenciones públicas mínimas y focalizadas) constituyen un universo totalmente minoritario, tanto al interior de las élites concertacionistas como respecto del mundo social cuyos intereses la Concertación representa. De modo que reactivar el debate «autoflagelación» versus «autocomplacencia» no pasa de ser un mero ejercicio polémico...

G. MARTNER: Yo creo que el debate real al interior de la coalición es entre liberales bastante poco progresistas y fuerzas progresistas de diversas inspiraciones. ¿Por qué creo que nuestros autodenominados liberales criollos son bastante poco progresistas? Porque el liberalismo, si lo entendemos en su acepción política, debiera apreciar el hecho que haya debate público y en una coalición muy amplia que haya diversas posturas, pues de la diversidad nace el progreso, y no tomar partido de un modo excluyente y descalificatorio, como desgraciadamente suele hacerlo José Joaquín Brunner frente a los que no compartimos la tesis del Estado mínimo y el mercado máximo. Este debate sobre autocomplacientes y autoflagelantes, que es una expresión más bien periodística, se originó como te mencioné en un documento que fue promovido por José Joaquín Brunner, Antonio Cortés Terzi y otros desde el gobierno de Frei Ruiz Tagle en una lógica vanamente disciplinaria y luego hubo dos respuestas de distintas gentes a ese primer documento.

Ahora, la actitud autocomplaciente es una actitud que en la vida y en política no conduce a mucho. El dormirse sobre los laureles, es una mala actitud, puesto que inhibe la innovación, la creatividad, el avanzar a partir de lo ya adquirido. Por tanto, yo personalmente, por lo menos, me considero ajeno a una actitud autocomplaciente. Yo tiendo a ser una persona que cree que el pensamiento para ser eficaz debe ser crítico y que mejorar el mundo en que se vive supone una actitud crítica frente a lo que se hace. Y no para autoflagelarse, nuevamente me remito a la expresión periodística, porque la autoflagelación es para las personas que se hacen daño, se golpean a sí mismas. Es fuerte la palabra, flagelarse a sí mismo. Francamente, en lo que a mi respecta, no puedo ser más ajeno a esto de la autoflagelación. Por el contrario, creo que todo el mundo tiene el entero derecho a vivir una vida lo más satisfactoria posible y a procurar el bienestar individual y colectivo. Autoflagelarse es una idea que me resulta completamente ajena. No veo qué cosa buena puede salir de cualquier tipo de autoflagelación y si eso tiene sentido para algunos en el ámbito religioso, allá ellos, pero francamente creo que no tiene nada que ver ni con nuestra coalición ni con quienes tenemos una actitud crítica frente al orden de cosas en el mundo en que vivimos.

Lo que sí está presente es este asunto del vaso medio lleno o medio vacío. Hay que tomarlo como tal. Hay una parte del vaso que está medio lleno y es estupendo, fantástico, hemos avanzado, hemos llenado la mitad del vaso y eso debe ser valorado, debe ser cultivado, debe ser puesto con orgullo frente a nosotros mismos y frente a los ciudadanos. La mitad del vaso vacío es el conjunto de desafíos que tenemos por delante: no tomarla en cuenta sería consagrar que está bien que quede el vaso medio vacío y eso me parece una actitud conservadora y poco entusiasta... Por eso digo que se trata en este caso de liberales bien poco progresistas y también bien poco auténticamente liberales, por esta lógica de la descalificación permanente —y desfiguración frecuente— de las ideas que no comparten.

En la entrevista que mencionas, José Joaquín Brunner dice que están en la Concertación por un lado los que creen en la globalización, los que creen en la modernidad y los que no creen en la globalización y la modernidad. Esa manera de plantear las cosas es muy binaria, muy típica de la lógica de los blancos y negros. En todo caso, esta visión siempre considera que la condición humana está mal encaminada y que se requiere una especie de redención sobre la base de poner a los buenos y los malos en una identificación muy clara y en donde los malos deben ser condenados, si no en la hoguera al menos en la consideración pública.

Esa lógica se tradujo en política en los años sesenta en una cierta radicalización mesiánica de izquierda y hoy día en una cierta radicalización conservadora en nombre de la modernidad, lo que es en sí misma contradictorio. Sostener que la modernidad está reñida con la izquierda y su exigencia igualitaria me parece una idea completamente errónea: no hay históricamente nada más moderno que ser de izquierda, en el sentido de considerar que la sociedad tiene que reformarse permanentemente

a sí misma para superar las desigualdades y las discriminaciones, y no hay nada más moderno que precisamente vincularse con lo distinto de lo conservador, de lo tradicional, de lo que justifica la dominación de los poderosos y genera males sociales inaceptables. A su vez, la globalización no es en absoluto ajena a las ideas de izquierda. Yo simplemente quiero recordar que el famoso Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848 terminaba con el llamado sumamente globalizador de... «proletarios del mundo uníos». Otra cosa es si tenía sentido en aquella época y si lo tiene hoy una cierta idea de la emancipación universal a partir de una sola clase, la más explotada, el proletariado, pero convengamos en todo caso que si algo ha caracterizado a las fuerzas de izquierda a lo largo de su historia es su carácter universalista y ese carácter universalista siempre lo ha hecho oponerse a los nacionalismos y a los particularismos que se oponen al interés general. Ser patriota o tener identidades es querer lo propio, y está muy bien, ser nacionalista o particularista es descalificar y rechazar a los demás, lo que en la historia siempre ha conducido a violencias a las que nos oponemos en nombre de la universalidad de la condición humana.

En especial, el socialismo en Chile sistemáticamente ha estado por el cultivo de vínculos de todo tipo entre los que en el mundo comparten ideales, manteniendo las tradiciones que nacen de nuestra propia independencia frente a las cuales la nacionalidad se hace secundaria en contraste con el ideario compartido. Creo que si hay algo que caracteriza no solo a la izquierda sino que a la cultura nacional progresista es la apertura al mundo y especialmente a América Latina. Ahora, otra cosa bien distinta es ser partidario de la globalización capitalista, de la globalización que expone a los países a flujos financieros incontrolados y al uso por el capital transnacional de nuestros recursos de naciones pequeñas de manera asimétrica, que no permite construir proyectos nacionales. Esa globalización subordinada, desregulada, que pone pequeños cascarones en medio de la tormenta es la que uno rechaza, ese cierto tipo de globalización neoconservadora e intervencionista, que expone a los países a la ley del más fuerte.

Por tanto, no es que el dilema aquí sea entre globalizadores y modernos, por un lado, y antiglobalizadores y anticuados por el otro. El dilema más bien es entre progresistas y conservadores y en la coalición hay un pequeño grupo, muy pequeño, muy poco representativo, que ha evolucionado en su vida política hacia posturas neoconservadoras fervientemente partidarias del liberalismo económico más decimonónico, sin matiz alguno y cuya pretensión reciente de imponer ese enfoque de derecha a la coalición es una pretensión inútil y vana.

A. JOIGNANT: Conuerdo con el carácter marginal del grupo liberal al interior de la Concertación. Es un grupo que sin embargo, a pesar de lo pequeño y poco representativo que éste pueda ser (por ejemplo desde la perspectiva de hipotéticos electorados masivos), ha adquirido un fuerte grado de influencia al interior de la coalición gracias a una importante visibilidad social (muy superior a la influencia intelectual empíricamente constatable al interior de la coalición) de la cual se hacen eco, caja de resonancia y vehículo de difusión los medios de prensa escrita. No obstante, es un grupo que existe, cuya existencia me parece deseable, interesante y electoralemente útil, en la medida en que podría hipotéticamente servir de puente para capturar pequeños electorados que de otra manera quedarían vacantes en la sociedad chilena, aún cuando esta aserción releva más de la hipótesis que de la certeza. Pero volvamos a la tarea de precisar los términos y las palabras con los que nombramos e intervenimos en la realidad. Efectivamente, este grupo liberal no adscribe a una plataforma liberal completa que trasciende el ámbito estrictamente económico. Se trata de un grupo liberal en lo económico (en otra oportunidad podremos conversar sobre el límite a partir del cual se inicia el neo-liberalismo), lo cual deja de ser cierto en el ámbito político, no obstante la recurrencia de categorías liberales en el lenguaje político ordinario que, a la manera de la ilusión óptica, produce la sensación de que estaríamos en presencia de liberales de tomo y lomo. Esto es lo que explica que eche mucho de menos un liberalismo más articulado y consistente que creo ver en un Oscar Godoy —con quien realmente tengo mucha sintonía intelectual, del mismo modo que con Carlos Peña, hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Es decir, gente definitiva y completamente liberal, con quien se hace mucho más fácil e interesante el diálogo sostenido, culto y ajeno a todo

tipo de estigmatizaciones y descalificaciones

G. MARTNER: Estoy de acuerdo. Despejemos algunos aspectos. Tenemos entre el socialismo democrático y el liberalismo político una zona de confluencia en lo que se refiere a la defensa de las libertades civiles y polític y en el rechazo de la ingerencia indebida del Estado en la vida de las persona El liberalismo político se define por cuatro principios(5). El primero es el rechaz del absolutismo, la limitación del Estado y por tanto el reconocimiento de autonomía de la sociedad civil respecto de aquel. El segundo principio es soberanía del pueblo, ejercida por medio de sus representantes, que expresan, mediados por partidos políticos, a los diversos grupos de individuos animados por intereses. El tercer principio deriva del primero y le reconoce a los individuos y grupos de individuos libertades que se transforman en un principio y un valor. El cuarto principio también deriva del primero y es la neutralidad del Estado en relación a las opiniones religiosas y a las concepciones morales, con la consecuente exigencia de tolerancia y laicidad. Hasta ahí vamos bien. La exigencia de una Rosa Luxemburgo («la libertad es siempre la del que piensa distinto») no encontraría nada que decir y con ella toda la tradición libertaria de la izquierda.

A su vez, convengamos que del liberalismo económico no fluye el liberalismo político. En Chile, sin ir más lejos, los liberales económicos de inspiración hayekiana (los individuos son los que mejor conocen sus intereses, son maximizadores de su utilidad, por lo que de la promoción de su interés egoísta surgirá espontáneamente la armonía social con la ayuda de la mano invisible del mercado) han sido completamente ajenos al liberalismo político y son integristas conservadores, lo que los ha puesto siempre en el campo de la derecha pro-dictadura sin más (pensemos en Carlos Cáceres, corresponsal de la Sociedad Mont Pélerin inspirada por Von Hayek, que propuso en la discusión sobre la constitución del '80 no aceptar el sufragio universal). Ahora bien, a la inversa, algunos conversos al liberalismo económico después de haber sido marxistas-leninistas de estricta obediencia prosoviética se han propuesto convencer a nuestro campo de que el liberalismo político implica el liberalismo económico.

Convengamos que, como lo observó Trotsky al analizar los estragos del estalinismo(6), es difícil imaginar que puedan existir libertades políticas y civiles con el monopolio estatal de la economía y del empleo, por lo que el liberalismo político supone grados necesarios de pluralismo económico y de una economía mixta en cuanto a la estructura de propiedad. Punto concedido sin objeciones.

Donde el tema se complica considerablemente es cuando se pretende derivar del cuarto principio, el de la neutralidad respecto de los valores religiosos y morales, que está muy bien, un derecho de propiedad absoluto, es decir que los individuos persigan su propio interés económico particular sin otra limitación que la libertad de otros de emprender y de comprar, en la línea de Robert Nozick, fundador del neoliberalismo. Esto no es aceptable para una vida en común justa: las asimetrías en las relaciones económicas (en el contrato de trabajo, en la contratación de servicios, en las condiciones del autoempleo y del emprendimiento, en la apropiación de la naturaleza) y las fallas de mercado (en la provisión de bienes colectivos, en la existencia de externalidades, de monopolios naturales y económicos, de competencia monopolística, de asimetrías de información, de costos de transacción, y la lista es larga) son de tal magnitud que, si bien el derecho de propiedad debe existir, en la visión socialista democrática debe estar sometido al interés público, por tanto al marco de la ley y de la regulación en las condiciones mencionadas en el capítulo anterior, sin perjuicio de perseguir la consecución del derecho a la propiedad — consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos- para los que carecen de ella.

Para los socialistas democráticos cabe introducir una exigencia de justicia social, de igual libertad, de igualdad de oportunidades y de igualdad específica de resultados, es decir «exigencias morales» en la realización por cada uno de sus intereses particulares. El socialismo democrático rechaza la deriva del liberalismo político hacia el liberalismo económico, pues la neutralidad del Estado en relación a toda concepción moral suele desencadenar procesos de concentración de los recursos de poder de tal magnitud que resultan manifiestamente contrarios al funcionamiento de una sociedad democrática y terminan por negar la realidad de las libertades individuales. No concordamos con el

liberalismo que sólo defiende las «libertades negativas», como independencia del individuo de todo control colectivo y político más allá de lo que es necesario para asegurar la coexistencia de las libertades, replegándose en la defensa de su esfera privada. Los socialistas democráticos agregamos la dimensión de la «libertad positiva»: el sistema de libertades no puede funcionar si los individuos no son partícipes de los asuntos colectivos. La sola dinámica de los derechos individuales no basta para fundar un espacio público, hay que agregarle compartir valores colectivos, mínimos comunes denominadores que fundan la vida en común, y en especial la solidaridad con el destino de los demás, la fraternidad con los otros seres humanos y especialmente con los que sufren las consecuencias de las desiguales inserciones en la sociedad, lo que se traduce en nuestra exigencia igualitaria.

A. JOIGNANT: Pero fuera de esta controversia político-cultural, los problemas de la Concertación también pueden ser abordados desde otra perspectiva, por ejemplo empleando para fines analíticos categorías y razonamientos provenientes de la teoría de las coaliciones y de la teoría de juegos. Es así como la historia de la Concertación puede ser leída como un proceso paulatino de transición desde esquemas efectivamente muy cooperativos entre los socios hacia tipos de juegos («dilemas» en teoría de juegos) mucho más competitivos, lo cual —como todo cuadro de competencia-arriesga con poner en algún momento en cuestión la propia existencia de la coalición, especialmente cuando se trata de juegos entre varios actores que persiguen metas y buscan satisfacer intereses relativamente contradictorios, ciñéndose a identidades particulares en desmedro de bienes, gratificaciones y misiones más colectivas y transversales. He allí, tal vez, una clave de interpretación del sentimiento de amenaza que experimenta la Democracia Cristiana. Hace tiempo atrás, Ricardo Lagos Weber evocaba la metáfora del pegamento en proceso de secamiento para nombrar las dificultades de la Concertación, lo cual, de ser pertinente, engendra una situación que sólo puede ser agudizada por el sistema binominal. En efecto, a la hora de competir por un escaño en la Cámara de Diputados y en el Senado, el PS y el PPD deben omitirse en alrededor de la mitad de los distritos y circunscripciones del país, frente a una Democracia Cristiana cuyo real poderío electoral es inferior a la mitad del caudal de votos de la Concertación, lo cual sin embargo no se traduce en una plantilla de candidatos congruente con el peso específico de cada cual, produciendo así sensaciones de disconformidad entre los socios. Esta situación evidentemente se dirime reformando el sistema electoral, para lo cual —fuera de reformas eventualmente parciales y locales cuya materialización no alteraría la naturaleza del problema— parece irrealista pensar alcanzar consensos suficientes en el corto plazo. En tal sentido, mucho más pertinente e interesante me parece ser cambiar las coordenadas de la discusión, transitando hacia un debate sobre las formas del régimen político (idealmente parlamentario, tal vez de corte semi-presidencial), lo que permitiría debatir el sistema electoral en un marco de controversia política distinto, mucho más exigente.

G. MARTNER: La reflexión sobre el régimen político ha acompañado la transición desde sus inicios. Aquí convengamos que, sin embargo, hay una paradoja. Desde el ámbito académico hay una preferencia más o menos generalizada por ir a un régimen semipresidencial o por disminuir la naturaleza fuertemente presidencial de la constitución del '80. En su momento, líderes tan importantes como Andrés Allamand y Gutemberg Martínez se pronunciaron a favor de un régimen de este tipo y de hecho hay un espectro amplio que se manifiesta favorable a un régimen semipresidencial. Pero convengamos que ha perdido mucha fuerza frente al hecho práctico de que no se podía avanzar siquiera en cuestiones bastante más elementales de las características de la constitución del '80. La reflexión más amplia sobre la articulación entre el ejecutivo y el legislativo no ha avanzado mucho. Convengamos también que en las reformas que se discuten hoy, está establecido un incremento de las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, especialmente que puedan establecerse comisiones investigadoras no sólo con la mayoría de la Cámara sino que con un porcentaje inferior y de alguna forma la presencia los Ministros en las sesiones de las Cámaras para informar sobre el desarrollo de las políticas de gobierno, pero permanece un desequilibrio.

Recuerdo que cerca de terminar su mandato presidencial el ex presidente Aylwin, en una intervención en la Universidad de Chile sobre el tema de regímenes políticos, siendo él presidente, planteó no una

postura digamos derechamente favorable al régimen semi-presidencial pero planteó la apertura a esta discusión. La Cámara de Diputados hizo un informe en su momento bajo la presidencia de una comisión especial por Eugenio Ortega. En fin, ha habido este debate que no es sólo académico. Pero, a su vez, ha sido muy difícil para unos y otros presidentes de la Concertación, en medio de la tarea de gobernar y de obtener la democratización de las instituciones, generar el espacio político para introducir un cambio de régimen político. Te recuerdo que aún tenemos una constitución con disposiciones aberrantes desde el punto de vista democrático que aún no logramos reformar y cuya eliminación constituye nuestra principal tarea política: la restitución de las facultades presidenciales respecto a las FF.AA.; terminar son su carácter de «garantes» de la institucionalidad, con un Consejo de Seguridad Nacional que puede poner; en minoría al Presidente, con los senadores designados y el sistema elector binominal que distorsionan gravemente la voluntad popular.

Dicho lo cual, en un país como el nuestro, en donde parece haber establecido la lección histórica de que debe haber gobiernos de mayoría y ya más gobiernos de minoría, dada la historia de nuestro siglo XX pre-golpe de Estado del 73, en que sistemáticamente los gobiernos fueron de minoría. Están allí los estudios de Juan Linz y otros en el sentido de caracterizar el régimen político presidencial en su expresión latinoamericana como uno que tiende a aumentar la inestabilidad política. Nuestras independencias se inspiraron más bien en el ideario europeo de la ilustración, pero en términos de institucionalidad política, y es válido casi para toda América Latina, hubo una tendencia a copiar el régimen presidencial norteamericano, con la consecuencia de multiplicar los gobiernos de minoría que por mucho tiempo terminaban con crisis políticas y golpes de estado. La evolución política reciente en América Latina y el término de la guerra fría hacen que hoy día no haya golpes de Estado pero que suelen muchos presidentes no terminar sus mandatos. Esto ha sido así en Argentina pero también en Paraguay, en Perú, en Ecuador, veremos qué ocurre en Venezuela.

Creo que la reflexión sigue siendo enteramente pertinente, pues la virtud del régimen semi-presidencial es la de obligar a la formación de coaliciones, en tanto y cuanto no puede constituirse gobierno sin mayoría parlamentaria, sin perjuicio de la prevalencia del rol presidencial cuando dispone de mayoría propia. Al mismo tiempo, un régimen semi-presidencial le confiere al Presidente de la República potestades que también son importantes para la propia estabilidad del régimen, como la facultad de disolver las Cámaras una vez que las coaliciones hacen crisis o éstas se desgastan y requieren una revalidación de su mandato. En los casos francés y portugués, el régimen semi-presidencial le otorga al Presidente de la República potestades especiales en las relaciones exteriores y la defensa nacional, pero básicamente lo económico-social reside en el Gobierno dirigido por el Primer Ministro, que para ser nombrado requiere reunir la mayoría en la Cámara.

Para un país como Chile, dada la importancia de su inserción internacional y el hecho de que somos un país lejano, se requiere de la propia presencia física del presidente en un gran número de eventos internacionales MERCOSUR, Grupo de Río, Cumbres Iberoamericanas, más las cumbres APEC en el Asia y, en fin, el conjunto de vínculos que generan los acuerdos recientes con Europa y con Estados Unidos). Es pertinente pensar que el Presidente de la República tenga un fuerte rol directo en la conducción de las relaciones exteriores, cosa que naturalmente está establecido en el régimen presidencial, pero en un régimen semi-presidencial los ciudadanos pudieran conferirle al Presidente un rol de representación del país en el exterior preferente, junto con los temas vinculados de la defensa nacional y las grandes orientaciones de la vida nacional. Mientras, en el día a día el trabajo en las materias económico-sociales es lógico que residan en otra autoridad, que a su vez tenga un vínculo muy estrecho, muy directo con el parlamento, lo que hoy se echa de menos en nuestro país. En consecuencia, la fórmula semi-presidencial en mi opinión se aviene bien con la naturaleza de la cultura política chilena, con la necesidad de tener gobiernos de mayoría y con las exigencias de la gestión moderna. Un presidente que tenga a veces que desgastarse en exceso en el trámite de detalle de diversas legislaciones, incluso algunas no tan importantes, no le hace bien a la definición del rango presidencial y no le hace bien al régimen político. Tampoco le hace bien la dispersión de la autoridad política en la gestión cotidiana y el peso excesivo que adquiere por ese hecho el Ministerio

de Hacienda, normalmente ocupado por tecnócratas que no rinden examen ante la opinión pública sino ante los organismos internacionales de los que provienen o que posteriormente les ofrecen empleo.

Si un Primer Ministro requiere la confianza de los parlamentarios, tendría también un segundo efecto, que es el promover la responsabilización de los parlamentarios respecto de su gobierno y de su coalición. Cuando se entiende que todo reside en un Presidente con fuertes poderes y que incluso es posible que cada parlamentario piense en una, en dos, a veces en múltiples veces en votar como si no formara parte de un partido y de una coalición (definitivamente es una tendencia que se constata en nuestra actividad política reciente) obviamente es una mala tendencia hacia el futuro, porque disgrega a las fuerzas políticas, incrementa el individualismo parlamentario muchas veces irresponsable y plantea problemas de gobernabilidad democrática. Por el contrario, si el parlamento es el que nombra al Primer Ministro y este tiene que conformar una sólida mayoría, la tendencia a hacerse cargo del éxito de la labor de ese Primer Ministro sería mayor que la tendencia a hacerse cargo del éxito del Presidente, entre otras cosas porque la consecuencia del fracaso del Primer Ministro es la caída del Gobierno y por lo tanto del ejercicio del poder por el partido o la coalición a la que se pertenece y eventualmente la disolución del parlamento y el llamado a nuevas elecciones. Estos elementos tendrían un mayor efecto positivo, una mayor responsabilización de los parlamentarios con el ejecutivo y al mismo tiempo una mejor distribución de roles entre un Presidente que se preocupa de los grandes temas y un Primer Ministro a cargo de la gestión en el día a día.

Al mismo tiempo, se aumentaría la claridad y nitidez del mensaje político hacia al ciudadano común y corriente, en el sentido que se entiende que no se elige un presidente sin saber muy bien a qué se va a dedicar sino que se elige en este caso un presidente que puede expresar las grandes opciones del país, pero, al mismo tiempo, se eligen parlamentarios que tienen que hacerse cargo de elegir al Primer Ministro y de sostener al Primer Ministro en sus legislaciones.

Creo que eso permitiría también disminuir el que cada parlamentario simplemente se presente entre sus electores a título estrictamente personal, en el bien entendido que un parlamentario no es una especie de jefe de sindicato de electores de una circunscripción o de un distrito sino que concurre a la formación de la ley y por lo tanto concurre a la vida de la nación en su conjunto. El parlamentario es elegido por una localidad determinada, pero es cierto que está determinando el destino de los que viven en Arica, en Santiago y en Punta Arenas y no sólo aquél de los que son sus electores. En consecuencia, creo que también ese sería el punto de calificación, de discernimiento político global que podría ir aparejado a un cambio de régimen político en el sentido semipresidencial.

Un régimen puramente parlamentario podría introducir inestabilidad, si es que no emanan de las urnas mayorías claras o no se logra establecer coaliciones sólidas y de carácter permanente, o que se prolonguen suficientemente en el tiempo. Pero un régimen puramente presidencial desgasta en exceso a la figura presidencial y no introduce la flexibilidad suficiente que permita formar y mantener en buen estado de sintonía a las coaliciones que concurren a gobernar y hacerse más claramente responsable de la gestión pública ante los ciudadanos.

A.JOIGNANT: La historia política de los países en el siglo veinte indica que los regímenes políticos se transforman y ven alterada su fisonomía a continuación de crisis de envergadura, que es un poco lo que expresan los números romanos en Francia para distinguir las distintas formas galas de regímenes a lo largo del tiempo y, más recientemente, en Italia. Sin embargo, independientemente de las formas del régimen político, existen muchos casos en los que tal o cual régimen se transforma mediante grandes acuerdos entre las élites, sin esperar el gatillamiento de graves crisis políticas. Señalo esta modalidad pactada de transformación del régimen pensando en Chile, en el horizonte hipotético de un sistema político bloqueado. Para ponerlo en términos prácticos, en Chile se puede perfectamente producir un bloqueo del sistema político y de sus instituciones, y así poner en riesgo la estabilidad del país, a continuación de un estrechamiento relativo de las distancias electorales entre la Concertación y la derecha, lo cual sistema electoral mediante podría generar un empate en escaños en la Cámara de Diputados, afectando la capacidad de gobernar de cualquier Presidente, concertacionista o

derechista. De producirse, resulta interesante dirimir este bloqueo a través de un nuevo pacto histórico sobre las formas del régimen político, aún cuando no ignoro que el reflejo conservador y espontáneo será diseñar «arreglos» locales reformando únicamente el sistema electoral. Me parece mucho más atractivo y motivante abrir una discusión sobre las formas del régimen político poniendo en el tapete de la deliberación pública todas las coordenadas políticas, presentes y eventualmente futuras. Ciertamente, nada garantiza que en un régimen político distinto al presidencialismo chileno (pongamos por caso un régimen semi-presidencial) no se produzcan situaciones de bloqueo del sistema y de las instituciones políticas. Pero también es cierto que un régimen semi-presidencial como el francés ha dado muestras de una inusitada vitalidad en aquellas situaciones en las que la mayoría presidencial no coincide con la mayoría parlamentaria, dando lugar a situaciones de «cohabitación» entre un Presidente de la República y un Primer Ministro de distintas coaliciones, prevaleciendo la estabilidad del régimen y la cooperación obligada por sobre el bloqueo del sistema. Hay allí una alternativa disponible. Pero existen otras, algunas muy originales, como la alternativa teórica ideada por Giovanni Sartori(7): la del «presidencialismo intermitente». Si bien estamos en presencia de ingeniería constitucional de alto vuelo, el presidencialismo intermitente es realmente estimulante para pensar un tipo particular de cambio de régimen en Chile. En este caso, casi podría hablarse de metamorfosis del régimen político, en la medida en que dadas ciertas condiciones (críticas), un determinado régimen político (parlamentario o semi-presidencial) se «presidencializaría» durante un cierto período de tiempo, en todo caso lo suficiente como para salir de la crisis: es como si los mecanismos de las instituciones se transformaran mecánicamente y los actores comenzaran a actuar en consecuencia. Sin duda que se trata de una alternativa sumamente sofisticada, pero lo suficientemente ingeniosa e interesante para pensar cambios funcionalmente breves y eficaces en el desempeño de las instituciones políticas particularmente en aquellas coyunturas marcadas por lógicas de incertidumbre y bloqueo político. Pero permanece la pregunta: ¿cómo gobernar Chile, quien quiera sea el jefe de Estado, más allá de la cooptación de tal o cual diputado o senador, de la construcción quirúrgica de mayorías en ambos hemisiclos o de la apuesta a una mayor capacidad de disciplinamiento de los parlamentarios por parte de tal o cual coalición?

G. MARTNER: Bueno, yo diría que cabe aludir a la historia política del siglo XX, donde los presidentes no dispusieron de mayoría en ambas Cámaras y en este sentido sufrieron importantes bloqueos a su acción. El resultado práctico es que ningún gobierno se reeligió, con excepción de los gobiernos radicales que fueron muy breves, los dos primeros por fallecimiento del presidente en ejercicio. Prácticamente no hubo reproducción en el tiempo de la misma opción y eso es expresivo de situaciones de bloqueo que a la vez se traducen en incapacidad de dar respuesta a los anhelos ciudadanos.

Cuando Joaquín Lavín ejerce su cargo de alcalde y basta que cincuenta muchachos del Instituto Nacional se presenten en una ceremonia, esto a propósito de la extensión del Instituto Nacional a otras comunas, y que baste la presencia de estos muchachos para que el alcalde Lavín sobre la marcha cambie el decreto y en el fondo simplemente no dé lugar a una decisión previamente tomada, pienso en lo que podría ser un gobierno de la derecha, que inevitablemente no contaría con soportes sociales sólidos y tampoco con mayoría parlamentaria, y todo esto con un liderazgo débil y populista. El tipo de liderazgo que la derecha ha construido por razones de penetración electoral es un liderazgo blando, un liderazgo que halaga los sentimientos inmediatos de múltiples clientelas, lo que se traduce en una dificultad fuerte para gobernar. Lo más probable es que si un gobierno de la derecha llegara a establecerse en Chile, lo que yo personalmente creo que no va a ocurrir, pero si llegara a ganar la derecha sería un gobierno evidentemente muy inestable en tanto y cuanto se construiría en la suma de múltiples clientelas a las cuales se alienta en sus expectativas muy diversas. La tarea de gobernar no admite la suma infinita de promesas diversas.

Pero la derecha tiene muy bajas probabilidades de gobernar porque sociológicamente no es mayoría en Chile. Cada vez que se analiza en las encuestas la opinión de los chilenos respecto del rol del Estado, respecto de lo que debe entenderse como los roles respectivos de la empresa privada y las legislaciones protectoras del mundo del trabajo, o más generalmente la generación de estructuras de

igualdad de oportunidades, nos encontramos con que los chilenos son mayoritariamente estatistas, creen en la protección social y en la igualdad. Cada vez que se pregunta por las preferencias mayores o menores por ampliar las libertades culturales o el tipo de relación entre la autoridad y el ciudadano nos encontramos con una distancia muy grande entre la opinión ciudadana mayoritaria y lo que la derecha es y representa, con excepción de la pena de muerte y la dureza frente a la delincuencia y de la cercanía a los empresarios, que es valorada positivamente. De ahí su necesidad de maquillar una parte importante de sus convicciones y de ofrecer liderazgos blandos y volubles a los estados de opinión. Lo que los chilenos constatan. Eso es lo que explica que a pesar de las falencias del gobierno y de casos sonados e inaceptables de corrupción y de irregularidades administrativas los chilenos no se vuelquen hacia una adhesión masiva hacia la derecha.

Sólo graves errores de conducción, un desgaste mayor, una incapacidad manifiesta de las fuerzas que están representadas en la Concertación y a su izquierda podrían permitir que una derecha sociológicamente minoritaria se transformara en una derecha electoralmente mayoritaria. A ello podría sumarse la mantención de una fuerte distancia de los jóvenes respecto al sistema político o bien la capacidad de la derecha de movilizar a los electores jóvenes.

Gobernar son dos cosas. Primero, poner en concordancia intereses múltiples que se expresan en una sociedad como la chilena, lo que no es un asunto fácil, y requiere mucho sentido de la autoridad, siempre eso sí con inspiración democrática. Efectivamente gobernar democráticamente es, a partir de la definición de una serie de objetivos, poner en concordancia intereses diversos.

En segundo lugar, el acto de gobernar es la articulación de presente y futuro, es convocar a los ciudadanos muchas veces a sacrificios hoy para un mayor bienestar futuro. Esta es una dimensión fundamental de la tarea de gobierno. Difícilmente quien construye su opción política sobre la base del halago inmediato, de recoger tales o cuales reivindicaciones presentes en la sociedad, difícilmente puede luego poner a quienes ha buscado representar en la perspectiva larga que es la de la construcción de mayores grados de bienestar colectivo. Las naciones son construcciones largas en base a esfuerzos , sistemáticos, en uno u otro sentido, claro está, pero no se conoce receta para mágicamente satisfacer todas las necesidades existentes.

Se puede escribir mucho sobre modelos, sobre estrategias de desarrollo y así sucesivamente, pero finalmente los países que logran éxito son los que son capaces de tener continuidad de sus políticas públicas en el tiempo incluyendo los momentos difíciles e incluyendo también momentos en los cuales se producen circunstancias de desconexión con el sentimiento mayoritario de los ciudadanos, que pueden no entender en un momento dado tales o cuales acciones públicas. Desde la responsabilidad de gobernar no se concuerda siempre con el interés inmediato de unos y otros, pero justamente esa es la gracia de la democracia representativa, pues son determinados momentos aquellos en los cuales finalmente la gente hace su balance a la hora de la renovación periódica de las autoridades. Dicho sea de paso, sería muy saludable para Chile reestructurar el calendario electoral, que es hoy muy disperso. Se necesita un calendario que cada cierto tiempo permita a los ciudadanos hacer la reflexión no sólo del acto de ayer o anteayer de la autoridad presidencial, parlamentaria, regional o local sino que en la perspectiva del conjunto de acciones que en su momento pudieran aparecer como no agradables a los ojos y al oído del ciudadano común, pero que a la larga se entienden como justificadas en una perspectiva de más largo plazo. Todos esos son elementos que hacen pensar que una gestión política de la derecha en Chile haría retroceder al país, pues ésta oscila entre el autoritarismo que bloquea y frustra y la aceptación laxa de demandas frente al temor de perder legitimidad. El gran problema histórico de la derecha chilena es su incapacidad de construir legitimidad democrática, de trascender la defensa estrecha de los intereses de las oligarquías terratenientes en su época y capitalistas hoy y su incapacidad de sintonizar culturalmente con la modernidad.

Notas al capítulo III

- (1) Alfredo Joignant, Los enigmas de la comunidad perdida. Historia, memoria e identidades políticas en Chile (20 2010), Santiago, LOM, 2002, especialmente los capítulos 3 y 4.
- (2) Carlos Ominami y Alfredo Joignant, «Notas para refundar la coalición: la hora de la verdad», Rocinante, N°26, diciem del 2000, p.37-40.
- (3) Para un estudio de caso, ver Charles Suaud, «Le mythe de la base. Les Etats Généraux du développement agricole et la mduction d'une parole paysanne», Actes de la recherche en sciences sociales, 52-53, junio de 1984, p.56-79. Desde una perspectiva mucho más política, ver Alfredo Joignant, «Los Estados Generales de la Concertación», El Mostrador, 22 de mayo del 2003.
- (4) Norberter Lechner, Las sombras del mañana, Lom Ediciones, Santiago, 2002.
- (5) Alain Renaut, «Du libéralisme politique au libéralisme économique», Alternatives Economiques, Hors Série n° 51, 2002.. Un análisis más amplio se encuentra en Francisco Vergara, Les fondements philosophiques du libéralisme, La Découverte, Paris, 2002
- (6)...En un país donde el único empleador es el Estado, hacer oposición significa morir de hambre. El viejo principio de que1 el que no trabaja no come, es sustituido por uno nuevo: quien no obedece no come...», León Trotsky, citado por Luciano Pellicani, «Tres enfoques sobre socialismo y mercado», Crítica Social, Santiago, Julio de 1991.
- (7) Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, Méx. Fondo de Cultura Económica, 1994.

CAPÍTULO IV

UN NUEVO IMPULSO TRANSFORMADOR: HACIA UNA REPUBLICA DE DEMOCRACIA SOCIAL

«Cuando la pasión arrastra al hombre, la razón lo sigue llorando y advirtiéndole el peligro; pero, en cuanto el hombre se detiene con la voz de la razón, desde que se dijo: es cierto, estoy loco, ¿a donde iba?, la pasión le grita: ¿y yo, entonces, voy a morir?»

Alfred de Musset

«Necesitamos no sólo de mayores exportaciones y pensiones para las personas de edad, sino también de más cafés al aire libre, de calles más brillantes y alegres por las noches, más teatros locales, empleados más amables de restaurantes y hoteles, servicios de comedor más limpios y atractivos, más cafés a la orilla del río, más jardines, más murales y pinturas en lugares públicos, mejores diseños para nuestros muebles, utensilios y ropas femeninas, estatuas en el centro de los nuevos lugares para vivir, alumbrado mejor diseñado, mejores cabinas de teléfonos y así ad infinitum. Los enemigos de todo esto aparecerán a menudo en forma inesperada; no se trata sólo de oscuras fuerzas satánicas (...); también, si no principalmente, de personas y situaciones limpias, virtuosas y respetables, pero desgraciadamente carentes de gracia y alegría».

Tony Crosland

Impactos de la globalización

A. JOIGNANT: La representación democrática admite ciertamente el hálago fácil junto con la persuasión racional y paciente. Sin embargo, la eficacia de la representación no sólo depende de condiciones locales de posibilidad, sino también de condiciones globales (a menudo de imposibilidad). Me parece evidente que el mundo que se fue es un mundo que definitivamente ya no está en Chile, y en buena medida eso es consecuencia de lo que la Concertación ha hecho a continuación de políticas profundamente transformadoras (cuyos efectos son friamente testimoniados por la publicación de los resultados del último censo), en un marco de mutaciones globales aceleradas. Transformaciones que por lo demás se verán intensificadas por la suscripción por parte de Chile de una serie de tratados de libre comercio, especialmente con la Unión Europea y Estados Unidos. Algunos sostienen, de un modo un tanto alarmista y a menudo en términos muy grandilocuentes, que lo que está ocurriendo es la paulatina, lenta e imperceptible disolución de las fronteras de los Estados, de su capacidad de soberanía, de su poder de intervención eficaz en los asuntos de todos al interior de un determinado territorio, lo cual traería como consecuencia el predominio de lógicas multi-, trans- y/o inter-nacionales, y que en todos los casos son globales, instalándose el riesgo de que éstas escapen a todo control. Es imposible no ver los riesgos de ingobernabilidad democrática generados por estas nuevas tendencias, lo que plantea en nuevos términos la pregunta acerca de la representación democrática y de la eficacia de la política.

G. MARTNER: Se hace política en estas condiciones sobre la base de reconocer que la globalización es el nuevo territorio histórico en el que se desenvuelve la ya más que centenaria lucha socialista, que siempre tuvo en el internacionalismo uno de sus fundamentos. Se trata de sacarle partido positivamente a la tensión entre Estado-Nación y la tendencia a la pérdida de soberanía propia de la globalización. El Estado-Nación es por esencia el espacio en el cual se constituyen los derechos, se ejercen los derechos, se defienden los derechos, sin perjuicio de que determinados aspectos de los derechos tienden a internacionalizarse.

La Declaración Universal de Derechos Humanos que consagra Naciones Unidas tiene diversos desarrollos (Convenciones sobre crímenes contra la humanidad, sobre genocidio, sobre tortura, entre muchas otras) con elementos de internacionalización de la aplicación de la ley penal que va en un sentido extremadamente positivo y que culmina con el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que será un poderoso inhibidor de futuros candidatos a dictadores y a violadores de los derechos humanos, sin perjuicio de los mecanismos propios del sistema interamericano. Yo

personalmente siempre aprobé el tipo de acciones que de manera imperfecta y compleja se dieran en el caso Pinochet, en donde emergió ante violaciones caracterizadas de los derechos humanos su consideración no como violaciones de derechos a personas de nacionalidad chilena sino que a seres humanos y, en tanto tales, universales. Por tanto la penalización de esas violaciones no es sólo una tarea del Estado-Nación sino que también una tarea de la humanidad en su conjunto, especialmente cuando el Estado-Nación se constituye en denegador de justicia. El inmenso avance en la tarea de hacer justicia por nuestros propios tribunales claramente no sería el mismo si no hubiera existido la detención de 500 días de Pinochet en Londres por petición de la justicia española.

Yo siempre he pensado que estos son elementos muy positivos, pero convengamos que el ejercicio de los derechos no residirá en el imperio de una suerte de Estado mundial antes de mucho tiempo. Aunque nunca se puede predecir exactamente el futuro, para nuestra generación, por lo menos, el Estado-Nación será el espacio en el cual los derechos se construyen, se ejercen, se defienden. Por tanto, la defensa del Estado-Nación y sus atribuciones en estos ámbitos sigue siendo de enorme importancia. Particularmente, el ámbito de las redistribuciones de recursos que emanan espontáneamente de la actividad económica mercantil y los derechos económicos y sociales tienen en el Estado-Nación su soporte principal.

La defensa del Estado-Nación en esa definición no implica plantear una idea antiglobalizadora. Yo tiendo a adscribirme a la idea de que lo que es necesario es la co-globalización, en contraste con los pro-globalización que consideran positivo el predominio unilateral del imperio más poderoso que haya conocido nunca la historia, Estados Unidos, combinado a un capitalismo mundializado que aumenta las desigualdades, las inestabilidades y la depredación de los recursos naturales.

Discrepo, en este sentido, de los análisis de Toni Negri, que caracterizan al imperio como un complejo que va mucho más allá de los Estados-Naciones y especialmente Estados Unidos y que propugna la «resistencia de las multitudes»(8) . Si algo ha demostrado la evolución post-caída del muro de Berlín y el término del mundo bipolar es la consagración de una potencia nacional, en este caso de Estados Unidos, que tiende a actuar cada día más al margen del derecho internacional. En este caso frente a las crisis internacionales el rol privilegiado debe ser el de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad. Las intervenciones unilaterales, cuando hay conflictos tan significativos como la sospecha de producción de armas de destrucción masiva o fenómenos de terrorismo como el que tan trágicamente se observó el 11 de septiembre del año 2001, deben ser sometidas a la regulación del derecho internacional. Este tipo de situaciones presentes en el mundo global de hoy tienen que ser combatidas desde una lógica co-globalizadora y no de consagración de la fuerza unilateral del imperio norteamericano, y combatidas desde la sociedad civil mundial, que tiene un rol crucial, como lo ha venido mostrando, con todas sus complejidades, el movimiento altermundialista, pero también desde los Estados-Nación y desde la política, incluyendo al movimiento socialista internacional.

En el aspecto económico, la globalización es una que se traduce en la afirmación de que hoy por hoy se puede producir en cualquier parte del mundo para vender en cualquier parte del mundo. El tejido económico se reestructura a pasos agigantados, empujado por el fuerte cambio tecnológico. En este plano, hay como en todo fenómeno humano aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos son un fuerte incremento global de la productividad. Para un país como el nuestro, pequeño y alejado de los grandes centros económicos, estar en condiciones de producir para vender en cualquier parte del mundo es un hecho positivo, con una contrapartida que es la de la adecuación permanente de nuestra propia competitividad para no ser barridos en el contexto del comercio, las inversiones y los flujos financieros globalizados. Entonces, se requieren resguardos, regulaciones, que tienen que ver básicamente con los flujos pasajeros de capitales, que como se sabe tienen hoy en día una capacidad de desestabilizar profundamente las economías, completamente al margen de sus datos fundamentales. Eso requiere acción internacional para contener y regular los flujos financieros internacionales y al mismo tiempo permitir en el ámbito del comercio que la asimetría comercial, aquella que se expresa en un fuerte poder de las grandes economías de determinar unilateralmente los accesos a su mercado sea contrarrestado con acciones coglobales, en este caso el marco de la

OMC y de un futuro Consejo de Seguridad Económico y Social, como ha propuesto la Internacional Socialista, que hagan posible que el comercio no sea asimétrico, no sea en un solo sentido desde los poderosos a los débiles, sino que también desde los débiles a las economías más dinámicas.

Nuestro destino natural es la integración latinoamericana y especialmente con el Mercosur. Pero mientras esta integración se construye, y la última década no ha sido propicia en la materia, tenemos el deber de poner a Chile en situación de potenciar su economía. Lograr acuerdos comerciales permite ampliar y estabilizar el acceso a mercados para nuestros productos, cuya elaboración es la fuente de empleo e ingresos para los trabajadores a los que representamos y para la actividad económica en muchas de las regiones de Chile. Avanzar hacia la exportación de productos con mayor valor agregado y por tanto más intensivos en empleos mejor remunerados y más productivos, requiere saltar las barreras que las poderosas economías del norte establecen para proteger sus producciones. Esto no se logra sin costos. También requiere abrir nuestra economía y dar garantías a la inversión extranjera. Pero ocurre que nuestra economía se encuentra en un grado alto de apertura que le permite absorber, a veces con dolor, una mayor competencia de bienes importados. Nuestra política económica nos ha permitido no depender en absoluto de los condicionamientos que el FMI impone a los países con desequilibrios en sus cuentas internas y externas y nos permite un grado de autonomía en las decisiones que ya se quisiera cualquiera de nuestros vecinos o países de similar nivel de desarrollo, así como acceder a los flujos financieros necesarios para financiar el crecimiento. En el año 2002 y 2003 Chile ha concluido negociaciones de libre comercio con Corea, la Unión Europea y ahora con Estados Unidos.

Los acuerdos han permitido abrir mercados para exportaciones de mayor valor agregado, que son las que tradicionalmente han confrontado importantes barreras arancelarias o para-arancelarias. Cabe destacar el caso de las exportaciones de vestuario hacia EEUU, que ahora confrontan aranceles de hasta el 38% y que en el primer año de aplicación de ese Tratado la verán reducida a 0%, permitiendo la redinamización de la industria textil en la VIII Región.

Los acuerdos también han abierto las puertas para que Chile se constituya en una potente plataforma de inversiones para capitales provenientes de todos los rincones de la tierra, hacia nuevas industrias intensivas en alta tecnología, más allá de los sectores primario exportadores.

Como socialistas valoramos la realización de estos acuerdos, dado que abren oportunidades inéditas para nuestro desarrollo económico y social. No nos olvidemos que de las 5 655 empresas que exportan en el año 2003, 2 627 (un 47% del total) son microempresas, mientras 2 790 (un 49%) son pequeñas y medianas y sólo 238 (4%) son de mayor tamaño. El 84% de las exportaciones de las Pymes son de carácter industrial (principalmente alimentos, bebidas, alcoholes y tabaco). Cuando la economía mundial entre en un ciclo ascendente, no cabe duda de que Chile estará mejor preparado para recuperar un elevado ritmo de crecimiento que se traducirá también en más y mejores empleos. Los tratados nos comprometen además a cumplir nuestra propia legislación laboral y ambiental, esa misma que tan poco se respeta en Chile, siguiendo el viejo adagio de la administración colonial: se acata pero no se cumple. Se ha creado un muy positivo mecanismo que sancionará a Chile en caso de incumplimiento de los derechos de los trabajadores mediante el incremento del gasto público en fiscalización como multa frente a la falta constatada.

Pero no escondemos también los costos de estos acuerdos. Los acuerdos comerciales han profundizado la apertura comercial y financiera de nuestra economía, lo que nos plantea un problema frente a los recurrentes ciclos de inestabilidad externa. Durante la década de los noventa Chile exhibió una importante capacidad para frenar la entrada de capitales especulativos. El acuerdo con EE:UU limita el uso de la restricción a la entrada y salida de los capitales golondrina a un año. ¿Nos permitirá esa norma, que Estados Unidos quería en todo caso eliminar totalmente, enfrentar las crisis financieras? Es de esperar que la gran rapidez de los movimientos de capitales en el mundo de hoy nos permitan actuar con la suficiente autonomía y que el plazo del año sea suficiente.

Al mismo tiempo, el acuerdo con la Unión Europea y en particular, el acuerdo con Estados Unidos, han significado que Chile deberá elevar la protección de la propiedad intelectual. Esto favorece a

nuestros innovadores y creadores, pero ciertamente no pueden imponer una espiral de alzas en los precios de los medicamentos, ni tampoco pueden significar imponer precios excesivos de acceso al conocimiento y la información. Por ello es que los socialistas valoramos el equilibrio que se está logrando en el Congreso Nacional en cuanto a la ley de Propiedad Industrial que viabiliza la industria farmacéutica nacional productora de medicamentos genéricos más baratos. También consideramos indispensable que la nueva Ley de Propiedad Intelectual establezca un nuevo equilibrio entre incentivos a los creadores –poetas, escritores, cantautores-, derechos de acceso al conocimiento y al acervo cultural de la humanidad e impulso de nuestra industria cultural que representa nuestra identidad y que debe convertirse en una actividad económica cada vez más relevante para Chile.

Los acuerdos comerciales obligan en todo caso a replantearse el modelo de desarrollo actualmente vigente en Chile. En efecto, nuestro país está bien ubicado en los rankings internacionales de competitividad, estabilidad institucional, calidad de gobierno, infraestructura de telecomunicaciones y probidad. Sin embargo, está muy atrasado en cuanto a inversión en ciencia, tecnología e innovación, en calidad de la educación y capacitación, así como en desarrollo de la economía digital y la sociedad de la información.

Si Chile quiere ser un país desarrollado para la segunda década de este siglo, no cabe duda que deberá dar un salto gigantesco para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. La Derecha y su credo libremercadista es incapaz de ofrecer una acción pública decidida de promoción del desarrollo. Nadie más que un bloque progresista como la Concertación Democrática será capaz de ofrecer un camino de futuro para la nación chilena.

Los acuerdos comerciales no implican que el país haya renunciado a impulsar políticas de fomento productivo e innovación. Por el contrario, la materialización de estos acuerdos, implican que Chile debe profundizar el impulso de políticas de planificación sectorial del crecimiento, privilegiando una decena de líneas de producción altamente competitivas alrededor de las cuales se organicen distritos industriales y de servicios fuertemente intensivos en empleo, con pequeñas y medianas empresas innovadoras articuladas a estos sectores dinámicos(9). Ahí está nuestro futuro como Nación y también la posibilidad de ofrecer una base material sólida a nuestra lucha por ampliar sustancialmente los derechos sociales en Chile y la suerte de las familias del pueblo que sufren miseria y marginación. La reciente política de fomento de la biotecnología en Chile ofrece, por ejemplo, un amplio campo de aplicaciones a la minería que revolucionará en la próxima década las tecnologías de elaboración del cobre, con fuertes reducciones de costos de producción y de aumento de la competitividad.

Las experiencias de economías pequeñas y abiertas, pero con poderosas redes de protección social y énfasis en la innovación tecnológica, constituyen trayectorias históricas que demuestran que el sendero de crecer manteniendo fuertes mecanismos de redistribución del poder y de los ingresos en el mundo globalizado de hoy es posible.

Esta constatación ha llevado a una nueva interpretación: la globalización no implica necesariamente una declinación general del peso del Estado- Nación, aunque sí su reformulación en profundidad, pues los intercambios crecientes aumentan la vulnerabilidad económica, por lo que un sector público más vasto, especialmente en el ámbito de las políticas de protección social, constituye un contrapeso compensador apropiado, como lo demuestran los estudios de Dani Rodrik y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Este constató que el grado de apertura de principios de los años sesenta ofrece una muy buena predicción de la expansión del sector estatal en el curso de los tres decenios siguientes.

En el caso de los países de altos ingresos la correlación más robusta es entre apertura comercial y gastos en seguridad social y en el caso de los países más pobres entre apertura comercial y consumo público, países en los que la dificultad de administración de programas de transferencia induce más gasto social público directo, manteniéndose que la asociación es entre mayor riesgo externo y mayor protección social. Estas conclusiones son fuertemente relevantes, al constatar que las relaciones entre gobierno y mercado pueden ser complementarias más allá de las funciones tradicionales de provisión de bienes públicos, de orden, ley y derechos de propiedad, pues «el ámbito de acción del

gobierno ha sido más amplio, no más pequeño, en las economías que toman mayores ventajas de los mercados mundiales», mientras «la evidencia considerada sugiere que las razones tienen que ver con la provisión de seguridad social». Las economías más abiertas tienen una mayor exposición a los riesgos que emanan de las turbulencias de los mercados mundiales, por lo que un mayor gasto público en estas naciones cumple una función de aislamiento frente a dichos riesgos, en la medida en que el sector gubernamental es un sector «seguro» en términos de empleo y de compras al resto de la economía relativamente al sector sujeto al comercio internacional. Por tanto, en los países significativamente afectados por choques externos, el gobierno está llamado a mitigar el riesgo coordinando una mayor proporción de los recursos económicos»(10) .

La apertura a la economía mundial puede ser una fuente de muchos beneficios económicos. La importación de inversiones y bienes intermedios que no están disponibles domésticamente a un costo comparable, la transferencia de ideas y tecnología desde naciones más desarrolladas y el acceso al ahorro externo pueden ayudar a las naciones pobres a superar algunos de los tradicionales obstáculos para el crecimiento rápido. Pero estos sólo beneficios potenciales, a ser obtenidos plenamente cuando las políticas e instituciones complementarias están presentes internamente. (...) La relación entre tasas de crecimiento e indicadores de apertura –niveles de los aranceles y barreras no arancelarias o controles de flujos de capitales- es débil en el mejor de los casos. Los diseñadores de política deben por tanto focalizar en los aspectos fundamentales del crecimiento económico –inversión, estabilidad macroeconómica, recursos humanos y buen gobierno- y no dejar que la integración económica internacional domine su pensamiento sobre el desarrollo. (...) Un punto de partida útil es reconocer que la apertura es parte de una estrategia de desarrollo; no se sustituye a ella.

La evidencia muestra que instituciones políticas participativas, libertades civiles y políticas, burocracias de alta calidad, el imperio de la ley, y mecanismos de seguridad social como redes de protección social (...) son instituciones que son importantes tanto para manejar la turbulencia en la economía mundial como para contrarrestar la posible ampliación de la desigualdad que la apertura puede aparejar. (...) En consecuencia, los gobiernos y los consejeros de política económica deben terminar de pensar en la integración económica como un fin en sí misma. Las naciones en desarrollo deben insertarse en la economía mundial en sus propios términos, no en los términos determinados por los mercados globales o las instituciones multilaterales. (Dani Rodrik, *11w new global economy and developing countries: making openness work*, 1999).

Por su parte, las comparaciones de crecimiento en los últimos treinta años para diversas regiones del planeta que han experimentado evoluciones contrastadas permite concluir que una presencia significativa del Estado hace más que preservar a las poblaciones nacionales de los choques externos. Puede también ser un factor de protección de la competitividad en la economía globalizada(11).

Para las naciones de menor desarrollo, buscar una inserción internacional más favorable supone una mayor eficacia en las políticas públicas a partir de tres constataciones. Primero, las ventajas competitivas de largo plazo no son las que dependen de la dotación relativa de factores de producción, sino las que han sido construidas a partir de esa dotación. Segundo, después de la revolución microelectrónica y organizacional, no existen a priori ventajas adquiridas para siempre y en cambio es posible construir espacios para el desarrollo de actividades basadas en mayor trabajo calificado. Tercero, en tanto las verdaderas ventajas competitivas de largo plazo son aquellas que han sido socialmente construidas, se requiere de políticas públicas selectivas que corrijan las fallas de mercado en la formación de capital.

Por último, los aspectos culturales. La globalización cultural tiene también aspectos positivos y otros que no lo son. Desde luego, que la información y las ideas circulen instantáneamente en el mundo no puede ser sino un hecho muy positivo. El que hoy por hoy un niño cuyos padres vivieron en la marginalidad y el aislamiento, que desarrollaban su vida en algún rincón perdido, en algún espacio rural o en alguna población marginal, el hecho de que ese niño vaya a una escuela y que en esa escuela pueda acceder a la información global, es un avance notable. Pero sin la capacidad, a su vez, de interpretar esa información no se consigue el acceso al conocimiento, ni estar al día en el

conjunto de ideas y expresiones contemporáneas. Se requiere educación, competencias y una cultura nacional que haga posible el uso productivo y racional de la poderosa expansión del acceso a la información. En especial, nada sería más fatal que la instalación de una uniformidad cultural en base a la pérdida de las identidades nacionales y locales. Desde la propia complejidad también debe asumirse que la uniformidad cultural y de los criterios estéticos en toda la vasta gama del arte y de la creación empobrece, así como los dispositivos de información globalizada que tienden a hacer prevalecer una visión unilateral. Esto obviamente que no debe ser observado sin reacción. Por el contrario, siempre será muy importante la promoción de las identidades locales, de las identidades nacionales para que convivan con las influencias globales.

El nuestro es un país culturalmente diverso. En consecuencia, debemos organizar la convivencia entre lo global, lo local y lo nacional, sin que deba desaparecer ni lo local ni lo nacional. Tiene que haber una promoción desde el Estado-Nación de los espacios para las culturas locales y para la cultura nacional, cualquiera sea la diversidad de sus expresiones y de sus definiciones posibles.

Habida cuenta de todas estas consideraciones, nuestra tarea es, en las condiciones del nuevo territorio histórico para la acción socialista que es la globalización, construir un proyecto suficientemente sólido, con una vasta gama de políticas públicas que incrementen el bienestar colectivo, que nos permita reconvocar a la ciudadanía para seguir avanzando en la construcción progresiva de una sociedad democrática, solidaria y justa, que contrasta fuertemente con el proyecto de la derecha, que es autoritario en lo político, reproductor de las desigualdades en lo económico y social, intolerante en lo cultural. Ahí está establecido el dilema, aunque la derecha esconde su naturaleza individualista, jerárquica y conservadora y a su vez promotora de las desigualdades, pues procura situarse en el espacio de lo contingente, de las emociones inmediatas (con una plataforma que se centra en el desempleo y la delincuencia), con meros efectos de estilo y que ha tenido éxitos, pero esos éxitos son finalmente éxitos con pies de barro, puesto que hay una naturaleza, no digo de las derechas en general, digo de la derecha chilena, que es esta identidad ancestral que la transforma en un derecha sociológicamente minoritaria.

Reimaginar la República

A. JOIGNANT: Conuerdo con tu afirmación de que la derecha es minoría sociológica en Chile, del mismo modo que la izquierda y el centro político, lo cual obliga a diseñar y construir coaliciones lo más amplias posible. Sin embargo, concordemos también que la derecha, no obstante ser minoritaria, ha progresado enormemente en poderío electoral desde la última elección presidencial, alcanzando un histórico 44% de los votos en las parlamentarias del 2001 que no se explican sólo por el sistema electoral. En tal sentido, estamos en presencia de una minoría sociológica muy relativa, cuyo poderío matemático en el plano electoral, acompañado por una evidente hegemonía en el ámbito de las ideas económicas y en ciertas regiones de la cultura, se explica hasta ahora por lo que parece ser una transferencia de votos desde la Concertación hacia la derecha, especialmente la UDI, de una masa de varios centenares de miles de votos probablemente proveniente de la Democracia Cristiana. Ciertamente, esta fuga de votos sigue siendo insuficiente para que la derecha se transforme en mayoría electoral. Pero aún queda disponible esa enorme franja de ciudadanos no inscritos en los registros electorales, de quienes sabemos que algo más del 80% tiene menos de 32 años. Me parece por tanto evidente la necesidad de disputar este segmento de ciudadanos, primero incentivándolos a inscribirse en los registros electorales (de no mediar la inscripción automática) y, en seguida, persuadiéndolos sobre las bondades de lo que la Concertación representa y, junto a ella, el carácter justo de las causas que orientan y justifican las políticas del nuevo socialismo. Pero también me parece obvio el objetivo de reconquistar un electorado que se trasladó hacia la oferta política de la derecha, para lo cual la DC dispone de un amplio espacio de desarrollo. Si esas son dos de las principales coordenadas electorales de la Concertación, la lógica podría indicar que el eventual y futuro candidato presidencial de la coalición, que creo debiese ser único, podría ser demócratacristiano, dadas las características del electorado en disputa, lo cual no significa dirimir esta decisión de modo elitista, sino más bien mediante primarias abiertas y plenamente competitivas.

G. MARTNER: No estoy de acuerdo con el diagnóstico, lo mencionábamos en otra etapa de esta conversación. La idea de que el electorado se estructura en centro, izquierda y derecha es una idea que es crecientemente menos válida y especialmente que las elecciones se ganan en el centro. Las elecciones se ganan en la capacidad de interpretar las aspiraciones de los ciudadanos y esas aspiraciones difícilmente son clasificables meramente en la lógica de estructuración lineal del espacio político. Ahora claro, no puedo esconderte que yo estoy influido por el hecho de no definirme para nada como una persona de centro, yo no creo en los centros, más bien creo en las ideas fuertes, en las ofertas sólidas que, en tanto y cuanto expresan un conjunto de valores que a su vez inspiran un proyecto de transformación de la sociedad, dan sentido y convocatoria a una acción política que se traduce en una capacidad de sintonizar con las aspiraciones de los ciudadanos.

Creo que pueden encarnar esas aspiraciones líderes y partidos que no necesariamente se identifican con el centro. La historia política reciente de nuestros países tiene como característica que muchos gobernantes no se ubican en el centro. Gente que tiene un posicionamiento político muy claro, con ideas fuertes, que en tanto y cuanto logran encarnar aspiraciones sociales mayoritarias están en condiciones de abarcar fuerzas que van mucho más allá de su núcleo básico e inicial de pertenencia. En ese plano, el futuro de la coalición, y a su vez de la evolución de nuestro sistema democrático, probablemente se va a jugar en esta dimensión. En recoger aspiraciones ciudadanas que ya no son las puntuales, que ya no son las puramente emocionales o las de estilos, como lo que elaboran y trabajan por ya bastante años Joaquín Lavín y la derecha, sino que más bien aspiraciones e ideas sobre el modo de vivir en el futuro que todo el mundo tiene. Incluso aquellas personas que pudieran no estar cercanas a una reflexión política en profundidad o que desconfían de la democracia y de los partidos políticos, pero que obviamente saben que viven en sociedad y que perciben los desafíos que la sociedad tiene, toman finalmente posición apuntando a lo que entienden es el mejor proyecto para construir un futuro mejor. Y los socialistas nos instalaremos con decisión en el centro de la construcción de una nueva república que deje atrás la prologada transición a la democracia y nos encamine a un nuevo progreso, a una República de Democracia Social. Y tendremos candidato (a) presidencial en una primarias abiertas que estoy seguro vamos a ganar y que luego representará al conjunto de la coalición para dejar una vez más en minoría a una derecha que no merece gobernar Chile y así lo dejarán establecido los ciudadanos en el año 2005.

El proceso de construcción de esta Nueva República supone persistir, una vez que se van dejando atrás las secuelas de la dictadura y la inmensa regresión social y cultural que provocó, en consolidar los derechos políticos y seguir extendiéndolos tenazmente a los derechos económicos y sociales que incluyen, como hemos señalado anteriormente, los ámbitos del orden cívico y republicano, mínimos sociales universales, la protección contra los grandes riesgos, la protección de las minorías discriminadas, la provisión adecuada de bienes públicos de consumo colectivo de ámbito nacional y local, una tributación justa, suficiente y eficiente para financiar las tareas públicas y la regulación eficiente y equitativa de los mercados de bienes, de capitales y del trabajo.

Esta tarea es de suyo gigantesca en Chile y también en nuestras sociedades latinoamericanas fragmentadas, desiguales y con instituciones débiles y con frecuencia abusivas. Llevarla adelante supone consolidar una verdadera democracia representativa y extenderla hacia formas crecientes de autogobierno, mediante formas modernas de democracia directa (iniciativa popular de ley, referendums vinculantes, consultas a la sociedad), el fortalecimiento del poder estatal local y la participación de las comunidades de la sociedad civil en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, lo que requiere de la contención y minimización del corporativismo, de una larga construcción de conductas cívicas y de la creación de condiciones culturales y materiales que lo hagan posible en el tiempo, con múltiples procesos de experimentación, de prueba y error, de gobierno en gobierno(12).

Junto a la extensión del espacio democrático y de los derechos y procedimientos que le son consustanciales, la tarea de la República de Democracia Social es asegurar la extensión de la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados en áreas específicas. Ello requiere también intervenir en la distribución de las oportunidades de generar activos productivos y en la participación de los

trabajadores en la gestión de la empresa en aquello que afecte su destino, así como la disminución del tiempo de trabajo asalariado. También supone garantizar de modo sistemático y al margen del mercado las oportunidades educativas y de formación, de crucial importancia en la nueva sociedad del conocimiento y la información.

Se trata de alcanzar, a través de un nuevo impulso transformador, esta nueva República de Democracia Social para acercarse al objetivo de que cada cual pueda llevar adelante sus proyectos de vida en condiciones materiales que permitan una autonomía personal con el desarrollo de las capacidades humanas, y el acceso a ingresos básicos que aseguren la dignidad de todos, independientemente de su inserción en la esfera productiva, como te he insistido a lo largo de esta conversación y a riesgo de repetirme.

Construir este nuevo orden político y social debe hacerse respetando las libertades y las opciones individuales y también retribuyendo, con los límites sociales mencionados, la innovación y el esfuerzo personal. Esta es la alternativa socialista moderna, que pone en el centro lo cualitativo, en cambiar la vida, en plantearse en el mundo con la alegría de vivir el presente y la esperanza de construir paso a paso un futuro mejor para las nuevas generaciones.

Hay que poner las cartas sobre la mesa para la etapa que viene, mirando hacia el bicentenario del 2010. Por mi parte, creo necesario plantear a la discusión cinco nuevos ejes para un nuevo progreso hacia la sociedad igualitaria y justa por la que luchamos, nuevo progreso que debe ser una auténtica alternativa al individualismo negativo, a la ausencia de sentido que éste genera, al deterioro de la calidad de vida y a la inseguridad propia de la sociedad de mercado que ofrece la derecha.

A. JOIGNANT: ¿Cuál es el primer eje de este «nuevo progreso»?

G. MARTNER: El primer eje es un futuro con una nueva cultura de las libertades. Las distintas visiones que sobre las libertades se tiene desde la izquierda democrática y desde la derecha son un factor de diferenciación global y me atrevo a pensar que también de movilización de los jóvenes. Una sociedad en la cual prevalece el conservadurismo cultural, porque no otra cosa es la oferta de la derecha, en la idea que el integrismo católico debe aplicarse a todos y que las divisiones que la sociedad tiene emanan de distintos talentos que están establecidos naturalmente en unos y otros individuos y que por lo tanto lo que aquí se requiere es una sociedad jerarquizada, autoritaria, inspirada en la intolerancia, para hacer funcionar el orden social, va a tener como idea contrapuesta aquella que considera que es en la expansión de las libertades individuales, en la diversidad, en la diferencia, está la riqueza de una sociedad que reconoce a todos los mismos derechos y no acepta la discriminación social, sexual o racial.

Una sociedad se construye no sólo tolerando al distinto. Tolerancia es una palabra que a mi no me gusta, porque supone apenas no querer destruir lo que no me agrada. Más bien lo que hay que hacer es cultivar la diversidad y la diversidad supone respetar los proyectos de vida distintos que unos y otros quieren desarrollar en el respeto de la dignidad de todos y de la libertad de los demás, que incluyan las diversas preferencias sexuales, religiosas, culturales, en suma los modos de vida diversos que a la larga enriquecen a las sociedades e incrementan su bienestar con el desarrollo de una cultura plural e innovadora.

Tomemos el tema del divorcio. No hay nada más insólito que se pretenda desde la ley dejar a parejas con un vínculo que no se pueda disolver a lo largo de sus vidas, en circunstancias que esas parejas deben poder libremente, o por voluntad de una de las partes, constatar la imposibilidad de seguir viviendo juntos. Es completamente increíble e insólito que Chile sea uno de los muy pocos países en el mundo que a estas alturas mantiene una prohibición de divorciarse y por lo tanto de reconstruir proyectos de vida cuantas veces los individuos lo estimen pertinente, por voluntad común o por imposibilidad de convivir o de seguir conviviendo con quien se escogió en un momento dado como pareja.

Somos también partidarios, a partir del gran avance que significa la creación del Consejo Nacional de la Cultura, de poner en práctica una política pública muy activa de promoción del acceso a las diversas manifestaciones de la cultura, incluyendo la existencia de medios de comunicación plurales,

el apoyo a la creación y el impulso a la industria de contenidos culturales, en el contexto del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la información y de los soportes digitales de la creación artística y cultural. Estas pueden ser un soporte decisivo para el desarrollo de la cultura y del servicio público en todas sus expresiones.

A la instalación de la red Enlaces en las escuelas y del proyecto Gates en las bibliotecas públicas, grandes logros de la administración Lagos, debe agregarse en una nueva etapa la meta del acceso universal progresivo a Internet con soporte en banda ancha de los jóvenes -en la escuela, en los diversos centros comunitarios en los barrios y, a medida que los recursos disponibles lo vayan permitiendo, en la mayoría de los hogares a través de créditos accesibles para las familias de menores ingresos- y desde luego en las empresas de todas las escalas. Todos los servicios públicos deben intensificar el uso de las nuevas tecnologías de la información para interactuar con los usuarios. Ahora, no se trata de reemplazar la convivencia humana por la red de redes que es Internet ni menos las expresiones culturales basadas en los intercambios humanos directos, sino usarla como una oportunidad democratizadora de la cultura, del acceso al conocimiento y de prestación eficiente y rápida de servicios a los ciudadanos.

De más está recalcar que la expansión de una cultura de las libertades supone otorgar derechos a los pueblos originarios, para que éstos accedan a una plena capacidad de autorepresentación, la preservación de su identidad y diversidad cultural y una efectiva igualdad de oportunidades, avanzando de una vez a su reconocimiento constitucional largamente postergado y a la adopción del Convenio 169 de reconocimiento de los pueblos indígenas. Abordar la deuda histórica contraída con los pueblos originarios supondrá, constatando el actual agotamiento de los parlamentos de Nueva Imperial al momento de recuperarse la democracia, ampliar el desarrollo de programas de infraestructura social y productiva en las zonas indígenas, fortaleciendo el Programa Orígenes con mayor participación de las comunidades, una más amplia cobertura del Fondo de Tierras y Aguas, y también afianzar territorios propios de las comunidades, así como crear comunas indígenas y zonas de desarrollo con autorepresentación y gestión propia de programas públicos.

Las sociedades polarizadas, las sociedades en donde la discriminación se mantiene legal, cultural y económicamente, son sociedades que se empobrecen, que se tensan, que se dividen y en donde emerge la violencia soterrada o abierta como rasgo característico. Las sociedades desiguales y discriminatorias se transforman en sociedades mucho más impredecibles que aquellas otras que cultivan la integración en la diversidad y la expansión de libertades en todos los campos, consagrando una cultura de los derechos igualitarios.

Este es un aspecto emblemático: hay dos respuestas completamente distintas en materia de libertad, la conservadora y jerárquica de la derecha, y la libertaria y diversa de la izquierda democrática.

A. JOIGNANT: ¿Cuál es el segundo eje del «nuevo progreso»?

G. MARTNER: El segundo eje es un mejor futuro para los jóvenes a través de una reforma de la educación y de la capacitación de segunda generación. El futuro se presenta incierto para los jóvenes chilenos cuyos padres viven en la inseguridad económica. Es un deber de la sociedad entregarle mayores certezas a los jóvenes sobre su futuro y entregarles crecientemente las oportunidades de construir sus proyectos de vida.

Chile en el año 2002 ha firmado tres grandes tratados de integración económica. Esos tratados son desafíos fuertes en materia de comercio pero también en materia de inversión y todo esto tiene un fuerte componente que no es otra cosa que el desafío de tener recursos humanos de una calidad mucho mayor que la que hoy día existe en promedio en el país. Las pruebas TIMSS realizadas con la OCDE revelan que los jóvenes chilenos de 16 años comprenden muy insuficientemente lo que leen y que sus habilidades de cálculo son precarias¹³. En el caso de las élites su formación deja también bastante que desear, lo que se extiende a todos los estamentos que habrán de participar de la actividad económica y esto significa que el desafío educacional y de capacitación debe tener una prioridad mucho mayor. La ha tenido, pero creo que esa prioridad debe acentuarse.

Tendremos desde luego que seguir incansablemente en el esfuerzo de mejorar la formación y la

educación para que nuestra riqueza humana se ponga al servicio del desarrollo del país, con una permanente capacidad de adaptación y con una multiplicada capacidad de reforzar la igualdad de oportunidades. Los proyectos de mejoramiento de la educación no deberán formularse desde la mera necesidad pragmática de aumentar la «calidad y productividad de la mano de obra», en el lenguaje tradicional del productivismo, sino como la necesaria condición para formar hombres y mujeres libres y solidarios, capaces de valorar su inserción en la comunidad sobre la base de la autonomía y la autoresponsabilidad, en donde ser competente no sea vivir para la competencia destructiva sino para, junto al aumento del bienestar personal y familiar, cultivar los valores de fraternidad y solidaridad que mejoren la vida en común.

Y ahí está nuevamente la respuesta de la derecha, la respuesta elitaria e individualista, la respuesta que sólo considera la «libertad de enseñanza», que se traduce en una fuertísima segmentación social. A pesar de los esfuerzos desplegados, hoy tenemos aún una sociedad en donde puede establecerse el itinerario de un niño en la vida determinado casi irremediabilmente por su punto de partida.

Si se está en un contexto social y familiar donde la única opción es ir a una escuela municipal gratuita, sin haber accedido a la educación preescolar tan importante según los estudios modernos, y esa escuela municipal gratuita a su vez está inserta geográficamente en un tipo de espacio en donde sólo va a ser posible convivir con personas de condición marginal o precaria en su inserción económica y en su capital cultural, entonces la respuesta va a ser que probablemente el único destino posible es, en el mejor de los casos, terminar la educación media y muy difícilmente acceder a la educación superior (a pesar de la fuerte expansión que ésta ha experimentado en la última década, especialmente en el ámbito de las universidades privadas, muchas de las cuales son de dudosa calidad formativa), con una parte de cada generación que simplemente deserta de la escuela. Extremando el esfuerzo, un joven de familia de bajos ingresos y dotada de un bajo capital cultural tendrá la posibilidad de acceder a la educación técnica, hoy privatizada, devaluada, precaria y cara en Chile, aunque desde 2000 se ha establecido un importante sistema de becas financiadas públicamente.

Por otro lado, quien nace en un barrio acomodado del país, en una familia de ingresos altos, con capital cultural ya construido y luego va a una buena escuela particular pagada, entonces su destino más probable es llegar sin mayores dificultades a completar la educación media, acceder a una buena universidad y tener por tanto un camino asegurado de obtención de ingresos económicos sustancialmente más altos a los del promedio de la población, como ha sido establecido por los diversos estudios en la materia para la última década, dada la mayor oferta de empleos de media y alta calificación.

Esto no sólo tiene que ver con el tema crucial de la desigualdad social, sino que también de la ineficacia económica. Convengamos que está demostrado que los talentos se distribuyen del mismo modo en los grupos sociales y, por lo tanto, la ausencia de oportunidades para los jóvenes de condición social modesta constituye a la larga una inmensa pérdida de desarrollo de talentos que se sustraen del aporte al bienestar colectivo.

Un sistema que selecciona de este modo a unos y otros de acuerdo a su condición social inicial, genera un despilfarro inmenso de talentos para la sociedad en su conjunto. Entonces la respuesta desde la izquierda democrática no es persistir en la segmentación del sistema educativo sino que, por el contrario, avanzar con rapidez a su integración, reconsiderando lo que siempre fue evidente: la educación no disminuirá las brechas sociales mientras las desigualdades familiares sean tan importantes. La educación no es el gran factor de igualación que debía sustituir las políticas redistributivas de capacidades e ingresos a las familias, como se insistió por los neoconservadores en la década del '90, sino uno de los mecanismos potenciales de igualación de oportunidades, junto a muchos otros, sobre la base de promover escuelas efectivas e integradoras que acojan a los niños de familias desfavorecidas en su capital cultural inicial.

Pasar de la educación segmentada a la educación para la integración republicana es el nuevo desafío para una reforma de segunda generación.

En primer lugar se debe seguir avanzando fuertemente en la protección de la infancia. Esta ha sido

una de las prioridades del gobierno del Presidente Lagos, con la prohibición del trabajo infantil consagrada legalmente, la consolidación de los programas de salud y de nutrición materno-infantiles y el mejoramiento de los centros de acogida de la infancia en dificultades (incluyendo un sistema penal propio para los jóvenes delincuentes con énfasis en la rehabilitación social), así como la ampliación de la cobertura de la educación preescolar de niños menores de 6 años y la extensión de los sistemas de salas cunas y jardines infantiles a los sectores de menores ingresos. La meta de duplicación de esta cobertura, que alcanzaba cerca de un 30% en 2000, será alcanzada en 2006 (hasta llegar a más de un 60%), pero debemos plantearnos de ahí en adelante metas más ambiciosas, que nos acerquen a una cobertura parecida a la de la educación básica (90% en la actualidad).

La desigualdad actualmente existente (en el quintil de menos ingresos la cobertura es la mitad de aquella del quintil de más altos ingresos) es notoria en una etapa de la vida que requiere de atenciones y acciones educativas apropiadas, sin perjuicio del rol del cuidado infantil para facilitar una mayor incorporación de la mujer a la actividad laboral (que es hoy de 39% en Chile, proporcionalmente muy inferior a la del resto de los países de América Latina comparables, y ciertamente del mundo desarrollado) y que a su vez es un mecanismo privilegiado de disminución de la pobreza y de la desigualdad de ingresos de las familias.

Por su parte, una política efectiva de protección de los niños de la calle habrá de centrarse en la creación de centros de acogida que los sustraigan radicalmente de los peligros de deriva hacia la drogadicción y la prostitución. El descubrimiento reciente de redes de pedofilia con poderosas protecciones nos ha impactado a todos y la sociedad asiste con impotencia a la carencia de mecanismos de protección. La creación de nuevos centros cerrados y abiertos para la infancia abandonada, atendido por personal especializado suficiente, es una tarea de máxima prioridad si es que queremos concebirnos como una sociedad decente que no tolera el abuso de los niños en situación precaria.

Debemos proponernos proteger y formar a todos los niños y jóvenes para que se transformen en personas competentes, capaces de aprender bien, de trabajar bien y de ser ciudadanos reflexivos y con valores humanistas compartidos, mediante el derecho a una educación escolar gratuita de calidad para todos. Ello supondrá culminar la extensión de la jornada completa (eliminando la transferencia gratuita de capital a colegios privados hoy existente y que no tiene justificación alguna) llevándola a 1140 horas en básica y 1260 horas en media y orientar los contenidos curriculares a la adquisición de saberes amplios (con «lo mejor que se ha pensado y se ha dicho en el mundo») que fortalezcan la capacidad de aprender a lo largo de la vida.

Ampliar el derecho a acceder a escuelas pedagógicamente efectivas es una condición para la igualdad de oportunidades, lo que requiere mantener el reforzamiento de insumos educativos escolares allí donde los logros son inferiores, pero aplicando más ampliamente la lógica de la discriminación positiva. Se debe continuar el esfuerzo de disminuir las brechas de rendimiento en educación básica y media con los Proyectos de Mejoramiento Educativo y los programas de reforzamiento de lecto-escritura y matemáticas y avanzando en el reforzamiento de la convivencia escolar, con mayor involucramiento de los padres y un mayor espacio para la creación artística y el deporte.

Se requiere también reestructurar los sistemas de subvención, de modo que la condición para recibir recursos públicos en todas las escuelas sea no sólo respetar los programas oficiales sino también no discriminar (por ejemplo a niños de padres separados o a niñas embarazadas) y hacerse cargo de niños de condición socioeconómica desmedrada y / o con dificultades de aprendizaje, reforzando el carácter público, republicano e integrador de la educación. El sistema escolar debe definirse por la Nación chilena como uno de los lugares sociales de integración de niños y jóvenes de distintos orígenes sociales.

A su vez, debe generarse un nuevo sistema de selección de los talentos de carácter igualitario y basado en el mérito, especialmente mediante el reforzamiento de un cierto número de liceos de educación media de excelencia distribuidos en todas las regiones. En el futuro, no deberá distraerse ningún recurso público (incluyendo las ventajas tributarias existentes que no se justifican para escuelas concebidas como negocios) al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales

de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades.

Se deberá terminar de consagrar el derecho a no ser discriminado arbitrariamente en la escuela por razones de credo, salud, dificultad de aprendizaje, situación de los padres o embarazo y trabajar contra la segregación escolar a partir del hecho que la educación particular pagada reúne a cerca de un 10% de la matrícula, aquella con financiamiento compartido un 30% y la de tipo gratuito un 60%. Hay hoy 5 tipos de establecimientos a partir de las reformas de los años ochenta y de la reforma tributaria de 1993, que fue una concesión a la derecha que condicionó a esta modalidad la prolongación de los recursos para fines sociales, lo que fue un error: los de tipo particular pagado, particular subvencionado con financiamiento compartido, particular subvencionado gratuito, municipal con financiamiento compartido (restringido a educación media) y municipal gratuito, cuyos rendimientos están implacablemente jerarquizados de mayor a menor según el tipo de escuela.

Esto es lo que la sociedad chilena tiene que transformar en profundidad en la próxima etapa de nuestra vida republicana. Si se sigue con este mecanismo, la educación segmentada será el soporte secular de la desigualdad, junto a la segregación social en el espacio urbano y la desigualdad ilegítima de ingresos. Restringir el financiamiento compartido es una necesidad para inhibir la segmentación, así como lo es diferenciar la subvención según condición socioeconómica y no sólo otorgar más recursos al establecimiento pobre mediante programas de reforzamiento de insumos.

Otorgar una subvención más alta a los niños de familias que reciben subsidios monetarios por otras carencias es una modalidad recientemente introducida —vinculada al programa contra la pobreza Chile Solidario— para estimular el cumplimiento de la obligatoriedad de los 12 años de educación establecida por el gobierno del Presidente Lagos. Cabrá evaluar si este mecanismo incitará a los establecimientos que rechazan a los niños en situación más precaria (que suelen tener menor rendimiento y más problemas conductuales) a incorporar a una parte de ellos, y así mejorar su oportunidad de acceso a una educación de calidad. Si esto no es suficiente, habrá que establecer un sistema de cuotas de integración a cada establecimiento que reciba subsidios públicos, como está propuesto en un proyecto de ley en trámite.

Elevar la retención en el sistema escolar supone reforzar en mayor escala el programa Liceo para Todos de becas familiares, y estimular que muchos jóvenes desocupados vuelvan a la escuela a formaciones de nivel técnico o a validar la educación media, o a formas de capacitación combinada con educación básica y con programas de trabajo comunitario de reinserción con el objeto de aumentar la capacidad de retención de jóvenes de familias pobres en el sistema escolar, en combinación con una formación efectiva para la inserción el trabajo. El hecho de que los jóvenes menores de 24 años tengan tasas de desempleo que triplican la media nacional está ahí para establecer la urgencia de estas políticas.

Terminar de consagrar el esfuerzo del gobierno del Presidente Lagos para lograr el derecho a acceder por mérito a la educación superior supondrá hacer efectiva la acreditación de las Universidades y sus carreras de modo que los alumnos y sus padres sepan en qué se embarcan a la hora de pedir crédito universitario y agregar a los mecanismos existentes un nuevo sistema de becas de matrícula y mantención con cupos por región y comuna que confirme que ningún joven talentoso —es decir con un rendimiento suficiente— quede fuera de la educación superior por carecer de recursos, incluyendo el acceso a becas para Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de calidad debidamente acreditada. Cabe subrayar que no habrá ciencia y desarrollo tecnológico de envergadura mientras permanezca la lógica mercantil de organización de la educación superior y de la tarea científica y tecnológica y no se instaure un sistema de desarrollo de capacidades, con normas consistentes de reclutamiento basadas en el mérito. Creo que además llegó el momento de crear Institutos Universitarios Tecnológicos en cada región adscritas a las Universidades Públicas y terminar con las ventajas tributarias a la educación superior privada, incluyendo el sistema de descuentos tributarios a las donaciones de empresas que se concentran en pocas universidades, de modo de terminar con el estímulo ilegítimo a la educación con fines de lucro que muy poco ofrece a nuestros jóvenes y que se

ha constituido en un gran negocio basado en subsidios públicos.

Queda claro que la derecha y la izquierda democrática tenemos en esto puntos de vista radicalmente contrarios.

A.JOIGNANT: ¿Y el tercer eje del «nuevo progreso» ?

G. MARTNER: El tercer eje es la creación de empleos con derechos, para ampliar la seguridad económica de las familias y la inserción social de sus miembros. Hemos pasado de 6-7% de desempleo en los años noventa a 9-10% de desempleo desde la desaceleración del crecimiento que se evidenció a partir del año 98 en adelante. Asegurar las libertades cívicas y políticas, la educación republicana y el acceso al empleo son bienes primarios que la sociedad moderna debe asegurar a todos sus miembros. Ahí está la respuesta de la derecha y esa respuesta es más «flexibilidad». Es decirles a los desempleados que quieren acceder a un trabajo asalariado (que dicho sea de paso es la forma que adquiere el empleo para la inmensa mayoría de quienes participan en la actividad económica en el Chile de hoy, pues más de un 70% de los que tienen un empleo son asalariados, de acuerdo al Censo de 2002), que si quieren obtener un empleo deben entonces ver disminuidas todas las regulaciones que el ejercicio del empleo conlleva, tanto desde el punto de vista de los derechos de los asalariados como de las obligaciones respecto del entorno. Mencionémoslas: jornadas de trabajo respetuosas de la vida familiar y personal, derecho a la negociación colectiva y a la huelga, a la higiene y la seguridad, a un trato no discriminatorio al interior de la empresa, a la capacitación, a un salario mínimo que cubra las necesidades básicas; al mismo tiempo, las regulaciones territoriales y ambientales, es decir todo lo que vincula la actividad de la empresa al territorio en que se localiza.

Y entonces la respuesta de la derecha frente al desafío de creación de empleo es disminuir regulaciones, hacer «flexible» la actividad económica. La respuesta de la izquierda democrática es rechazar la beatitud de la flexibilidad (que en el fondo es la promoción de la ausencia de normas) como supuesto soporte del desarrollo y promover el empleo con derechos. ¿Es esto económicamente viable o económicamente preferible? Está demostrado que una plena flexibilidad se traduce en el corto plazo en fluctuaciones macroeconómicas mucho más amplias. Parte importante de la trayectoria económica difícil que el país ha tenido es la magnitud de las fluctuaciones macroeconómicas que ha experimentado, especialmente por el tipo de inserción internacional en que Chile aún se desenvuelve, con fuerte impacto de las variaciones de precios de tres o cuatro productos básicos de exportación (cobre, celulosa, harina de pescado) y el efecto de los flujos financieros globalizados. Por lo tanto, con mayor flexibilidad laboral tiende a aumentar la inestabilidad macroeconómica, con auges y caídas de la actividad económica más frecuentes y más amplias(14).

Pero está también demostrado que el empleo precario e inestable impide la formación a largo plazo de lo que se conoce como el «capital humano» (las capacidades productivas de los seres humanos adquiridas mediante una mejor salud y una más amplia educación, concepto que a mi me resulta un tanto chocante pues identificar el capital a los seres humanos me resulta una contradicción en los términos y prefiero hablar de capacidades humanas adquiridas) y el «capital social» (el conjunto de prácticas sociales de cooperación y de construcción de redes, que prefiero llamar las capacidades sociales acumuladas). La actividad económica es un conjunto de compromisos con el trabajo bien hecho y con la innovación y el aprendizaje, a partir de variadas motivaciones humanas. No se puede ni innovar ni hacer un trabajo bien hecho sobre la base de seres humanos que perciben que la estabilidad en la cual desarrollan su actividad es mínima, inexistente, acompañada de la ausencia de consideración a sus opiniones y muchas veces a las humillaciones cotidianas que nos vienen de relaciones laborales ancestralmente opresoras.

Esta reflexión es también válida para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, crucial para el dinamismo del tejido económico y para la creación de empleos, en áreas como el acceso al financiamiento, a la capacitación y a la incorporación del progreso técnico, en las que se encuentra en desventaja frente a la gran empresa monopólica u oligopólica.

El tipo de eficacia económica que rinde frutos para aumentar la productividad en el largo plazo es una que se sustenta en compromisos estables en el tiempo con la actividad productiva, sin rigideces

que paralicen, pero sin inestabilidades que destruyan el tejido productivo y no permitan acumular capacidades basadas en el conocimiento y en las prácticas de cooperación y diálogo social.

Consolidar condiciones macroeconómicas que favorezcan la estabilidad sin herir el crecimiento y consolidar el acceso a los mercados más dinámicos del mundo no son fines en sí mismos sino instrumentos al servicio de la cohesión social, que es además necesaria para sostener dicho crecimiento, en condiciones fuertemente cambiantes en un mundo que pone aceleradamente al conocimiento y su difusión en el centro de la dinámica productiva. Dos de los problemas esenciales que el país hoy enfrenta, la baja calidad de la formación de sus recursos humanos, fruto de la desestructuración de los sistemas educativos que se han revertido gradualmente pero cuyos frutos aún no se observan suficientemente, y la baja capacidad de absorción de nuevas tecnologías por las empresas que mantienen estructuras jerárquicas extremas, se originan en el mesianismo neoliberal que por más de una década y media prevaleció en Chile y que en la década siguiente se revirtieron sólo lentamente, en el contexto de resultados económicos y sociales incomparablemente mejores que durante la dictadura. Pero debe dejarse definitivamente atrás el enfoque neoliberal, en un contexto en que el país aprendió que ni el voluntarismo económico ni el fundamentalismo de mercado deben inspirar su política económica.

La lección principal es que la política económica debe orientarse a establecer un círculo virtuoso de crecimiento con estabilidad, acompañado de políticas estructurales de formación de capacidades humanas, de capacidades sociales y de difusión tecnológica. Esto requiere buscar soluciones cooperativas entre los agentes privados y el sector público, que pasan por la garantía de estabilidad que alarga el horizonte temporal de las decisiones. El círculo virtuoso se perfila cuando es factible el cálculo económico, cuando las percepciones de la demanda futura son estables y cuando los agentes no persiguen ganancias ocasionales causadas por cambios bruscos, sino proyectos rentables en el sector real de la economía. Se trata de crear las condiciones de un círculo virtuoso en que las empresas invierten porque hay demanda y los consumidores consumen y ahorran porque hay empleo, logrando una competitividad sistémica de las empresas mediante una especialización productiva dinámica, un sistema financiero que impida la selección adversa de la producción innovadora y de pequeña escala, con el desarrollo de nichos de alto valor agregado y una inserción internacional activa en los grandes mercados consumidores del mundo.

Para la visión de derecha, se crearían más empleos disminuyendo los costos del trabajo, por lo que su receta es restringir la capacidad de los asalariados de organizarse y negociar colectivamente y eliminar el salario mínimo, para que pueda operar «flexiblemente» el ajuste de cantidades y precios en el mercado de trabajo. Sólo que en este caso las «cantidades» son los seres humanos que trabajan y los «precios» el salario que les permite subsistir. Con esta lógica el salario de equilibrio debiera en tal o cual momento situarse bajo los mínimos de subsistencia y considerarse esto «normal» y «eficiente». Esta visión de las cosas no es aceptable por ese sólo hecho.

Pero ocurre que, además, no son pocos los expertos que sostienen que en la creación y destrucción de empleos los fenómenos cruciales son más bien los que tienen que ver con la demanda agregada por bienes y servicios y sus fluctuaciones y en el más largo plazo la oferta productiva y el cambio tecnológico. Se obtendrá una mayor competitividad de la economía fortaleciendo con fuertes políticas públicas la difusión del conocimiento y la ampliación de las capacidades humanas y de las capacidades sociales para crecer y para igualar derechos y oportunidades y no flexibilizando mercados a trocha y mocha, como plantea la derecha.

Fue la coyuntura macroeconómica la que deterioró en Chile la situación del empleo y no el precio relativo del trabajo o el nivel del salario mínimo, como sugieren algunas interpretaciones. Quiero insistirte en que en Chile nunca se creó más empleo que cuando, en la década del '90, se recuperó la democracia y el diálogo social, se amplió el costo del despido y se incrementó el salario mínimo. Disminuir el desempleo requiere persistir con una política de intereses bajos, tipo de cambio alto, gasto público expansivo y fomento de la innovación tecnológica y no restringir el salario mínimo o la negociación colectiva, sino ampliarlos e introducir incluso el salario de reparto, que ya funciona

en algunas empresas públicas chilenas con éxito, sobre la base de agregar a un salario de base fijo una prima calculada sobre una parte de las utilidades por trabajador(15) lo que en alguna medida contempla la legislación chilena en lo que se denominan las gratificaciones.

Además, nuestro país puede, si se lo propone, ofrecer a todo desempleado, junto al seguro de desempleo que exitosamente ya está aplicándose, ya sea el acceso a un programa de formación en empresas o bien el acceso a un «empleo ciudadano» de utilidad pública, de tiempo completo o parcial, de carácter temporal o incluso permanente para los casos de marginalidad social más grave. Uno de los desarrollos del Programa Chile Solidario habrá de ser establecer este mecanismo permanente de inserción social de los desempleados a través de la formación y del «empleo ciudadano». A su vez, el sistema de franquicia tributaria a la capacitación, al que tienen acceso las PYMES y los trabajadores de menos calificación con dificultades, debe ser reemplazado por un sistema de subsidio directo a la capacitación, financiado por un impuesto a las utilidades aplicable a las empresas que capacitan menos que el promedio (en términos de proporción de la masa salarial) y administrado por representantes de los empleadores y los trabajadores por ramas para asegurar su pertinencia. La poca relevancia de la capacitación es uno de los problemas del sistema actual, que sin embargo ha tenido una fuerte expansión de su cobertura desde 2000.

Junto al problema del acceso al empleo, el respeto de los derechos de los trabajadores en su lugar de actividad son el segundo aspecto crucial que enfrenta el mundo del trabajo en nuestra sociedad. En un país de 15 millones de personas, unos 5 millones trabajan y un 73% de ellos lo hace como asalariado. Sujetarse a la jerarquía del dueño o de los gerentes a cambio de un salario es una relación compleja que requiere de equilibrios. Muchos de ellos no existen en Chile y más bien suele prevalecer la «cultura de la hacienda», en donde el abuso del empleador en materia de trato, de jornadas, de salarios, de pago de las cotizaciones sociales es pan de cada día. Lo que es más grave, en muchas partes se persigue a los sindicatos o se impide su creación. La negociación colectiva apenas abarca a un 10% de los trabajadores. La contraparte de este tipo de relaciones laborales asimétricas, suele ser, claro está, la ausencia de compromiso de los asalariados con su trabajo, lo que a su vez requiere de costosos sistemas de reclutamiento y supervisión. En este tipo de sistema de relaciones laborales todos pierden.

De ahí la importancia de la creación de una sólida judicatura laboral que haga realidad el Estado de derecho en la empresa. Por su parte, plantear la capacidad de adaptación de la jornada de trabajo a las situaciones de cada empresa es vista con razón por el sindicalismo como un peligro de incremento de la asimetría en la relación laboral que se prestaría para múltiples abusos. Otra cosa muy distinta es cuando los trabajadores representados en sindicatos respetados negocian modulaciones de los horarios de trabajo, en el marco del respeto de las jornadas semanales máximas y del descanso dominical, para mutua conveniencia.

No tiene explicación, sino la cultura autoritaria de la empresa, lo prolongado de las jornadas de trabajo en Chile, una de las más agobiantes del mundo, que no tienen justificación y representan una pérdida notoria de calidad de vida. De allí lo importante de la rebaja de la jornada semanal prevista para el año 2005 de 48 a 45 horas, que debe iniciar un camino en el que los aumentos de productividad se reviertan hacia un aumento del bienestar de las familias chilenas.

La conducta empresarial premoderna y arbitraria debe cambiar en Chile y la sociedad en su conjunto debe esforzarse por favorecer relaciones laborales en la empresa que respeten los intereses de los trabajadores. Chile no podrá pensarse a sí mismo como país que se encamina al desarrollo si en la empresa el ajuste mecánico y único frente a los cambios y fluctuaciones en el mercado es la disminución —con procedimientos las más de las veces autoritarios y deshumanizados— de los costos del trabajo y del empleo y si no se cultiva las competencias de los recursos humanos como centro de la actividad productiva.

Las proposiciones fundamentales de la economía neoclásica desmerecen los derechos y la importancia del trabajo. Para la visión económica de derecha, este representa un factor de producción más. En ese modelo hay un número infinito de firmas ofreciendo un trabajo idéntico, y una firma que baja su

salario por debajo del de mercado se supone que perderá instantáneamente sus trabajadores. Pero en la práctica existen costos de búsqueda, costos de moverse de un trabajo a otro, rigidez de salario. En la literatura de gobiernos corporativos hay un tema central que es la divergencia de intereses entre la propiedad y administración de la firma. La incorporación o participación de los trabajadores en los esquemas de gobierno corporativo permite reducir la incongruencia de intereses. Pero más allá de eso, diversos estudios señalan que estos mecanismos presentan también otras ventajas: se comparte información, lo que conduce a reducir conflictos (los trabajadores se involucran en mejorar las condiciones de la firma, en tanto su voz y propio interés sea respetado), se hace más transparente y apoyada la toma de decisiones y se mejora la productividad.

El contraste entre un sistema que involucra a los trabajadores con su lugar de trabajo y otro que no lo hace, conduce a dos tipos de relaciones industriales. La experiencia moderna — en Europa, Japón y otros países— muestra que hay otro modelo distinto al de ajustes frente a las fluctuaciones de mercado basado en el despido sin más consideraciones. Sus ventajas principales se resumen en mayor estabilidad macroeconómica, mayor crecimiento de la productividad y mayor bienestar de los trabajadores.

Un punto a destacar es que, desde el estricto punto de vista de la eficiencia, si no hubieran imperfecciones de mercado (costos de información, asimetrías de información, rigideces de precios), las firmas tendrían incentivos propios para definir un «monto óptimo» de participación laboral en las decisiones. En este escenario no se necesitaría intervención pública en las relaciones laborales.

Pero las fallas de mercado existen y explican porqué las empresas no se mueven en esta dirección tan rápido como lo deseado socialmente. Surge así la necesidad de la intervención pública en el mercado laboral (condiciones y derechos laborales, negociación colectiva) que permita redistribuciones que de otra manera no serían alcanzadas. El llamado mercado de trabajo está plagado de «fallas de mercado» que justifican la intervención pública.

En cambio una sociedad donde amplias capas de la fuerza de trabajo son marginadas, tratadas como si su voz no contara, con oportunidades de avanzar bloqueadas, será una sociedad frágil y conflictuada. Las políticas económicas — y su manera de implementarlas — pueden contribuir a la cohesión social o al desorden social. Por eso es imperativo que las países no sólo trabajen para poner en práctica políticas que prevengan crisis y minimicen su magnitud, sino que respondan también a las crisis con mecanismos que permitan mantener lo más alto posible el nivel de empleo.

Realizar un salto sustancial en cohesión social no es tarea fácil. Esto supone fijar, entre otras cosas, reglas claras respecto a la redistribución del poder económico que permanece extremadamente concentrado en nuestra sociedad. El poder económico debe ser impedido de limitar la competencia en los mercados en que opera; el empleador debe contratar a su personal con normas que aseguren su derecho a capacitarse, a formar sindicatos, a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo y a hacer huelga; a no percibir salarios inferiores a un mínimo legal y al cobro de las horas extraordinarias; a horarios máximos diarios y al descanso dominical, a la higiene y seguridad y ser respetado en toda circunstancia en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo, incluyendo la prohibición de toda discriminación política, étnica, de género o de orientación sexual, junto a no ser sometido a trato arbitrario o ser despedido sin ser indemnizado, es decir debe poder trabajar en condiciones de respeto a su dignidad. Las empresas deben ser impedidas de dañar la salud humana y de atentar contra los ecosistemas. Deben respetar su entorno urbano y tener obligaciones claras con los consumidores. En suma, deben actuar en un Estado de Derecho y ser responsables ante los consumidores, ante sus asalariados y ante el ambiente. No sólo ante sus dueños. Se trata en la próxima etapa de la vida del país de transformar las empresas de propiedad privada tradicional en empresas socialmente responsables, como hemos señalado en una parte previa de la conversación. Entonces el dilema es: empleo «flexible» por el lado de la derecha, precario digo yo, con la respuesta de la izquierda democrática de creación de empleos con derechos.

Característica de la empresa	Baja cohesión	Alta cohesión
Mercado laboral		
Inducción al esfuerzo	Alto desempleo y salario de eficiencia	Alta participación induce esfuerzo aún con bajo desempleo
Compensación utilidades	Salarios contractuales Altas para incentivar carrera individual	Salarios más participación en las Bajas para una mayor solidaridad de grupo y cohesión
Diferencias salariales	Baja: disciplinamiento mediante amenaza creíble de despido	Alta seguridad para promover identificación con la empresa
Seguridad del empleo	A cargo del individuo para empleabilidad en el mercado	A cargo de la empresa como inversión de largo plazo en capital humano
Costos de capacitación		
Ambiente macroeconómico	Se ajusta a él y contribuye a mayores recesiones mediante despidos	Se adapta mejor a él y contribuye a menores recesiones evitando despidos
Mercados de factores y de productos		
Relación	Orientación a la competencia y al mercado	Orientación a cultivar confianza, lealtad y compromiso
Producto	Estandarizado	Fidelidad con comprador o vendedor
Mercado de capital		
Relación	Orientada a la competencia de mercado	Cultiva relaciones financieras de largo plazo
Perspectiva temporal	Corto plazo; minimiza inversión en capital humano	Largo plazo y paciencia para recuperar inversión en capital humano
Relación deuda/capital	Baja, pues necesita flexibilidad para enfrentar fluctuaciones de mercado	Puede ser mayor gracias a relación de largo plazo con fuentes de financiamiento

Fuente: A partir de Joseph Stiglitz, *Democratic development as the fruits of labor*, 2000.

A. JOIGNANT: ¿Y el cuarto eje del «nuevo progreso»?

G. MARTNER: El cuarto eje es avanzar a más protección social, es decir concluir la reforma de la salud, reformar el sistema de seguridad social en el área de las pensiones y ampliar el sistema Chile Solidario de lucha contra la exclusión. Permíteme hacer en este sentido algunos desarrollos algo complejos, pero necesarios para fundamentar la vasta reforma a la protección social en Chile que debemos poner en práctica.

En el ámbito de la salud se está llevando a cabo una reforma de gran magnitud que consagra garantías exigibles para toda la población, que establece un sistema de acceso en condiciones de calidad, oportunidad y cobertura financiera con copagos de 0% a un máximo de 20% para los principales problemas de salud en una primera etapa y para la mayoría de ellos en etapas sucesivas. Esto supone un fortalecimiento del sistema público de salud, una reingeniería compleja de los sistemas de seguros y de los sistemas de regulación y administración de los prestadores de servicios de salud, lo cual es hoy materia de discusión en el parlamento. En todo caso, junto a la reforma al sistema de seguro de desempleo, la reforma de la salud constituye un gran paso en el fortalecimiento de la protección social chilena, más allá de las controversias que una reforma de esta significación naturalmente suscita.

El debate sobre los seguros de salud y las políticas de salud opone a los partidarios del libremercado y a los de la intervención pública, enfoque inspirado por una abundante literatura especializada según la cual, por la especial característica de los mercados médicos, el verdadero problema está en definir las modalidades de intervención del Estado que aseguren mejor la eficacia y la equidad de las atenciones frente a la enfermedad y reconocer que el mercado en salud no produce ni la una ni la otra.

La insuficiente información de la población respecto de las consecuencias de sus decisiones en materia de salud conduce al poder público a intervenir sustituyéndose a las opciones individuales, a diferencia de los bienes privados clásicos. La puesta bajo tutela de los consumos ligados a la salud equivale a un reconocimiento de una responsabilidad de los individuos limitada por la asimetría de

información y la toma en consideración de las externalidades positivas y negativas asociadas a los estados de salud individuales. La legitimidad de la intervención pública en este campo es incuestionable, aunque la derecha sostenga lo contrario y postule la privatización de la salud iniciada por la dictadura en los años '80 y que terminó de fracturar socialmente los sistemas sanitarios en Chile.

Recalquemos que las asimetrías de información entre pacientes y tratantes y entre tratantes y pagadores de las atenciones, han llevado universalmente al establecimiento de fuertes regulaciones de la oferta de servicios médicos. Esto incluye desde la estricta acreditación de profesionales habilitados para realizar las prestaciones hasta el modo de funcionamiento de los seguros que cubren el financiamiento de eventos de enfermedad.

El problema del «riesgo de comportamiento» en este campo es, además, de magnitud importante: si la cobertura financiera de la enfermedad por un seguro se aplica a todo evento, entonces las conductas preventivas (que la medicina moderna reconoce como cada vez más importantes para evitar las morbilidades más frecuentes, que están fuertemente vinculadas a los modos de vida) se relajarán por parte del usuario del seguro, mientras los prestadores de atenciones médicas pagados por acto multiplicarán los gastos asociados a dichas prestaciones, con el consiguiente escalamiento de los costos de la atención de salud en un contexto de fuerte impacto del progreso técnico en el área, que es cada vez más costoso.

La incertidumbre sobre el estado de salud futura constituye para toda persona la justificación primera para contratar un seguro médico. El mecanismo de mutualización de los riesgos es el fundamento de los mercados de seguros. Siendo la distribución global de los riesgos en una población bastante conocida, el seguro reparte el costo total esperado sobre el conjunto de los individuos asegurados.

En materia de seguros médicos, dos principios se oponen respecto a como realizar este reparto:

-el principio del seguro (o de neutralidad actuarial) que vincula las primas y cotizaciones individuales al riesgo esperado;

-el principio de solidaridad que desconecta las primas de los riesgos individuales y los vincula a características observables como el ingreso.

El principio del seguro es aplicado por las aseguradoras privadas. Estas prevalecen especialmente en EE.UU., país en el que 37 millones de personas no tienen seguro y otros 22 millones carecen de cobertura adecuada, con un 56% de la población que no tiene cubierta la hospitalización. En dicho país, perder o cambiar de trabajo frecuentemente implica perder toda cobertura de seguro o no poder obtenerla y lo propio ocurre al enfermar o requerir atención médica permanente(16).

El principio de solidaridad es la base de los seguros sociales o públicos de origen europeo, tanto en el modelo bismarckiano (financiamiento por cotizaciones salariales obligatorias) o del modelo beveridgeano (financiamiento por el impuesto), con proporciones de la población cubiertas en materia de enfermedad que va desde el 69% en los Países Bajos a 100% en el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Italia, Irlanda, Finlandia, Grecia y Portugal(17).

Para hacer frente a las asimetrías de información, los seguros privados realizan una política de selección de riesgos. Si la compañía no se compromete en un seguro a largo plazo, explota su adquisición de información excluyendo los altos riesgos o imponiéndoles cotizaciones prohibitivas. Establecer el derecho para todo ciudadano de tener acceso a un nivel adecuado de cuidados independientemente de su ingreso, de sus enfermedades previas o de su edad es nuestro enfoque. Un seguro en el que las primas son independientes del riesgo individual reparte los riesgos entre distintas clases de riesgo. Esta solidaridad entre pequeños y grandes consumidores de cuidados es de naturaleza redistributiva y conforme al principio de equidad.

El fundamento y legitimidad de la seguridad social en salud es que cada individuo que ignora su estado de salud futura está dispuesto a integrarse a un sistema que estipula que los que gozan de buena salud subvencionarán a los individuos en mal estado de salud. Desde el punto de vista de la equidad las condiciones de acceso al seguro médico deben ser independientes del estado de salud y del riesgo esperado. El Estado debe intervenir produciendo por sí mismo el seguro o imponiendo reglas de cálculo de las primas y tasas de cobertura conformes a este principio, estableciendo

especialmente la cobertura a todo evento de las enfermedades catastróficas.

En conclusión, considerar la eficiencia, la equidad y evitar la selección de riesgos conduce a una misma respuesta: sólo un seguro universal en condiciones de prima y de cobertura independientes del estado de salud puede asegurar un trato equitativo de los asegurados a largo plazo e impedir la expulsión de los riesgos altos, que desde las reformas de los años '80 se concentran en un sector público que sólo recibe el financiamiento de los más pobres y debe cubrir las atenciones de los que más la necesitan, para gran beneficio de los seguros privados. La actual reforma avanza hacia una cobertura unificada y un fondo de redistribución de riesgos, pero se debe mantener la perspectiva de establecer en Chile un sistema de aseguramiento universal que rompa la lógica de una salud desfinanciada para los pobres, los enfermos crónicos y las personas de más edad y una salud privada para los ricos, sanos y jóvenes y permita una auténtica equidad en el acceso a la salud, en el contexto de un cambio del sistema de prestadores que promueva la salud preventiva y la primacía del nivel primario de atención. Este cambio en el modelo de atención es indispensable para evitar las enfermedades graves, y caras, que resultan de la ausencia de una intervención oportuna sobre enfermedades crónicas y sobre los hábitos de vida. La reforma a la salud ha sido iniciada, pero deberá abordar sucesivas etapas futuras en un proceso que es necesariamente largo, como lo fue la reforma iniciada en 1952 y que tan buenos resultados produjo para reducir las enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil.

Por su parte, desde el abandono del sistema de pensiones por reparto y su reemplazo por uno de capitalización, ha permanecido una fuerte interrogante sobre la magnitud de las pensiones futuras en Chile. Estas dependen crucialmente de la estabilidad de las cotizaciones (siempre amenazadas por la pérdida temporal del empleo o insuficiente constancia de los autoempleados) y de la rentabilidad de los fondos. Hasta acá los fondos han contribuido a reanimar el mercado de capitales y han mantenido una rentabilidad promedio relativamente satisfactoria aunque decreciente, fuertemente influida por las rentabilidades iniciales de un fondo de aún pequeña escala, rentabilidad que disminuye si se considera los fuertes costos administrativos existentes. Sumando y restando, no parece inverosímil que en el largo plazo del orden de un 50% de los actuales cotizantes no alcance a obtener la pensión mínima, mientras la cobertura es de sólo un 60% de la fuerza de trabajo.

Se entiende en teoría que aplicar un modelo de capitalización individual se justifica si el crecimiento proyectado de la masa salarial es inferior al rendimiento de las cotizaciones capitalizadas, al lograrse por esa vía mayores pensiones para los cotizantes que en un sistema de reparto. Esto no es evidente para un país como Chile si mantiene las tasas de crecimiento promedio de la última década (la masa salarial en el largo plazo crece de modo semejante o con pocas variaciones respecto de la producción) y si se considera que la rentabilidad de largo plazo de los activos financieros, según el Banco Mundial, ha sido en las economías maduras del orden de 8% en las acciones y de 1.4% en los bonos de gobierno en los últimos treinta años. Rentabilidades reales netas inferiores a 4% promedio anual empezarán a resultar críticas para el funcionamiento del sistema en Chile.

En la práctica, en Chile se construyó un sistema que, junto a la nueva capitalización individual, mantiene un esquema de «reparto», no ya de cotizantes actuales a pasivos, sino de contribuyentes del sistema tributario a amplias categorías de pasivos que no obtienen la pensión mínima o que no han contribuido al sistema. No se observa hasta ahora un efecto neto positivo sobre el ahorro agregado y se mantiene una pesada carga fiscal actual y futura. Concluida la transición, en la que el Estado – es decir los contribuyentes- se ha hecho cargo de pagar las pensiones comprometidas en el antiguo sistema de reparto, se podría en teoría pensar que la capitalización contribuirá al ahorro y al robustecimiento de los activos y del empleo. Pero esto dependerá del rendimiento de los activos: si son bajos inducirán una fuerte carga fiscal sin los financiamientos respectivos.

Está también en juego el manejo de los riesgos financieros en el tiempo, que están muy desigualmente repartidos entre generaciones. Una crisis bursátil, por ejemplo, otorga la oportunidad de adquirir activos depreciados, lo que será beneficioso para los jóvenes que tendrán ganancias de capital en sus cuentas en el largo plazo, pero perjudicial para los que van a jubilar a corto plazo. No se produce en

el actual sistema una mutualización de riesgos. A lo más se puede morigerar parcialmente el riesgo de quienes están por jubilar diferenciando diversos tipos de fondos (un mecanismo de este tipo se ha aprobado recientemente en Chile), pero sin mutualización de riesgos mutuamente beneficiosa entre generaciones.

En este sentido, el sistema más cercano al óptimo es el que algunos autores denominan de «reparto provisionado», en el que el sector público se concentra en un rol de «asegurador intergeneracional», estableciendo reservas financieras para cubrir los beneficios comprometidos(18). Comprometer una proporción cierta de la pensión futura respecto a los salarios percibidos en los últimos años de vida activa junto a una pensión asistencial para los no asegurados de mayor magnitud que la actual es el núcleo de la reforma al sistema de pensiones que debe realizarse en Chile.

Un fondo público solidario de reserva para financiar los beneficios comprometidos es posible de ser constituido en parte con el mecanismo del superávit estructural del presupuesto de 1% del PIB puesto en marcha por el gobierno del Presidente Lagos y en parte con la mutualización del riesgo en materia de rendimiento de los fondos entre generaciones. El concepto aplicable es que los trabajadores ahorrantes actuales en un sistema de capitalización intercambien una parte de lo producido por sus activos financieros de alto rendimiento, pero riesgosos, contra derechos previsionales ciertos.

El manejo de la provisión debe incluir reglas estables que permitan un alto grado de mutualización de los riesgos financieros entre diferentes categorías sociales y entre generaciones. Estas reservas financieras plantean diversos problemas técnicos de administración que no son insuperables, especialmente si la gestión de los fondos de reserva se encarga a organismos especializados impedidos de actuar para otros fines que no sean el rendimiento de la reserva previsional. Un régimen de pensiones que otorga derechos ciertos y dispone de reservas importantes para garantizarlos concentra las ventajas del reparto (buena mutualización de los riesgos financieros) y los de la capitalización (rendimiento más elevado que el crecimiento de la masa salarial en el largo plazo y oferta de ahorro elevada). Análíticamente, esta modalidad es la más deseable desde el punto de vista del dilema riesgo-rendimiento.

Cabe iniciar un debate para reformar a fondo el actual sistema dadas sus perspectivas especialmente inciertas. Se requiere avanzar hacia un sistema del tipo del «reparto provisionado», dado que el Estado ya otorga beneficios del tipo del «reparto» (pensión mínima que abarcará probablemente cerca de un 50% de los afiliados al sistema de capitalización, pensión asistencial para los no integrados a sistema previsional alguno y bonos fiscales diversos de complemento) financiados por los contribuyentes con gran peso en el presupuesto anual.

Un sistema de pensiones más equitativo debiera, en plenitud de derechos previsionales adquiridos a lo largo de la vida activa, garantizar un porcentaje determinado del sueldo de un período previo a la jubilación a definir (tradicionalmente ha sido del orden de 70%), así como el financiamiento de lagunas de cotizaciones en determinadas condiciones y un porcentaje que se aproxime al 100% de las pensiones de viudez. La contrapartida debiera ser el manejo de una parte de los fondos cotizados como una reserva financiera colectiva para sustentar los compromisos futuros mencionados.

Se ganaría de este modo en certeza sobre el valor futuro de las pensiones mediante el mecanismo de seguro intergeneracional y en un financiamiento más justo de la solidaridad con los ancianos y ancianas sin recursos.

La estrategia de reforma debe incentivar la cotización de los asalariados y no asalariados, disminuir los costos de administración (con fuerte regulación de los gastos de búsqueda de afiliados y disminución sustancial de las barreras a la entrada y de la concentración del sistema), hacer más justos los requisitos y el modo de cálculo de las pensiones (recordemos que por construcción el sistema actual lesiona a las mujeres al establecer menos años de cotización obligatoria y permitir una menor pensión dada su mayor esperanza de vida) y eliminar la incertidumbre de las pensiones por retiro programado, que pueden dejar en la indefensión completa a los que agoten sus recursos acumulados.

Entonces, para la derecha la protección social pública es un lastre que debe minimizarse y privatizarse,

para la izquierda democrática es el corazón de su ideal de una sociedad más justa.

A. JOIGNANT: ¿Y el quinto eje del «nuevo progreso»?

G. MARTNER: El quinto eje es más seguridad y más calidad de vida en los barrios. Creo firmemente que la contraparte necesaria de la globalización, es decir de la inserción en los mercados mundiales, en los flujos de inversiones, en la actividad económica que trasciende a las fronteras, es el cultivo de lo local y el desarrollo sistemático del territorio en el que cada cual inserta su vida cotidiana.

Cuando se es partidario de devolver poder a los ciudadanos y que existan fuertes estructuras de administración local para gestionar el mejoramiento persistente de la calidad de vida cotidiana, a lo que me tocó dar un impulso inicial al recuperarse la democracia como Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, entonces cabe afirmar que en el próxima etapa estas administraciones locales deben ser mucho más fuertes y tener una mayor capacidad presupuestaria que la existente hoy, pero con mecanismos de discusión participativos de esos presupuestos con los vecinos organizados.

Se requiere hoy en Chile muchos más bienes públicos locales de consumo colectivo en seguridad pública, pavimentaciones, alumbrado, áreas verdes, equipamientos deportivos y culturales. Esto significa optar derechamente por una calidad de vida que asume lo colectivo con mucha mayor fuerza que el repliegue sobre la vida privada individual. Y significa multiplicar los flujos de intercambio y de conexión entre el conjunto de actividades sociales que están insertas en el espacio local.

Los socialistas creemos en un Estado democrático y descentralizado. Queremos fortalecer las regiones, proponiendo que el Consejo Regional, democráticamente elegido, escoja a su autoridad máxima en sustitución del Intendente para los fines del desarrollo regional. Queremos entregarle nuestras atribuciones a las regiones en materias de planificación territorial, educación, salud, transporte, medioambiente, ciencia y tecnología y repensar la municipalización de la educación y la salud primaria, pues las estructuras regionales de gobierno pueden ser más pertinentes para hacerse cargo, en conexión con las autoridades nacionales y municipales, de estas tareas que exceden la vida local.

Pero atribuimos al municipio una función fundamental: ser el nexo directo de la administración estatal con los ciudadanos y ser un prestador eficaz de servicios a los vecinos. Al municipio le caben tareas tan importantes como organizar el ordenamiento del territorio, prestar servicios urbanos múltiples y asignar los subsidios sociales. Estas funciones sólo se pueden cumplir bien con la participación activa de los habitantes de las comunas. La democracia empieza en la comuna y se fortalece con un municipio con más capacidad, más eficiencia, más probidad, más recursos y sobre todo con el compromiso de servir a los ciudadanos sin burocracia y con el trato digno y rápido que merecen.

Por su parte, las Ordenanzas de Participación no se han constituido todavía en plenitud en el instrumento que pensábamos en su momento iba a permitir recoger las inquietudes y proposiciones de la comunidad, especialmente en la definición de políticas, programas y presupuesto y en el control de la transparencia de la gestión municipal. Por ello estas ordenanzas deben reformularse y fortalecerse las prácticas participativas. Un camino necesario es el de ampliar la participación con una activa formación de dirigentes comunales, esfuerzo que a partir del año 2004 va a recibir un nuevo impulso, el que debemos prolongar sistemáticamente en el tiempo para revitalizar el tejido de la participación social local.

A su vez, aumentar la capacidad de generación de recursos propios municipales y aumentar la capacidad redistributiva del Fondo Común Municipal es indispensable. El parlamento empezará a discutir en los próximos meses un significativo cambio legal en la materia, con el objetivo de que los municipios pobres reciban más recursos, mediante mayor redistribución de ingresos como los permisos de circulación y las patentes industriales y comerciales, que hoy se concentran en pocos municipios de altos ingresos de Santiago y algunas regiones.

Junto a esta perspectiva de fortalecimiento global del municipio, los socialistas estamos trabajando para definir e impulsar programas prioritarios en el ámbito local que articulen mejor los esfuerzos nacionales, regionales y municipales.

Se requiere en primer lugar hacer retroceder la delincuencia y la penetración de la droga, que afecta por lo demás más duramente a los sectores populares. Nuestro enfoque es ser implacables con la delincuencia y con las causas de la delincuencia. Esta no es una tarea fácil, pero su punto de partida debe ser transformar al municipio en el coordinador de acciones preventivas y de enfrentamiento de los delitos, trabajando con las policías, los jueces, las organizaciones sociales y vecinales, las iglesias, las escuelas. La sociedad chilena debe comprometerse con el combate frontal a las drogas que deterioran a las personas y generan las dependencias compulsivas que son una ruta directa a la delincuencia. Esto sólo puede hacerse fortaleciendo la colaboración de toda la comunidad en el espacio local.

Una segunda línea de acción es mejorar los servicios municipales en los barrios. La recolección domiciliar de basura, el control de escombros y desechos, la limpieza de las calles, el manejo de sitios eriazos, deben ser enfrentadas de manera cada vez más eficiente. La calidad de vida cotidiana con frecuencia se encuentra afectada por temas tan concretos como los perros que vagan por las calles y las plagas de garrapatas y termitas, que requieren de mejores programas de higiene ambiental, y por supuesto por la necesidad de ampliar las áreas verdes bien equipadas y cuidadas, de disponer de más multicanchas y equipamientos deportivos, de proteger mejor a los vecinos de accidentes de tránsito, de defender a los peatones y ciclistas. Los fuertes programas de reorganización del transporte público, especialmente en Santiago, van a constituir un cambio cualitativo que esperamos impliquen un verdadero vuelco en la calidad de vida en materia de facilidades de desplazamiento. Los nuevos instrumentos creados en el gobierno del Presidente Lagos van a permitir un mejor fomento del deporte y de las expresiones culturales, con más bibliotecas comunales integradas en red y más centros comunitarios dotados de acceso a Internet, velando también por la integración del adulto mayor y de las personas con discapacidad. Pero la tarea en la materia apenas empieza y en la nueva etapa debe fortalecerse sustancialmente.

Una tercera línea de acción es hacer del aumento de la calidad de la vivienda y del apoyo al término de los campamentos una prioridad en cada comuna. A través del programa Chile Barrio y del nuevo programa de vivienda social se crean las condiciones para que podamos decir pronto en Chile que ya no existen las poblaciones sin servicios básicos y que el acceso de los allegados a una vivienda digna avanza a un tranco cada vez más rápido, junto al aumento de la calidad de la vivienda social, tanto en sus materiales como en su dimensión, creando barrios integrados con servicios sociales de salud, educación, recreación y transporte.

Una cuarta línea de acción es, con una mejor articulación de la red de atención de salud, seguir trabajando para mejorar la calidad de la atención de los consultorios de atención de salud primaria. Después del esfuerzo por terminar con las colas, ahora la tarea es trabajar para una atención efectiva antes de 48 horas de los menores de un año y adultos mayores y luego de toda la población, con una salud más cercana a las familias y mejorando el seguimiento de las derivaciones a médicos especialistas y hospitales.

Una quinta línea de acción es fortalecer las oficinas municipales de empleo para ayudar a los cesantes a reinsertarse, facilitar la instalación de empresas productivas y de servicios y capacitar a los jóvenes en programas de servicio a la comunidad, en línea con lo ya mencionado respecto a la creación de empleos con derechos. Cabe trabajar especialmente con las pequeñas y microempresas para orientarlas a resolver sus problemas con la administración local (regularizaciones, permisos, trámites) y favorecer la modernización y complementariedad de las ferias libres (lo que se ha traducido recientemente en la elaboración de un proyecto de ley con sus representantes), el pequeño comercio, los talleres productivos familiares y todas las microempresas.

A. JOIGNANT: ¿Y de qué manera abordan el tema del impacto en la pobreza y el financiamiento de estas nuevas tareas?

G. MARTNER: El fin esencial de la República de Democracia Social que queremos construir y la propuesta de un nuevo progreso para Chile es lograr un crecimiento mejor distribuido. Aunque la coyuntura de hoy nos sitúe en la parte baja del

ciclo económico, Chile ha crecido entre 1990 y 2000 a más del 6% al año, lo que es una excelente cifra (entre 2001 y 2003 ha crecido menos y se avizora a partir de 2004 un relanzamiento del crecimiento a tasas mayores). En la década del '80 ese crecimiento fue de sólo 3.5%: el desempeño económico en democracia ha sido mucho mejor que en dictadura. Cabe recalcar que esto no se produjo precisamente porque se haya «continuado con el modelo» en dos aspectos sustanciales que según las derechas debieran resentir el crecimiento: los impuestos subieron del 14,5% en 1990 al 17,5% del PIB en el 2002 y el costo del despido aumentó al modificarse las normas sobre indemnizaciones, como señalamos antes en nuestra conversación. Los hechos se encargaron de desmentir los dogmas —tan publicitados entre nosotros- de los fundamentalistas de mercado.

Sin embargo, siguiendo la tendencia de las economías de mercado actuales que refuerzan las distancias entre los poseedores del capital físico y «humano» y el resto, la desigualdad en los ingresos autónomos de las familias aumentó en Chile en la última década (la relación de los ingresos promedio del 20% más rico respecto del 20% más pobre pasó de 14 a 15.3 veces entre 1990 y 2000, relación que en Europa y el Sudeste Asiático es menos de la mitad que la chilena). La incidencia del gasto público en subsidios y servicios sociales aminoró esa diferencia. Especialmente importante es lo ocurrido entre 1998 y el 2000, período en que el gasto social creció del 15% al 17% del PIB. De no mediar ese esfuerzo, que no debe debilitarse por ningún motivo, la situación para quienes viven en la precariedad económica hubiera sido mucho peor en un momento de crisis económica.

Se debe estar orgullosos de lo que se ha hecho y tener modestia frente a lo mucho que queda por hacer. Queda mucho por hacer, por ejemplo, para concentrar en los que más lo necesitan los recursos colectivos que financian las políticas de vivienda, educación superior, subsidios de salud, pensiones y distribuir mejor la carga tributaria de acuerdo a los principios de equidad horizontal (que paguen lo mismo los que están en situación similar) y vertical (que paguen más los que tienen más). Pero queda sobre todo mucho por hacer para innovar en los conceptos que permitan fundar una política más eficaz y socialmente justa.

Las llamadas pobreza e indigencia han disminuido en la primera parte de la década de modo importante (desde 1987 a 1996 pasaron de 5.5 a 3.3 millones de personas y de 2.1 a 0.8 millones de personas respectivamente).

Desde 1996 la disminución ha sido más lenta e incluso los llamados indigentes aumentaron en 29 mil personas entre 1998 y 2000, hasta alcanzar 849 200 personas. Estas cuantificaciones derivan del indicador que consiste en tomar el valor de una canasta de alimentos de hace una década, multiplicarlo por dos y contrastar esa cifra con los ingresos de la familia: tantas familias resultan estar arriba de esa línea de pobreza, tantas están abajo. Lo propio ocurre con la indigencia pero considerando sólo el valor de la canasta de alimentos.

Estos indicadores sirven para identificar tendencias, pero son insuficientes para fundar una política. En EE.UU. la línea de pobreza se calcula no a partir de multiplicar por 2 el costo de la canasta básica de alimentos sino que por 3 u otras cifras según las categorías socioeconómicas. Son convenciones que procuran definir un nivel de consumo mínimo no atentatorio con la vida humana. En Europa, se considera pobres a las familias con ingresos inferiores a la mitad del ingreso mediano, en un enfoque de pobreza relativa.

La lucha contra la pobreza no puede ser una lucha para disminuir el número de «pobres monetarios», sino una acción multifacética para mejorar la capacidad de inserción en la comunidad de los peor situados en ella y para mejorar la capacidad de los trabajadores de obtener una mayor participación en los resultados de la empresa y por esa vía disminuir las brechas existentes en la sociedad, incluyendo las monetarias.

Como mencionamos antes, la sociedad que mejor sirve este propósito es aquella que organiza su base material a partir de una economía con mercados social y ecológicamente corregidos, con las regulaciones que defiendan al ciudadano del imperio del afán de lucro y de la acumulación ilimitada de capital en pocas manos. Repito una vez más: la sociedad justa y civilizada no puede ser una sociedad de mercado, sino una en la que sus miembros son portadores de derechos ciudadanos,

civiles y políticos, y también de derechos económicos, sociales y culturales que se proponen hacer posible la inserción de todos en la sociedad al margen de los resultados de su participación en el mercado. Se trata de concentrar la acción pública en la obtención para todos de «capacidades de funcionar» en la vida en común que sean juzgadas pertinentes desde el punto de vista de la igualdad social, y no considerar otras que se entienden son del dominio de la responsabilidad y preferencias individuales. No se trata entonces de ofrecer a los excluidos del mercado simplemente recursos, que cada cual emplea según sus preferencias, o bien oportunidades que cada cual aprovecha o no, sino de garantizar determinadas capacidades básicas de funcionar (nutrición, vivienda, salud, educación, cultura, recreación, bienes ambientales), lo que de paso incrementa la productividad y expande el crecimiento a mediano y largo plazo.

La expansión de los derechos sociales de las personas es una estrategia bastante más adecuada que la de buscar abatir líneas de pobreza siempre difíciles de definir apropiadamente, porque depende de la convención que se escoja con resultados diversos.

El proyecto de construcción de una sociedad democrática y solidaria requiere en primer lugar que haya ciertas cosas que deben ser igualmente accesibles para todos. Esos derechos sociales deben incluir el derecho a percibir ingresos para quienes no pueden ni deben ganar su vida con su propio esfuerzo, cambiantes en el tiempo de acuerdo a las posibilidades de la base material. Esto incluye transferencias de recursos monetarios y transferencias en especie en vivienda, salud, educación, especialmente en el ámbito de los niños y de la tercera edad, además de la población con discapacidad. El programa Chile Solidario está concebido para que las 220 mil familias con menores niveles de ingresos puedan «construir un puente hacia sus derechos» en las diversas áreas que he mencionado de un modo directo en su relación con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con flexibilidad en los instrumentos y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo. Estas 220 mil familias debieran en la próxima etapa recibir el ingreso básico que hemos mencionado más arriba, lo que ya ocurre en una escala modesta con el Bono Solidario que las beneficia, escala que debiera ampliarse en el tiempo.

Una línea de acción complementaria en la materia es regular más eficazmente la provisión de servicios básicos monopólicos de agua potable, gas natural, electricidad y telefonía básica, para asegurar la universalidad, continuidad y mínimo costo dadas las tecnologías disponibles en el acceso a estos servicios. Se avanza hacia el acceso a servicios de alta calidad, como por ejemplo el tratamiento de aguas servidas que nos lleva a niveles cercanos a los de los países desarrollados, pero con un fuerte problema de costos que afectan los presupuestos de las familias de menos ingresos. Fijaciones tarifarias que reviertan a los usuarios los avances tecnológicos que bajan los costos en materia de telefonía y electricidad deben complementarse con la extensión del subsidio del agua potable y la creación de un subsidio al consumo eléctrico básico.

Garantizar mínimos sociales para aumentar las capacidades que permiten el funcionamiento de todos en la sociedad debe ser entonces nuestra estrategia contra la pobreza, antes que trabajar con indicadores convencionales de línea de pobreza. Prefiero hablar de lucha contra la exclusión antes que de lucha contra la pobreza.

No está fuera de nuestro alcance asegurar que todas las familias chilenas de la próxima generación puedan disponer de las capacidades de funcionar en sociedad, contribuir a su prosperidad y beneficiarse de ella, sobre la base de promover el crecimiento junto a una mayor capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y de políticas de distribución progresiva del ingreso con una tributación más justa que financie derechos sociales más extendidos. Esta debe ser una tarea que avanza progresivamente, para asegurar que su costo no paralice el dinamismo económico y termine desmejorando la posición de los más desvalidos en la sociedad, pero permanente y persistente, logrando los avances en igualdad que en cada tiempo histórico se van conquistando desde la lucha social y política.

Se trata de intervenir derechamente sobre la estructura de ingresos que resulta del funcionamiento espontáneo del mercado. Si esto se hace bien, especialmente con impuestos e intervenciones no

distorsionadores, no implica necesariamente significativos costos económicos. La experiencia de muchos países así lo demuestra, como lo hemos mencionado, aunque si esos costos existieran moderadamente deben contrastarse con los beneficios para la sociedad de mejorar la condición humana de los peor situados en ella y por esa vía mejorar también la convivencia colectiva y la legitimidad y estabilidad de la democracia.

Prefiero ser claro y franco: esto significa un Estado más grande que el que hoy en día tenemos. Yo planteo que debemos avanzar en la próxima década a un tamaño del Estado equivalente, en proporción a la economía, al de EE.UU o Japón, es decir del orden de un 30% del PIB (recordemos que en Suecia, Alemania o Francia es del orden del 50% del PIB), para hacer viable nuestro proyecto de empleo con derechos, de educación integradora y republicana, de protección social y lucha contra la exclusión, de fuerte desarrollo regional y local para disminuir en profundidad las desigualdades en Chile. Esto requiere financiarse sin penalizar a los más débiles ni detener el crecimiento. En Chile la desigualdad de ingresos antes de impuestos es grande. Luego de aplicar los impuestos, la desigualdad crece y los gastos totales del Estado, necesarios por lo demás, no se concentran en los más pobres sino en algunas áreas, por lo que hasta hoy no corrigen suficientemente las desigualdades. Por eso le decimos a la sociedad chilena: no es un capricho plantear con urgencia la aplicación de un impuesto al uso de nuestros recursos naturales y la eliminación de franquicias tributarias en el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo, franquicias que sólo en pocos casos tienen justificación, y que deben proveer parte de los financiamientos necesarios para avanzar a la sociedad que queremos. Está a la vista la subtributación de las utilidades de las empresas, especialmente en la Gran Minería. Aplicar un derecho al uso de los recursos mineros y a los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos es una necesidad urgente.

También lo es el que las empresas tributen una parte de sus utilidades, habida cuenta de la renta tecnológica colectiva que estas se apropian, como lo señalamos en otra parte de la conversación, y que legítimamente debe ser apropiada socialmente. Creemos necesario desvincular progresivamente el impuesto a las utilidades de las empresas del impuesto a la renta (como es el caso de EE.UU., por ejemplo), manteniendo eso sí un mecanismo de descuento de los gastos en capacitación, en investigación y desarrollo tecnológico y en producción limpia, que tendría la virtud de estimular la inversión en estas áreas, que muy pocas empresas realizan hoy en la magnitud necesaria para los nuevos desafíos de incremento de la competitividad que la integración en la economía global hace indispensables.

¿Conquistar el centro o estar el centro de la lucha social y política?

A. JOIGNANT: Entonces es sobre estas ideas y propuestas que cabe construir una nueva mayoría política, cultural y electoral, frente a otras ofertas igualmente legítimas, pero diferentes, lo cual plantea la pregunta acerca de cómo discernir racionalmente entre ellas. ¿Son todas estas ofertas igualmente tolerables y respetables? Comprendo tu desagrado frente al término práctico de «tolerancia», pero me parece que es una palabra que nombra problemas y dilemas realmente importantes. En tal sentido, la aproximación de Charles Taylor(19) me parece sumamente estimulante, al distinguir entre «respeto» y «tolerancia». Creo ver en ella una clave racional de discernimiento público entre las distintas ofertas políticas y culturales. En efecto, uno tolera ideas diferentes a las propias sin que ello implique necesariamente respetarlas, en la medida en que existen ideas dotadas de la capacidad de integrar (por ello son ideas moralmente respetables) frente a otras que se encuentran regidas por lógicas de exclusión (de lo cual el nazismo y el fascismo, así como la degeneración comunista en prosa estalinista, y hoy en día el racismo, son ejemplos de sistemas de ideas y creencias que no sólo no admiten la diferencia, sino que la eliminan). Así, existen ideas que son «tolerables», pero sólo algunas podrán acceder al estatus de respeto, lo cual en todos los casos supone siempre el reconocimiento de la diferencia como valor legítimo.

Exceptuando el caso notable de Estados Unidos, las ideas políticas tienden a organizarse —y por tanto a diferenciarse- siguiendo las vecindades y lejanías que proporciona el eje derecha-izquierda, respecto de las cuales la diferencia entre «tolerancia» y «respeto» se yergue como principio racional

de discernimiento y evaluación. Pero permíteme detenerme en el eje derecha-izquierda con el fin de problematizarlo. El eje derecha-izquierda es, desde su génesis hasta su funcionamiento, un eje espacial, que puede ser leído desde dos perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva de las personas comunes y corrientes. Desde hace mucho tiempo, la relación de las personas con el eje es medida por las encuestas de opinión a partir de escalas tipo Likert de cinco o siete posiciones. En Chile, siguiendo esa misma metodología, las encuestas han puesto en evidencia un fuerte declive del eje derecha-izquierda, al punto que sólo una leve mayoría de chilenos se posiciona en él, lo cual se traduce en un incremento de las categorías no sabe, no responde y, sobre todo, de los «independientes». Sin embargo, no por ello se puede sostener seriamente que el eje derecha-izquierda dejó de cumplir entre las personas comunes y corrientes una función de organización del mundo político, ya que los estudios cualitativos muestran que existen saberes relativamente especializados que son movilizados por las personas que se posicionan en el eje, aún cuando de manera mucho menos exigente que en el pasado. Al revés, me parece que la controversia sobre el eje derecha-izquierda adquiere una connotación muy distinta (e interesada) al interior de las élites políticas chilenas. Porque cuando el eje es rechazado por algunos actores políticos como impertinente o irrelevante, se trata de una toma de posición que rara vez es aséptica e inocente. Me parece en este sentido que no es un juicio marcado por la candidez cuando Eugenio Tironi sostiene que el eje derecha-izquierda ya no tiene sentido entre los chilenos, o cuando el propio Joaquín Lavín lo afirma de manera mucho más rústica. Tengo la convicción que, reconociendo que el eje derecha-izquierda se ha vuelto mucho menos exigente, negar su existencia es un intento más o menos elaborado de aplanar las diferencias políticas, con el fin de construir ofertas políticas espectaculares, fuertemente mediatizadas, susceptibles de seducir a través del marketing político a cualquiera. Me parece que este asunto es esencial, en el que se juegan muchas cosas. Definitivamente, existen ideas que son de izquierda, otras que son de derecha, otras tantas que son cada vez menos de izquierda o de derecha, y otras más que no le hacen sentido al eje. El eje es cada vez menos exigente, pero cumple la función de ordenar y organizar las diferencias políticas, y de proporcionar significados mínimos al mundo político. Mal que mal, es el eje el que permite que una alianza entre socialistas y gremialistas sea imposible, porque inimaginable e im-pensable. ¿Cómo se hace política cuando las diferencias son negadas por sus propios actores? Esto es crucial, porque da la sensación de que cuando se niega el eje, da más o menos lo mismo de quién dice qué, proporcionando una representación aplanada del mundo.

G. MARTNER: Conuerdo contigo. Te decía anteriormente que las elecciones no se ganan el centro precisamente porque el porcentaje de personas que no están ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha es de una magnitud tal, como tú subrayas, que no es que entonces la derecha tiene que buscar votos en el centro, la izquierda también votos en el centro, y el centro defenderse de la derecha y de la izquierda. Unos y otros tienen que mantener el apoyo de su electorado y además buscar votos «en otra parte», más allá de los electores que mantienen fidelidad a una identidad política. Dicho lo cual, lo eficaz para buscar esos votos que están «en otra parte» es precisamente el tener posturas nítidas que permitan hacer la diferencia.

Eso que está «en otra parte» tiene dos componentes, de acuerdo a interpretaciones que he visto del estado de la opinión en Chile. Primero, el componente del «pragmatismo» de quienes se sitúan ante la esfera política desde la ausencia de posicionamientos estructurados. Ser de derecha es un posicionamiento estructurado, ser de izquierda es un posicionamiento estructurado, hay un universo de personas que toman cosas de la derecha y toman cosas de la izquierda -que no es lo mismo que ser de centro- y por lo tanto hay una suerte de «composición de menú» que se traduce a veces en comportamientos electorales no coherentes cartesianamente hablando. Un segundo universo de personas son los «indiferentes» hacia la política, que tienden en este caso más bien a alejarse de las instituciones, tienden a ser abstencionistas, tienden a construir sus proyectos individuales y familiares desde una lógica de crítica de la política, cuando no de descalificación a partir de esta idea de que «los políticos son todos iguales, me hacen daño». Ahora, estos dos grupos, estos dos universos de pragmáticos e indiferentes respecto del sistema político tienden a ser una cantidad muy grande de

miembros de la sociedad chilena de hoy.

En mi caso, y en el del Partido Socialista, pienso las cosas desde la afirmación de los valores de la izquierda democrática y afirmando esos valores nos proponemos estructurar un proyecto que esté en condiciones de nuclear sólidamente a aquellos que sostienen esos valores y, en buena hora, la disposición de combatir a su vez a quienes tienen opiniones de derecha que contrastan con aquellas que defendemos. Esa manera de entender la acción política socialista permite construir un mensaje hacia pragmáticos e indiferentes que hace posible ganar las elecciones y no una mera lógica de diluir el mensaje, de jugar a la no diferenciación izquierda-derecha, que precisamente genera un cuadro de cierta opacidad o de «equivalencia de los políticos», en tanto y cuanto, por mucho que se definan de izquierda y derecha, transmiten más o menos lo mismo porque tienden a diluir, a aguar su discurso. Por tanto a los ciudadanos, si persiste este estilo político, lo que les queda son las características de las personas, son los mensajes emocionales inmediatos transmitidos por televisión los que prevalecen. Por el contrario, nuestra opción, que no desdeña ni las emociones ni el carisma de los individuos cuando son auténticos, se asienta en valores compartidos y apuesta a lograr una eficacia política construyendo una diferenciación que sintoniza y empatiza con las aspiraciones mayoritarias. Tampoco busca esta postura incrementar la diferenciación artificialmente, porque no sería responsable buscar la polarización de la sociedad, pero si establecer con nitidez y convicción irreductible las diferencias, las alternativas, los dilemas, de modo tal que hacia quienes son «pragmáticos» y hacia quienes son «indiferentes» se pueda construir un puente de adhesión a partir de una idea de cómo una sociedad basada en derechos tiene que funcionar.

No es otra cosa lo que hizo el Partido de los Trabajadores durante veinte años en Brasil y que le permitió la elección a Lula con 60% en la cuarta ocasión, porque esto requiere consistencia y persistencia en el tiempo y Lula fue justamente adecuando este proceso, no aguantando su vino como muchas veces se quiere presentar sino que generando una propuesta, una oferta, una capacidad de generar una idea de país que permitió conectar a un grupo que tiene convicciones sólidas pero que es minoritario con otro tipo de electorado, y otras fuerzas políticas, sensibles a su mensaje de cambio social.

La estrategia política de la izquierda democrática es la articulación de valores con un proyecto de sociedad y con tareas programáticas concretas para alcanzar la adhesión mayoritaria, en el contexto del espacio unitario de la Concertación que es indispensable para ampliar las mayorías necesarias para gobernar. Es por tanto una postura que no apuesta al desdibujamiento de su identidad sino que, muy por el contrario, a su afirmación y proyección. Y que comunica propuestas que emanan de su identidad —aquella que es democrática y participativa en lo político, eficiente en lo económico para sustentar su exigencia igualitaria en lo social, y que es libertaria en lo cultural- pero que son capaces de convocar más ampliamente que su electorado fiel, ir más allá de sus filas, y generar las situaciones de mayoría que permiten gobernar a las sociedades. En suma, la izquierda democrática y el socialismo son, articulados en el seno de la Concertación, una alternativa de poder en nuestro país y la esperanza verdadera de un futuro mejor para las actuales y venideras generaciones de chilenos. No estamos de acuerdo con los que se ponen «en la vereda de enfrente», que se refugian en la cultura de la queja, en la acción de minoría autoreferente, en el inconformismo autodestructivo. Nos sentimos parte de la legítima cultura del reclamo de un orden más justo, del inconformismo que rechaza las injusticias existentes pero que construye día a día un proyecto y una práctica de superación de las injusticias, que se adentra en el territorio de las luchas sociales cotidianas, individuales y colectivas, y les otorga una perspectiva política concreta de transformación social progresiva. No creemos en los que se desencantan ante las dificultades, creemos en los que luchan contra ellas. Creemos en la urgencia de ser perseverantes. Creemos en la pasión y en la razón.

Sigue, pues, invariablemente instalada en nuestro horizonte de socialistas la utopía de organizar una sociedad de iguales en dignidad, derechos y oportunidades, en la que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos, en que los trabajadores y los desposeídos no estén sometidos al implacable riesgo de no poder subsistir dignamente. Queremos que los ciudadanos

estén emancipados y liberados del miedo a la miseria y del sufrimiento que emana de la desprotección frente a los riesgos sociales y los infortunios de la vida para que, como todos, puedan crear libremente sus proyectos de vida. Esta utopía concreta es la que da sentido y proyección a nuestros esfuerzos y entusiasmos, que se encadenan de generación en generación, y a nuestras luchas cotidianas y múltiples por una sociedad libre, emprendedora, igualitaria, justa, en la que tenga plena expresión la dimensión creativa, alegre y fraternal de la vida humana.

(8) Michael Hardt y Toni Negri, *Imperio*, Paidós, Buenos Aires, 2002.

(9) La identificación de esas líneas ha sido objeto de importantes avances por el programa de Innovación Tecnológica del Ministerio de Economía con metodologías de consulta con los actores sectoriales. Sobre la vigencia de la noción de distrito industrial, formulada por Alfred Marshall a fines del siglo 19, ver Charles-Albert Michalet, *Qu'est-ce que la mondialisation?* La Découverte, Paris, 2002.

(10) Dani Rodrik, «Why do more open economies have bigger governments?», *Journal of Political Economy*, vol. 106, n°5, 1998.

(11) Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, «la evidencia cruzada de la relación entre apertura y tamaño del gobierno central, medido por gasto e impuestos, demuestra que en el largo plazo no hay conflicto entre apertura y gasto gubernamental. Las economías abiertas no son economías de *laissez faire*. Más aún, en promedio, los gobiernos de economías abiertas gastan una proporción del PGB significativamente más amplia y recolectan los impuestos adicionales necesarios. ¿Pero qué pasa en el corto plazo? (...) Después de controlar por cambios en el ingreso per cápita, que tiene un efecto positivo e independiente sobre el tamaño de los presupuestos de gobierno, un incremento de la apertura tiene un efecto positivo y significativo sobre el gasto de gobierno, los ingresos tributarios totales y el ingreso por impuestos directos (...). En la última década, la globalización y los presupuestos de los gobiernos centrales se incrementaron mano a mano. Mientras más rápido el patrón de globalización, más amplio fue el incremento en el gasto y tributación del gobierno central. No hay evidencia de que la globalización esté causando una retirada del Estado-Nación. Por el contrario, la globalización está planteando demandas acrecentadas sobre los presupuestos de los gobiernos centrales, y los gobiernos están respondiendo a esas demandas», en Department of Economic and Social Affairs, ONU, *World Public Sector Report. Globalization and the state*. Nueva York, 2001.

(12) Ver Archon Fung y Eric Olin Wright, *Deepening Democracy*, Verso, Nueva York, 2003. Estos autores promueven la «gobernanza participatoria empoderada», sobre la base de focalizar en problemas específicos y tangibles, el involucramiento de la gente común afectada por estos problemas y de funcionarios cercanos a ellos y el desarrollo deliberativo de soluciones. Construir paso a paso un futuro mejor para las nuevas generaciones.

(13) Una completa información sobre la realidad educacional chilena y la ciencia y tecnología se encuentra en José Joaquín Brunner, «Hacia una estrategia de desarrollo basada en capacidades tecnológicas», en *Construir el futuro*. Vol. 1. Aproximaciones a proyectos de país, Lom Ediciones, 2002, y José'. Brunner y Gregory Elacqua, *Capital Humano en Chile*, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, 2003, aunque sus recomendaciones son de un darwinismo brutal y sorprendente: «La meta a corto plazo tiene que ser: subsidiar solamente escuelas efectivas y favorecer la permanencia en el sistema únicamente de profesores que muestren efectividad probada mediante procedimientos rigurosos de evaluación». ¿Debe quitarse a las escuelas no efectivas los subsidios públicos y...cerrarlas, o más bien reforzar su financiamiento y exigencias para hacerlas efectivas? ¿Debe expulsarse a la calle a los profesores «no efectivos» o formarlos y guiarlos para obtener los resultados educativos buscados? Me parece que la respuesta es obvia tanto desde la perspectiva de la eficacia y de la equidad. .y sobre todo desde el sentido común democrático.

(14) Joseph Stiglitz, «Democratic Development as the fruits of labour», Key Note Address, Industrial Relations Research Association, Boston, Enero de 2000.

- (15) Ver Jérôme Gauthier, *Coût du travail et emploi*, La Découverte, Paris, 1998.
- (16) The White House Domestic Policy Council, *The President's Health Security Plan*, Times Books, Nueva York, 1993.
- (17) Jean Pierre Dumont, *Les Systèmes de Protection Sociale en Europe*, Economica, Paris, 1998.
- (18) Olivier Davanne, «Eléments d'analyse du système de retraite français», *Retraites et Epargne*, Conseil d'Analyse Economique du Premier Ministre, La Documentation Française, Paris, 1998.
- (19) Charles Taylor, *Multiculturalisme. Démocratie et différence*, Paris, Aubier, 1994.